

Leviatán

REVISTA DE HECHOS E IDEAS



Z. 466

INVIERNO 1985

II EPOCA

N.º 22

JURGEN HABERMAS

Perfil filosófico-político

EUROPA:
ESTADOS Y REGIONES
Félix Pons

PENSAMIENTO ESTRATEGICO
DE OLOF PALME
Enrique Gomáriz

ECONOMIA AMERICANA
Y CRISIS MUNDIAL
Martin Carnoy

LA DEUDA EN
LATINOAMERICA
Ramón Casilda y Miguel Pérez

LA IZQUIERDA
EUROPEA
Manuel Azcárate

CULTURA POLITICA
EN LA TRANSICION
Ludolfo Paramio

SINDICATOS, PARTIDOS,
FRENTE POPULAR
Santos Juliá

PARADOJAS ETICAS
DE LA SALUD
Fernando Savater



Leviatán

Revista de hechos e ideas

Z. 466





INDICE

ACTUALIDAD

Europa: Estados y regiones. <i>Félix Pons</i>	5
La economía americana y la crisis económica mundial. <i>Martin Carnoy</i>	15
El pensamiento estratégico de Olof Palme. <i>Enrique Gomáriz</i> ..	33
La deuda externa en América Latina. <i>Ramón Casilda y Miguel Pérez</i>	49

ENTREVISTA

Jürgen Habermas: perfil filosófico-político	61
---	----

ANALISIS Y DEBATE

El papel internacional de la izquierda europea. <i>Manuel Azcárate</i>	89
La cultura política durante la transición. <i>Ludolfo Paramio</i>	95
Sindicatos, partidos y frente popular. <i>Santos Juliá</i>	105
Paradojas éticas de la salud. <i>Fernando Savater</i>	113

LIBROS

<i>Carlos Gómez, Otto Granados, Jesús Menéndez, Miguel Porta, Carlos de la Serna</i>	121
--	-----

Leviatán

Revista de hechos e ideas

Fundada en 1934 por Luis Araquistain

Director:

Salvador Clotas

Comité de Dirección:

Antonio G. Santesmases	Julio R. Aramberri
Ludolfo Paramio	Santiago Roldán
M. Reyes Mate	Miguel Satrústegui
Ramón Vargas-Machuca	

Comité Asesor:

Pedro Altares	F. Fernández Santos
Joaquín Arango	Salvador Giner
Carlos Barral	Enrique Gomáriz
Carlota Bustelo	J. A. González Casanova
J. María Castellet	E. Haro Tecglen
Fernando Claudín	Francisco Laporta
Elías Díaz	Marta Mata
M. A. Fernández Ordóñez	J. Martínez Reverte
X. Rubert de Ventós	

Coordinador:

Manuel Ortuño Armas

Secretaria de Redacción:

Mary Carbone

Editada por la Fundación Pablo Iglesias.

Las ideas vertidas en cada artículo son responsabilidad de sus autores. LEVIATAN no se identifica necesariamente con sus contenidos. LEVIATAN no se compromete a devolver los artículos que no hayan sido solicitados, ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

Redacción y Administración: Monte Esquinza, 30.
28010-Madrid. Tel.: 410 46 96.

D. Legal: SE. 466-1978. I.S.S.N.: 0210-6337.

Distribuye: Siglo XXI de España, S. A. - C/. Plaza, 5 - 28043-Madrid.

Imprime: Mariar, S. A. - Tomás Bretón, 51 - 28045-Madrid.

Esta Revista es miembro de ASEI.

EUROPA: ESTADOS Y REGIONES

Félix Pons



Pocas cosas resultan más injustas y más garrafalmente erróneas que hablar de Europa como de una moda o de un objeto de atención circunstancial y episódica. Europa es un gigantesco proceso de transformación histórica que irradia profundidad y que afecta de forma decisiva a todo el ámbito de realidad que abarca.

Consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, la construcción europea se produce sobre la ebullición revisora de conceptos más o menos consolidados que ahora se ven abocados a la jubilación o la transformación.

Europa es causa y es efecto. Es, por supuesto, la consecuencia de unas nuevas

perspectivas impuestas por la evolución de la sociedad y por los mensajes indelebles de su propia historia. Pero es también la expresión de una voluntad deliberada de impulsar cambios y de alumbrar fórmulas de progreso.

Nunca será ocioso recordar y repetir que la construcción europea supone un re-

to intelectual de primera magnitud. Su comprensión cabal sólo puede adquirirse si se es capaz de aceptar que muy pocas de las ideas básicas sobre las que se ha venido sosteniendo el entramado de la vieja Europa son válidas para entender las transformaciones en curso y para atisbar el sentido de las realidades que apuntan.

Lo que está sujeto a cambio y revisión no son simplemente las fronteras interiores de los Estados miembros de la Comunidad o los aranceles aduaneros. Lo que está cambiando son las bases y los presupuestos de la economía, los perfiles y las perspectivas de las culturas, los ámbitos y las categorías de la política, los principios y la estructura de las instituciones. Con todo ello, es imposible que no estén cambiando también el sentido de las ideas y el horizonte de las colectividades.

A nosotros nos toca reflexionar sobre el impacto que para la vida española va a representar la entrada en el campo magnético de la transformación europea.

La peculiar realidad española, con sus novísimas instituciones políticas, con su estructura autonómica, con su historia asentada en diversidad de pueblos y lenguas, con su sistema institucional en fase de consolidación (tensionado por algunos nacionalismos dominantes en ciertas nacionalidades) ofrece a la luz de la inminente Europa un panorama apasionante.

Ninguno de los grandes ejes que polarizan ahora mismo el proceso de construcción de Europa resulta ajeno a preocupaciones centrales de nuestro país. Y menos que ninguno, tal vez, el eje de la definición institucional, de impresionantes repercusiones de todo orden. A nadie se le oculta que las más insignificantes modificaciones del papel del Parlamento Europeo, de las reglas de funcionamiento de la Comisión o del Consejo de Ministros de la Comunidad, o de las funciones de las

**Lo que está sujeto a cambio y
revisión no son simplemente las
fronteras interiores de los Estados
de la Comunidad o los aranceles
aduaneros.**

regiones en el marco comunitario, implican giros trascendentales con hondas repercusiones que desbordan el campo de la organización política y que trascienden a la economía y a la cultura.

Recordar el sentido de la construcción europea e intentar deslindar el papel que en la misma se reserva o puede reservarse en el futuro a los Estados y a las regiones no es un ejercicio teórico o abstracto, sino un esfuerzo de clarificación de utilidad práctica inmediata y que, como más adelante intentaré explicar, puede aportar horizontes de solución definitiva a algunos problemas históricos de nuestro país.

España es un país institucionalmente distinto del que pidió la adhesión formal a las Comunidades Europeas en 1977. Durante estos años, los españoles hemos aprobado y puesto en marcha un sistema de gobierno descentralizado basado en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía que ha supuesto el reconocimiento legal de la verdadera identidad histórica y cultural de las regiones que integran España.

Es un país en vías de profunda transformación el que se suma a la Europa comunitaria. Es un país dinámico empeñado en recuperar el retraso que largos años de aislamiento y centralismo le impusieron. Esta España en marcha se va a integrar, a su vez, en un Europa dinámica, a la búsqueda también de su verdadera identidad y de su futuro de unidad.

Coinciden por tanto dos procesos que son distintos en su estructura pero idénticos en su finalidad. Son distintos porque, mientras el proceso español es descentralizador, de redistribución regional de derechos y obligaciones, el europeo es integrador, concentrador de los órganos de decisión.

Son, en cambio, idénticos porque ambos persiguen el establecimiento de una

verdadera unidad basada en la libertad, la fijación de un sistema democrático eficaz y el desarrollo armonioso de las relaciones económicas y sociales.

Quisiera ahora reflexionar sobre los respectivos papeles de los entes políticos que he citado: Europa, el Estado y las regiones.

Europa

¿Cómo es esta Europa dinámica que hace más de treinta años inició un proceso de integración?

A) En primer lugar, es una Europa que se ha planteado un objetivo supranacional, de superación de barreras nacionalistas, lo que implica necesariamente el ejercicio en común de derechos soberanos en aras de un bien superior, a su vez común, que no es contradictorio con el bien específico de cada uno de sus integrantes.

El interés nacional de cada uno de los Estados miembros no tiene por qué ser contrario al interés europeo. Es una falsa contradicción que hay que superar en una época en la que se ha puesto de manifiesto que la búsqueda de soluciones aisladas sólo conduce al fracaso. Por tanto, es la suma, la agregación, la integración de las economías y de las culturas y no la dispersión o el individualismo a ultranza, lo que hará posible en un futuro quizá no tan lejano esa Europa supranacional.

B) La Europa en gestación es también una Europa de los Estados, y por tanto de los pueblos y regiones que los forman. Hoy por hoy, los miembros de las Comunidades Europeas son los Estados que, como sujetos activos, configuran y moldean el proceso unificador.

Es ésta una realidad indiscutible con independencia de que guste o disguste a quienes trabajan por la unidad europea.

Ninguno de los grandes ejes que polarizan ahora mismo el proceso de construcción de Europa resulta ajeno a preocupaciones centrales de nuestro país.

Es la organización política de la colectividad en el nivel de Estado la que teje y desteje continuamente el hilo de la integración.

C) Esta Europa basada en los Estados no es una Europa «nacionalista», no es una Europa basada en ideas nacionalistas.

La trágica historia de nuestro continente en la primera mitad del siglo XX mostró el temible potencial aniquilador del nacionalismo exacerbado y llevado hasta sus últimas consecuencias. Los europeos han aprendido bien la lección y tienen ahora conciencia de que sólo la colaboración y la cooperación pueden asegurarles un futuro de paz y prosperidad.

No tienen cabida hoy, en esta Europa camino del siglo XXI, los nacionalismos irredentos y decimonónicos que algunos pretenden resucitar como una nueva receta mágica, pese a haberse experimentado ya a sangre y fuego. No tienen cabida tampoco los nacionalismos egoístas que buscan la satisfacción de una pequeña colectividad. Henri Brugmans, europeísta de primera hora, lo decía con claridad: «La reacción de egoísmo nacional puede parecer provechosa en ciertos aspectos, al menos a corto plazo, pero... el nacionalismo es contagioso; es cierto que permite resistir a decisiones penosas, pero ¿cómo contestar mañana al vecino que ante una opción parecida mantiene un razonamiento similar?».

Está claro que una hipotética suma de nacionalismos no conduce a un futuro común sino a un futuro insolidario y fragmentado. En la época actual no interesa ya el prestigio individualizado, estrecho de miras, sino el resultado favorable para una colectividad amplia. La multiplicación nacionalista no sólo es inviable sino incompatible con el europeísmo sincero y realista.

No son tampoco las pequeñas unidades

económicas articuladas en compartimentos estancos las que aportarán el progreso a sus respectivas sociedades. Tenemos un ejemplo histórico próximo y doloroso que nos apoya en esta visión. España y Portugal son dos países que hasta ahora han vivido de espaldas el uno al otro, encerrados en sistemas autárquicos no cooperativos. Y no puede decirse que de esta actitud se haya derivado un enriquecimiento futuro. Sin embargo, ahora algunos pretenden desarrollar este modelo con la excusa de dar satisfacción a nacionalismos caducos que no se justifican más que en obsoletas teorías o doctrinas que, analizadas friamente, no resisten el paso del tiempo.

No quiero señalar con esto que en Europa no quepan las diversidades. Al contrario, la unidad y la riqueza de Europa están basadas precisamente en su diversidad y en su pluralismo, en sus tradiciones literarias y culturales diferentes, en sus lenguas y en sus historias diversas. Cada país, cada región, cada colectividad

aporta su bagaje específico al acervo común de los europeos sin que nadie pueda presumir de ser más europeo que los demás. En este sentido, hay que recordar que la Europa comunitaria o incluso la Europa occidental no es toda Europa. Hay ciudades tan europeas como Praga, Cracovia o Budapest; escritores tan europeos como Kafka o Milosz; pintores, artistas, lenguas y culturas en definitiva que han quedado fuera del proyecto de integración pero que pertenecen indudablemente a la Europa de siempre.

Por otra parte, la superioridad cultural de Europa frente a otras áreas del mundo ha provocado involuntariamente un estancamiento científico y tecnológico. Hoy en día se corre el riesgo de que frente a Estados Unidos, Japón o el Sudeste asiático nos convirtamos en el museo del pasado, en un privilegiado almacén de cultura pero no en el vehículo de futuro.

El reto tecnológico obliga a un esfuerzo común y solidario que no caiga en la reivindicación de antiguallas folklóricas que sólo sirven para estimular el turismo. Desde la propia identidad cultural que debe ser potenciada y preservada hay que elaborar ese esfuerzo común que nos permita recuperar el retraso científico y tecnológico que acumulamos respecto a otras áreas económicas.

D) La Europa en gestación quiere ser también una Europa solidaria que ha creado mecanismos de ayuda para corregir las desigualdades internas.

A los pocos años de la firma de los Tratados de Roma, los Estados miembros se dieron cuenta de que el simple funcionamiento del mercado libre no haría desaparecer las desigualdades sociales a escala regional. Al contrario, la tendencia era a

aumentar las diferencias en los niveles de bienestar. Este hecho se agudizó con las ampliaciones de la Comunidad.

En 1958 las diferencias de renta por ha-

bitante eran de uno a dos. Con la ampliación a nueve miembros las diferencias pasaron a ser de uno a cinco. La entrada de Grecia provocó un descenso hasta una diferencia de uno a diez. Ahora, con la entrada de España y Portugal, como mal menor se mantendrá la misma proporción de uno a diez.

Estas desigualdades impiden obviamente acelerar la integración política. Pero, a su vez, no hay progreso posible sin una integración efectiva.

Para resolver este difícil problema, la Comunidad puso en marcha en 1975 el Fondo de Desarrollo Regional con la finalidad básica de apoyar las políticas regionales de los Estados miembros, no de sustituirlas, y de coordinar regionalmente las políticas sectoriales de la CEE.

Es un mecanismo de ayuda a los planes

**Hoy no tienen cabida
los nacionalismos egoístas que
buscan la satisfacción
de una pequeña
colectividad.**

estatales, ya que el 95 % de los fondos regionales se destinan a proyectos de los Estados en los que éstos también están involucrados financieramente. De esta manera, las regiones reciben, *a través de los Estados*, un impulso económico procedente de los fondos comunitarios.

Este sistema corrector de las desigualdades regionales ha recibido un espaldarazo definitivo en el reciente Consejo Europeo de Luxemburgo, donde los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad, España y Portugal reconocieron su importancia al incorporarlos al Derecho primario de la Comunidad. Por otra parte, se ha establecido un vínculo claro entre el establecimiento de un Mercado interior dentro de un espacio sin fronteras y la convergencia o cohesión de las economías de los países miembros.

El Estado

¿Cómo es la España que se suma a esta Comunidad en marcha?

Desde el punto de vista regional, es un país dinámico en pleno proceso de establecimiento de un sistema democrático de gobierno descentralizado. España ha realizado ya un esfuerzo para hallar respuesta a la doble crisis del Estado actual: crisis hacia dentro, acercando los centros de decisión al ciudadano, construyendo sistemas de gobierno autonómico que faciliten el funcionamiento de la vida política y respondan a las aspiraciones básicas de la sociedad en unos casos y a las exigencias históricas de ciertas colectividades en otros.

Crisis hacia afuera, porque el Estado hoy no tiene medios económicos suficientes para hacer frente aisladamente a los urgentes problemas del desarrollo tecnológico. Con su entrada en la CEE, España se suma a aquellos países que ya han ini-

La Europa en gestación quiere ser una Europa solidaria que ha creado mecanismos de ayuda para corregir las desigualdades internas.

ciado la creación de una economía de gran espacio como única vía posible para el progreso.

La singularidad española estriba sobre todo en la simultaneidad; mientras el Estado redistribuye competencias en el interior, tiene a la vez que transferirlas al exterior. Mientras se completan las transferencias a las Comunidades Autónomas, España cede competencias a las Instituciones de la Comunidad Europea de acuerdo con las previsiones de nuestra Constitución.

No hay en esta coincidencia ninguna contradicción ni hay vaciamiento de ningún Estatuto de Autonomía. Es el Estado el que, en su conjunto, cede una parte de sus competencias. En este sentido, más incierto sería el papel futuro del Estado, ya que él es el único responsable ante las Instituciones de la CEE y no las regiones que han recibido las competencias transferidas.

¿Cuál es el papel respectivo del Estado y de las regiones en la construcción de Europa?

Sin Estados, hoy por hoy, no hay Europa posible. No se puede hacer Europa sin los Estados: no sería realista, no sería lógico, no sería fácil. Sería imposible.

A escala europea, los Estados desempeñan un papel regional en el que no caben subdivisiones. Doce Estados miembros de una Comunidad son una entidad regional de primera magnitud, no divisible porque no sería operativo ni eficaz. A escala continental los Estados son las grandes regiones políticas de Europa, aunque su papel no responde al que históricamente han desempeñado las regiones en la organización política.

Los Estados tienen una misión fundamental: el mantenimiento de la democracia; sin democracia interna no hay Europa integrada.

Los Estados europeos no pueden ser nacionalistas; sería una contradicción con la finalidad que persiguen.

Las regiones, a través de los Estados, juegan también un papel decisivo porque son colectividades naturales homogéneas.

Las regiones en el proceso de construcción europea están subordinadas a los Estados. No pueden hacer política independiente de la política estatal. No pueden olvidarse del marco primero en el que están insertas. Si quieren establecer solidaridades a nivel europeo, su primera solidaridad es en el interior del sistema político en el que se encuadran.

Las regiones serán tanto más positivas y próximas al ciudadano cuanto más conserven su papel natural. Pero perderán toda legitimidad si intentan suplantar o imitar el comportamiento del Estado. Todos sabemos que hay regiones europeas singulares, con gran personalidad, pero es impensable un directorio intermedio de super-regiones.

Además, la multiplicación de centros de decisión con el mismo poder no es solución alguna. La proliferación de regiones convertidas en pseudo-mini-Estados no tiene lógica cuando se persigue a medio plazo la integración de los Estados y las regiones.

No tiene sentido que se pretenda solucionar la crisis del Estado apuntando a la creación de más Estados. No tiene sentido hablar de integración y propiciar el desflecamiento del tejido tan laboriosamente conseguido.

Las regiones tienen su sitio en Europa siempre que no levanten la bandera de un nacionalismo lacrimoso. «En muchas ocasiones la opresión cultural y lingüística traumatiza a una colectividad y nunca deja de tener consecuencias psicológicas y

sociales» (H. Brugmans). El victimismo nacionalista como práctica política puede tener juego en el contexto interior de un Estado y sólo en ese tiempo en que aún perdura el trauma psicológico de la opresión. A escala europea, el victimismo no tiene porvenir alguno.

El regionalismo convertido en nacionalismo que se alimenta de permanente insatisfacción y frustración aparece falto de sentido de la realidad en la Europa comunitaria. En un marco de libertades como el nuestro, aspirar a lo menos olvidándose de lo más es cuanto menos absurdo.

Las regiones

¿Cómo participan juntos Estados y regiones en la construcción de Europa?:

La singularidad española estriba sobre todo en la simultaneidad: mientras el Estado redistribuye competencias en el interior, tiene a la vez que transferirlas al exterior.

a) Integrando, no desintegrando. Es decir, estableciendo un código de entendimiento en el que cada uno desde su esfera de poder correspondiente asuma su responsabilidad sin atacar la parcela de poder del otro.

b) Solidariamente, no independientemente. El Estado es algo más que una suma de regiones, pero sin éstas no existiría. La cooperación desde los respectivos papeles es la única vía posible. Por medio de la región, políticamente estructurada, el Estado se acerca al ciudadano, y por medio de ambos Europa se hace familiar.

Nadie puede abdicar de esta necesidad, pero sobre todo, la aventura solitaria está condenada al fracaso, al igual que la aventura insolidaria. Los delirios de grandeza sólo se le han permitido a De Gaulle referidos a Francia, pero nunca ningún político regional ha podido impresionar a Europa por su potencial o su pasado.

El verdadero futuro de la región está en su colaboración dentro del Estado, y el verdadero papel del Estado está en la po-

tenciación de sus regiones por la vía de la corrección de desigualdades y de la protección y potenciación de la libertad para que aquéllas manifiesten y desarrollen su personalidad, su lengua, su cultura.

c) Hay que participar conjuntamente con visión europea, abierta a todas las colaboraciones, no con visión cerrada reducida al ámbito estatal o mininacional de la región.

La Europa de los ciudadanos, de los pueblos, no se construirá sobre la base de los Estados omnipotentes encerrados en torres de marfil ni sobre la base de regiones maximizadas, ávidas de poder y dispuestas a suplantarse a los Estados o a multiplicarlos.

Posiblemente el énfasis que he puesto en estas precisas afirmaciones sería innecesario en la mayoría de los países comunitarios. Lo que acabo de decir no ha sido jamás controvertido en la mayoría de ellos o ha dejado ya de serlo en los casos en que fue sometido a controversia.

En España ese énfasis no es gratuito ni inoportuno. Voy a intentar explicar las razones de esa oportunidad.

En el panorama actual de la construcción europea son perceptibles dos fenómenos de importancia desigual. De un lado la dinámica de la reforma de la Comunidad, planteada oficialmente en las instancias comunitarias, y de otra un incipiente movimiento de algunas regiones que, agrupadas oficiosamente al margen de las instituciones, plantean esencialmente una reivindicación de protagonismo regional en el proceso de la construcción europea. En la reciente reunión del Consejo de Regiones de Europa, celebrado en Estrasburgo el pasado mes de noviembre, se condensaba esta pretensión en la necesidad de potenciar el papel de las

Las regiones aparecen en el proceso de construcción europea en un contexto específico: la preocupación por los desequilibrios y desigualdades territoriales.

regiones «como contrapeso de la Europa de los Estados».

Muchos puntos del diseño final de las instituciones europeas están por definir.

Pero nada hace pensar que la revisión del poder y del papel de los Estados para potenciar las decisiones europeas vaya a hacerse a base de contraponer un papel y poder creciente de las regiones.

Profundizar en esta vía significaría desconocer dos circunstancias determinantes: la alergia europea a la desintegración particularista, por una parte, y el verdadero sentido de toda la política regional europea por otro.

En efecto, Europa está vacunada contra los particularismos. Su razón de ser está en superarlos. Ningún paso de reforma institucional se dará en dirección que signifique crear riesgos de fragmentación o que suponga desandar el trabajoso camino de la integración. La preocupación por superar los egoísmos nacionales no se hará a costa de abrir cauces para que se manifiesten los egoísmos regionales o locales, generalmente tan vehementes o más que los estatales.

No puede, por tanto, sorprender, que cuando Jean Maurice Dehousse, adelantado del actual movimiento regional europeo, culmina su formulación de lo que son las aspiraciones regionales con una contundente paráfrasis y afirma que «es hora de decir que la política regional debe ser el gobierno de las regiones, por las regiones y para las regiones», afloran las más profundas preocupaciones sobre la utilidad real de tales formulaciones para la construcción europea y aparezcan las más abiertas reservas sobre la sintonía de estas expresiones con el hilo conductor de la política regional europea que fijaron los textos fundacionales y que han ido desarrollando las instituciones comunitarias.

Las regiones —conviene repetirlo— aparecen en el proceso de construcción europea en un contexto específico: la preocupación por los desequilibrios y desigualdades territoriales. La llamada política regional europea —con mayor o menor fortuna— se ha aplicado a crear técnicas de redistribución y solidaridad. En el marco de esa política, que es una política sectorial de la Comunidad, las regiones aparecen no como actores o protagonistas sino como destinatarias. Las regiones constituyen la unidad beneficiaria de las ayudas y son sujetos cooperantes para su aplicación.

No es extraño que con este punto de partida sean hoy fácilmente detectables dos motivaciones o impulsos básicos en el movimiento de las regiones europeas. Por un lado, el de quienes pretenden reequilibrar la representación de las regiones periféricas, pobres, subdesarrolladas o de baja densidad de población. Por otro, el de quienes buscan un marco institucional que sirva de palanca para defender intereses de regiones industrializadas que sufren problemas de crisis y reconversión.

En el fondo late una misma preocupación por aislar intereses territoriales. El regionalismo, en esta dirección, conduce no a fortalecer la democracia ni a favorecer la normalización o recuperación de comunidades culturales, sino a manifestar la identidad colectiva en un prurito de diferenciación sistemática, a veces tan incómodo como inofensivo, pero en ocasiones portador de obstáculos que entorpecen el desarrollo y fortalecimiento de un espacio político y económico verdaderamente común.

No es aventurado señalar que el regionalismo, así concebido, tiene difícil encaje en los objetivos de la unión europea y de los esquemas institucionales que intentan favorecerla.

Sin embargo, quisiera añadir un último

rasgo del movimiento regionalista que juzgo del máximo interés para nuestra reflexión española. Sea acertada o no la dirección en la que han empezado a movilizarse algunas regiones, lo indiscutible es que apuntan de forma tan explícita como inequívoca a articular la hipotética participación regional, el problemático escalón regional con arreglo a pautas y criterios de nítido federalismo. Precisamente por las razones que apuntaba hace un momento, uno de los presupuestos indeclinables sería el de la igualdad de derechos y competencias de todas las regiones.

No creo preciso ponderar el alcance de esta circunstancia. Europa, digámoslo claramente, no es una oportunidad para el protagonismo diferenciado de algunas regiones. No puede servir de pretexto o de excusa para actitudes que pretendan presentar a Europa como ámbito en el que

Es impensable un proceso a escala europea en el que hubiera regiones o nacionalidades históricas y regiones de régimen común o de segundo grado.

podrán alcanzarse cotas de poder o de reconocimiento que no se contienen en las normas constitucionales de los Estados. El propio movimiento regionalista europeo —si prosperase en sus balbucientes tentativas— no toleraría «clases» o «categorías» de nacionalidades o regiones. Es impensable un proceso a escala europea en el que hubiera regiones o nacionalidades históricas y regiones de régimen común o de segundo grado. Es impensable la reproducción de nuestra carrera con los dorsales de los arts. 143 y 151, símbolos de velocidades y contenidos diversos.

La igualdad de todas las regiones constituiría, por tanto, y constituye ya de hecho en las embrionarias manifestaciones actuales, un punto incontrovertible. Creo que deberían sacarse algunas consecuencias, porque resulta deplorable que algunas Comunidades Autónomas de nuestro país opongan resistencia insuperable a reunirse con todas las demás porque entienden que la compañía en pie de igualdad de Rioja, Murcia o Extremadura devalúa su rango y preeminencia política,

mientras no tienen inconveniente en acudir a unos denominados Estados Generales de las Regiones Europeas, en los que se comparte escaño con los representantes de Martinica, del Molise italiano, de una anónima región irlandesa identificada como «Este», y con los representantes no de Escocia o de Gales como tales sino de cada una de las regiones de dichas comunidades británicas, como Shetland o el South Glamorgan.

Quisiera recapitular y adelantar mi conclusión en relación con este aspecto de la reflexión: Europa aporta claridad. He dicho al principio que la construcción europea obliga a un gran esfuerzo de reconversión ideológica, política e institucional. Es evidente que los nacionalismos con expresión políticas existentes en el seno de los países comunitarios no pueden permanecer ajenos o indiferentes a los horizontes reales que marca el proceso histórico de la construcción europea.

Los nacionalismos deben llevar a cabo un profundo «aggiornamento», especialmente los que se confiesan europeístas. La autodeterminación, la liberación nacional o la independencia (señas de identidad de los nacionalismos, más o menos explícitas) son notas que no tienen cabida en el pentagrama europeo. Tampoco hay lugar para solistas en el plano político o económico. Otra cosa es en el cultural. Por ello digo que Europa obliga a revisar los referentes ideológicos y políticos. Su oferta no es la de propiciar protagonismos nuevos y diferenciados a las nacionalidades y regiones, y quienes pretendan desconocer esa realidad no tardarán mucho en encontrar los límites del erróneo camino.

La reforma de las instituciones europeas está planteada y con mayor o menor celeridad va a cumplir su andadura en dirección precisa. Restar poderes a los Estados para entregarlos a las instituciones co-

munitarias, o lo que es lo mismo, restar poderes a los centros de decisión estatal para transferirlos a la instancia europea. En ningún caso para transferirlos a otras instancias multiplicadas inferiores. El problema no se resuelve multiplicando los centros de poder sino reduciéndolos.

Agilizar y simplificar los procedimientos de decisión política es el reto comunitario, no añadir complejidad a esos procedimientos.

La vitalidad de Europa depende de la correcta articulación política de sus pueblos y comunidades. Las regiones deben fortalecerse en el interior de los Estados. La estructura política de cada Estado debe permitir una expresión directa de la personalidad de los colectivos naturales que lo integran.

Una de las más estridentes reivindicaciones del regionalismo europeo es la de conseguir que todas las regiones tengan una asamblea o parlamento regional elegido por sufragio universal, y un gobierno regional responsable ante la asamblea. España ha cubierto con creces ese tramo del regionalismo que la mayoría de los países comunitarios ni siquiera han ensayado.

Europa necesita las regiones. Necesita las regiones como instancia de poder democrático en el seno de los Estados porque necesita profundizar y ampliar la legitimación del poder ante los ciudadanos como parte de su propia cultura política.

No se trata, por tanto, de instaurar un nuevo jacobinismo a escala europea. Las regiones —sean nacionalidades o colectividades de otra naturaleza— participan y deben participar en la construcción euro-

La construcción europea obliga a un gran esfuerzo de reconversión ideológica, política e institucional.

pea a través de los Estados, pero no de los viejos Estados centralistas levantados sobre las bases caducadas de una soberanía absoluta que hoy no existe o de una

identificación artificial entre pueblos o naciones y Estados.

Las regiones deben contribuir vigorosamente a construir y desarrollar esos nue-

vos Estados sobre los que ha de descansar básicamente el proceso de integración europea. Con la conciencia clara de que el fortalecimiento de los nuevos Estados democráticos y descentralizados de la Europa que nace y crece no son los viejos aparatos uniformadores sino una respuesta moderna desde la libertad a las necesidades históricas de los pueblos y de los ciudadanos de nuestro continente.

Esto exige, sin duda, que los Estados asocien a las regiones a las decisiones comunitarias, y esta exigencia resulta especialmente necesaria en los países, como España, en los que la distribución interna del poder atribuye a las nacionalidades y regiones competencias que se transfieren a los órganos de la Comunidad Europea.

Resulta ineludible, so pena de caer en innecesarios conflictos y tensiones, articular un procedimiento de información y coordinación con las Comunidades Autónomas para que éstas puedan participar en la formación de la posición estatal en los organismos comunitarios. De igual modo debe atribuirse a las Comunidades Autónomas un papel relevante en la ejecución de las decisiones comunitarias y en la trasposición de aquéllas al ordenamiento interno.

Espero que también en este vital aspecto de la participación regional en la vida europea, España dará en los próximos días algunos pasos concretos importantes y se situará en la primera línea —compartida tal vez sólo por otro país comunitario, la República Federal Alemana— de ese proceso de corresponsabilización de las regiones.

He dicho que Europa aporta claridad

Las regiones deben contribuir a construir y desarrollar esos nuevos Estados sobre los que ha de descansar básicamente el proceso de integración europea.

porque pone a prueba ambigüedades in- viables. Pero aporta claridad porque al socaire de la construcción europea se recompone un proyecto sólidamente viable

de España. Ahuyentadas las tentaciones del nacionalismo de todo tipo —incluso la de un macronacionalismo europeo— la España que se transforma para asociarse a Europa no es una España impuesta a golpe de ortodoxia o resumida en esencias intangibles.

He dicho recientemente que «desde la perspectiva de la libertad España es un concepto acogedor y apasionante porque no se nos ofrece como una verdad revelada, sino como un reto de modernidad que exige a individuos y pueblos su aportación cotidiana para tejer el entramado de una sociedad nueva, con vocación de futuro, construida desde la diversidad de sus pueblos y de sus culturas».

Europa favorece el proyecto de la España hecha desde la libertad. Europa favorece la soldadura clara y transparente de Estados y regiones, de pueblos y culturas, de naciones y de comunidades, despojadas de su afán de sobresalir o de imponerse. Porque la filosofía básica de la construcción europea es la cooperación solidaria para sobrevivir y progresar juntos.

Este mensaje angular de la idea de Europa se transmite a todas sus partes. Estados y regiones no tienen cabida en Europa si no es desde la cooperación solidaria. Porque o Europa se constituye con ese espíritu o el proyecto europeo se estancará y fracasará.

España ha sentado las bases para que Estado y Comunidades Autónomas cooperen solidariamente en un proyecto común. Nos toca a todos, Gobierno de la Nación y gobiernos regionales, estar a la altura de las responsabilidades que implica acertar o errar en la tarea de hacer Europa, de hacer España, de hacer todos los días cada una de sus culturas.

ECONOMIA NORTEAMERICANA Y CRISIS ECONOMICA MUNDIAL

Martin Carnoy



2

La Administración Reagan ha estimulado el crecimiento económico en los Estados Unidos con una baja inflación y un incremento del empleo. Pero tal vez la política de la Administración haya creado más problemas de los que ha resuelto.

En 1981, el nuevo presidente prometió reducir la inflación y fomentar simultáneamente la prosperidad económica «quitando a la gente el gobierno de encima». Acusaba a los liberales de hundir a los Estados Unidos y al mundo entero en una crisis económica. La crisis, afirmaba, sólo podía ser resuelta volviendo a un sistema de empresa realmente libre que recompen-

sara el esfuerzo individual y promoviera el ahorro y la inversión.

El elemento clave de la política económica del presidente Reagan fue la Ley Fiscal de Recuperación Económica de 1981. La ley reducía los impuestos sustancialmente tanto para los individuos como para las empresas, y también reducía los in-

gresos fiscales federales. La reforma fiscal de Reagan, combinada con recortes del gasto federal en educación, asistencia social y formación, beneficiaba a las gran-

des empresas a expensas de los asalariados, y a los perceptores de rentas altas a expensas de la clase media baja y de los pobres. Pero se argumentaba que la renta real disponible, aun para estos grupos de renta más baja, aumentaría de forma significativa como resultado de los estímulos proporcionados por las reformas de Reagan. Los americanos ahorrarían más a medida que disminuyera la inflación y aumentarían los tipos reales de interés; las empresas invertirían más a medida que se incrementaran las ganancias después de deducir impuestos; y los consumidores tendrían más dinero para gastar.

Después de cinco años, es justo preguntarse: 1) ¿ha funcionado la reaganomía?, ¿están los americanos (y el resto del mundo) en mejor o peor situación que en 1980?, ¿estamos presenciando el final de la crisis de la década de 1970 y comienzos de la de 1980?; 2) ¿cuál es el modelo económico «revelado» por Reagan (en contraposición al retórico)?, y 3) ¿cuáles son las perspectivas para este modelo en el futuro?

¿Ha funcionado la reaganomía?

El presidente Reagan ha presidido la recuperación de 1983-1985, pero la reaganomía como tal no ha funcionado. Según la reaganomía, la reducción de los impuestos marginales sobre los individuos y las empresas incrementaría el ahorro personal, la inversión empresarial y la productividad laboral. Tanto los empresarios como los trabajadores tendrían más incentivos para incrementar su renta y su riqueza. Estos incrementos de productividad e inversión impulsarían una nueva expansión de la economía. Al mismo tiempo, una rígida política monetaria reduciría la inflación. El rápido crecimiento de

El elemento clave de la política económica de Reagan fue la Ley Fiscal de Recuperación Económica de 1981.

la renta nacional incrementaría la cifra absoluta de impuestos pagados, equilibrando el presupuesto en 1984.

En el cuerno de la abundancia previsto por la reaganomía, la parte del gasto gubernamental en el producto nacional se reduciría, pero no necesariamente en términos absolutos. La economía se expandiría con tanta rapidez que la producción privada dejaría atrás a un nivel de gasto público todavía creciente pero cada vez más lento. Esta expansión de la oferta permitiría al presidente Reagan satisfacer a sus principales electores políticos —a los blancos de renta media y alta mediante recortes fiscales, y al complejo militar industrial mediante el aumento del gasto militar— sin perjudicar necesariamente a los pobres.

Sin embargo, el nirvana previsto nunca fue alcanzado. Los recortes fiscales no produjeron los incrementos pronosticados en el ahorro y la inversión. Tras la aplicación de los recortes fiscales mediante la Ley Fiscal de Recuperación Económica de 1981, la parte del ahorro en la renta personal disponible pasó de una media de un 6 % en 1977-80 a un 6,7 % en 1981, pero luego bajó a un 6,2 % en 1982 y un 5 % en 1983, para elevarse a un 6,1 % en 1984 y caer en picado a menos de un 5 % en los tres primeros trimestres de 1985. El cuadro 1 muestra que la inversión privada interior bruta de los no residentes se incrementó con menos rapidez en los cinco años de reaganomía que durante la Administración Carter. Durante los últimos tres años (1981-1985) —en lo que podríamos llamar la expansión Reagan—, la inversión real se incrementó en un 11,3 % anual (la cifra total de 1985 se basa en los tres primeros trimestres), pero si tomamos los tres mejores años del mandato Carter —1977-79— la inversión real se incrementó casi tanto, a un ritmo de un 10,1 % anual.

Tampoco ha producido la reaganomía una tasa más alta de crecimiento econó-

mico que la política de Jimmy Carter. El producto nacional bruto real se incrementó en un 2,7 % anual en los últimos años, cifra significativamente inferior al 3,2 % de crecimiento en 1977-80. En los últimos tres años (1983-85), las tasas de crecimiento han sido mucho más altas, alcanzando una media de un 4,5 % anual. Pero si tomamos los tres mejores años de Carter, 1977-79, la tasa de crecimiento anual fue aproximadamente la misma (4,45 %) que en 1983-85 (4,42 %, suponiendo un porcentaje de un 2,8 de crecimiento en 1985).

Sin embargo, la política económica de Reagan ha tenido más éxito que la de Carter a varios niveles:

1. Reagan ha reducido la inflación y conseguido una tasa razonable de crecimiento con una inflación baja y un incremento del empleo. La tasa media de inflación anual en los años de Carter fue de un 7,8 %. Esta tasa cayó a un 5,3 % en 1981-85, y en los últimos tres años, durante la recuperación de Reagan, a un 3,6 %. El empleo se incrementó en un total de un 7,6 % desde 1980, en su mayor parte desde 1982. Esta es una tasa de incremento muy inferior al 2,8 % anual (total, un 11,9 % en cuatro años) de 1977-80: comparando las dos expansiones (1977-79 y 1983-85), el empleo se incrementó en un 3,6 % y un 2,9 % anual respectivamente. A pesar del rápido incremento en 1983-85, la tasa de desempleo civil en el último trimestre de 1985 es la misma (7 %) que en 1980, año de recesión. Por un lado, muchos analistas piensan que después de tres años de expansión un 7 % representa una elevada tasa de desempleo, en especial si se la compara con la tasa del 5,6 % en 1979. Por otro lado, la mano de obra disponible está creciendo más lentamente que a finales de la década de 1970. Si el crecimiento continúa —aunque sea lentamente— las tasas de desempleo podrían disminuir lentamente.

2. El consumo personal también ha crecido con más rapidez bajo Reagan que

Las compras relacionadas con la defensa han crecido más del triple que durante la Administración Carter.

bajo Carter. Dado que el empleo ha crecido mucho más lentamente que en los años de Carter, el crecimiento superior del consumo ha de ser explicado ante todo por la *disminución* más lenta de los ingresos semanales de los asalariados bajo Reagan que en 1977-80. En los años de Carter, los ingresos reales *se redujeron* en un total de casi un 8 %; en 1981-85, «sólo» se redujeron en un 1,3 %.

3. La productividad se ha incrementado en un total de un 7,3 % en 1983-85 y un 8,6 % en 1981-85. El incremento de la productividad en 1977-79, los mejores años de Carter, sólo totalizó un 1,7 %, y un 1,2 % en 1977-80. Tras un período de relativo estancamiento de la productividad (1977-1982), la producción por hora aumentó fuertemente en 1983-84.

4. Las ganancias después de deducir impuestos se incrementaron espectacularmente, pasando de una media de un 8,1 % en 1977-80 a un 9,5 % en 1981, un 8,6 % en el año de recesión de 1982, un 12,6 % en 1983, un 16,7 % en 1984 y un 17,8 % en la primera mitad de 1985. Cincuenta de las principales empresas de la nación, incluyendo los grandes contratistas de la industria de defensa como Boeing, General Dynamics, Grumman, Lockheed y Westinghouse, no pagaron ningún impuesto en 1981-84 sobre sus 56.800 millones de dólares de ganancia (estudio de Citizens for Tax Justice, citado en el *San Francisco Examiner*, 29 de agosto de 1985).

5. La tasa de utilización de la capacidad productiva se elevó hasta un 80 %, porcentaje en el que se ha mantenido tras un descenso al 69 % a finales de 1982. Aunque esta cifra no es tan alta como el 84 % conseguido en 1978-79, está próxima a la plena utilización.

Pero recientes análisis económicos sugieren que estos éxitos fueron conseguidos de una forma innecesariamente costosa (véase David McClain, «The recessions

weren't worth it», *New York Times*, 1 de diciembre de 1985, sección de economía, página 2). La política monetaria restrictiva de Reagan (y de Volker) exacerbó

tanto en 1981 la caída de 1980 que la economía americana entró en su peor recesión desde la década de 1930. La inflación disminuyó, pero a costa de un elevado nivel de desempleo, de miles de quiebras de empresas, de una redistribución de la renta de los grupos de renta media baja a los grupos de renta media alta y alta que se siguieron recuperando, y de una activa política antisindical para hacer bajar los salarios de los trabajadores especializados.

Además, pese al recorte fiscal, Reagan hizo todo menos quitarle a la gente el gobierno de encima. El cuadro 1 demuestra que mientras que durante la Administración Carter las compras reales totales de bienes y servicios del gobierno federal sólo se incrementaron en una tasa anual de un 2,2 %, bajo Reagan han crecido casi el doble, en un 4 %. Pero el aspecto más sorprendente de la política de Reagan es la transferencia de las compras de los gobiernos estatales y locales al gobierno federal y, dentro de éste, de las compras no relacionadas con la defensa a las compras relacionadas con la defensa. En 1980, las compras relacionadas con la defensa eran unas dos veces superiores a las no relacionadas con la defensa en el producto nacional bruto; en 1985, eran casi tres veces superiores. Las compras relacionadas con la defensa crecieron al asombroso ritmo anual del 6,2 %, más del doble de lo que creció el producto nacional bruto, y más del triple que las compras militares durante la Administración Carter. Y mientras que las compras no relacionadas con la defensa se incrementaron casi al mismo ritmo que el PNB durante los años del gobierno Carter, bajo Reagan han disminuido constantemente en términos reales.

El rápido aumento de las compras del gobierno en 1981-85 refleja un incremento

Ha sido sobre todo el incremento de la inversión extranjera en EE.UU. el que ha impedido una escasez de capital privado.

PNB en 1980 a un 35,3 % en la primera mitad de 1985. El incremento del gasto federal es responsable de más de todo el incremento, dado que la parte del gasto estatal y local en el PNB disminuyó durante este período. En 1985, la parte del gasto federal en el PNB fue un 2,5 %, superior al 21,9 % de 1980 e incluso al 24,1 % de 1982, en el momento álgido de la recesión.

Y lo que es más importante: el recorte fiscal no produjo un crecimiento lo suficientemente rápido como para reducir el déficit, dado especialmente que Reagan estaba aumentando el gasto militar a un ritmo histórico. Los recortes del gasto en educación, asistencia social, protección del medio ambiente y desarrollo comunitario, e incluso la moderación en los incrementos de la seguridad social y en los beneficios de la asistencia sanitaria no pudieron compensar el crecimiento del gasto militar (cuadro 2).

El resultado principal del recorte fiscal fue la acumulación de casi 900.000 millones de dólares de déficits en 1981-85 (más de 200.000 millones sólo en 1985) y la previsión de grandes déficits hasta el final de la década. El déficit se ha convertido en el problema económico más importante de la agenda política. El cuadro 2 indica que la parte del déficit en el PNB se incrementó, pasando de un 2,3 % en 1980 a un 5,3 % en 1985. Dado que los distintos estados están experimentando un superávit igual a un 1,4 % del PNB, esto ha reducido el efecto negativo de los déficits federales en los mercados de capital. Pero en 1985, incluso con los ahorros de los estados, los déficits federales superarán con mucho a los ahorros personales. Un estudio del Office of Management and Budget muestra que en 1983 los emprésti-

tos del gobierno federal absorbieron un 56,5 % de los fondos disponibles en los mercados de crédito americanos. En 1974 esa misma cifra fue sólo de un 12,9 %.

Ha sido sobre todo el incremento de la inversión extranjera en los Estados Unidos el que ha impedido una escasez de capital privado (véase el cuadro 3). El déficit no sólo presiona para que aumenten los tipos de interés, sino que además su existencia dificulta cualquier flexibilidad política en el uso de instrumentos fiscales para mantener el crecimiento. Por el contrario, es probable que los intentos de reducir el porcentaje del gasto federal en el PNB dominen la acción legislativa durante los próximos tres años, aun cuando esto signifique unas tasas de crecimiento considerablemente más lentas. La presión fiscal también se incrementará, especialmente para las empresas. Todo esto tenderá a mantener bajas en el futuro las tasas de crecimiento.

La recuperación de Reagan en 1983-85 tiene, pues, poco que ver con las teorías reaganómicas de 1981 basadas en la oferta. La combinación de recortes fiscales, incremento del gasto militar y monetarismo —sobre la que se ha basado la recuperación— equivale a una forma «invertida-pervertida» de keynesianismo: mientras que Keynes veía la salvación del capitalismo en el apoyo directo del Estado al consumo de masas (como medio de conseguir el pleno empleo), con Reagan el gasto en déficit del gobierno estimula la economía a través de la producción militar y la transferencia de la renta nacional disponible del trabajo al capital y de los perceptores de rentas bajas a los perceptores de rentas altas.

En resumen, no fue el incremento autónomo de los ahorros privados y la inversión el que produjo la recuperación. Más bien, el crecimiento en 1983-85 se vio estimulado por un espectacular incremento del gasto militar financiado mediante dé-

ficits federales, por una reducción de los costes de la mano de obra resultante de las altas tasas de desempleo y del debilitamiento de los sindicatos, por un incremento de la productividad derivado de una revolución tecnológica (ordenadores, robots, sistemas de comunicaciones, sistemas de organización) basada en la investigación y el desarrollo militar y especial, y por un coste menor del petróleo y otras materias primas debido, en buena medida, a la recesión mundial de 1980-82.

Sin embargo, el crecimiento económico sigue dependiendo del aumento del consumo. El consumo personal aumentó a un rápido porcentaje anual del 4,7 % que se inició en 1983 como resultado de una reducción de los impuestos, un aplazamiento de la demanda de bienes de consumo no perecederos, unos tipos de interés más bajos (el tipo principal descendió

La combinación de recortes fiscales, incremento del gasto militar y monetarismo equivale a una forma «invertida-pervertida» de keynesianismo.

de un 20 % en 1981 a un 11,5 % en diciembre de 1982) y una reducción del desempleo. Pero este incremento del consumo no ha estado distribuido por igual. Por diversas razones, se ha concentrado en las rentas más altas que en expansiones anteriores: la tasa de desempleo sigue siendo relativamente alta, los subsidios sociales no han aumentado en términos reales, los salarios reales de los trabajadores empleados continúan bajando (aunque más lentamente que en los años de Carter) y la reforma fiscal de 1981 ha favorecido a los perceptores de rentas más altas y a los ingresos del capital.

Aparentemente, la dura política monetaria del Fed (Federal Reserve System) y los altos tipos reales de interés han contenido la inflación. Pero esta política ha tenido un efecto sobre la inflación muy inferior al de la política antiobrera de Reagan y el descenso de los precios del petróleo (McClain, *New York Times*, 1 de diciembre de 1985). Aunque la «superabundancia de petróleo» fue estimulada en parte por el programa de ahorro de Car-

ter de 1977-80, la recesión mundial provocada por la reaganomía ha desempeñado un importante papel al reducir los costes de la mano de obra (incrementando el desempleo nacional e internacional) y mantener bajos los precios del petróleo (reduciendo la demanda mundial). Desde esta perspectiva, la clave de una inflación baja es que continúe la superabundancia de petróleo (y de otros productos) —lo que implica un crecimiento relativamente bajo de la demanda mundial de artículos de primera necesidad, incluida la gasolina— y que continúe la presión para que bajen los salarios interiores.

La política antiobrera de la Administración Reagan forma, pues, parte integrante de su plan de crecimiento económico sin inflación. Esta política incluye el apoyo a los empresarios en su ofensiva para hacer que retrocedan los salarios, la admisión de una fuga ilimitada de capitales hacia países de Asia y Latinoamérica, donde los salarios son bajos, la redefinición del pleno empleo como un «6-7 %», el consentimiento del cierre de una gran parte de las principales industrias como el acero y el transporte, y la creación de una atmósfera política hostil a los intereses sindicales.

El surgimiento de un nuevo modelo de crecimiento capitalista

La política de la Administración Reagan tiene implicaciones que van más allá de la actual recuperación. Esta política, junto con la de Thatcher en Gran Bretaña y hasta cierto punto la de Kohl en Alemania, están reestructurando la economía mundial sobre nuevas bases. Está surgiendo un modelo neoconservador de crecimiento capitalista, determinado, en parte, por procesos históricos «espontáneos», como la revolución tecnológica, y, en parte, por una política consciente encaminada a superar los actuales obstáculos al crecimiento capitalista, como el contrato social entre

empresarios y trabajadores. Aprovechándose de la actual revolución y de la crisis económica de la década de 1970, este nuevo modelo trata de recapitalizar la economía, reforzar el control político a nivel nacional e internacional y reorganizar la circulación de capital en todo el mundo. Los rasgos principales de esta reestructuración son los siguientes:

1. El tema *social* dominante del modelo neoconservador es el hincapié en la seguridad militar global frente a la expansión comunista más que en el desarrollo económico internacional y la reducción de las diferencias de renta entre las naciones y en el seno de éstas. En los Estados Unidos, la producción y el despliegue militares desempeñan un importante papel como incentivos del crecimiento económico y del cambio tecnológico. El gobierno ha reducido drásticamente la atención prestada al aumento del consumo de los americanos de renta baja.

De acuerdo con el Joint Economic Committee del Congreso de los Estados Unidos, el gasto militar se habrá incrementado en 1,3 billones de dólares aproximadamente en términos absolutos, es decir, un 13 % anual, entre 1981 y 1986. En el presupuesto de Reagan para 1986, el gasto militar se ha incrementado un 12,6 %, cifra sólo ligeramente inferior a la del 13,6 % de incremento medio anual en 1981-85. En el presupuesto para 1986, los militares se llevan un 29,4 % de una cifra récord de 972.000 millones de dólares, porcentaje superior al 22,7 de 1980. La única partida del presupuesto que ha crecido más rápidamente es el interés pagado por la deuda, que ha crecido a un ritmo del 17,9 % anual y ahora representa el 14,5 % del presupuesto federal.

La rápida expansión de la construcción de nuevas armas (el misil MX, el bombardero B-1, nuevos porta-aviones totalmente equipados), el importante y continuado apoyo a la investigación y el des-

La política antiobrera de la Administración Reagan forma parte integrante de su plan de crecimiento económico sin inflación.

arrollo militar y espacial —puesto de manifiesto por la incursión de Reagan en la «guerra de las galaxias»—, unidos a los recortes del gasto en bienestar social, sugieren una transición del *Welfare State* (Estado del bienestar) al *Warfare State* (Estado de guerra). En esta transición, no sólo el Estado sigue desempeñando un papel fundamental, sino que además el poder de decisión sobre el gasto del Estado se centraliza cada vez más a nivel burocrático (militar) nacional (véase el cuadro 2).

A nivel internacional, esto se traduce en un crecimiento más lento de la producción y la demanda mundiales de bienes de consumo que en 1945-73, e incluso que en 1973-79, en parte debido al sesgo anti-inflacionario y antiobrero de la Administración Reagan, que exige una expansión económica modesta, más que rápida, en los Estados Unidos y apoya programas de austeridad económica en el resto del mundo, y políticas de exportación, más que de crecimiento interior, en el Tercer Mundo. Además, una política exterior americana militarista y agresiva fomenta la venta y la producción de armas (los países en vías de desarrollo importaban ya 20.000 millones de dólares en armas en 1980), y esto —frente a la crisis de la deuda internacional— requiere una austeridad todavía mayor en el Tercer Mundo para pagar estas armas. Sólo una fracción del total de las ventas de armas puede ser financiada con las concesiones de ayuda militar americana. En efecto, hay una tendencia a sustituir los bienes de consumo por bienes militares a nivel mundial, con los correspondientes cambios en el comercio y la producción, así como en la importancia dada a una tecnología (adecuada) de bienes de consumo frente a una tecnología militar.

2. La economía mundial está siendo remodelada por una importante revolución tecnológica/informativa que ya está en

**La política de Reagan,
junto con la de Thatcher y Kohl,
están reestructurando
la economía mundial
sobre nuevas bases.**

marcha en los Estados Unidos y en otros países industrializados. Esta revolución incrementa la productividad en la manufactura (robotización), en el sector de los servicios (comunicaciones, informática, automatización administrativa) y en el sector de los bienes de consumo (informática). El rápido crecimiento de la producción de *hardware* y *software* que acompaña a esta revolución incrementa el empleo en las industrias de alta tecnología tales como las de ordenadores, microprocesadores, sistemas de comunicaciones y desarrollo de *software*, pero este incremento no compensa necesariamente a la mano de obra sustituida por la aplicación de productos de alta tecnología a otros sectores. Aunque el futuro efecto neto de la nueva tecnología sobre el empleo es una cuestión muy controvertida, diversos estudios sugieren que las seculares tasas de desempleo continuarán aumentando aún con mayor rapidez en el futuro (véase un resumen de la controversia en Russell Ruberger, *High technology and loss*, Institute for Research on Educational Finance and Governance, Universidad de Stanford, proyecto número 84-A12, 1984).

3. El modelo neoconservador ha intentado reestructurar la relación capital-trabajo debilitando el poder de los trabajadores organizados. La política antisindical de Reagan, el mantenimiento de una alta tasa de desempleo, los recortes y retrocesos salariales, la reducción de los subsidios sociales, la sustitución de mano de obra masculina por mujeres casadas peor pagadas y la de trabajadores negros y jóvenes por emigrantes, que permite la libre circulación del capital en el exterior a través de empresas incontroladas, y el desarrollo de una mano de obra no sindicada y mal pagada son factores que han debilitado a los trabajadores organizados en los últimos años. El alto nivel de desempleo —en la actualidad del 7 %— ha sido la mayor fuente de presión para hacer bajar los salarios. Pero la competen-

cia extranjera (a menudo de filiales de transnacionales con sede en los Estados Unidos) también mantiene a raya a los trabajadores con empleo.

Se está pidiendo a los sindicatos que hagan concesiones inauditas hace cinco años. Se han contentado con incrementos medios de un 2,3 % anual para los próximos tres años, un 2 % por debajo de la tasa de inflación prevista. Sin embargo, ni siquiera tales concesiones han sido suficientes para impedir el cierre de muchas fábricas, especialmente en las industrias del acero y del automóvil, y para impedir que algunas compañías, tales como Continental Airlines, utilicen la legislación en materia de quiebra para acabar por completo con los sindicatos. La presión para que los trabajadores acepten retrocesos salariales ha desembocado también en la violencia, como en la huelga de los autobuses Greyhound de noviembre de 1983.

La presión sobre el salario social proviene también de los constantes esfuerzos de la Administración Reagan por «privatizar» la sociedad americana: en apariencia por crear una mayor confianza en el mercado libre de decisiones sobre asignación y distribución, y con ello más eficiencia y una mayor producción. El principal objetivo de la presión ha sido el gasto gubernamental en bienestar social, pero también han sido importantes la desreglamentación de las empresas y la supresión de las normas de seguridad y protección del medio ambiente. Todo ello ha obligado al trabajador y al consumidor a soportar cada vez más los costes de unas prácticas industriales perjudiciales para la salud y el medio ambiente, lo que reduce el salario social y deteriora, de hecho, la calidad de vida.

4. La producción en los Estados Unidos sufrió una importante reestructuración regional en la década de 1970 que se intensificó en 1981-84. La «desindustrializa-

ción» de los Estados Unidos radica, en gran medida, en el desplazamiento de la manufactura del antiguo cinturón industrial al Sur y al Oeste, regiones con un mejor «ambiente empresarial». Este ambiente consiste en mano de obra peor pagada, ciudades y condados conocidos por sus gobiernos antisindicalistas, estados dispuestos a hacer concesiones fiscales para atraer a la industria, y condiciones de vida relativamente agradables para los ejecutivos de alto y medio nivel. Pero el *boom* del petróleo y del gas natural de 1973 a 1980 en Texas, Oklahoma y Louisiana, así como el masivo gasto militar federal en el *Sun Belt* en la década de 1980, desempeñaron también un papel crucial en el mayor crecimiento económico de estas regiones.

El desplazamiento del gasto gubernamental hacia California, Texas, Colorado, Arizona y otros estados del Oeste ha tenido un enorme impacto en la estructura de poder de los Estados Unidos y, por consiguiente, del mundo. Aunque las últimas cifras sobre la población (1985)

El modelo neoconservador ha intentado reestructurar la relación capital-trabajo debilitando el poder de los trabajadores organizados.

muestran que la tendencia se ha suavizado y que hay un rápido crecimiento económico en algunos estados del Noreste y una cierta mejoría en el Medio Oeste, la población continúa desplazándose hacia el Sur y el Oeste, y los gastos de defensa continúan concentrándose en estas regiones. Esto no significa necesariamente un deslizamiento del liberalismo al conservadurismo. Para la izquierda, significa la transición de una tradición democrática dominada por el trabajo a una más abierta a las nuevas ideas sobre la reforma social y política. Para la derecha, el *establishment* del Suroeste es más agresivo en sus posturas sociales y militares, menos inclinado a comprar la paz social con concesiones y más firmemente anticomunista en sus opiniones de política exterior.

5. La economía de los Estados Unidos se está viendo cada vez más afectada por el desarrollo de una amplia y crecien-

te economía sumergida. La economía sumergida representa una nueva forma de la producción capitalista: evita la organización sindical, la reglamentación del gobierno y, habitualmente, incluso los impuestos, aunque sigue unida a las grandes empresas por acuerdos de subcontratación. La economía sumergida es importante; representa tal vez el 15 % del producto nacional bruto. Abarca una multitud de actividades ilegales (el tráfico de drogas y las transacciones en metálico no declaradas del comercio y los servicios, por ejemplo). Pero en su forma manufacturera de talleres con mano de obra mal pagada, la economía sumergida permite a las empresas con trabajadores sindicados, agobiados por unos salarios elevados y unos planes masivos de beneficios, reducir sustancialmente sus costes.

La economía sumergida será estimulada por la inmigración masiva de mano de obra barata procedente del Tercer Mundo hacia estos puestos de trabajo industriales, y por la revolución tecnológica en las industrias de servicios. Los microprocesadores permiten a los individuos trabajar en casa como «*commuters computers*» (personas que pueden llevar a cabo sus tareas en microprocesadores domésticos conectados a un despacho por una línea telefónica), o como empresarios autónomos que reciben unos honorarios por los servicios prestados con un ordenador desde su casa. Algunas proyecciones prevén que un 18 % de la mano de obra en los Estados Unidos trabajará en casa a finales de siglo. Si estas proyecciones son correctas, la existencia misma de los sindicatos está amenazada.

6. La «crisis» del petróleo de 1973 y 1979 produjeron una nueva fase de internacionalización del capital privado americano. Este capital se concentró cada vez más en las compañías de petróleo y gas en la década de 1970, y posteriormente fue reciclado (junto con los dólares de la

OPEP) a través de bancos americanos. En 1965, un 21 % aproximadamente de la inversión privada interior bruta en los Estados Unidos provenía de las compañías petrolíferas y los bancos, en 1981, la cifra se aproximaba a un 45 % (M. Carnoy, D. Shearer y R. Rumberger, *A new social contract*, Harper and Row, 1983). A pesar del hincapié hecho en el crecimiento de la alta tecnología a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, el grueso del capital privado americano está ahora en manos de los productores de energía y de los bancos. Al ser los sectores más transnacionalizados, son los más capacitados para hacer que el capital circule por el mundo, y lo hacen. La banca internacional, las compañías petrolíferas y el *Warfare State* americano se han convertido en las nuevas esferas de coordinación del sistema económico mundial.

Las contradicciones internas del nuevo modelo

La principal fuerza del modelo neoconservador está en su coherencia ideológica. Concilia los postulados clásicos de la economía de libre mercado con los valores tradicionales del puritanismo y el patriarcado. Sin embargo, es dudoso que la sociedad americana o la economía internacional de hoy en día puedan ser reducidas a unos términos tan simplistas o regidas por ellos. La eficacia económica del modelo neoconservador será puesta en entredicho antes o después por sus contradicciones internas. Su viabilidad política dependerá no tanto de sus propios méritos como de la capacidad de los movimientos políticos de oposición para proponer una alternativa coherente y popular más adecuada a las realidades actuales. Hay, por consiguiente, unos límites

tanto políticos como económicos a la consolidación de la versión de 1985 del nuevo orden económico tal como lo concibe el neoconservadurismo americano.

La economía de los EE.UU. se está viendo cada vez más afectada por el desarrollo de una amplia y creciente economía sumergida.

Tal vez el límite político más serio al modelo neoconservador sea la profunda inquietud de muchos americanos ante el proceso de militarización. Aunque el poder militar ha desempeñado un importante papel en la política exterior de los Estados Unidos desde el siglo pasado, siempre ha provocado en los americanos sentimientos ambivalentes. Muchos opinan que la esencia de la democracia en los Estados Unidos se ve comprometida por la intervención militar. Otros, y en especial las organizaciones religiosas y los grupos feministas, creen que es intrínsecamente antihumanista. Estas organizaciones han desempeñado un papel crucial en el movimiento antinuclear y en la oposición a la política de Reagan para Centroamérica.

Tal vez el límite político más serio al modelo neoconservador sea la profunda inquietud de muchos americanos ante el proceso de militarización.

condición necesaria para un futuro económico y social mejor, espera desviar la atención de los votantes de los costes económicos y sociales de la militarización.

A pesar de estos sentimientos, la política exterior de Reagan es explícitamente militarista. El militarismo es inseparable de la actual versión de la reaganomía. Pues ha sido este militarismo el que ha proporcionado una buena parte de la base de la actual versión de la reaganomía. Pues ha sido este militarismo el que ha proclama. Como ideología, proporciona una importante justificación a los costes sociales de la política económica de Reagan en los últimos cinco años: el aumento de la pobreza (el porcentaje de individuos por debajo de la línea de pobreza pasó de un 11,7 % en 1979 a un 13 % en 1980 y a un 16 % en 1983, reduciéndose ligeramente a un 15 % en 1985), el estancamiento del nivel medio de vida (la media de los ingresos familiares bajó de 26.179 dólares en 1976 a 25.418 en 1980 y 24.580 en 1983), el aumento de la desigualdad entre las rentas, la disminución de la cantidad y la calidad de los servicios sociales, y el incremento de la contaminación y los riesgos para la salud y la seguridad. Reagan ha hecho a menudo hincapié en el tema del sacrificio para preservar al «mundo libre» del comunismo. Convenciendo a los americanos de que este sacrificio es la

A lo más, hay un apoyo con reservas de los votantes al militarismo. La prometida seguridad se ve contrarrestada por el miedo a una guerra nuclear, a verse envueltos en guerras limitadas en todo el mundo, a incurrir en déficits gubernamentales para construir sistemas de armas masivos que pronto quedan anticuados. Los sindicatos, por primera vez desde la segunda guerra mundial, no están convencidos del valor del gasto militar para el empleo. Entre los dirigentes sindicales están ganando cada vez más aceptación los estudios que demuestran una pérdida de puestos de trabajo en el sector privado cuando el gasto del gobierno se desplaza del bienestar social al terreno militar.

Algunos industriales, banqueros y otros miembros del sector privado se oponen también al incremento del gasto militar. Consideran que tal gasto compite con el capital privado no militar y con la inversión en educación, transporte y otras infraestructuras públicas. Pero existe probablemente otra razón, más sutil, por la que a los círculos empresariales les preocupa la carrera armamentista internacional: el dominio americano del sistema internacional depende cada vez más de la tecnología militar. Ciertamente, la política de desarrollo del Tercer Mundo está fuertemente influida por el Fondo Monetario Internacional (que a su vez está fuertemente influido por los banqueros y los mayores bancos privados de los Estados Unidos). Pero la creciente militarización del mundo da al Pentágono (al Estado) un mayor poder no sólo sobre las economías del Tercer Mundo sino también sobre las europeas. Francia e Italia, por ejemplo, dependen cada vez más de las ventas de armas a otros países para obtener ingresos en concepto de expor-

tación. Al mismo tiempo, los exportadores de armas dependen de los Estados Unidos para obtener tecnología, especialmente en lo que respecta a la microelectrónica. Así pues, los Estados Unidos no son sólo uno de los principales proveedores mundiales de armas, sino que también desempeñan un papel aún más importante en la tecnología militar. Es el Estado, y no el sector privado, el que controla estas ventas y esta tecnología, aun cuando las beneficiarias directas sean empresas privadas, como Lockheed y McDonnell-Douglas.

2. Aunque la importancia dada al gasto militar pueda haber fortalecido momentáneamente a los Estados Unidos en el plano internacional, al mismo tiempo ha contribuido al enorme déficit del gobierno federal. Aun cuando la economía marche bien y esté a punto de firmarse una ley con un paquete de medidas para reducir el déficit, se espera que éste se mantenga entre los 100.000 millones y los 200.000 millones de dólares hasta 1988. La deuda federal ha crecido más rápidamente que el PNB desde 1980. Desde 1982 —con la expansión de Reagan— la deuda ha crecido un 14,3 % anual, mientras que el PNB crecía sólo un 9 % (ambos en precios actuales). Para cubrir el déficit, el gobierno federal tuvo que pedir un préstamo por la asombrosa cantidad de 210.000 millones de dólares en el año fiscal de 1985, y tendrá que pedir otro de casi 200.000 millones en el año fiscal de 1986.

La existencia de este gran déficit es un recordatorio de que Reagan no ha conseguido cumplir su promesa central: reducir el papel del gobierno en la economía. De hecho, el gasto del gobierno no ha sido recortado por Reagan; en lugar de ello, ha sido transferido del bienestar social al gasto militar, y, en cualquier caso, la empresa privada ha pasado a depender más del apoyo gubernamental que en el pasado. Por ejemplo, el condado de San-

ta Clara, donde está situado el «Silicon Valley», recibió 4.300 millones de dólares en contratos militares en 1984, es decir, unos 5.400 dólares por cada persona empleada en el condado.

La política económica de la Administración ha llevado también a una fuerte intervención del gobierno en tres de los mayores sectores económicos: la industria del petróleo, que está siendo ayudada mediante la venta de concesiones petrolíferas marinas propiedad del gobierno federal; los principales bancos, que están siendo salvados de un posible hundimiento gracias a los préstamos del FMI, respaldados por el gobierno, a los países en vías de desarrollo; y el sector manufacturero, cuyo crecimiento está siendo estimulado sustancialmente por el gasto militar. Y toda la economía está siendo espoleada por los ilimitados empréstitos del gobierno.

La oposición pública al rápido ritmo de gasto militar y a los déficits ha llevado en 1985 a una legislación sobre la reducción del déficit que obliga al Congreso y al presidente a eliminar este déficit a comienzos de la década de 1990. Aunque el presidente Reagan ha insistido en que cualquier reducción del déficit debe incluir incrementos del gasto militar por lo menos tan grandes como la inflación, el paquete de medidas propuestas por el House-Senate Conference Committee exige una reducción mucho más drástica del presupuesto del Pentágono.

Pero la obligación de reducir el déficit precisamente cuando la expansión económica se está quedando sin fuerzas puede plantear problemas a un crecimiento continuado en la década de 1980. En teoría, la reducción del déficit incrementará el capital disponible para la inversión privada y los tipos de interés reales bajarán, estimulando el crecimiento. Los ahorros de las empresas aumentaron fuertemente en los últimos tres años al dispararse las

La creciente militarización del mundo da al Pentágono un mayor poder no sólo sobre las economías del Tercer Mundo sino también sobre las europeas.

tasas de ganancia (véase el cuadro 3). Sin embargo, la reducción del crecimiento del gasto gubernamental reducirá el crecimiento del PNB y moderará la demanda de bienes privados, y especialmente de elementos de producción no perecederos que desempeñan un papel tan importante en las compras militares. Si una parte significativa del déficit es transferida ahora a los ahorros de las empresas a través de ganancias superiores, la legislación sobre la reducción del déficit podría perjudicar a las empresas en lugar de ayudarlas. Además, unos tipos de interés reales más bajos frenarían el gran incremento neto de la inversión extranjera en los Estados Unidos (véase el cuadro 3). Una reanudación de la salida neta de capital de los Estados Unidos al resto del mundo tendería a elevar unos tipos de interés apoyados en el interior.

La legislación sobre la reducción del déficit, combinada con la relativa disminución de los ahorros personales durante la expansión de Reagan, significa que la economía americana confiará cada vez más en los ahorros de las empresas para financiar la inversión interior y que los ahorros de las empresas tendrán que depender mucho menos de la expansión del gobierno. La creciente volubilidad potencial que esto introduce en la economía hace que sea muy probable que cualquier tendencia recesional en el resto de la década sea contrarrestada con la suspensión de la reducción del déficit por parte del Congreso.

3. Si consideramos el déficit de los Estados Unidos a la luz de las actuales tendencias económicas mundiales, resulta evidente lo frágil que se ha vuelto la economía mundial como resultado de las políticas neoconservadoras (véase el cuadro 4). La actual recuperación americana está basada en el consumo privado estimulado por los recortes fiscales para la clase media alta y en el gasto militar. Esto ha he-

La actual recuperación americana está basada en el consumo privado estimulado por los recortes fiscales para la clase media alta y en el gasto militar.

cho que subieran los tipos de interés reales y ha inflado el valor del dólar, atrayendo capitales de todo el mundo (véase el cuadro 3 para el crecimiento de los fondos extranjeros netos en los Estados Unidos). Hasta este año (1985), los tipos de interés reales siguieron siendo significativamente más altos que en 1980, último año de la Administración Carter. Todavía en diciembre de 1985, tras una caída de casi dos puntos porcentuales en el tipo principal a lo largo de los últimos 12 meses (de un 11,25 a un 9,50 %), el tipo principal real sigue siendo superior al 6 %, algo más alto que el tipo principal real en 1980 (casi un 5-6 %, según las cifras usadas para medir la tasa de inflación) y el doble del tipo medio real durante la presidencia de Carter. Pero los altos tipos reales y el dólar sobrevalorado han agotado también las fuentes financieras para invertir en otras partes o han obligado a los países a elevar sus propios tipos para conservar su capital en casa. En ambos casos, se ha reducido notablemente el ritmo de recuperación internacional desde la sacudida del petróleo de 1979 y la recesión de 1980-82 estimulada por los Estados Unidos. Los tipos altos también han elevado el coste del pago de la deuda masiva del Tercer Mundo contraída durante la década de 1970, en que los intereses reales eran bajos.

La base de una expansión internacional sostenida está limitada a una pequeña parte del mercado americano (hogares de renta media y alta), para la cual existe una creciente competencia internacional, y a los militares tanto de los Estados Unidos como del Tercer Mundo. Pero son precisamente estos sectores los que más se benefician de los dos factores en que se basa el déficit presupuestario de los Estados Unidos: los recortes fiscales y el gasto de defensa. Así pues, el déficit americano está absorbiendo recursos de capital de todo el mundo. Una reducción de esta afluencia tiene implicaciones significativas para

la economía de los Estados Unidos, especialmente en los próximos años, ya que intenta reducir los déficits. Si el dólar cae lo suficiente, las exportaciones americanas aumentarán, pero no se puede esperar que las exportaciones por sí solas sostengan el crecimiento interior, como tampoco lo han hecho en Europa. Los Estados Unidos están, pues, tratando de resolver los dilemas creados por la reaganomía hasta que se puedan recoger los beneficios de la nueva productividad que está siendo estimulada por la revolución tecnológica. Sin embargo, estos beneficios no podrán ser recogidos mientras la tecnología sea canalizada hacia usos militares. Mientras los Estados Unidos insistan en centrar sus esfuerzos en las aplicaciones militares, los japoneses continuarán dominando el mercado de productos electrónicos de consumo. Tampoco podrá

ser provechosamente asimilado en la economía el cambio tecnológico sin un tipo diferente de organización social y política, organización que entraría en conflicto con los postulados autoritarios y burocráticos de los neoconservadores.

El problema de la deuda del Tercer Mundo es otro aspecto de la cuestión. El modelo económico de Reagan ha exacerbado enormemente la crisis de la deuda y la formidable amenaza que plantea al sistema financiero internacional. Esta amenaza se ve agravada aún más por la carrera de armas que los Estados Unidos han contribuido a estimular en el Tercer Mundo. El incremento relativamente lento de la demanda mundial de bienes de consumo ha reducido el mercado para las exportaciones del Tercer Mundo, y el dólar fuerte y los altos tipos de interés americanos han incrementado el coste del pago de los préstamos. Aunque la situación varía de una economía a otra (véase M. Carnoy, *Foreign debt and Latin American domestic policies*, Universidad de Stanford, 1985), es prácticamente imposible para la mayoría de los países pagar sus deudas. Con la

cooperación de Washington, los bancos y el Fondo Monetario Internacional llegaron a una serie de acuerdos en 1982-84 con diversos países para fijar un nuevo calendario de pagos, en la esperanza de que las políticas de austeridad impuestas por el FMI pudieran comenzar a reducir drásticamente la inflación y restaurar la confianza de los inversores. Cuando a mediados de 1985 quedó claro que estas políticas habían fracasado en México y estaban tropezando con una fuerte oposición en Brasil, Perú y otras naciones deudoras, el gobierno de los Estados Unidos intervino directamente con el Plan Baker, en un esfuerzo por obtener 20.000 millones de dólares de bancos americanos. Estos fondos han de servir como préstamos a medio plazo para invertir en tasas de crecimiento más altas en las naciones deudoras. El Plan Baker reconoce final-

mente que la deuda no puede ser reembolsada sin estimular el crecimiento económico a nivel mundial. Pero el Plan llega en un momento en que el crecimiento

en los Estados Unidos es lento y en que las perspectivas de una recuperación económica mundial son a lo sumo tenues. Mientras tanto, la crisis de la deuda continuará; y una sola falta de pago podría significar una catástrofe para el sistema bancario americano.

4. El modelo neoconservador depende del mantenimiento de unos salarios reales bajos e incluso decrecientes. En los dos primeros años de la expansión de Reagan (1983-84), la media de ingresos, los brutos reales semanales de los trabajadores subalternos, aumentó solamente un 1,7 %, pero ha comenzado a bajar de nuevo en 1985. Incluyendo la recesión de 1981-82, los ingresos reales han disminuido en un total de un 1,3 % durante la presencia de Reagan. Esta cifra es comparable a la caída total de un 1,8 % en 1977-80.

La relativa mejoría de la situación de la media de los salarios brutos reales en los

últimos tres años se ve complicada por dos factores: primero, cuando el efecto global neto de unos impuestos más bajos y unas ganancias más bajas se incluye en la valoración de la posición media de los asalariados en 1985 frente a la de 1982, los ingresos después de deducir impuestos suben ligeramente, pero los beneficios sociales bajan en una proporción aún mayor; segundo, los sindicatos —las organizaciones que más han hecho por mejorar el nivel de vida de los trabajadores en el pasado— son sometidos a constantes ataques por la Administración Reagan, la cual ha creado una atmósfera en la que las empresas han podido mantener los nuevos contratos salariales por debajo de la inflación. Es dudoso que los sindicatos puedan mejorar las negociaciones de los contratos en el resto de la década y recuperar los salarios perdidos en los últimos tres años, especialmente si continúan las altas tasas de desempleo, las tasas decrecientes de sindicación y la fuerte economía sumergida. Pero los sindicatos siguen representando una poderosa fuerza política en los Estados Unidos. El plan de la Administración para hacer de los salarios bajos y la mano de obra debilitada un rasgo permanente de un crecimiento capitalista renovado está lejos de estar garantizado.

Los sindicatos han sido especialmente eficaces cuando han movilizado a los trabajadores contra las reducciones del salario social. Su campaña, coronada por el éxito, para impedir reducciones en la seguridad social y en el subsidio de desempleo es un ejemplo de ello. Para la Administración Reagan, estos recortes son fundamentales para cambiar el sistema de relaciones laborales construido bajo el *New Deal*, pero amenazan las conquistas sociales y la paz social que procuraron los acuerdos del *New Deal*.

En la medida en que la Administración ha conseguido recortar los programas sociales, lo ha hecho convirtiendo estos recortes en parte de su campaña general de

La Administración ha convertido los recortes de los programas sociales en parte de su campaña general de «privatización».

«privatización». Esta campaña se basa en el descontento popular hacia la burocracia y los impuestos. Pero en realidad la política de la Administración sólo ha privatizado los aspectos *sociales* de la vida de los americanos, al tiempo que desarrollaba nuevos y más estrechos lazos entre el gobierno y el mundo empresarial.

Por esta razón, la cuestión de la privatización es en el fondo una cuestión de «justicia». La privatización de la vida social —el ocio, la educación, la asistencia sanitaria, la jubilación— ha rebajado el nivel de vida de la mayoría de los americanos aun cuando los impuestos se hayan reducido. Los estudios del Joint Economic Committee del Congreso muestran que, salvo el 40 % superior, todos los perceptores de rentas se han resentido significativamente de los recortes de los impuestos y del gasto llevados a cabo por el presidente en 1981-82, mientras que los perceptores de rentas más altas se han beneficiado significativamente. De acuerdo con otras estimaciones recientes, la parte de la renta total disponible en manos del 60 % de los perceptores de rentas más bajas en los Estados Unidos descendió de un 38,8 % en 1979 a un 38 % en 1984, mientras que la parte del 20 % superior se incrementaba de un 37 % a un 37,6 % en ese mismo período. Aunque los que vivían en la pobreza sólo aumentaron de un 11,2 % a un 12,3 % durante la recesión de 1974-75, su número creció de un 13 % en 1980 a más de un 16 % en 1984.

Dado que los pobres son en gran parte miembros de minorías y mujeres, han sido el creciente número de hogares uniparentales encabezados por una mujer y la mayoría de los negros e hispanos los que más se han visto afectados por la política de Reagan. Son también los que me-

nos probabilidades tienen de participar en una recuperación basada en el gasto militar y en una política monetaria anti-inflacionaria. Esta expansión es intrínsecamente

contraria al pleno empleo y al crecimiento de los salarios de los trabajadores menos especializados. La política social y económica de la Administración ha hecho así de las mujeres, las minorías y los sindicatos las bases de la oposición a los candidatos republicanos a nivel local.

5. La desreglamentación es otra quimera del programa neoconservador que tiene implicaciones políticas a largo plazo. El principal efecto de la disminución de la «intromisión» del gobierno en las empresas, como la protección del medio ambiente o la reglamentación de los servicios públicos y el transporte, ha sido la transferencia de los costes sociales reales de las empresas a los particulares. El peso de esta transferencia ha recaído en especial sobre los ciudadanos con rentas bajas; son ellos los que viven cerca de los vertederos de basuras o en ciudades contaminadas, y son ellos los más perjudicados cuando suben los precios de los servicios públicos.

Pero la preocupación por el medio ambiente va más allá de sus efectos sobre los pobres. Los niveles de contaminación, salud y seguridad, la preservación de los recursos nacionales y la condición de la vida urbana afectan prácticamente a todos los americanos. La forma en que la Administración aborda estos problemas amenaza con crear dificultades mucho más serias en el futuro. La reaganomía puede estar sacrificando la calidad de vida existente dentro de una generación a cambio de unas ganancias y unas tasas de crecimiento más altas en los próximos años.

6. Finalmente, el modelo es vulnerable porque tardará en ser plenamente aplicado. El crecimiento económico, mientras tanto, podría ser sumamente inestable. Esto sucede en cualquier reestructuración del sistema económico. Pero en el caso de este modelo, proyectado para acabar con las principales conquistas sociales y eco-

En 1988 los candidatos demócratas tendrán que haber desarrollado un nuevo modelo que afronte la conservación del empleo.

nómicas realizadas a lo largo de dos generaciones, es especialmente importante un crecimiento económico rápido y sostenido. Para la mayoría de los americanos, un crecimiento rápido con unos precios estables es tal vez la única razón para aceptar la reaganomía, en la esperanza de conseguir pronto un nivel de vida absoluto superior al que tendrían con una alternativa más equitativa. Una recesión en los próximos tres años que defraudara estas esperanzas crearía una oposición enormemente amplia a la reaganomía.

¿Cuáles son las perspectivas políticas de la reaganomía?

Los primeros ataques al programa económico de la Administración han comenzado ya, pero en el contexto de la agenda neoconservadora. El Senado, con la bendición del presidente, aprobó un proyecto de ley sobre reducción del déficit a comienzos de este año. Sin embargo, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó una versión muy diferente del mismo proyecto de ley, haciendo hincapié en la reducción del gasto militar y controlando firmemente el gasto social. Parece ser que el compromiso alcanzado en torno a la reducción del déficit puede obligar a una disminución sustancial del crecimiento del presupuesto militar, y al mismo tiempo garantizar la seguridad social y algunos programas destinados a los pobres. Dado que se espera que los tipos de interés bajen cuando el déficit disminuya, tanto la inversión como la demanda de bienes de consumo deberían aumentar. Pero las compras de bienes y servicios por parte del gobierno tendrán que disminuir también, reduciendo la demanda y el crecimiento económico. Si en los próximos tres años aparecen signos de recesión —y es posible que tales signos aparezcan en 1986— el objetivo de eliminar el déficit en 1991 será olvidado. Los republicanos preferirían contraer déficits que arriesgar-

se a ser derrotados en 1988 a causa de una economía precaria.

El presidente también se apropió de una reforma fiscal de los demócratas y la presentó como suya a comienzos de 1985. Pero, al igual que la reducción presupuestaria, la reforma fiscal está causando ahora problemas a los neoconservadores. La Cámara de Representantes ha cambiado la legislación propuesta por el presidente de tal forma que es ahora mucho menos favorable a las empresas y mucho más sensible a la situación de los contribuyentes de renta baja y media. El proyecto de ley sufrirá nuevos cambios en el Senado, si es aprobado por la Cámara, pero los demócratas están ahora en condiciones de hacer de la «justicia» el lema principal de la reforma fiscal. Con unas ganancias después de deducir impuestos cercanas al 18 % en 1985, cuando en 1977-80 eran de un 8,1 %, es probable que una reforma fiscal con las cláusulas fiscales mínimas introducidas ahora en la versión demócrata de la Cámara perjudique a las grandes empresas. El debate público sobre la reforma fiscal revelará también hasta qué punto las empresas se han beneficiado de la legislación fiscal de 1981 e incrementará las presiones para que las empresas paguen lo que les corresponde.

Aunque estas batallas legislativas podrían exacerbar las contradicciones internas de la política económica de la Administración, no constituyen en sí una alternativa al modelo neoconservador. Pero las batallas nos dan una pista de la postura económica que mantendrán los demócratas de la corriente mayoritaria en las elecciones al Congreso de 1986. Esta postura se basará en el conservadurismo y la justicia fiscal, es decir, en el equilibrio del presupuesto mediante la reducción del gasto militar y la contención de los costes de la asistencia sanitaria, pero también mediante el incremento de los ingresos fiscales, haciendo que las empresas y los

individuos con rentas altas paguen lo que les corresponde. Además, los demócratas argumentarán que el equilibrio del presupuesto tiene que ser lo suficientemente flexible como para permitir un estímulo al crecimiento económico cuando la economía es precaria.

Es probable que los demócratas consigan una gran ventaja en 1986. Los ingresos familiares reales continuarán retrocediendo y el crecimiento económico seguirá siendo a lo sumo poco espectacular. La combinación de conservadurismo fiscal, reducción del gasto militar y voluntad de que las grandes empresas y los ricos paguen lo que les corresponda de impuestos gustará a la mayoría de los votantes.

Sin embargo, en 1988 los candidatos de-

La política económica de EE.UU., y de otros países desarrollados, debería formar parte de un acuerdo negociado sobre el crecimiento mundial.

demócratas a la presidencia tendrán que haber desarrollado un nuevo modelo que se enfrente a la conservación de los puestos de trabajo en los Estados Unidos frente a la intensificada competencia internacional de Japón, Asia suroriental, Europa y Latinoamérica. La deuda del Tercer Mundo seguirá siendo un problema.

Este modelo tendrá que abordar algo más que las cuestiones del déficit y la justicia. Tendrá que desarrollar una base para el crecimiento económico americano que no sea la expansión militar, la afluencia de capitales, la reducción de los costes del trabajo a nivel nacional y el lento crecimiento del consumo en el resto del mundo que caracterizan a la reaganomía. En una economía internacional en la que los Estados Unidos no tienen ya la hegemonía total (como la tenían en la década de 1960), esto significa unos acuerdos negociados de cooperación sobre la participación en el crecimiento económico mundial en lugar de la política de «crecimiento a costa del vecino» llevada a cabo por los principales actores en la década de 1980. Significa resolver la crisis de la deuda sobre una base multilateral

en lugar de obligar a los países del Tercer Mundo a soportar todo el coste de la política de la Administración Reagan encaminada a resolver los problemas *internos* de los Estados Unidos en la década de 1980. Países como Japón deben cooperar también más a la hora de compartir sus mercados nacionales con sus competidores. Esto quiere decir que la política económica de los Estados Unidos y de otros países desarrollados debería formar parte —en cierto sentido— de un acuerdo negociado sobre el crecimiento mundial. Bretton Woods desempeñó esta función

al término de la segunda guerra mundial. Un acuerdo hecho hoy sería más difícil, porque los Estados Unidos no tienen ya el pleno dominio que tenían entonces. Pero esto no hace que el acuerdo sea menos necesario.

Traducción: Pilar López

Este artículo fue presentado en el Simposio *Estados Unidos en 1985: Luces y sombras*, organizado por la Fundación Pablo Iglesias los días 17 a 19 de diciembre de 1985.

Cuadro 1

Estados Unidos: crecimiento anual real del producto nacional bruto, la inversión privada interior bruta de los no residentes, el consumo personal y las compras gubernamentales de bienes y servicios durante la Administración Carter (1976-80) y la Administración Reagan (1980-85) (en %).

Año	PNB	IPIB no resid.	Consumo personal	Compras gubernamentales			
				Tot. fed.	Def.	No def.	Est. y loc.
1976-80	3,2	7,1	3,1	2,2	1,9	3,4	1,1
1976-79	4,4	10,1	4,1	1,8	1,3	3,0	1,5
1980-85	2,7	6,6	3,5	4,0	6,2	-0,6	0,6
1982-85	4,4	11,3	4,7	3,5	6,1	-1,7	1,2

FUENTE: Council of Economics Advisors, *Economic indicators*, agosto de 1985, pág. 2.

NOTA: Las cifras de 1985 son aproximadas y están basadas en la tasa de crecimiento de los dos primeros trimestres, proyectada al tercero y al cuarto.

Cuadro 2

Estados Unidos: porcentaje del gasto gubernamental en el producto nacional bruto, 1979-1985 (en %).

Año	Total	Federal	Déficit federal	Estatal/local	Excedente estatal/local
1979	31,0	20,8	-0,7	13,2	1,2
1980	33,0	21,9	-2,3	13,5	1,2
1981	33,2	22,6	-2,2	12,9	1,3
1982	35,5	24,1	-4,8	13,3	1,1
1983	35,3	24,7	-5,4	13,1	1,3
1984	34,3	23,4	-4,8	12,9	1,4
1985 (a)	35,3	24,5	-5,3	—	1,3

FUENTE: *Economic indicators*, agosto de 1985.

Cuadro 3

Estados Unidos: ahorros brutos, por categorías, e incremento neto de los fondos extranjeros en los Estados Unidos como parte del producto nacional bruto, 1976-85 (en %).

Año	Ahorros brutos	Ahorros personales	Ahorros empresas	Déficit federal	Excedente est./loc.	Fondos netos extranjeros
1976	14,1	4,8	12,3	-3,1	0,1	-0,8
1977	16,1	4,1	13,0	-2,4	1,4	0,8
1978	17,3	4,1	13,2	-1,4	1,4	0,1
1979	17,3	4,0	12,8	-0,7	1,2	-1,0
1980	15,5	4,2	12,4	-2,3	1,2	-1,2
1981	16,3	4,6	12,6	-2,2	1,3	-1,1
1982	13,3	4,4	12,6	-4,8	1,1	-0,8
1983	13,2	3,6	13,7	-5,4	1,3	0,9
1984	15,1	4,3	14,2	-4,8	1,4	2,1
1985 (a)	14,5	3,5	15,0	-5,3	1,3	1,8

FUENTE: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, *Survey of Current Business*, número de septiembre, por años, 1978-85, cuadros de renta nacional y productividad, y «U.S. international transactions, second quarter», cuadro A.

NOTA: (a) Estimado sobre la base de las cifras de la primera mitad del año proyectadas al final del año.

Cuadro 4

Crecimiento medio del producto nacional bruto en las economías industrializadas y en las economías en vías de desarrollo, 1960-95 (cambio medio anual en porcentaje).

Grupo de países	1960-73	1973-79	1980-85	1985-95	
				Caso máximo	Caso mínimo
Renta baja					
— Asia	5,9	5,2	5,8	5,3	4,6
— Africa (sin incluir Sudáfrica)	3,5	2,1	1,7	3,2	2,8
Renta media importadores de petróleo					
— Exportadores de manufacturas	6,7	5,8	1,6	6,3	5,2
— Otros	5,3	4,3	1,9	4,3	3,8
Renta media exportadores de petróleo	6,9	4,9	2,4	5,4	4,7
Economías industrializadas	4,9	2,8	1,9	4,3	2,5

FUENTE: Banco Mundial, *World development report*, 1984, cuadro 3.1.

EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO DE OLOF PALME

Enrique Gomáriz



3

Olof Palme dedicó la mayor parte de su vida a la acción política y de gobierno. Las propuestas para la acción también predominaron en su relación con los temas de paz y seguridad. Era una persona, se asegura, para quien el juego de las ideas tenía mucho más sabor si acababa en conclusiones que facilitarían el trabajo práctico.

Precisamente por eso resulta tan notable el hecho de que, en los últimos años de su vida, Palme estuviera casi obsesionado por los problemas doctrinales de la seguridad. Puede afirmarse que, desde el inicio de la presente década, Palme explicaba las causas de la carrera armamentista, otorgándole al problema de las doctri-

nas tanta importancia, si no más, que a los intereses específicos de las industrias, los políticos o las grandes potencias. A fines de 1984 afirmaba taxativamente: «La carrera armamentista sigue a un ritmo desesperado. Y continúa porque los países están atrapados en la ratonera de *la doctrina de la disuasión*, en la obsoleta *estra-*

tegia del equilibrio del terror, que en nuestra época es completamente inoperante. Y, a pesar de ello, siguen absolutamente obsesionados con esta idea»¹.

Quienes quieran comprender el pensamiento de Palme en materia de paz no pueden olvidar que él era ante todo un socialdemócrata sueco.

Esta convicción penetró profundamente en su pensamiento sobre cuestiones estratégicas en los últimos años de su vida, antes de ser brutalmente asesinado en la madrugada del 1 de marzo. Y es importante subrayar que ello sucedía con el pensamiento de un hombre largamente relacionado con este tipo de debates. Ahora bien, adelanto mi coincidencia con Peter Landelius, Ministro de la Embajada sueca en Madrid, cuando afirma que el análisis de las ideas de Palme sobre seguridad, a pesar de su singular carácter, no pueden referirse únicamente a su experiencia personal. Quienes quieran comprender el pensamiento de Palme en materia de paz, dice Landelius, no pueden olvidar que él era ante todo un socialdemócrata sueco. O dicho de otra forma, tienen que comenzar por relacionar la figura de Palme con su contexto ideológico: «la doctrina de seguridad paulatinamente elaborada por el movimiento obrero socialdemócrata que ha gobernado ese país durante la mayor parte de este siglo»².

Y ello no desde presupuestos —como los usados frecuentemente en España durante el pasado debate sobre la OTAN— que suponen esta doctrina prácticamente dada por la situación geográfica de Suecia (?), o por herencias históricas casi gratuitas. Landelius, en su intervención en el acto de homenaje a Palme en Madrid, dejó claro que esa doctrina es fruto directo de una voluntad política, ciertamente acumulada, sin retrocesos brutales, pero resuelta en medio de debates que dividieron en cada momento al país, y concretamente al partido socialdemócrata³.

En realidad, Olof Palme ingresa en la socialdemocracia sueca cuando ésta adopta decisiones claves a comienzo de los cin-

cuenta. Es la época de la guerra fría, cuyo clima afecta seriamente a la sociedad sueca. El partido socialdemócrata (SAP) busca una fórmula para evitar los vientos militaristas que corren. Parece que puede lograrse la creación de una comunidad defensiva de los países nórdicos, pero pronto se pone de manifiesto la dificultad del proyecto. Hay que elegir de manera abierta, sin paliativos. Y el SAP escoge para Suecia la neutralidad, aun cuando sus vecinos Dinamarca y Noruega optan por la Alianza Atlántica (no se trata de criticar la decisión danesa o noruega, ni de establecer paralelismos fáciles, como también se ha hecho en el debate OTAN, entre la situación sueca y la española, sino de mostrar cómo el factor voluntad política ha estado presente en las orientaciones del SAP).

Ya a fines de los cincuenta Olof Palme juega un papel considerable, generalmente al lado del Primer Ministro Tage Erlander, en el siguiente gran debate que divide al SAP: cómo en otros países se trata de elegir sobre la incorporación o no de armas nucleares a la defensa nacional. La primera solicitud militar se produce en otoño de 1954: el Comando Supremo de las FF.AA. suecas envía al gobierno un informe reclamando la investigación para obtener armas nucleares. Desde ese momento, hasta la firme decisión en contrario, que no llega sino en 1968, el Comando Supremo abogará por la adquisición o fabricación de esas armas. La división sobre este asunto afecta al SAP, incluidos su gobierno y grupo parlamentario. En 1958 se crea un grupo especial para estudiar la cuestión, el Comité sobre Armas Atómicas, presidido por Erlander, al que ya pertenece Palme. Dos años después este Comité emite un informe en que la solución es el aplazamiento de la decisión definitiva hasta 1965. Pero cuando Suecia firma en 1963 el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares, los socialdemócratas saben que la decisión está adoptada. De hecho, el informe del Comité, redactado por Olof

Palme, ya planteaba el grave problema de conciencia que afectaba a la dirección del SAP. Porque, por un lado, resultaban sólidos los argumentos de los militares suecos: si la neutralidad se basa en una defensa eficaz, nada más disuasivo que la posesión de armas nucleares. Pero, por otro lado, Suecia forma parte de la corriente de países que están en todo el mundo contra la proliferación de armas nucleares. ¿Qué legitimidad puede tener un país que pertenece a esta corriente y luego introduce armas nucleares en su defensa? Esta pregunta es la que plantea Palme en la redacción del Informe de la Comisión en 1960.

Durante la década de los sesenta, Palme participará en el gobierno de un país (Ministro sin cartera, de Comunicaciones y de Cultura, sucesivamente, de 1963 a 1969), que ha decidido abrirse por completo a los problemas mundiales. Un dato destacable es el equilibrio con que el SAP y su gobierno tratarán los dos ejes de tensión: Norte-Sur y Este-Oeste. Paralelamente, la socialdemocracia sueca desarrolla un esfuerzo en la investigación sobre paz y seguridad que la coloca a la cabeza del concierto internacional: Östen Unden, Hjalmar Branting, Alva Myrdal e Inga Thorsson, van colocando sus apellidos sobre los planes de paz o los estudios más respetados; y en 1966 se crea el Stockholm International Peace Research Institute, más conocido por sus siglas, SIPRI, cuyos informes y anuarios tienen el mayor reconocimiento mundial.

Olof Palme es elegido Primer Ministro en 1969, un año después de que el SAP haya decidido su rechazo definitivo a las armas nucleares como elementos de la defensa sueca. En 1968 Palme había intervenido personalmente en las campañas contra la Unión Soviética por la intervención en Checoslovaquia. Pero eso no le impedirá, ya elegido, continuar con su encarnizada lucha para detener la guerra en

Vietnam. Y el hecho de que no moderara sus actos una vez nombrado mandatario (Chile, España), le granjeará el odio de buena parte de sus homólogos en otros países, como gusta repetir Peter Landelius.

Durante la primera mitad de los setenta, Palme y su gobierno se vuelcan sobre un objetivo: apoyar por todos los medios la celebración de la Conferencia de Helsinki (que tuvo lugar en 1975). La tesis de Palme será: la distensión hay que basarla en el intercambio general entre el Este y el Oeste, en el ámbito económico, político, humano y cultural. A los reticentes a negociar con la URSS, Palme les enfrentará con su propia lógica: ¿cómo abrir el sistema soviético? ¿Mediante el acoso y la agresividad, o mediante la relajación de las tensiones internacionales y el intercambio cultural?

En 1976 Olof Palme pierde las elecciones y hasta 1982, en

El hecho de que Palme no moderara sus actos una vez elegido le granjeará el odio de buena parte de sus homólogos en otros países.

que las gana de nuevo («sin rebajar mi programa de izquierdas», como repetía sin ocultar su alegría), Palme usa ese receso en su gestión de gobierno para embarcarse en empresas internacionales que le conducirán a profundizar en sus criterios sobre seguridad mundial. En septiembre de 1977, el ex canciller y líder de la socialdemocracia alemana, Willy Brandt, anuncia en Nueva York la constitución de la *Comisión Independiente sobre los Problemas del Desarrollo*. Inmediatamente antes ha invitado a Olof Palme a integrar la lista de miembros de la Comisión. Se trata de una iniciativa cuya utilidad será informar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, pero que tiene su origen en los sectores más lúcidos del mundo financiero internacional. En efecto, es el equipo de Robert McNamara, presidente del Banco Mundial en esas fechas, quien busca un conocimiento más preciso de los problemas del subdesarrollo, a partir de la percepción de que una quiebra financiera del hemisferio sur arrastraría consigo al mundo desarrollado. Y,

de hecho, el informe final de la Comisión, que se presenta en 1979 —una Comisión compuesta en su mayoría por expertos y políticos del Tercer Mundo—, expone con

No se puede pensar un «nuevo orden económico internacional» sin definir un programa serio de desarme.

crudeza la miseria de la mayoría de la población mundial, pero, a la hora de argumentar soluciones, introduce la idea del *interés recíproco* que tienen todos los países de la comunidad internacional en reducir y superar las tensiones Norte-Sur. De hecho, el título del Informe Brandt será, «Norte-Sur: un programa para la supervivencia»⁴.

En su introducción al Informe, Brandt dedica un apartado a la relación entre hambre y carrera de armamentos bajo la pregunta: *¿Destrucción o desarrollo?* En él aparece una idea sostenida por Palme en los trabajos de la Comisión: no se puede pensar un «nuevo orden económico internacional» sin definir un programa serio de desarme.

Y así, antes de concluir los trabajos la Comisión Brandt, Palme ha decidido utilizar esa experiencia para los temas de seguridad.

En septiembre de 1980 se presenta en Viena la *Comisión Independiente sobre asuntos de Desarme y Seguridad*, integrada por personalidades occidentales, del Este, de países neutrales y no alineados, y del Tercer Mundo. La preside Olof Palme y participan Arbatov de la URSS, Cyrus Vance de Estados Unidos, David Owen del Reino Unido, y Egon Bahr de la República Federal de Alemania, entre otros⁵.

La intención de la Comisión es redactar un informe final que sirva a la Sesión Especial sobre Desarme, prevista por la ONU para junio de 1982. Pero cuando éste es presentado en Estocolmo, en abril de ese año, se han ampliado considerablemente sus horizontes. El propio Palme expone en la introducción un sentido de esa ampliación: «Nuestras recomendaciones

—dice— se dirigen a los gobiernos, los representantes de las naciones que se reúnen en la ONU, y las personas que toman parte en las negociaciones para el desarme en

sus diferentes formas. Sin embargo, ahora nos dirigimos a un público más amplio. El tremendo despertar político y popular de los dos últimos años ha creado un nuevo público interesado en la paz y la seguridad. La gente no ve ya la guerra nuclear como algo distante e irreal. Aprecian los costos de los gastos militares en función de reducciones de los programas de salud, la pérdida de empleos y el abandono de las esperanzas de desarrollo. Saben, con gran exactitud, lo que les sucedería en caso de guerra a sus ciudades y barrios, sus familiares, amigos y seres queridos. Comprenden, a veces con mayor claridad que muchos expertos en seguridad, lo débil que es la disuasión mutua»⁶.

El otro sentido en que se amplía el trabajo de la Comisión es el referido a las cuestiones doctrinales. En un principio, de lo que se trataba era de establecer un programa global de medidas de desarme y seguridad, que concluyera en recomendaciones precisas a corto, mediano y largo plazo. Y esto fue resuelto. Pero en el curso de este trabajo Palme se convenció de que era necesario romper con la doctrina de la disuasión, la teoría de seguridad imperante, y dedicarse a denunciarla públicamente. Lo subrayará en la introducción al Informe: «Tiene una importancia decisiva la sustitución de la doctrina de la disuasión nuclear. Nuestra alternativa es la seguridad compartida». Y tanta importancia le dará a este asunto que ese será el título que llevará el Informe final: *Common Security*.

Disuasión o seguridad

Pasando en el bloque occidental por varias especificaciones y en la URSS por una evolución mucho más lenta, desde

que se hicieron efectivas las armas nucleares, la doctrina de la disuasión nuclear es la base teórica de la seguridad en todos los círculos políticos y militares que tratan de «asuntos estratégicos».

En un principio la idea era tan simple como que, si se poseían armas nucleares, el enemigo estaría disuadido de lanzar un ataque de cualquier tipo, dado el tamaño de la represalia posible. Cuando las dos superpotencias tuvieron una capacidad nuclear similar (al menos en cuanto a causar daños inaceptables para el enemigo), la doctrina de la disuasión adoptó una expresión más sofisticada: como el resultado de un intercambio nuclear sería horrible, ninguno de los superpoderes estará interesado en iniciarlo. Más aún, se trataría de una doctrina de disuasión nuclear pensada para evitar que esa guerra llegue a producirse. Pero para que esta disuasión sea creíble, también debe permitir que el contrario sepa que se está en las mejores condiciones para hacer esa guerra.

En Estados Unidos, la primera formulación que recibió la disuasión fue la «Massive Retaliations», o *represalia masiva*. Estaba referida a la situación —que duró unos diez años— de monopolio nuclear prácticamente efectivo de parte norteamericana. Cuando la URSS poseyó también una capacidad nuclear de respuesta, en Estados Unidos se habló de la *Destrucción Asegurada* y, teniendo en cuenta a las dos partes, la *Destrucción Mutua Asegurada* (MAD). Pero esta doctrina tuvo críticas muy fuertes en la comunidad de defensa norteamericana. La cuestión es ésta: si la MAD funciona a fondo, entonces la amenaza nuclear no sirve para disuadir al contrario en guerras locales estratégicas (como se puso de manifiesto primero en Corea, y después en Vietnam), y si no funciona a fondo aparece el riesgo del fallo de la disuasión. Ahora bien, si este fallo se produce, Washington no puede obligarse a un golpe ciego que ponga

en peligro los propios Estados Unidos. Para superar esta rigidez, los estrategas norteamericanos han pensado —y expuesto desde los años cincuenta— varias ideas: la Guerra Nuclear Limitada, la Respuesta Flexible, y la posibilidad de un *primer uso*, e incluso de un *primer golpe* (la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan vendría a replantear este esquema teórico, como veremos más adelante).

La idea de la Guerra Nuclear Limitada es bien sencilla, aunque entre los europeos no tenga buena imagen. Se trata de saber si es posible limitar la confrontación nuclear en el tiempo o en el espacio. Como parece muy difícil limitarla en el tiempo, si las dos potencias intervienen exponiendo sus propios territorios, lo más sencillo es tratar de limitarla espacialmente (y aquí es donde aparece el papel de Europa).

La fórmula de la Respuesta Flexible guarda relación con la limitada: se trata de establecer un sistema de escalada gradual, principalmente en la frontera entre los dos bloques (que divide Europa). Para no ir directamente al golpe definitivo, hay que establecer disuasivos convencionales primero, nucleares tácticos después, de alcance medio a continuación, hasta llegar a los misiles estratégicos. Se trata de asegurar al enemigo de que se está dispuesto a responder en mayor escala que éste, pero sin ir directamente a la confrontación final. La doctrina de la Respuesta Flexible se adoptó oficialmente en el Pentágono en 1962, y después de mucha resistencia se hizo oficial en la OTAN en 1967.

Naturalmente, otra posibilidad de bordear la MAD reside en lograr un primer disparo que rompa la capacidad de respuesta del contrario. Estamos ante el debate del *primer uso* y del *primer golpe*. La diferencia entre los dos conceptos reside en que, mientras el primero sólo significa quién es el primero que pasa de las armas

La doctrina de la disuasión nuclear es la base teórica de la seguridad en todos los círculos políticos y militares que tratan de «asuntos estratégicos».

convencionales a las nucleares (que en el caso de la Respuesta Flexible serían armas tácticas), cuando se habla del *first strike*, o primer golpe, se refieren a un primer golpe estratégico (con capacidad o no de romper la *second strike capability* del contrario).

Con la llegada de la Administración Reagan, su equipo estratégico se dedicó a exponer que, incluso para hacer fiable la MAD, era necesario pensar en la necesidad de dar un primer golpe, que lograría que la victoria fuera posible en una guerra nuclear ⁷.

Como se sabe, la doctrina soviética no es precisamente paralela. Es decir, la URSS ha pensado en una represalia masiva (sobre Europa) de carácter convencional como respuesta a un ataque nuclear, cuando no tenía armas nucleares, y, cuando las poseyó con capacidad operativa, en una respuesta nuclear masiva sobre Europa y Estados Unidos sin matizaciones. Los militares soviéticos han dejado saber que ni aceptan ni creen en una guerra limitada o flexible. Parecería que su estrategia contiene reminiscencias de sus viejas doctrinas militares: se trataría de ir a la confrontación masiva sobre los medios del enemigo, con la esperanza de sobrevivir en algún rincón de su extensa geografía.

Dicho brevemente, dado que las percepciones respectivas de las distintas estrategias no producen lo que se denominaría un «entendimiento entre amenazas», la doctrina de la disuasión nuclear tiene bases semejantes, pero instrumentos diferentes en ambos lados.

Regresemos, pues, a esas bases elementales, para examinar su lógica. Es así como el informe de Palme llega a la conclusión de que no es una fuente de seguridad. Uno de sus miembros, Egon Bahr, concreta así lo que llama los fallos de la doctrina de la disuasión:

1. La doctrina de la disuasión es tanto una doctrina para evitar la guerra como para hacerla. En realidad, si la disuasión militar no está dispuesta para entrar en acción, no tiene credibilidad.

2. La disuasión se ha demostrado compatible con el desarrollo cualitativo de la carrera de armamentos. El equilibrio del terror puede ir creciendo simultáneamente de grado, sin poner en cuestión la doctrina de la disuasión.

3. Sucede, sin embargo, que aunque ese grado crezca simultáneamente, los sistemas a través de los que crece son diferentes en cada bloque, lo que aumenta la necesidad de hacer reequilibrios constantes para que la disuasión sea efectiva. En la práctica, esto ha significado que para mantener creíble la disuasión haya sido necesario desarrollar el armamento.

4. La idea de disuasión exige la posibilidad de represalia en caso de ataque. Y ambas la aceptación de que se está dispuesto a la autoliquidación. Esto no sólo le resta credibilidad final, sino que la hace rechazable entre la población. Si toda defensa democrática se basa en el consenso de la población, resulta difícil pensar que pueda mantenerse por mucho tiempo una doctrina tal de defensa ⁸.

Olof Palme agrega un elemento a este rechazo: en su introducción al informe comenta que la disuasión también es «frágil». Palme sí cree en la posibilidad de que se inicie una guerra no deseada. Por una parte, por el hecho de que al irse haciendo más rápidas y precisas las armas nucleares, se origina la tentación militar de destruir los sistemas nucleares del enemigo, con lo que la victoria en una guerra nuclear deja de ser ilusoria. Por otra parte, porque el simple fenómeno de la proliferación de armas de todos los tipos (tácticas, intermedias e intercontinentales) obliga al desarrollo de un sistema global de alerta y protección que forma ya una red con-

**La alternativa que propone
Olof Palme a la doctrina
de la disuasión nuclear
es la de la seguridad
compartida.**

siderable, y que exige respuestas rápidas (donde cualquier error o imprudencia de un medio civil, un Jumbo surcoreano, por ejemplo, puede ser considerado una amenaza). Palme no cree que las 3.703 alarmas erróneas, mayores y menores, que sumó el Comité de Asuntos Militares del Senado estadounidense, durante un año, sean para tomarlas a broma. Y lo dirá claramente: «La realidad, en estos momentos, es que cuantas más armas haya y más sofisticadas sean, más posibilidades habrá de que pueda producirse una guerra nuclear por error o por accidente»⁹.

Es decir que, por razones de solidez o fragilidad, la disuasión nuclear no es base de seguridad. Sin embargo, hubo una etapa en que la población europea vio las armas nucleares como el elemento que impediría una nueva guerra. Bien es verdad que sus pueblos salían de los horrores de la segunda gran guerra y estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa que les diera esperanza de que aquello no se repetiría. Por otra parte, el equilibrio del terror estaba entonces en grados muy bajos, pero lo cierto es que la doctrina de la disuasión se reveló como una especie de «síndrome del aprendiz de brujo», que hoy es la fuente más amplia de inseguridad.

Cuando Palme se enfrenta a los argumentos de quienes aseguran que la disuasión nuclear ofreció una cierta seguridad, responde: «¿Una cierta seguridad? Tal vez la proporcionó en algún tiempo. Pero ahora es cada día más peligrosa». Y no es que Palme sea optimista: «Yo creo que la doctrina estratégica del equilibrio del terror seguirá dominando el destino del mundo durante muchos años. Debemos tratar de hacer disminuir, aunque sea poco a poco, la dependencia de una idea tan nefasta y no permitir que siga creciendo»¹⁰.

Seguridad efectiva y común

La alternativa que propone Olof Palme a la doctrina de la disua-

Es necesario desarrollar una defensa frente a la URSS que no ponga en peligro la seguridad europea, sino que fortalezca la seguridad mutua.

sión nuclear es la de la seguridad compartida (o recíproca o común, de acuerdo a cada traductor). En el mensaje que el mandatario sueco envía en 1985 a la IV Convención de la campaña del pacifismo europeo END (European Nuclear Disarmament), hace un brillante resumen del contenido del informe de la Comisión Independiente para el Desarme y la Seguridad.

«La disuasión nuclear es una base insegura y frágil para sustentar la seguridad. Es fuente de la carrera armamentista. La política de la disuasión nuclear socava la confianza y la estabilidad de las relaciones internacionales.

»Además de carecer de credibilidad, resulta moral y políticamente inaceptable establecer la seguridad a partir de la amenaza del suicidio global. El concepto de seguridad común tiene que buscarse por una vía alternativa: la seguridad basada en el reconocimiento de los mutuos intereses y preocupaciones.

»La consecución de esa diferente y más estable forma de seguridad sólo puede verse desde una perspectiva a largo plazo. Un primer paso en ese sentido ha de consistir en colocar todos nuestros esfuerzos para prevenir aquellos procesos que amenazan de forma particular la confianza y la estabilidad. El riesgo de la carrera de armamentos en el espacio, y el incremento de misiles de largo alcance, son dos ejemplos de este tipo de procesos que no pueden sino provocarnos una particular preocupación.

»Otro asunto que nos preocupa es la presencia de pequeñas armas nucleares, articuladas e integradas en las fuerzas convencionales, como sucede en Centroeuropa. La retirada de tales armas reduciría el

riesgo de una temprana o inmediata —incluso inadvertida— utilización de las armas nucleares en la eventualidad de una confrontación militar. El umbral nuclear

debe retrasarse todo lo posible y debe haber tiempo para las acciones políticas que pueden controlar la situación. Estos son los fundamentos de la propuesta para el establecimiento en Centroeuropa de un corredor libre de armas nucleares.

Las políticas agresivas de una administración a lo Reagan pueden ser mucho más peligrosas para provocar el fallo de la disuasión.

»Esta medida puede ser implantada a través de acciones unilaterales o de acuerdos negociados. Este es un paso que debería darse hoy. Los argumentos para ello son poderosos y hablan por sí mismos, y el apoyo a esta idea está creciendo»¹¹.

El núcleo lógico de la *common security* tampoco es complicado. Si el desarrollo de las armas no ofrece seguridad a una nación, es necesario obtenerla por otros medios. Las naciones deben entender que sólo aumenta su seguridad cuando crece la seguridad de sus vecinos. Cuando la seguridad de una nación se logra a través de la inseguridad de otra, es fácil esperar una respuesta en contrario. ¿Y cómo producir un aumento paralelo de la seguridad mutua, en la perspectiva de no depender de los armamentos? La respuesta es directamente política: mediante el desarrollo progresivo de todo un abanico de medidas de confianza. Estas medidas tienen que referirse, en primer lugar, al terreno militar: acuerdos sobre informaciones básicas, unidades en la frontera, advertencia previa de las maniobras militares, intercambio de expertos, verificación mutua del cumplimiento de los acuerdos sobre armas nucleares, y sobre el resto de las armas de destrucción masiva (convencionales y químicas), etc. Pero las medidas de confianza han de abarcar todo el resto de las relaciones internacionales, tanto de orden político como económico. En este último terreno hay que recordar la idea del interés recíproco que aparece en el informe Brandt acerca del orden económico internacional.

Como asegura Mary Kaldor, no estamos pues ante una nueva edición de la vie-

ja idea de distensión, tal y como ésta se desarrolló desde finales de los años cincuenta. La *détente* pudo coexistir sin grandes problemas con la doctrina de la disuasión nuclear. El equilibrio del terror podía seguir aumentando de grado mientras que se daba entre las superpotencias un mejoramiento de las relaciones internacionales o, en su versión soviética, de la coexistencia pacífica. Naturalmente no es concebible la seguridad compartida sin un clima de distensión, pero puede haber distensión sin que se avance realmente en la seguridad compartida¹².

Por otra parte, Palme siempre ha entendido la *common security* como una doctrina para la seguridad mundial. Es decir, no como un asunto exclusivo de los dos grandes bloques militares. De acuerdo con su doctrina, la seguridad es global o no lo es. Palme siempre hablaba del papel decisivo de los «medianos y pequeños países», y responsabilizaba a los países del hemisferio sur acerca de la creación de zonas de paz y de la garantía de la *no* proliferación de las armas nucleares.

Por todo ello, las tentativas de compatibilizar la doctrina de la disuasión con la *common security*, como antes se hizo con la distensión, están condenadas al fracaso. Como explican Hellström y Rothschild, la disuasión nuclear se mantendrá por mucho tiempo, mientras que la doctrina de la seguridad compartida avanza, pero no son compatibles: para que la disuasión sea creíble debe mantener los secretos de defensa necesarios, y el secreto militar va directamente en contra de las medidas de confianza, y al contrario¹³.

Otro elemento destacado de la seguridad compartida es la necesidad de ordenar adecuadamente las amenazas. Saber que la mayor amenaza de un bloque no es el otro sino el fallo de la distensión. Dicho brevemente, que la paz es la primera prioridad, por encima de la competencia en-

tre sistemas. El texto de la Comisión Independiente lo expone así: «La aceptación de la seguridad común como principio de organización para reducir el peligro de guerra, limitar las armas y avanzar hacia el desarme, significa, en principio, que la cooperación sustituirá al enfrentamiento en la resolución de los conflictos. Esto no quiere decir que se deba esperar a que desaparezcan las diferencias entre naciones; dadas las diferencias ideológicas entre las naciones del Este y del Oeste, no se puede esperar a una convergencia importante». Y su conclusión es taxativa: «Esto quiere decir que las naciones deben llegar a comprender que el mantenimiento de la paz mundial debe tener una mayor prioridad que la afirmación de sus propias posiciones ideológicas o políticas»¹⁴.

Ahora bien, cabe preguntarse si para un europeo occidental eso quiere decir que desaparece o disminuye la amenaza soviética. La respuesta sólo puede ser negativa. Se trata de saber que la única amenaza que supera a la soviética es el fallo de la distensión. O dicho en un sentido opuesto, que es necesario desarrollar una defensa frente a la URSS que no ponga en peligro la seguridad europea, sino que fortalezca la seguridad mutua.

Y esta óptica nos permitiría entender mejor las grandes paradojas que pueden aparecer en el escenario estratégico. En la actual situación estamos ante una que confunde a amplios sectores de la opinión pública. Sucede que la Unión Soviética, con un sistema político no democrático, parece más interesada en el desarme que los Estados Unidos, con un régimen democrático y de libertades. Esto suele provocar dos tipos de reacciones incorrectas, dirigidas ambas contra las premisas de la paradoja. Hay quienes piensan que siendo ciertas las afirmaciones en cuanto a los regímenes políticos de la URSS y EE.UU., la conclusión sólo puede ser que

el deseo soviético de frenar la carrera de armamentos es un espejismo. Del otro lado, hay quienes aceptando la evidencia de que los soviéticos están más interesados en el desarme que los norteamericanos, concluyen que los sistemas políticos de ambos países no deben ser tan distintos.

Sin embargo, cualquier análisis desapasionado muestra que los dos tipos de premisas son ciertas. ¿Cómo explicar entonces la paradoja? Ciertamente, las relaciones entre las potencias tienen sus propios mecanismos. El caso de la URSS se explica no por la bondad de su sistema interno, sino más bien por su profundo fracaso. La afirmación de Jruschov, en los tempranos sesenta, de que en los ochenta «la locomotora socialista sobrepasaría al cansado asno capitalista», es una buena medida para entender el fracaso del sistema. En realidad, es difícil encontrar un

La mayoría de los movimientos pacifistas del norte de Europa han sido creados desde las filas socialdemócratas.

indicador económico, tecnológico o de consumo, en donde la brecha no haya crecido a favor de Occidente. Cualquier tipo de reforma que busque Gorbachov tiene que quitarse lastres de encima. Por ello no es extraño que estén sinceramente empeñados en detener la carrera de armamentos, y, hoy, todos reconozcan que sus propuestas son constructivas y audaces.

El caso de Estados Unidos tiene bastantes antecedentes históricos. Desde la república romana, las políticas imperiales se han conciliado bien con sistemas internos republicanos. La democracia parlamentaria inglesa no implicó sus políticas de gran potencia. Y los ejércitos del Imperio napoleónico usaban las propuestas revolucionarias como propaganda política. Nada tiene de extraño que un sistema imperial mucho más universal que todos los anteriores, y desarrollado en la era nuclear, sea capaz de una competencia más agresiva en la carrera de armamentos.

Por esa razón, los europeos han dejado de creer en la protección norteamericana

como garantía de su seguridad. Las políticas agresivas de una Administración a lo Reagan pueden ser mucho más peligrosas para provocar el fallo de la disuasión. Y ello no tiene por qué reducir en absoluto la certeza de que la seguridad europea no estará acabadamente garantizada mientras los países del Este y los ciudadanos de la URSS carezcan de libertades democráticas.

Así, desde una ordenación correcta de la percepción de las amenazas para la seguridad mundial, el Informe de la Comisión Independiente establece los elementos para un programa global de desarme ¹⁵.

Sin embargo, la seguridad común no es la única alternativa que le ha salido a la disuasión nuclear. Tomado al pie de la letra, el discurso de Ronald Reagan acerca de su Iniciativa de Defensa Estratégica también es una alternativa «que haría obsoletas las armas nucleares».

No es el momento de analizar pormenorizadamente la SDI. Para su descripción y consecuencias estratégicas existe ya suficiente bibliografía en castellano ¹⁶. Sólo resumiré las objeciones más sólidas que se hacen a la SDI como «alternativa». La observación más extendida es la que nace de círculos norteamericanos, aceptando el presupuesto de que la SDI es un sistema defensivo. El problema consiste en la permeabilidad del escudo que trata de formar la SDI, puesto que con sólo una permeabilidad del 10 %, los daños para Estados Unidos serían inadmisibles. Por otra parte, dado que esa permeabilidad aumenta si crece el número de misiles intercontinentales del contrario, éste tiene un método —brutalmente más barato— para mantener siempre en jaque el sistema de la SDI. La consecuencia es evidente: lejos de hacer obsoletas las armas nucleares, la SDI provoca el aumento de éstas.

La otra observación procede de círculos militares europeos que

ponen en cuestión el carácter defensivo de la Iniciativa de Reagan. Su argumento es firme: si Washington tuviera realmente la intención de hacer sus sistemas defensivos, no seguiría desarrollando el programa de las nuevas generaciones de misiles estratégicos (especialmente los MX, pero también sus sistemas submarinos). La sospecha es, pues, que Reagan no sólo busca un escudo protector sino una formidable espada. Al dotarse de los dos elementos, rompe el equilibrio estratégico de los soviéticos, lo que hace de la combinación escudo-espada un sistema claramente ofensivo. Es cierto que la SDI rompe con la base de la doctrina de la disuasión al romper con el equilibrio del terror, pero lo hace abrumadoramente a favor de los Estados Unidos, algo que la URSS no puede permitir. En breve, se trata de lo opuesto a la seguridad compartida.

El desarrollo político de la «common security»

Puede afirmarse que desde la confección del programa global de seguridad contenido en el Informe de la Comisión Palme, no son razones técnicas las que impiden avanzar en el desarme. La cuestión es de dónde puede esperarse voluntad política para llevar esos programas adelante. Dicho de otra forma, estamos ante una lucha claramente política de los que defienden la alternativa de la seguridad compartida contra la imperante disuasión nuclear y sus principales instituciones: el sistema de bloques. Una lucha que se desarrolla tanto fuera como dentro de los dos bloques en presencia. No por casualidad Palme se preocupó de que su Comisión estuviera integrada por Giorgi Arbatov, y por el ex secretario de Estado Cyrus Vance.

En realidad, Olof Palme desarrolló el trabajo a favor de la seguridad compartida allí donde se encontró: tanto desde el plano no gubernamental, como desde el

La audiencia que tiene la «seguridad compartida» entre la socialdemocracia no se ha traducido en una aceptación generalizada.

Estado. En 1982 entrega el Informe final de su Comisión y meses después gana las elecciones en su país. La *common security* recibe un nuevo impulso.

La IS viene mostrándose disidente respecto de las políticas de la OTAN prácticamente desde los años sesenta.

y Portelli hablan de una relación entre dos elementos constituidos, pero cabe recordar que la mayoría de los movimientos pacifistas del norte de Europa han sido creados desde las filas socialdemócratas.

La suerte de la doctrina alternativa en el terreno no gubernamental ha sido diferente en cada país y en cada partido o movimiento social.

Ya hemos comentado cómo Palme saluda, en diversas partes de su introducción al Informe final, el nacimiento y desarrollo del pacifismo europeo. Lo cierto es que su determinación de romper con la doctrina de la disuasión se produce al tiempo que surge en toda Europa occidental el movimiento por el desarme, que ya en 1982 ha conseguido reunirse en la campaña por el Desarme Nuclear Europeo (END, por usar la sigla conocida en Europa).

Hasta 1983 este movimiento tiene un objetivo preciso: impedir la instalación de los misiles intermedios norteamericanos en suelo europeo. Este objetivo reúne a un gran número de sectores: los movimientos autónomos, los orientados hacia la opción ecopacifista, pero, sobre todo, a los movimientos relacionados con la socialdemocracia europea. Hanley y Portelli describen bien la relación entre pacifismo y socialdemocracia: «Desde este punto de vista, distinguimos tres situaciones: aquella en que el movimiento pacifista es controlado por el partido comunista (Italia, Francia) y el partido socialista permanecía ajeno al movimiento, incluso hostil; aquella en que el movimiento pacifista, de cuño confesional y/o antinuclear, se encontró al lado del ala izquierda mayoritaria del partido: es el caso británico, en el cual el partido ha adoptado, por esto, posiciones radicales (desarme unilateral); finalmente, aquella en que el movimiento pacifista ha sido lo bastante poderoso para poder condicionar al «centro» del partido, empujado por su ala izquierda: es el caso de Alemania o de Holanda...»¹⁷.

Cabe agregar simplemente que Hanley

El trabajo contra la instalación de los nuevos misiles se hace así desde diferentes ópticas. Posiciones unilateralistas que no se plantean el tema del desequilibrio. Orientaciones multilateralistas, cuya argumentación es que no existe un grave desequilibrio que exija la instalación de nuevos misiles norteamericanos: 1) porque los SS-20 no cambian el equilibrio previo entre SS-4 y SS-5 y los misiles británicos, franceses y los medios avanzados nucleares norteamericanos en Europa; y 2) porque la instalación de los misiles occidentales provocarían nuevas instalaciones en el Este, como así sucedió.

Unilaterales y multilaterales se relacionan indistintamente con la *common security* de Palme. El mandatario sueco suele explicar que los objetivos de la seguridad compartida pueden obtenerse a través de acuerdos negociados o de medidas unilaterales, o incluso de fórmulas mixtas. Estas diferencias son de carácter táctico y dependen de la coyuntura política. No obstante, es indudable que la *common security* excluye la ruptura brutal de los equilibrios, puesto que un desequilibrio grave significaría que un bloque obtiene seguridad a costa de la seguridad del otro, algo que trata de evitar la seguridad compartida.

En 1973, Palme y el SIPRI de Estocolmo convocan a expertos y políticos relacionados con los temas de paz. El objetivo es organizar una Conferencia, que tiene lugar en septiembre de ese año, para discutir las políticas para la seguridad compartida. La Conferencia reúne a ochenta personas de países de todos los continentes, entre los que se encuentran Mary Kaldor, Frank Blackaby, Egon Bahr, Johan

Galtung, Stanley Hoffman, Alva Myrdal, Emma Rothchild, Inga Thorsson y el propio Palme. Los debates girarán en torno a cuatro temas: el concepto de la *common security*, las relaciones Este-Oeste y la *c.s.*; la seguridad europea y la *c.s.*; y la *c.s.* y el Tercer Mundo. Unilaterales como Kaldor o Galtung defenderán la alternativa que presenta la *c.s.*, junto a políticos y expertos claramente multilateralistas ¹⁸.

Mientras eso sucede en Europa, en Estados Unidos la doctrina alternativa es adoptada como propia por el movimiento social más amplio: la «Freeze Campaign» (o Campaña para la Congelación de las Armas Nucleares). Desde 1984, el programa de medidas del movimiento norteamericano va encabezado por los criterios doctrinales básicos de la seguridad común.

En cuanto a los partidos políticos, el impacto de la *c.s.* puede describirse así: una gran audiencia entre la socialdemocracia (y el PC italiano), una marcada reticencia por parte de los PC prosoviéticos, como el francés, y del nacionalismo del PS francés (simpático consenso), una audiencia sensible entre partidos liberales y de centro, y un rechazo claro de los partidos conservadores, que siguen firmes defensores de la antigua doctrina de seguridad.

La audiencia que tiene la *c.s.* entre la socialdemocracia no se ha traducido en una aceptación generalizada. Los grupos conservadores de algunos partidos, así como partidos completos, como el PS francés o el italiano, siguen aferrados a la doctrina de la disuasión nuclear. No hay que olvidar que la alternativa de Palme se desarrolla justo en los años cruciales del debate entre partidos de la Internacional Socialista acerca de los euromisiles.

La preocupación de la IS por el desarme había dado un salto adelante con la

elección de Willy Brandt como presidente de la IS en 1976. Así, en 1978 se crea un grupo de estudios sobre el desarme, que presidirá el finlandés Kalevi Sorsa, y ese mismo año se convoca a una Conferencia en Helsinki, para discutir sobre desarme entre representantes norteamericanos, soviéticos y socialdemócratas. Al año siguiente, la IS se reunirá con Carter, con el Movimiento de los No Alineados, con Kurt Waldheim, y Leonidas Breznev. Pero ya ese año la situación se polariza con motivo de la «doble decisión» de la OTAN, impulsada por Helmut Schmidt. Y el debate no tendrá lugar sólo entre partidos, sino en el interior mismo del SPD alemán, el cual, como se ha dicho, desde 1979 abandonará prácticamente a su gobierno.

En 1980 se celebra el Congreso de la IS en Madrid, bajo el lema: «Paz, Libertad, Solidaridad». Y en éste, el SPD se mostrará bastante dispuesto a rechazar la instalación de los euromisiles.

El carácter que ha asumido la campaña del referéndum no se ha caracterizado por su rigor académico.

El Congreso aprueba el informe final del grupo que preside Sorsa, que lleva el título *Paz en los ochenta y después*, cuyo llamamiento central afirma «No hay alternativas al Desarme», y, en su texto sobre el desarme nuclear, «se advierte a los gobiernos del despliegue innecesario de armas que no agregarán nada a la seguridad que exigen los pueblos» ¹⁹.

De 1980 a 1983, la IS hace de las cuestiones del desarme su principal campo de acción, lo que enfrenta progresivamente a los partidos que aceptan la instalación de los euromisiles y los que no lo aceptan. Así, en el Congreso de la IS en Albufeira, fui testigo del enfrentamiento dialéctico entre el SPD y el PS francés. Para Willy Brandt, los poderosos movimientos contra la instalación de nuevas armas nucleares «son nuestros aliados naturales», y para Lionel Jospin, primer secretario del socialismo galo, son lisa y llanamente «instrumentos de Moscú». Al SPD le apoyan los británicos y todos los nórdicos. Al PS

francés prácticamente solo el PS italiano. El Congreso concluirá con el desenganche del PS francés del documento y del grupo de trabajo sobre armas nucleares.

En este Congreso ya aparece la idea de la seguridad compartida, aunque sin hacer especial énfasis sobre ella. Pero la IS acuerda una Conferencia Especial sobre Paz y Seguridad para 1985, y en esta reunión se abraza oficialmente la *common security*. «Los gobiernos —dice la resolución final— deben ahora entender que las necesidades de seguridad no pueden ser satisfechas por innovaciones en la tecnología de los armamentos y con el fomento continuado del armamentismo. No es la calidad de las armas lo que debe mejorarse, sino la calidad de las políticas. El desarme, la cooperación pacífica y la distensión son las únicas respuestas razonables en torno a los peligros que enfrenta la humanidad. (...) Se necesita un nuevo enfoque basado en que la verdadera seguridad sólo puede construirse de manera conjunta, tomando cada uno en cuenta las necesidades de seguridad que tiene el otro»²⁰.

En realidad, esta resolución de la IS es destacable con su rotundidad. En ella se rechaza la SDI de Reagan, se exige la moratoria de las pruebas nucleares, y respecto a los euromisiles no se da el asunto por zanjado, y se pide «acordar la detención de un mayor despliegue de los sistemas nucleares de medio alcance, como también la reducción y después la eliminación de los sistemas existentes en ambos lados».

La resolución muestra, en verdad, algo mucho más profundo y que está sucediendo en el escenario europeo. Se trata de *la ruptura del consenso sobre políticas de seguridad en Europa*, algo que hace una década aún parecía imposible. Porque es cierto que la IS viene mostrándose disidente respecto de las políticas de la OTAN prácticamente desde los años sesenta. Pe-

ro entonces se trataba de opciones y medidas concretas, y no de un desacuerdo global, que rompe con sus bases doctrinales. Ahora bien, si la doctrina alternativa de Palme, la *common security*, sigue abriéndose camino en el seno de cada partido, como se ha abierto en la Internacional Socialista, no hay duda de que el consenso ideológico entre socialdemócratas y conservadores acerca de la disuasión nuclear pasará a ser un recuerdo del pasado²¹.

El único consenso posible en el futuro estará referido a las fracciones europeístas de la derecha europea, porque es evidente que para avanzar en los objetivos de la seguridad compartida, es necesario en Europa una política autónoma respecto de la competencia entre las superpotencias. La *common security* no está pensada para el nacimiento de un bloque militar más (el europeo), con capacidad de competir en la carrera de armamentos, sino para todo lo contrario. Pero para avanzar en las medidas concretas es posible que los socialdemócratas necesiten acuerdos con las fracciones de derecha más partidarias de la autonomía europea (por ejemplo, con los franceses).

En cualquier caso, el estar de acuerdo con que es necesario sustituir la doctrina de la disuasión por la de la seguridad compartida no otorga ninguna fuerza mágica. Se trata simplemente de que ¡por fin! un sector de las fuerzas políticas tan considerable, como es el socialdemócrata, está siguiendo aquel viejo consejo que dieran Einstein y Russell en plena guerra fría: con el apareamiento de la era atómica es necesario aprender a pensar de forma nueva²².

Olof Palme, cuando decía que sabía que «el equilibrio del terror seguirá dominando al mundo por muchos años», estaba lejos de creer en fórmulas mágicas. Sabía que se trataba de una lucha política muy

**La «seguridad compartida»
es muy rápidamente mencionada
en el último folio
del documento
del PSOE.**

larga, pero precisamente por eso era necesario comenzarla cuanto antes y desde el plano de las ideas.

En este sentido, cabe preguntarse si la doctrina de la seguridad compartida ha tenido algún efecto en nuestro país, ahora que acaba de producirse un debate referido a temas de paz y seguridad. Un primer balance invita a pensar que muy poco.

Es cierto que entre los contrarios a la permanencia de España en la OTAN podían encontrarse ideas que guardan relación con la *common security*, pero sólo de forma indirecta, y mezcladas con reflexiones sobre la seguridad más bien primitivas. Entre los partidarios de la permanencia, cabe distinguir a la derecha (abstencionista en el referéndum), que mantiene de forma elaborada o elemental los fundamentos de la doctrina de la disuasión nuclear.

¿Y en el PSOE, antiguo miembro de la Internacional Socialista? Lo primero que hay que decir es que el carácter que ha asumido la campaña, especialmente en su tramo final, con la derecha absteniéndose y las encuestas en contra, no se ha caracterizado por su rigor académico. Se han dicho cosas que nos han puesto colorados en la CEE, e incluso en la propia Alianza Atlántica. Hay videos que serán lacerantes en poco tiempo más. Pero quizá haya quedado la curiosidad por conocer más a fondo estos temas. Y ésta no es una afirmación gratuita. Porque es cierto que un grupo de personas redactó un documento sobre paz y seguridad, para ser aprobado por el Comité Federal del PSOE. Pues bien, parece que su lectura más que para aprobar fue considerada para nota. Quizá fue visto como demasiado extenso.

Sin embargo, es necesario comentar el documento, porque sucede que en este texto de 86 folios se menciona en el último la seguridad compartida. Lo primero que es evidente es que presenta dos *handicaps*.

El primero, como diría Angel Viñas, que está hecho al calor del debate electoral ²³. El segundo, que se notan diferentes plumas. Es decir, que el excitante juego de las ideas quedó en *coitus interruptus* porque había prisa, dando lugar a situaciones simpáticas. Por ejemplo, bien avanzado el texto se habla de la «segunda guerra fría» que comienza en 1979. Pero cuando uno trata de buscar la «primera» simplemente nunca existió. Algo similar sucede con la guerra de Vietnam, donde los americanos salen, pero nunca se sabe si entraron. (Por cierto, que también han desaparecido Santo Domingo, Cochinos, Yakarta, Chile y la aventurilla de Granada).

Pero, pelillos a la mar, sólo hay un «error» que sí merece comentarios. Cuando se habla de los orígenes de la división de Europa en bloques, se hace un primer análisis de coyuntura sobre la situación europea, inmediatamente después de la segunda guerra mundial. Pues bien, la

El argumento de que la seguridad puede seguir basada en la estrategia del equilibrio del terror es hoy completamente inoperante.

única mención que se hace de la situación militar es que «la rápida desmovilización estadounidense no tuvo paralelo en la URSS, cuyas inmensas fuerzas armadas

proyectaban una amenaza sobre los países europeos» ²⁴. Una afirmación correcta pero incompleta. Porque es cierto que la URSS mantuvo durante muchos años a Europa como el rehén de sus fuerzas convencionales, pero es difícil no saber que eso tenía alguna relación con las demostraciones de Hiroshima y Nagasaki en 1945, y el subsiguiente monopolio nuclear norteamericano. Digamos que para hacer un cuadro un poco más completo no convendría haber olvidado Hiroshima y Nagasaki. Un olvido grave en un documento de un partido socialista, pero que se convierte en otra cosa cuando se traslada a un texto informativo del Estado, que recibimos todos los españoles ²⁵.

En un contexto como el que describo, no es difícil encontrar paradojas directamente referidas a las doctrinas de la se-

guridad. Porque si bien es cierto que la seguridad compartida es muy rápidamente mencionada en el último folio, el documento comienza con un apartado referido a los fundamentos generales de la seguridad internacional que es la versión más acabada de la doctrina de la disuasión nuclear. Textualmente: «En otras palabras, paz y seguridad se interrelacionan. Si no hay seguridad, la paz se hace precaria. Es preciso disuadir al posible agresor de que lleve a cabo amenazas o ataques, ante la certeza de que la respuesta será, al menos, tan contundente como su agresión». Y, a continuación, la modernización de los años sesenta: «Seguridad y distensión son igualmente elementos complementarios, pues sólo sobre la base del diálogo y la cooperación entre los Estados podrá establecerse una mayor seguridad internacional. Paz, seguridad y distensión constituyen, pues, los elementos básicos de la convivencia internacional»²⁶. Naturalmente, la idea del desarme no es un elemento básico, aunque lo repita una y otra vez la ONU.

Pero, por si hubiera dudas acerca de la disuasión mencionada, se subrayan a continuación las bases de la convivencia entre el Este y el Oeste: «a) la necesidad de crear un clima de confianza; b) la recuperación del proceso de distensión, y c) el mantenimiento de un auténtico equilibrio en las fuerzas nucleares y convencionales de las dos Alianzas»²⁷.

En otras palabras, la doctrina de la disuasión, tal y como se plantea en Europa

desde los sesenta: un clima de confianza y distensión, basado en la amenaza nuclear mutua, y en el equilibrio del terror.

Recordemos las ideas de Palme: el argumento de que la seguridad puede seguir basada en la estrategia del equilibrio del terror es hoy completamente inoperante. Y su decisión política: debemos tratar de hacer disminuir, aunque sea poco a poco, la dependencia de una idea tan nefasta y no permitir que siga creciendo.

En realidad, la conclusión que se obtiene del citado documento es que coexisten en su texto la doctrina de la disuasión con aspectos de la seguridad compartida. Podría afirmarse que toda la primera parte es una defensa de la disuasión nuclear y sus instituciones, mientras la última va avanzando progresivamente hasta acabar en la mención de la seguridad mutua.

Todo parece indicar que, para defender la permanencia en la OTAN, el documento ha necesitado asumir el viejo lenguaje doctrinal. Pero la mención final de la seguridad compartida permite la esperanza de pensar que no serán necesarios treinta años para que el PSOE asuma por completo la moderna doctrina de la Internacional Socialista.

Una doctrina que impulsó con todas sus fuerzas Olof Palme. Y no sería un mal homenaje a una figura que nos causa admiración si se consiguiera que las reflexiones sobre paz y seguridad se iniciaran por la doctrina de la seguridad compartida.

¹ Entrevista concedida al diario *El País*, y publicada el 26 de septiembre de 1984.

² Texto de la intervención del ministro de la Embajada de Suecia en Madrid, Peter Landelius, con ocasión del homenaje a Olof Palme en la capital española el 15 de marzo de 1986 (de próxima publicación).

³ En torno a los debates en la socialdemocracia sueca, véase Diane Sainsbury, «El partido socialdemócrata sueco y la defensa», en la compilación de Pere Vilanova, *Socialdemocracia y defensa europea*, Ariel, Barcelona, 1985.

⁴ *Rapporto Brandt, Nord-Sud: Un programma per la sopravvivenza*, Mondadori Editore, Milán, 1980 (puede haber edición española).

⁵ Los miembros de la Comisión fueron: Olof Palme (Suecia), Giorgi Arbatov (URSS), Egon Bahr (RFA), Gro Harlem Brundland (Noruega), Jozef Cyrankiewicz (Polonia), Jean-Marie Daillet (Francia), Robert A. D. Ford (Canadá), Alfonso Garcia-Robles (México), Haruki Mori (Japón), C. B. Muthamma (India), Olusegun Obasanjo (Nigeria), David Owen (Reino Unido), Shridath Ramphal (Guyana), Salim Salim (Tanzania), Soedjatmoko (Indonesia), Joop den Uyl (Países Bajos), Cyrus Vance (EE.UU.).

6 El informe final de la Comisión Independiente sobre asuntos del Desarme y la Seguridad fue editado en castellano bajo el título de *Seguridad Mundial: un programa para el desarme*, por Lasser Press, México, D. F., en 1982. La versión original en inglés lleva el título *Common Security*, que no se corresponde con Seguridad Mundial.

7 Véase Colin S. Gray (asesor para asuntos de la defensa del presidente Reagan) y Keith Payne, «La victoria es posible», aparecido en el núm. 39 de *Foreign Policy*, y reproducido en *Tiempo de Paz*, núm. 3, Madrid, 1984.

8 Egon Bahr, «Observations on The principle of common security», en la compilación *Policies for Common Security*, SIPRI, Estocolmo, 1985.

9 Entrevista, *El País*, 26-9-84.

10 *Ibidem*.

11 Olof Palme, «Mensaje a la IV Convención de E.N.D.», en *Tiempo de Paz*, núms. 5 y 6, Madrid, 1985.

12 Mary Kaldor, «The concept of common security», en *Policies for Common Security*, SIPRI, Estocolmo, 1985.

13 M. Hellström y E. Rothschild, «Report on the discussions in Working Group I: the concept of common security», en *Policies for Common Security*, SIPRI, Estocolmo, 1985.

14 Véase «Informe de la Comisión Independiente sobre Asuntos del Desarme y Seguridad», Lasser Press, México D. F., 1982, pág. 32.

15 *Ibidem*, véanse «Recomendaciones y proposiciones» y «Un programa de acción», págs. 173-219.

16 Recomiendo el Informe de Carlos Alonso Zaldívar, «La Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI): un análisis militar y político», en *Tiempo de Paz*, núms. 5 y 6, Madrid, 1985.

17 David Hanley y Hugues Portelli, «La Internacional Socialista y el desarme: límites y posibilidades de una diplomacia socialdemócrata», en *Socialdemocracia y defensa europea*, Ariel, Barcelona, 1985, pág. 45. Sólo cabe hacer una observación al respecto. El caso italiano y francés tienen todas las diferencias que hay entre sus respectivos partidos comunistas. El prosvietismo del PC francés hace que todos los sectores independientes o de la izquierda del PS, que en Italia participan en el *Coordinamento per la pace* con el PCI, en Francia se organicen en un grupo independiente, el CODENE, que ha tenido muy malas relaciones con el PC y vuelve a tener relaciones con el PS, ahora que éste está en la oposición (de hecho, la próxima Convención END, la quinta, tendrá lugar en París y se abre con un debate entre PS francés, SPD alemán y pacifismo europeo).

18 Una parte de las ponencias presentadas están compiladas en el ya citado *Policies for Common Security*, SIPRI, Estocolmo, 1985.

19 Véase *Peace in the 1980s and Beyond. The final report by the Socialist International Study Group on Disarmament*, publicado como separata en *Socialist Affairs*, núm. 5, Londres, 1981.

20 El texto íntegro de la resolución de la Internacional Socialista está reproducido en *Tiempo de Paz*, núm. 7, Madrid, 1985.

21 Lamento tener que hacer la observación que sigue, pero me veo obligado a ello para atajar confusiones. En el comentario del libro *Socialdemocracia y defensa europea*, que hace Miguel Porta Perales en el núm. 21 de la Revista LEVIATAN, se afirma que «las alternativas propuestas (sobre defensa europea) giran en torno a dos ejes fundamentales: la teoría de la disuasión (doble decisión de 1979, recrudecimiento de la guerra fría, etc.) y la propuesta de un desarme unilateral (movimiento pacifista). Ahora bien, en los últimos años ha surgido otra alternativa: la de la Internacional Socialista (IS)».

En primer lugar, la doctrina de la disuasión es una óptica general procedente de la posguerra que no puede reducirse a medidas adoptadas en el seno de la OTAN (doble decisión) y que es independiente del clima internacional existente (la teoría de la disuasión se mantiene en tiempos de distensión o de guerra fría). Tampoco es algo comparable con determinadas propuestas de desarme. Por otra parte, las propuestas de desarme unilateral no son patrimonio del movimiento pacifista europeo. Más bien hay que decir que tales propuestas atraviesan a los partidos de la IS y a los movimientos pacifistas europeos indistintamente. Sólo desde 1985 la IS ha presentado una alternativa doctrinal clara: la *common security*. Hasta entonces, la teoría de la disuasión era un consenso tanto de socialdemócratas como de conservadores en casi toda Europa. En todo caso, se puede ser partidario del desarme unilateral parcial y estar de acuerdo con la *common security*. De hecho, la resolución de la IS sobre desarme de 1985, donde se abraza la seguridad mutua, dice textualmente: «La Internacional Socialista subraya la importancia de medidas unilaterales y bilaterales en favor de la paz y de la distensión». Véase nota anterior.

22 Bertrand Rusell y Albert Einstein, «Manifiesto contra las armas nucleares», reproducido en *Tiempo de Paz*, núm. 1, Madrid, 1984.

23 Esa fue la argumentación de Angel Viñas para superar el documento del PSOE *50 preguntas sobre la OTAN*, en TVE.

24 Véase *Una política de paz y seguridad para España*, en su versión editada por la Comisión Ejecutiva del PSOE, Madrid, 1986, pág. 11.

25 Véase el folleto «La Alianza Atlántica», publicado como *Información Institucional del Estado*, sobre el referéndum del 12 de marzo. Al informar sobre los orígenes y evolución de la OTAN, la idea queda redactada así: «Por otra parte, en tanto que los aliados occidentales empezaron la desmovilización nada más terminar la guerra, no ocurrió lo mismo con la Unión Soviética. Mientras los primeros mantenían sobre las armas, a finales de 1946, unos efectivos inferiores al millón de hombres, los de la URSS superaban los seis millones. Esta diferencia, teniendo en cuenta las cada vez mayores tensiones entre el Este y el Oeste, no resultaba muy tranquilizadora para los países de la Europa occidental».

26 *Ibidem*, pág. 8.

27 *Ibidem*, pág. 9.

LA DEUDA EXTERNA EN AMERICA LATINA

Ramón Casilda y Miguel Pérez



4

La denominada crisis de la deuda es consecuencia, como señala Celso Furtado, del endeudamiento excesivo producido en el siglo XX, que constituye uno de los hechos más asombrosos e irresponsables de nuestro tiempo:

«¿Cómo pudo aceptarse, con general complacencia por deudores y acreedores, la generación de endeudamiento que fue concebido como si se tratase de resolver un problema de liquidez de los países deudores, cuando de lo que se trataba realmente era de financiar ajustes productivos de gran envergadura y considerable dimensión temporal?»

El problema de la deuda de los países en desarrollo es, en gran parte, un problema latinoamericano. Proporcionalmente, el tamaño de la deuda de esta Región es bastante más grande que en el caso de otras zonas de desarrollo. Su composición —dos tercios provenientes de la banca comercial— hace que sus vencimientos sean a corto plazo y los tipos de inte-

rés sean los del mercado. Y por si fuera poco esto, los ingresos provenientes de exportaciones son bajas en relación al volumen del servicio de la deuda.

La dimensión del problema no se circunscribe a una mera y pasajera crisis financiera, es también indudablemente una crisis política.

nanciera, *es también indudablemente una crisis política.* Esta se halla inmersa en la inacabada crisis económica internacional, agravada por los problemas estructurales

Actualmente esta Región está en medio de la más seria, prolongada y extendida crisis económica desde la gran depresión de los años treinta. Todas las economías de la Región han sido afectadas con distinta intensidad y profundidad. El informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), publicado en septiembre de 1985, pone de manifiesto que los países del Cono Sur latinoamericano experimentaron una recuperación fugaz a finales de 1983 y principios de 1984, pero nuevamente índice de crecimiento económico en disminución o negativos se volvieron a presentar a finales del año pasado, poniendo de manifiesto que el problema de la deuda está lejos de solucionarse. Por su parte, el Banco Mundial en su informe anual señala para América Latina un crecimiento, en 1984, de 2,8 %, pero hay que tener en cuenta que este índice sólo representó una subida del 0,2 % en relación al crecimiento demográfico.

Los países latinoamericanos se encuentran ante una encrucijada histórica. Su futuro se ve comprometido seriamente por el peso de la deuda externa contraída. Basta un dato: el total de los intereses a pagar cada año a título de la deuda externa de Latinoamérica se ha cuadruplicado, hasta alcanzar los 37.000 millones de dólares entre 1978 y 1984. Un reciente estudio del B.I.D. Llega a la terrible conclusión de estimar que los intereses a pagar llegarán a absorber un importe equivalente a casi dos tercios del crecimiento del Producto Interior Bruto (P.I.B.) de siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México) con una hipótesis relativamente optimista con respecto al futuro de las tasas de interés.

La dimensión del problema no se circunscribe a una mera y pasajera crisis fi-

persistentes tanto en las economías de los países en desarrollo como en la de los industrializados y desarrollados. Es también, sin lugar a dudas, la consecuencia de malas políticas en las cuales tanto los deudores como los acreedores comparten plenas y serias responsabilidades.

La necesaria solución del problema del endeudamiento de los países latinoamericanos, y en general de los países en desarrollo, exige por su cuantía la adopción de una solución global del problema que tome en consideración los intereses de los distintos elementos que intervienen: los bancos internacionales, los países deudores y los gobiernos de los países industrializados.

Refiriéndose al ámbito latinoamericano la solución deberá configurarse a través de dos campos de acción: el interior —responsabilidad de cada país— y el exterior —responsabilidad de la comunidad internacional—.

Dentro del capítulo de soluciones exógenas habría que abogar por las siguientes:

1. Establecer una coordinación de las políticas económicas que permita armonizar los intereses de los países desarrollados y de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, evitando con ello la eclosión de movimientos que preconicen la adopción de medidas y posturas insolidarias de consecuencias nefastas, en aras a la articulación de una solución viable al problema de la deuda externa.

2. Necesidad de impulsar el papel coordinador del Fondo Monetario Internacional, intentando articular una auténtica cooperación internacional fortaleciendo al mismo tiempo su capacidad fi-

nanciera, lo que le permitirá tener una actuación anticíclica más eficaz y colaborar más activamente a la hora de facilitar fondos para el desarrollo.

Junto al F.M.I., complementando su actividad deberá jugar un papel importante en la solución del problema de la deuda otro organismo internacional: el Banco Mundial. Su labor deberá concretarse en un mayor dinamismo y capacidad de otorgamiento de los denominados préstamos de ajuste estructural, diseñados para colaborar en la solución de problemas en la balanza de pagos de los países en vías de desarrollo.

3. Es preciso limitar el fenómeno de la transnacionalización de la economía, controlando más rigurosamente la actividad de los bancos multinacionales, sobre todo por lo que se refiere a su actividad en el euromercado.

4. Potenciación de los procesos de cooperación entre los países en desarrollo, a través de la vía de creación de entidades supranacionales que permitan instrumentalizar políticas económicas afines y elevar las tasas de intercambio comercial para conseguir un peso en la comunidad internacional.

5. Participación activa del Gobierno norteamericano, junto con los de otros países desarrollados, a la hora de facilitar créditos puente, logrando con ello ampliar el margen de maniobra en los países latinoamericanos a efectos de hacer viable la puesta en marcha de programas de ajuste para reforzar su balanza de pagos y estabilizar sus economías.

6. Necesidad de reducir el déficit del presupuesto federal norteamericano, y por tanto disminución del volumen de fondos demandados por el Tesoro norteamericano, que incidirá beneficiosamente para la solución del problema en un doble aspecto:

— Disminución en el nivel de los tipos de interés americanos.

— Cambio de tendencia en los flujos de capital internacional.

Este último dato es muy importante si tenemos en cuenta que Estados Unidos recibió en 1982 la cantidad de 11.000 millones de dólares, mientras que en 1983 la cifra se elevó a la muy considerable cantidad de 80.000 millones de dólares, según datos proporcionados por el C.B.O. (Congressional Budget Office).

7. Factor clave en el establecimiento del equilibrio financiero del área lo constituye el retorno a la inversión privada a niveles semejantes a la década de los años sesenta, momento en el cual llegó a representar el 40 % de las entradas netas de ca-

Es preciso limitar el fenómeno de la transnacionalización de la economía, controlando más rigurosamente la actividad de los bancos multinacionales.

pital dentro del área iberoamericana, si exceptuamos algún país muy concreto; dicho flujo de capitales de inversores privados se halla prácticamente paralizado.

Por lo que se refiere a las soluciones endógenas, podemos citar las siguientes:

1. Necesidad de redefinir el papel del sector industrial, desde dentro del sistema productivo, a través de la vía de la instrumentalización de una política industrial autóctona, que permita salvar los límites de unas estructuras productivas, consumidoras y no generadoras de divisas en un contexto de mercados internos muy reducidos, como consecuencia lógica de la existencia de una fuerte concentración del ingreso nacional.

Dentro de este capítulo, es preciso fomentar la creación de una industria ligera propia, que permita añadir valor a las exportaciones con inversiones de capitales reducidos y cortos períodos de maduración, gozando de la ventaja de su mejor adaptabilidad al cambio tecnológico frente a la rigidez de la industria pesada.

2. Impulsar el sector agrícola, modernizándolo a través de la doble vía de la incorporación de avances tecnológicos en la mecanización y estímulo a la producción de productos agrícolas con mercados a precios competitivos.

3. Resulta necesario rechazar tentativas nacionalistas y aislacionistas de consecuencia a medio y largo plazo muy negativas.

4. Es fundamental promover la puesta en marcha de programas económicos que impliquen un proceso de selectividad de las importaciones; y, al mismo tiempo, conlleva aparejos la instrumentalización de un proceso de desarrollo selectivo en la promoción de actividades exportadoras que deberá correr paralelo al objeto de generar, mediante un desarrollo selectivo, un mercado de consumo interno dimensionado a la realidad económica del país.

5. Necesidad de resolver el conflicto libertad-autoridad frente al fenómeno del desarrollo, a fin de conseguir un nivel de estabilidad interior suficiente a efectos de crear expectativas favorables para fomentar la inversión interior y exterior.

6. Es esencial la creación de comunidades intermedias fuertes que permitan reducir las situaciones de extrema tensión social, común denominador de la mayoría de los países latinoamericanos, verticalizando estructuras sociales que se encuentran en la actualidad tremendamente horizontalizadas (creación de amplias clases medias).

7. Reducir el papel del Estado en la vida económica del país, en la medida que una presencia excesiva en el pasado impulsó la creación de fuertes burocracias, empresas públicas con alto grado de ineficiencia, altas cuotas de corrupción y una mala distribución y asignación de los recursos internos.

8. Debe acometerse la implantación

Factor clave en el establecimiento del equilibrio financiero del área lo constituye el retorno a la inversión privada a niveles semejantes a la década de los 60.

de eficaces políticas fiscales, procurándose reducir, en la medida de lo posible, los fuertes déficits del sector público, así como la sangrante evasión de capitales.

A este respecto, la cuantificación del monto total de la evasión de capitales sufrida por los países latinoamericanos resulta muy difícil de determinar. De ahí que reseñamos, *con todas las reservas posibles*, sólo dos. Una, la facilitada por el diputado federal suizo, Jean Ziegler, al revelar recientemente en Río de Janeiro que los bancos suizos tienen depositados no menos de 160.000 millones de dólares en cuentas numeradas provenientes de países del Tercer Mundo. Aseguró que más del 80 % de estos fondos corresponden a capitales latinoamericanos, y que los titulares de esas cuentas son personalidades que están o estuvieron vinculadas a las dictaduras latinoamericanas. Y la otra fue facilitada por el propio B.I.D., cifrando la salida de capitales para el período 1981-1983, y referido exclusivamente a México y Venezuela, en una cantidad situada entre 20.000 y 25.000 millones de dólares.

9. Reducir la dramática tasa de inflación que impera en el área latinoamericana. Los datos reflejan fielmente la gravedad del problema. Y así, mientras en los países desarrollados la inflación pasa del 7,5 % en 1982 al 5 % en 1983, en el área latinoamericana el proceso se invierte, pasando del 85,6 al 130,4 %.

10. Los países latinoamericanos deberán plantearse la necesidad de instrumentalizar con carácter de urgencia políticas que reduzcan el ritmo de crecimiento del fenómeno de la macroencefalitis urbana, con sus nefastas consecuencias sociales.

11. La región debe dotarse de un mercado financiero común

y de un patrón monetario. Esta idea va tomando fuerza y se utiliza cada vez más con gran énfasis en las diferentes reuniones, conferencias, estudios, etc.

Desde una óptica puramente financiera la solución del problema de la deuda externa de los países latinoamericanos deberá contemplar un doble aspecto:

**Debe acometerse
la implantación de eficaces
políticas fiscales, procurándose
reducir los fuertes déficits
del sector público.**

ría, para los nueve principales bancos norteamericanos, la pérdida de un tercio de su capital.

b) Consolidación de éste en un solo tipo

a) Respecto a la deuda pendiente.

b) Respecto a la obtención de nuevos créditos.

a) Respecto a la deuda pendiente

Las diversas propuestas formuladas se pueden agrupar en dos bloques: uno definido por la formulación de una propuesta definitiva a largo plazo del problema y otro que busca una solución parcial a corto plazo. Analicemos algunas de ellas:

1. A largo plazo

a) Adquisición de la deuda pendiente por un organismo internacional a los actuales acreedores, aplicando un descuento y posterior negociación entre éste y los deudores, aliviando las condiciones impuestas a los países deudores. Esta fórmula la preconiza Denen, quien aboga por la creación de una Agencia Internacional de Descuento de Deuda.

En esta misma línea, pero al margen de cualquier intervención institucional, tendríamos que incluir aquella propuesta que aboga por la creación de un mercado secundario donde los bancos acreedores puedan intercambiar sus activos.

Según Brimelow, a fines de 1983 el precio de negociación para los préstamos latinoamericanos oscilaban entre 75 y 87 % de su valor contable. Es evidente que este tipo de solución, muy sencilla y espontánea, sólo es practicable a niveles muy reducidos dado que admitir un descuento del 25 % en el valor contable de la cartera de préstamos otorgados significa-

unificado de deuda, avalada por el Estado y materializado en una unidad común de cuenta, los Derechos Especiales de Giro (DEG), y emitidos por un organismo internacional (FMI). Esta fórmula es defendida por Ramón Tamames, que la expuso como ponencia en el último Congreso Mundial de Economía (Madrid, 1983).

c) Transformación de la deuda pendiente de los países latinoamericanos en bonos a largo plazo a tipos de interés inferiores a los de mercado, y bajo la égida de un organismo internacional (FMI, Banco Mundial...).

Dentro de este tipo de proposición podemos citar, a modo de ejemplo, los siguientes:

— Bernardo Grinspinn (1984), ex-ministro de Economía de Argentina. Propuso que los países deudores emitiesen bonos por el monto total de su deuda pendiente, títulos que serían transferidos al Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.). A su vez, este organismo emitirá sus propios por el mismo valor de los anteriores pero a largo plazo, con período de gracia y tasa de interés fijos. Esos bonos se colocarían, a la postre, en los bancos acreedores; a medida que los países deudores fueran cancelando su deuda con el B.I.D. éste procedería a pagar a los bancos acreedores.

— Por su parte, el Profesor Kenen (1983) defiende traspasar los préstamos bancarios a un organismo unilateral que los cambiaría por bonos de mayor plazo (10 a 15 años) y valor inferior a un 10 % del valor actual de sus préstamos.

— Partiendo de esta misma idea, Richard Weinert (1983) propone como in-

intermediario al Banco Mundial, y si bien no considera una reducción en el valor total de la deuda, sí propone una rebaja en los pagos por concepto de interés, ya que como se trata de una transformación en bonos públicos, la tasa ofrecida debería ser inferior a la ofertada por los mercados internacionales. Las ventajas de esta propuesta respecto a las anteriores estriba en el hecho de permitir que los bancos acreedores asuman gradualmente, escalonada en el tiempo, la pérdida, y ésta afecte a las utilidades bancarias, no a los activos.

— Finalmente, Dorubusch concreta aún más este tipo de solución al abogar por la conversión de la deuda pendiente en bonos públicos del país deudor, con 15 años de plazo, a una tasa de interés del 2 % real y un período de gracia de cinco años; e introduce como novedad el factor de unilateralidad en la adopción de la medida, sin intervención de ningún organismo internacional.

La propuesta de Dorubusch fue planteada para el caso de Brasil en 1983 y no obtuvo mucho eco.

d) Conversión de la deuda en capital productivo. Dentro de este tipo de soluciones es preciso distinguir dos tipos de propuestas:

1. Conversión en acciones.
2. Conversión en títulos financieros con dominio sobre los recursos del país.

Analicemos cada una de estas propuestas:

1. Conversión de parte de la deuda pendiente de los países latinoamericanos con participación en empresas públicas estratégicas. Allen Meltzer propone incluir, en particular, las empresas petroquímicas mexicanas y las centrales hidroeléctricas brasileñas.

Según el diario *The Wall Street Journal*, México estaría proponiendo a los

bancos acreedores cambiar parte de sus préstamos por acciones de un grupo de empresas mexicana, enclavadas en el sector del acero, automoción, papelería, minero y químico.

La ventaja para la banca americana acreedora parece clara: reducir su riesgo directo con este país. Además, esta solución facilitaría la posterior recolocación de dichas participaciones entre inversores privados extranjeros, tanto particulares como empresas interesadas en dichos sectores. En el otro lado de la balanza, el mayor inconveniente vendría dado por el efecto negativo que tal medida tendría sobre la cuenta de resultados de la banca acreedora.

Para los países deudores implica un cambio radical en las condiciones del servicio de la deuda. Con la capitalización de la deuda pendiente desaparecen los pagos de amortizaciones y los pagos de intereses se transforman en acciones o participaciones que no están ligados a las fluctuaciones de los mercados internacionales de capitales, sino a las ganancias reales de las empresas.

Para los deudores, el mayor inconveniente vendría dado por la resistencia interior que podría desatarse en sus propios países ante la venta de las mejores partes de sus industrias, lo que podría generar un coste político de difíciles e imprevisibles consecuencias.

No obstante, lo anterior podría ser una interesante solución complementaria a unir al resto de los que deberán adaptarse para solucionar el problema.

e) Conversión de la deuda pendiente en títulos financieros sin dominio sobre los recursos del país.

El economista norteamericano Norman Briley propone convertir la deuda pendiente en un nuevo instrumento financie-

Resulta difícil pensar en la conclusión feliz de un acuerdo entre las partes intervinientes: bancos internacionales, países deudores y organismos internacionales.

ro denominado «vales de participación en el intercambio» (*echange participation note*), emitido por el banco central del país deudor. El cambio real afectaría a los pagos de amortización, que se basarían en un porcentaje fijo de los ingresos anuales de divisas del país deudor. Esta medida no ocasiona modificaciones tan repentinas en las relaciones financieras entre los países y sus acreedores, no constituye un título de dominio sobre los recursos del país ni equivale a una capitalización integral de la deuda pendiente.

En el lado negativo, las dificultades derivan de la instrumentalización técnica del mismo al exigirse un trabajo estadístico de gran envergadura y plantea problemas de control y fiabilidad en los propios países deudores, por parte de los bancos acreedores.

En general, la viabilidad de las propuestas enumeradas anteriormente es muy reducida a corto plazo. Actualmente resulta difícil pensar en la conclusión feliz de un acuerdo entre las tres partes intervinientes en el problema: bancos internacionales, países deudores y organismos internacionales, en aras a repartirse el coste de ajuste imprescindible para la solución del problema.

2. A corto plazo

a) Aceptación por los acreedores del pago de la deuda pendiente, con vencimiento a corto plazo, en especies.

Recientemente, la Unión Soviética ha aceptado que Perú le pague en materias primas y productos industriales una parte de su deuda de 1984 y 1985, por un monto global de 235 millones de dólares.

Esta solución aliviaría a los países latinoamericanos de parte de su deuda, permitiéndoles afrontar la solución del problema desde una posición de liquidez, al

La aceptación por los acreedores del pago de la deuda pendiente, con vencimiento a corto plazo, en especies, aliviaría a los países de parte de su deuda.

disponer de una mayor cantidad de divisas para el pago del resto de su deuda.

La desventaja de la medida viene dada por lo limitado de la misma y por la dificultad de los acuerdos que se han de concluir.

b) Diversificación del riesgo de cambio, por medio de la conversión parcial de la deuda nominada en dólares en otras divisas diferentes. En los últimos dos años se están imponiendo fórmulas alternativas al dólar americano, como ocurre con la potenciación a nivel internacional de la utilización de la Unidad de Cuenta Europea (ECU), formada por la cesta ponderada de diez monedas europeas que dotan a esta moneda de gran estabilidad.

c) Disminución de la comisión pagada por los países deudores a los bancos acreedores a la hora de renegociar el monto de su deuda externa. Actualmente la comisión habitual se sitúa en el 1 % sobre el importe a renegociar, con tendencia hacia su disminución.

d) Reestructuración de los vencimientos más inmediatos, a fin de transformar los préstamos a corto plazo recibidos de la banca acreedora —a efectos de mantener el pago de los intereses de su deuda— en financiación a largo plazo (de 15 a 17 años).

e) Alivio del peso de la deuda mediante la reducción de la tasa de interés. Dos economistas y banqueros han optado por esta vía:

— Robert V. Roosa sugiere aplicar un tratamiento similar al utilizado en crisis similares producidas en el plazo interno. Sin embargo, la práctica de los últimos años, pone de manifiesto el fenómeno contrario. Y así mientras la renegociación de la deuda de firmas privadas lleva a los bancos a cobrar una tasa de interés in-

ferior a la del mercado durante el período de ajuste. En cambio, en el caso de deudores soberanos, los bancos elevan la tasa efectiva cobrada al país arguyendo que deben asumir un mayor riesgo.

La instrumentalización de nuevas líneas crediticias por parte del FMI ha sido defendida por los países deudores en los foros internacionales sin gran éxito.

d) La instrumentalización de nuevas líneas crediticias por parte del F.M.I. ha sido defendida en numerosas ocasiones por los países deudores en los foros internacionales sin gran éxito.

— Pedro Pablo Kuczajnski (1983) propone un plan de contingencia para los bancos: reducir durante dos años la tasa de interés, manteniendo un margen de aproximadamente un punto sobre la tasa interbancaria.

b) Respecto a los nuevos créditos a obtener

a) Utilización de bonos de cupón cero en lugar de préstamos (Cline), tratando con ello de volver a fórmulas de tipo de interés fijo que permitan conocer con exactitud el costo del endeudamiento, prescindiendo de la inestabilidad de los tipos de interés variables.

b) Creación de una Agencia de Seguro de Crédito Internacional que garantizaría así los nuevos créditos (A. Chusseau, Harold Lever). Ligada a esta propuesta, es necesaria también la creación de un centro de información en materia de concesión de créditos, que permitiera una mayor transparencia de datos sobre deudores y condiciones de los nuevos préstamos para los acreedores.

c) Potenciación de la financiación a largo plazo con participación más directa del F.M.I., que garantizaría los créditos al superar un cierto número de años. En esta línea estaría la propuesta de M. Zombanakis, abogando por la facilitación de créditos a largo plazo (13-15 años) previo acuerdo del país receptor con el F.M.I.

Por su parte, William Bolien y Jorge del Canto reclaman la creación de un Fondo de Desarrollo de la Exportación que, vinculado al Banco Mundial, diera crédito para proyectos de desarrollo.

No obstante, es preciso destacar como propuesta concreta la defendida por Samuel Britton en el *Financial Times*. Para este autor, el F.M.I. podría financiar el diferencial de intereses de los créditos que se concedan, cubriendo la diferencia entre los altos tipos de mercado y otros más bajos que se considerasen más apropiados y justos. Según Britton, éstos podrían ser los vigentes en el verano de 1980, o cuando la cotización del dólar americano y los niveles internacionales de tipo de interés eran más normales, sin la sobrevaloración actual. Este sistema de financiación deberá instrumentalizarse con carácter temporal por cinco años, o condicionado al restablecimiento de la cotización del dólar a nivel apropiado.

El incremento de la liquidez del F.M.I. se puede lograr, al margen del largo e incierto trámite institucional del incremento de la cuota de los países miembros, a través de la vía de ampliar su capacidad de operación.

Dentro de esta línea de actuación caben diversas posibilidades:

Permitir al F.M.I. captar recursos en los mercados internacionales.

Dotar al F.M.I. de una mayor flexibilidad en su política de otorgamiento de préstamos, por la vía de aumentar su bajísimo coeficiente actual por activos/capital, fijado en una relación igual a uno, para ampliar el margen de su actividad crediticia.

e) Propugnar el incremento de la liquidez total del sistema con una asignación adicional de Derechos Especiales de Giro (DEG), destinada especialmente a

los países latinoamericanos en la medida en que padecen las mayores dificultades financieras dentro del grupo de países en desarrollo.

f) Aplicación de normas estrictas en la evaluación del «riesgo país» y la construcción de un sistema internacional de supervisión bancaria que evite la repetición de la situación actual, impidiendo la expansión indebida e incontrolada del endeudamiento externo de los países latinoamericanos.

A finales de 1985 la tragedia de la deuda externa —desorbitada a todas luces— vuelve a recobrar fuerza en los medios de comunicación al intensificarse la discusión sobre el nuevo plan elaborado por la Administración norteamericana, y puesto de manifiesto en la última reunión del Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), celebrada en Seúl; el Secretario del Tesoro norteamericano planteó para resolver el problema de la crisis de la deuda la siguiente propuesta:

1) Necesidad de que los países endeudados llevasen a cabo políticas de ajuste positivo que favoreciesen a la vez el crecimiento y la solvencia.

2) Potenciación de los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, y sobre todo Banco Mundial, en su actividad prestamista, en aras a promover más activamente el desarrollo de los países endeudados. En concreto se fija la cantidad de 9.000 millones de dólares como aportación del Banco Mundial en los próximos tres años.

3) Un incremento nato de los préstamos de la Banca privada internacional a los países endeudados de 20.000 millones de dólares.

La propuesta de James Baker, secretario del Tesoro, y Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, es una admisión tá-

La crisis no podrá solucionarse sin reformar los organismos y mantener la compatibilidad que debe existir entre el financiamiento internacional y el funcionamiento de la economía mundial.

cita de que la anterior estrategia, puesta en práctica a raíz de la crisis mexicana de agosto de 1982, no servía más que para taponar agujeros pero no beneficia a la larga ni a prestamistas ni a prestatarios. En definitiva, se trataría de un tratamiento teóricamente correcto pero insuficiente para la solución global del problema de la deuda.

En general, todas las propuestas enumeradas anteriormente tienen como objetivo restablecer la actividad prestamista hacia los países latinoamericanos, a través de la vía de lograr una mayor cooperación internacional dentro de un marco de mayores garantías, otorgadas por una presencia más activa en el sistema financiero internacional del F.M.I. y otros organismos análogos. Sin embargo, todas las medidas propuestas tienen un defecto común: no se aprecia de dónde vendrá el impulso para ponerlas en funcionamiento.

En efecto, los bancos y países acreedores obtienen beneficios suficientes en la situación actual de renegociaciones parciales —país por país—; por lo tanto no entra en sus cálculos impulsar el cambio de esta situación. Por otra parte, las instituciones internacionales controladas por aquéllos tampoco se muestran especialmente activas a efectos de apoyar este impulso propiciador del cambio tan necesario —fundamental— para la necesaria reactivación económica.

Y lo que es más grave aún, tampoco los países deudores consiguen forzar el cambio por la vía de una acción colectiva y constante en el tiempo y en su vigor. Ahora bien, algo parece que está cambiando en este panorama que hemos pintado tan lúgubre.

Como signos positivos debería citarse el

texto publicado al cierre de la Conferencia Económica Latinoamericana, en enero de 1984, donde se definen y sientan criterios comunes para la instrumentaliza-

ción de medidas que permitan una solución global y definitiva al problema de la deuda. De forma aún más precisa lo hace la Declaración Fiscal de la Reunión de Cartagena, firmada por once países latinoamericanos (junio de 1984).

Todas las medidas propuestas tienen un defecto común: no se aprecia de dónde vendrá el impulso para ponerlas en funcionamiento.

el exterior lo que necesitan e impulsar el sector privado.

La postura del Presidente peruano es apoyada por Panamá y es posible que obtenga otras adhesiones entre los países más endeudados de la zona.

En esta dirección se halla la declaración que recientemente (marzo de 1985) se ha realizado en Montevideo con motivo del encuentro de parlamentarios de Argentina, Brasil y Uruguay.

«La negociación de la voluminosa, injustificada e ilegítima deuda externa que pesa sobre las espaldas de nuestro pueblo, debe realizarse respetando el principio de corresponsabilidad entre deudores y acreedores, así como los derechos de los débiles de agruparse para afrontar las asociaciones ya instrumentadas por las instituciones públicas y privadas de los países acreedores.»

Por otra parte, se resolvió «rechazar la acción del Fondo Monetario Internacional que, como agente del sistema financiero multinacional, pretende imponer a nuestros países políticas económicas recesivas con el propósito de condicionar nuestras economías y forzarnos a pagar los abusivos intereses de la deuda, postergando indefinidamente la necesaria reactivación económica».

Como última referencia es preciso citar a Alan García, Presidente del Perú, en su afán de plantear el problema a la luz del dilema: deuda o democracia. Y así declaraba, en la Conferencia bianual de la F.A.O., que la prioridad más acuciante de su país es el desarrollo económico y, por tanto, limitarán el pago de la deuda externa al 10 % de los ingresos por exportaciones. En el conjunto de Iberoamérica los pagos por el servicio de la deuda están consumiendo el 40 % de esos ingresos, limitando así su capacidad para financiar proyectos de infraestructura, comprar en

Por último, nos gustaría recalcar uno de los puntos claves en todo proceso que se promueva, cara a la búsqueda de soluciones globales al problema del endeudamiento; la crisis no podrá solucionarse sin reformar los organismos y mantener la compatibilidad que debe existir entre el financiamiento internacional y el funcionamiento normal de la economía mundial, sin descuidar el papel que en ellos están llamados a desempeñar los países en desarrollo. En este contexto, es esencial reafirmar el vínculo entre el financiamiento y el comercio, fuertemente debilitado por el deterioro que ha experimentado la relación de precios del intercambio de los productos de exportación de los países latinoamericanos durante los últimos años, por la intensidad y las modalidades que ha adaptado el proteccionismo en los países desarrollados y por la decadencia que, en general, han sufrido las reglas que regían el sistema de comercio internacional. Helmut Smichdt, ex Canciller de la República Federal Alemana (R.F.A.), decía sobre la materia:

«Los créditos crean comercio y el comercio asegura el crédito. Los problemas de balanza de pagos de los principales países en desarrollo no pueden ser remediados si nosotros les cerramos nuestros mercados. En muchos aspectos, los países en desarrollo se encuentran hoy en posición similar a la del Estado alemán en los años veinte: Alemania no pudo honrar el pago de sus reparaciones porque los aliados no estaban preparados para tolerar un superávit comercial alemán. Alemania no pudo cumplir con el pago de sus deudas y perdió su crédito» (*The Economist*, 26 de febrero de 1984).

Es de esperar que la comunidad internacional, y especialmente los países desarrollados, en la actual coyuntura, sean más inteligentes y generosos con respecto a Latinoamérica de lo que fueran frente a

Alemania en los años veinte, y que sea posible evitar el establecimiento de la violencia a que, en nuevas formas, conduciría irremediabilmente una presión mayor sobre los deudores.

Colectivo Miguel de Unamuno

Escritos sobre la tolerancia

Homenaje a Enrique Casas

Este libro, que tiene como hilo conductor la reflexión en torno a la idea de tolerancia, es una expresión de homenaje y recuerdo al desaparecido senador socialista Enrique Casas. Los distintos artículos en él recogidos, las plurales actitudes políticas e intelectuales de los colaboradores, coinciden, sin embargo, en valorar la significación que el definitivo asentamiento de la idea de tolerancia entre nosotros habrá de tener para hacer inamovible la convivencia política en el País Vasco y en el conjunto de España.

ESCRITOS SOBRE LA TOLERANCIA
Homenaje a Enrique Casas
Colectivo Miguel de Unamuno
Editorial Pablo Iglesias
254 págs.; 950 ptas.

PEDIDOS:
EDITORIAL PABLO IGLESIAS
Monte Esquinza, 30 - 28010-Madrid
Tels.: 410 46 96 y 410 47 98

EDITORIAL

PABLO IGLESIAS

SOBRE EL PACIFISMO

Agnes Heller y Ferenc Feher

POCAS cuestiones tan polémicas en Europa occidental como los movimientos pacifistas y antinucleares. Heller y Feher han adoptado frente a ellos una postura difícil y atrevida: identificándose con sus fines últimos y respaldando su contenido radical — la idea de que las cuestiones de defensa y de sobrevivencia no pueden quedar exclusivamente en manos de los expertos —, los autores toman, sin embargo, una posición crítica respecto al significado político inmediato de dichos movimientos, en el que ven una disociación entre la defensa de la vida y la defensa de la libertad. Sin una apuesta por la emancipación, por el ideal de una sociedad libre, el viejo sueño ilustrado de la buena vida se vería sacrificado a la defensa cuasi zoológica de la mera vida: la inseguridad emocional de un Occidente en crisis podría llevar a los pacifistas a olvidar los problemas políticos de la construcción de una sociedad libre y segura.

SOBRE EL PACIFISMO
Agnes Heller y Ferenc Feher
Editorial Pablo Iglesias
184 págs.; 900 ptas.

PEDIDOS:
EDITORIAL PABLO IGLESIAS
Monte Esquinza, 30 - 28010-Madrid
Tels.: 410 46 96 y 410 47 98

JURGEN HABERMAS

Perfil filosófico - político

I

¿Podría decirnos algo sobre las principales influencias intelectuales que se han sucedido en su obra? A menudo se le describe como un heredero de la Escuela de Francfort, que dio a su legado un «cariz lingüístico» mediante el paso de una filosofía de la conciencia a una filosofía del lenguaje. ¿Es ésta una imagen exacta o realmente su interés por el pragmatismo de Dewey y Peirce, al menos, fue anterior a su encuentro con la obra de Adorno y Horkheimer? ¿En qué período comenzó usted a reflexionar sobre las ideas de Wittgenstein o Austin? Y en las ciencias sociales, ¿fue su interés por Weber o Parsons posterior a una primera orientación, primordialmente marxista, o coexistieron ambos desde un principio? ¿Cuáles fueron las etapas de su compromiso con la tradición fenomenológica de Schütz o con la psicología genética de Piaget y Kohlberg?

Aparte de un semestre de verano en Zurich, estudié en Gotinga y Bonn entre 1949 y 1954. Por lo que respecta a mis campos de estudio, hubo una continuidad casi inin-

terrumpida de temas y personas que, pasando por el período nazi, se remonta hasta la República de Weimar. No se puede decir que las universidades alemanas se abrieran a las influencias exteriores inmediatamente después de la guerra. Así pues, desde el punto de vista académico crecí en un contexto alemán provinciano, en el mundo de la filosofía alemana, el mundo del neokantismo decadente, de la escuela histórica alemana, de la fenomenología y también de la antropología filosófica. El impulso sistemático más poderoso provenía del primer Heidegger. Siendo estudiantes, estábamos familiarizados con Sartre y el existencialismo francés, y quizá también con unas pocas obras de la antropología cultural americana. Mientras trabajaba en mi tesis sobre Schelling leí naturalmente al joven Marx. *De Hegel a Nietzsche*, de Löwith, me incitó a leer a los jóvenes hegelianos; *Historia y conciencia de clase*, de Lukács, también me causó una fuerte impresión. Estas primeras incursiones en la «literatura de izquierda» hicieron de hecho que acabara mi tesis, que estaba fuertemente influida por Heidegger, con una introducción que establecía una relación entre el idealismo alemán tardío y Marx. Inmediatamente después de acabar mis estudios, me familiaricé con la sociología laboral. Entonces recibí una beca para trabajar en el concepto de ideología, y esto me dio la oportunidad de profundizar algo más en el marxismo hegeliano y en la sociología del conocimiento. También leí *Prismas y Dialektik der Aufklärung*, de Adorno. En otras palabras, en Francfort, a partir de 1956, se añadieron Bloch y Benjamin, junto con unos cuantos artículos de la *Zeitschrift für Sozialforschung*, libros de Marcuse y una polémica —muy acalorada en aquella época— en torno al llamado Marx filosófico y antropológico. Un poco más tarde abordé en serio *El capital*, y en relación con esto leí también a Dobb, Sweezy y Baran. También aprendí sociología en estos primeros años de Francfort; sobre todo leí cosas empíricas sobre comunicación de masas, socialización política y sociología política. En ese momento entré en contacto, por primera vez, con Durkheim, Weber, y, muy cautelosamente, con Parsons. Más importantes que todos ellos fueron las conferencias en honor de Freud celebradas en 1956, ya que después de haber oído a la élite internacional, de Alexander y Spitz a Erikson y Binswanger, he considerado siempre al psicoanálisis, a pesar de todas las siniestras predicciones, como algo que hay que tomar en serio.

Durante estos años como ayudante de Adorno, entre 1956 y 1959, evolucionó lo que más tarde cristalizó en las investigaciones de *Student und Politik*, y en mis dos primeros libros (*Strukturwandel der Öffentlichkeit* y *Theorie und Praxis*), que fueron un intento de continuar el marxismo hegeliano y weberiano de la década de 1920 por otros medios. Todo ello seguía estando dentro del contexto de una tradición muy alemana, o al menos de una tradición muy arraigada en Alemania, aun cuando en aquella época, a través de mi contacto con Adorno y Horkheimer, y más tarde con Abendroth y Mitscherlich, tenía la sensación de haber crecido en unos horizontes de experiencia diferentes, definitivamente más amplios, de haberme librado de la estrechez de miras provinciana y de un mundo ingenuamente idealista.

En Heidelberg, a partir de 1961, *Verdad y método* de Gadamer me ayudó a encontrar mi camino de vuelta a la filosofía académica. Me interesé por la hermenéutica, por un lado en relación con cuestiones de lógica de las ciencias sociales y por otro en comparación con la filosofía tardía de Wittgenstein. Fue pues el período de mi primera participación a fondo en la filosofía lingüística y en la filosofía analítica de la ciencia. Animado por mi amigo Apel estudié también a Peirce, así como a Mead y Dewey. Desde el comienzo consideré el pragmatismo americano como la tercera réplica productiva a Hegel, después de las de Marx y Kierkegaard, como la rama democrática-radical del joven hegelismo, por así decirlo. Desde entonces he confiado siempre en esta versión americana de la filosofía de la praxis cuando se ha planteado el problema de compensar las lagunas del marxismo con respecto a una teoría democrática. Esta inclinación

fue también la base de mi posterior amistad con Dick Bernstein. En cualquier caso, cuando volví a Francfort para hacerme cargo de la cátedra de Horkheimer, en 1964, tenía una posición lo suficientemente firme en los análisis anglosajones como para poder distanciarme de un concepto deformado de la teoría derivado de Hegel.

A mediados de los sesenta, Cicourel y la etnometodología me llevaron de nuevo a Schütz. Por aquella época consideraba la fenomenología social como una proto-sociología, llevada a cabo en forma de análisis del mundo real. Esta idea se relacionaba con influencias de otra procedencia: estaba fascinado tanto por el programa de Chomsky para una teoría general de la gramática como por la teoría austiniana del lenguaje y el acto sistematizada por Searle. Todo esto sugería la idea de una pragmática universal, con la ayuda de la cual yo deseaba ante todo enfrentarme al embarazoso hecho de que las bases normativas de la teoría crítica de la sociedad estaban todavía por aclarar. Tras haber rechazado la ortodoxia de la filosofía de la historia, no deseaba caer de nuevo en un socialismo ético, en un cienticismo, o en ambos a la vez. Esto explica por qué apenas leí a Althusser. En la segunda mitad de los sesenta, gracias a la ayuda de competentes colaboradores como Offe y Oevermann, me abrí camino en áreas específicas de la sociología, y en particular en la socialización y la investigación sobre la familia, por una parte, y en la sociología política, por otra. En este proceso llegué a conocer mejor a Parsons. Ya había leído a Piaget y a Kohlberg, pero no fue sino en nuestro Starnberg Institute, es decir, a partir de 1971, cuando me hice partidario del estructuralismo genético. Fue también allí donde inicié un estudio más intenso de Weber.

Así pues, pueden ver que desde el principio mis intereses teóricos han estado constantemente determinados por aquellos problemas filosóficos y socioteóricos que surgen del movimiento intelectual que va de Kant a Marx. Mis intenciones y convicciones fundamentales quedaron marcadas por el marxismo occidental a mediados de los cincuenta, a través de un entendimiento con Lukács, Korsch y Bloch, Sartre y Merleau-Ponty, y por supuesto con Horkheimer, Adorno y Marcuse. Cualquier otra cosa que haya hecho por mí mismo sólo ha adquirido su significado en relación con el proyecto de renovación de la teoría de la sociedad basado en esta tradición.

En los veinticinco años transcurridos desde Strukturwandel der Öffentlichkeit, ha producido usted una obra muy amplia, de creciente complejidad y alcance, con una continuidad de dirección impresionante. Al mismo tiempo, su pensamiento ha sufrido, obviamente, ciertas alteraciones de acento o de convicción durante este período. ¿Cuáles considera usted que son los más importantes de dichos cambios?

Los libros que publiqué a comienzos de los sesenta expresaban implícitamente mi convicción de que las cosas que quería hacer podían tener cabida, más o menos, en el marco teórico heredado: en este aspecto, sentía una especial afinidad con los existencialistas, es decir, con la variante marcusiana de la teoría crítica. Y lo que es más, Herbert Marcuse, con quien trabé amistad en la década de 1960, sentía lo mismo. Todavía recuerdo el día en que me dedicó un ejemplar de *El hombre unidimensional* con una halagadora cita de Benjamin: «A la esperanza de quienes no tienen esperanza». Sin embargo, el interés por la filosofía analítica, y también la polémica positivista, reforzaron mis dudas sobre si los conceptos de totalidad, de verdad y de teoría derivados de Hegel no representaban una hipoteca demasiado pesada para una teoría de la sociedad que también debería satisfacer unas pretensiones empíricas. Por aquella época, en Heildelberg y luego de nuevo en Francfort, yo creía que este problema era de carácter epistemológico. Quería zanjarlo mediante una clarificación metodológica del estatus de una teoría doblemente reflexiva (reflexiva con respecto a su contexto de

aparición y con respecto a su contexto de aplicación). El resultado fue *Conocimiento e interés*, que fue escrito entre 1964 y 1968. Todavía considero correcto, en líneas generales, el argumento que desarrollaba en el libro. Pero ya no creo en la epistemología como *via regia*. La teoría crítica de la sociedad no tiene que probar sus credenciales, en primer lugar, en términos metodológicos; necesita una base sólida, que la saque del atolladero en que la ha metido el marco conceptual de la filosofía de la conciencia, y superar el paradigma de la producción sin abandonar mientras tanto los objetivos del marxismo occidental. El resultado es *Theorie des kommunikativen Handelns*. En un brillante artículo que pronto será publicado en Gran Bretaña¹, Dick Bernstein expone los problemas concretos que me han obligado de forma inmanente a cambiar repetidamente de postura, a pasar del «conocimiento e interés» a «la sociedad y la racionalidad comunicativa».

*¿Cuál es su opinión sobre la actual coyuntura intelectual en Occidente? En ¿Sirve aún de algo la filosofía?, usted sugería que la intensidad y la originalidad filosóficas germánicas habían emigrado a Estados Unidos, mientras que Europa se hundía en una plácida «suizificación»². ¿Sigue usted manteniéndolo? De forma más general, la mayoría de sus referencias en los últimos años se han movido a lo largo de un eje de comparación germano-americano, como últimamente su crítica de las diferentes formas de neoconservadurismo en ambos países. ¿Esto es debido a razones biográficas o expresa una opinión de fondo sobre el predominio y la importancia de estas dos culturas para Occidente en su conjunto a finales del siglo XX? ¿Sería correcto pensar que Francia e Inglaterra, por ejemplo —polos centrales de referencia en su tratamiento de la civilización burguesa en los siglos XVIII y XIX en *Strukturwandel*—, han perdido relieve en su obra posterior?*

Las razones de esta orientación hacia los acontecimientos de los Estados Unidos son indudablemente triviales: es algo típico de la generación de posguerra de filósofos y sociólogos alemanes en general. Por supuesto, está también el telón de fondo de la política de poder: la República Federal está tan cerca de convertirse en el 51.º Estado de la Unión que lo único que todavía no tenemos es el derecho de voto. Esta total dependencia nunca había aparecido de forma tan abierta como lo hizo en el otoño de 1983, con el estacionamiento de misiles que se nos impuso. Sin embargo, prefiero de hecho una cultura política que, como la americana, data del siglo XVIII. Me maravillan la franqueza intelectual y la disposición al diálogo, esa mezcla de imparcialidad y compromiso, que descubro en los estudiantes americanos más que aquí en Europa. Para un alemán de mi edad y mis concepciones, también puede influir el hecho de que en las universidades americanas nos es fácil seguir los pasos de los emigrantes alemanes que han adquirido una considerable reputación. Además, el Institut für Sozialforschung, donde he trabajado, volvió finalmente de Estados Unidos. Y aquellos miembros del instituto que no volvieron —Marcuse, Löwenthal, Kirchheimer, Neumann y otros— han hecho una gran contribución a la densa red de lazos personales y académicos entre aquí y allí. Hoy en día esta red se está extendiendo a una tercera generación de estudiosos más jóvenes.

Hablando de los más jóvenes, es evidente que la influencia de los franceses ha crecido constantemente en los últimos diez años aproximadamente. En cuestiones de teoría social, los impulsos más inventivos proceden de París, de gente como Bourdieu, Castoriadis, Foucault, Gorz, Touraine, etcétera.

Finalmente, por lo que a Inglaterra se refiere, ustedes mismos admiten que he estado influido por la filosofía analítica. Sin embargo, no quiero negar que existe una cierta diferencia de clima entre Inglaterra y el continente. No hay afinidades elec-

tivas profundas entre el espíritu del empirismo, que sigue siendo dominante en el país de ustedes, y el idealismo alemán. Falta un agente de fermentación en el metabolismo filosófico capaz de mediar entre las dos mentalidades, como, por ejemplo, el pragmatismo en América. Creo que puedo detectar este alejamiento en las convicciones filosóficas básicas. Por ejemplo, observo una cierta incompreensión en la forma en que distinguidos colegas, como Quentin Skinner o W. G. Runciman, e incluso mi amigo Steven Lukes, escriben sobre mis preocupaciones. En su caso, la ontología del empirismo se ha convertido en una segunda naturaleza. Por supuesto, hay contraejemplos, como Tony Giddens.

Recientemente ha afirmado usted que Horkheimer y Adorno sólo pueden hallar resistencia a una racionalidad intencional totalizada en los poderes irracionales y miméticos del arte y el amor, o en la «rabia impotente de la naturaleza rebelada»³. Aunque estos reparos apunten a una cierta tendencia de la teoría crítica clásica, no está claro que puedan ser aplicados sin reservas al pensamiento de Adorno, que siempre fue consciente del peligro de las apelaciones a una naturaleza no mediatizada. ¿Es posible que en su deseo de distanciarse de un negativismo impenitente y de rehabilitar la concepción constructiva de teoría crítica habitual en la década de 1930 se haya dejado usted arrastrar a exageraciones polémicas y haya subestimado el grado en que Adorno permaneció fundamentalmente fiel a los ideales de autonomía e ilustración, incluso en sus momentos de mayor desesperación?

Estoy de acuerdo con ustedes: en ningún momento la crítica de la razón de Adorno y Horkheimer equivale a una renuncia a lo que en otro tiempo pretendió, aunque fuera en vano, la gran tradición filosófica, y, en particular, la Ilustración, con el concepto de razón. Como Nietzsche, ambos radicalizan la crítica de la razón hasta el punto de la autorreferencia, en otras palabras, hasta que esta crítica empieza a socavar incluso sus propios cimientos. Pero Adorno se diferencia de los seguidores de Nietzsche, de Heidegger, por un lado, y de Foucault, por otro, precisamente en que ya no desea escapar a las paradojas de esta crítica de la razón, que ahora parece como si careciera de objeto: desea perseverar en la contradicción de una dialéctica negativa que dirige contra sí misma el inevitable instrumento para identificar y objetivar el pensamiento. A través de este ejercicio de perseverancia, cree seguir siendo casi totalmente fiel a una razón perdida, no instrumental. Esta razón olvidada, perteneciente a la prehistoria, sólo encuentra eco en los poderes de un mimetismo sin palabras. Lo mimético puede ser contorneado por una dialéctica negativa, pero no puede —como sugiere Heidegger— ser revelado. Lo mimético deja percibir lo que está representando el papel de sustituto, pero no permite conocer una estructura que pudiera ser descrita como racional. En esta medida, Adorno no puede recurrir a ninguna estructura heterogénea con respecto a la razón instrumental, con la que tendría que chocar la fuerza de una racionalidad intencional totalizada. En el pasaje que ustedes mencionan, estoy en vías de localizar una estructura resistente de este tipo, a saber la estructura de una racionalidad que es inmanente a la práctica comunicativa cotidiana y que pone en juego la tenacidad de las formas reales frente a las demandas funcionales de unos sistemas económicos y administrativos autonomizados.

¿Puede Adorno, en sus evocaciones de la reconciliación, ser justamente acusado de emplear subrepticamente categorías de una intersubjetividad de la que se abstiene en el terreno filosófico? ¿Puede lo que él denomina «amor a las cosas» ser simplemente reformulado en términos de una comunicación no distorsionada? Podríamos considerar, por ejemplo, el siguiente pasaje de la Teoría estética, donde Adorno trata de evocar una relación recíproca entre naturaleza y tecnología humana sin sugerir, en

modo alguno, que la naturaleza pudiera ser legítimamente percibida como sujeto: «Tras la abolición de la escasez, podría producirse una expansión de las fuerzas productivas en una dimensión diferente del incremento cuantitativo de la producción. Hay indicios de esto en las construcciones funcionales que han sido adaptadas a las formas y líneas del paisaje circundante; o en la antigua arquitectura en la que los materiales de construcción eran tomados de la zona circundante y encajaban en ella, como en el caso de muchos castillos y palacios. Lo que se llama en alemán “paisaje cultural” es bello como esquema de esta posibilidad. Una racionalidad que asumiera tales motivos podría contribuir a cerrar las heridas de la racionalidad»⁴. A la luz de estos pasajes, ¿no sería posible sugerir que existe una relación de complementariedad —más que de sustitución— entre las exploraciones adornianas de la relación sujeto-objeto y su propia teoría de la comunicación?

Si se me permite decirlo, encuentro que su sugerencia de que la *Teoría estética* de Adorno y mi teoría de la comunicación deberían ser consideradas como teorías mutuamente suplementarias es un poco ingenua. Por otra parte, ninguna de estas dos teorías puede reemplazar simplemente a la otra, aunque sólo sea porque yo he hablado muy poco de cuestiones estéticas.

Albrecht Wellmer, que conoce mucho más a fondo estos temas, ha demostrado, en un notable estudio sobre la «verdad, la ilusión y la reconciliación»⁵, que la utopía estética de Adorno «se enrancia», por así decirlo, en cuanto se disuelve su conexión con la filosofía de la historia de *Dialektik der Aufklärung*. Cuando esto ocurre, las ideas estéticas de Adorno se tornan independientes de la tesis metafísica según la cual, con cada nuevo avance en la subjetivación, la humanidad se hunde más y más en la cosificación. Dentro de esta visión negativa se incluye la perspectiva prolongada en una visión positiva, de una reconciliación de la productividad humana con la naturaleza, que ustedes recuerdan en su cita. La apelación de Adorno a «*die Liebe zu den Dingen*» no deja de tener su ironía, y, sin embargo, está hecha con toda seriedad. Este amor es una contraimagen utópica de la desesperanzadora convicción de que la subjetividad «va hacia su propia extinción por la fuerza de su propia lógica». Una teoría de la comunicación que rompe con el marco conceptual de la filosofía de la subjetividad socava esta «lógica», esta relación interna aparentemente indisoluble entre emancipación y sojuzgamiento. Más específicamente, descubre que hay ya un momento mimético en las prácticas cotidianas de la comunicación, y no sólo en el arte. Permítanme que lo diga en palabras de Wellmer: «Esto es algo que debe permanecer oculto en una filosofía que, como la de Adorno, entiende la función de los conceptos en términos de la polaridad entre sujeto y objeto; no puede reconocer, tras las funciones objetivadoras del lenguaje, unas cualidades comunicativas que son la condición de su propia posibilidad. Por esta razón, sólo puede entender el mimetismo como el otro lado de la racionalidad... Para que se reconozca la unidad anterior del momento mimético y el momento racional en las bases del lenguaje, es preciso un cambio de paradigma... Pues si la intersubjetividad del entendimiento, la acción comunicativa, forman parte de la esfera de la mente tanto como la objetivación de la realidad en un contexto de acción instrumental, entonces la perspectiva utópica que Adorno trata de elucidar con el concepto de una síntesis espontánea derivada de la filosofía de la conciencia emigra hacia la esfera de la razón discursiva: la intersubjetividad indemne, la solidaridad espontánea de muchos, que harían posible un acercamiento y un distanciamiento simultáneos, la identidad y la diferencia de los individuos, indican una proyección utópica cuyos elementos son derivados por la razón discursiva de las condiciones de su propia lingüística»⁶.

En una serie de ensayos recientes ha emitido usted duros juicios sobre el posestructuralismo, sugiriendo que los posestructuralistas franceses deben ser considerados como

«jóvenes conservadores» que «partiendo de actitudes modernistas... justifican un irreconciliable antimodernismo»⁷. ¿Podría usted ampliar esta opinión, estableciendo, si fuera necesario, las diferencias entre los distintos pensadores posestructuralistas? ¿Y podría explicar la discrepancia entre su condena del posestructuralismo y su acogida relativamente favorable de la obra de Richard Rorty, que presenta paralelismos con los temas posestructuralistas y en algunos casos ha sido directamente influida por ellos?

Como verán por mis conferencias sobre el discurso filosófico de la modernidad, cuya publicación está prevista para dentro de poco, «condena» no es la palabra adecuada para calificar mi actitud hacia el posestructuralismo. Hay, por supuesto, muchas similitudes entre la dialéctica negativa y los procedimientos de desconstrucción, por una parte, y entre la crítica de la razón instrumental y el análisis de la formación del discurso y del poder, por otra. El elemento lúdico-subversivo de una crítica de la razón que es consciente de su paradójica aurreferencialidad y la explotación de las posibilidades de la experiencia que fueron reveladas por primera vez por la vanguardia estética, estas dos cosas caracterizan a un estilo nietzscheano de pensamiento y presentación en el que se basa el parentesco espiritual de Adorno con Derrida, por un lado, y con Foucault, por otro. Lo que le diferencia de estas dos figuras, así como del propio Nietzsche —y esto me parece que es políticamente decisivo—, es simplemente esto: Adorno no se lanza en paracaídas al *contra*-discurso en el que desde el principio se ha instalado la modernidad; más bien, en su desesperada adhesión al procedimiento de la negación determinada, permanece fiel a la idea de que no hay más cura para las heridas de la Ilustración que la propia Ilustración radicalizada. A diferencia de Nietzsche y sus discípulos, Adorno no se hace ilusiones sobre los orígenes genuinamente modernos de la experiencia estética, en cuyo nombre la modernidad es víctima de una crítica uniformadora y no dialéctica.

Por lo que respecta a Richard Rorty, soy igualmente crítico hacia su postura contextualista. Pero al menos él no se sube al carro del «antihumanismo», cuyo rastro lleva en Alemania hasta figuras tan poco ambiguas desde un punto de vista político como Heidegger y Gehlen. Rorty conserva de su herencia pragmática, que en muchos aspectos, aunque no en todos, reivindica injustamente para sí, una intuición que nos une: la convicción de que la vida colectiva de la humanidad depende de las vulnerables formas de una comunicación cotidiana innovadora, recíproca y espontáneamente igualitaria. Esta intuición es aún más ajena a Derrida y Foucault que a Adorno (que siempre fue un romántico, y no sólo como compositor).

La cuestión del posestructuralismo tiene una importancia obvia en el momento actual, dada la creciente penetración de este tipo de pensamiento en la República Federal. ¿Cuáles piensa usted que son las razones de este éxito y cuáles son sus sentimientos ante la repatriación del pensamiento de Nietzsche y Heidegger bajo una forma posestructuralista?

La influencia del posestructuralismo en las universidades alemanas está indudablemente relacionada también con la situación del mercado de trabajo académico. El horizonte de las expectativas de los intelectuales más jóvenes se ha vuelto tan sombrío que se ha generalizado un estado de ánimo negativista, el cual, en parte, lleva incluso a visiones apocalípticas de una resurrección. La realidad social está haciendo algo más: no escatima la creación de peligros siempre nuevos que, incluso considerados con más tranquilidad, aparecen como efectos secundarios de una acción racional-intencional, es decir, como peligros que hemos provocado nosotros mismos. Por esta razón, las teorías que entienden el todo como lo incierto y ofrecen la imposibilidad de escapar como la única afirmación posible, no sólo se equiparan en estado de ánimo

a la crítica de la civilización, sino que además tienen un creciente contenido de realidad. Después de todo, ¿cómo tendría uno que responder al espectáculo de las últimas elecciones norteamericanas, en las que todos los niveles de la realidad se mezclaron de modo triunfal, en las que un actor-presidente revela a un público embelesado que, pese a todas sus afirmaciones de virilidad y dotes de mando, sólo está interpretando el papel de presidente, y es prontamente reelegido? A este tipo de cosas uno sólo puede contestar con las cínicas payasadas de los desconstruccionistas.

La situación es un poco diferente en el caso de Heidegger, que todavía tiende a inspirar un sagrado terror en este país. El último retorno de Heidegger felizmente desnazificado se basa, por supuesto, en la acogida ahistórica de Heidegger en Francia y Estados Unidos, donde apareció en escena después de la guerra, cual ave fénix que resurge de las cenizas, como el autor de la *Carta sobre el humanismo*.

El recelo hacia el sistema en filosofía es característico de muchas corrientes del pensamiento del siglo XX. El escepticismo acerca de la posibilidad de la filosofía como cuerpo ordenado de verdades es característico de pensadores tan diversos como Wittgenstein, Merleau-Ponty y Adorno. ¿Cómo defendería usted la necesidad y la posibilidad de una filosofía sistemática frente a estas objeciones profundamente arraigadas?

Desde la muerte de Hegel, los sistemas filosóficos han dejado de estar bien vistos. Cualquier pensador que, en el siglo XX, haya afirmado y practicado la muerte, la sustitución, el fin o la disolución de la filosofía, no ha hecho más que aplicar con retraso un decreto promulgado por la primera generación de jóvenes hegelianos. Desde entonces, el pensamiento filosófico ha tratado de moverse en otro medio. A este respecto, todos seguimos siendo contemporáneos de los jóvenes hegelianos, pese a nuestras ambiciones posmodernas. *Después de la filosofía* —título de una colección de ensayos que tiene en proyecto Tom McCarthy— describe una situación que, para mí, se ha convertido en algo tan obvio como que considero totalmente superfluos los grandes gestos de los antisistemáticos. Todo trabajo filosófico renuncia implícitamente a pensar en sistemas que él mismo entrelaza hasta formar la red ramificada de las ciencias sociales y humanas, sin pretensiones fundamentalistas y con una conciencia falibilista, a fin de aportar algo útil siempre que se plantea el problema de los rasgos presuntamente universales del conocimiento, el lenguaje y la acción.

Uno de los procesos generales más obvios en su obra ha sido la creciente preeminencia de los argumentos y métodos de la filosofía analítica. ¿Podría usted explicar las razones de esta transformación? ¿Qué recursos ofrece la filosofía analítica que no puedan ser proporcionados por otras tradiciones, incluidas las grandes tradiciones alemanas?

En general, el ejemplo de la filosofía analítica ha sido una fuerza saludable en la filosofía alemana de posguerra por la simple razón de que exigía un nivel superior de explicitación. He aprendido mucho de Wittgenstein, Austin y Searle: como saben, en su obra he encontrado instrumentos para la investigación de los presupuestos pragmáticos generales del uso de las proposiciones en la expresión.

Uno de los procesos más notables en la filosofía de habla inglesa en los últimos diez años ha sido la aparición de nuevas e importantes obras de filosofía política (Rawls, Nozick, Dworkin, Walzer) y de un amplio debate en torno a ellas. ¿Hasta qué punto considera usted significativo este proceso? ¿Cree que sería conveniente

que interviniera usted en este debate de forma más directa que hasta ahora, dado que los intereses de estos pensadores coinciden en muchos aspectos con los de usted?

Junto a la teoría del lenguaje y el acto, podría haber mencionado también la filosofía moral, o al menos la corriente de pensamiento (desde Baier y Singer hasta Rawls) en la que la esencia de la ética kantiana es recuperada en cierto modo en forma de una filosofía lingüística. Recientemente, he explicado con más detenimiento el enfoque de la ética del discurso por el que abogamos Apel y yo ⁸. Este enfoque es un intento de reconstruir la ética kantiana con la ayuda de la teoría de la comunicación. Las sugerencias que he reelaborado en este proceso están tomadas, sobre todo, de Rawls y Kohlberg. Cuando inicié un análisis de la desobediencia civil el año pasado, como respuesta a acontecimientos contemporáneos, la obra de Rawls y Dworkin me proporcionó los puntos de referencia más importantes. Si tienen ustedes la impresión de que no me he comprometido lo suficiente en este frente esto podría ser el resultado de mi concepción algo restringida de la tarea de la ética filosófica.

De acuerdo con mi concepción, el filósofo debería explicar el punto de vista moral y —en la medida de lo posible— justificar la pretensión de universalidad de esta explicación, demostrando por qué no se limita a reflejar las intuiciones morales del individuo medio de sexo masculino y clase media de una sociedad occidental moderna. Todo lo que vaya más allá de esto es tema para un discurso moral entre los participantes. En la medida en que el filósofo quisiera justificar unos principios específicos de una teoría normativa de la moral y la política, debería considerar esto como una propuesta para el discurso entre ciudadanos. En otras palabras: el filósofo moral tiene que dejar las cuestiones esenciales que van más allá de una crítica fundamental del escepticismo y del relativismo frente a los valores a los participantes en el discurso moral, o adaptar desde el principio las pretensiones cognoscitivas de la teoría normativa al papel del participante. De esta forma ganamos un mayor espacio para la contribución de la teoría social al diagnóstico del presente. Es verdad que las consideraciones éticas son frecuentemente de gran valor metodológico para la construcción de tales teorías. He estudiado esta cuestión en *Problemas de legitimación*, en relación con el problema de la distinción entre intereses particulares e intereses universales.

*En sus recientes escritos las consideraciones estilísticas parecen haberse batido en retirada en favor de un modo de expresión más funcional, cambio que parece estar relacionado con la creciente importancia de la filosofía analítica en su obra. Teniendo en cuenta sus observaciones en *¿Sirve aún de algo la filosofía? sobre el fin de la «gran filosofía»*, la transformación de la filosofía en una rama de la «investigación» y la desaparición del «estilo de pensamiento filosófico vinculado a la erudición individual y a la representación personal» ⁹, ¿cree usted que la preocupación por el estilo en la obra de un filósofo contemporáneo es una diversión o una regresión? ¿Es eso lo que tiene valor en una postura filosófica siempre susceptible de un enunciado directo?*

El tipo de texto cambia de acuerdo con el propósito, el destinatario, el lugar y el momento, según que trate del tema de la *Berufsverbot* o del de la desobediencia civil en la esfera pública-política, según que pronuncie un discurso en honor de Gadamer, polemice con Gehlen o escriba una nota necrológica para Scholem, o según que intente justificar un principio moral o clasificar lenguajes y actos. Los elementos retóricos varían en relación con estos diferentes propósitos. Somos ahora plenamente conscientes, al menos desde Mary Hesse, de que incluso el lenguaje de las ciencias está plagado de metáforas; esto es totalmente cierto en el caso del lenguaje de la filosofía, que, por supuesto, nunca puede ser plenamente absorbido por su papel de sustituto de teorías científicas con grandes pretensiones universales. Pero no se puede, como hace Derrida,

sacar la conclusión, a partir del carácter inevitablemente retórico de *todo* tipo de lenguaje, incluido el lenguaje filosófico, de que todos son iguales, de que las categorías de la literatura y la vida cotidiana, de la ciencia y la ficción, de la poesía y la filosofía, se confunden unas con otras. Para Derrida todos los gatos son pardos en la noche de la «escritura». No me gustaría sacar esta conclusión. El uso del lenguaje en las prácticas de la vida cotidiana está sometido a restricciones diferentes de las del lenguaje utilizado en la teoría o en el arte, que está especializado en la resolución de problemas o en un descubrimiento innovador del mundo.

¿Cómo resumiría usted sus actuales concepciones acerca de la verdad? Si todo enfoque correcto de la verdad debería incluir una teoría de la evidencia y una teoría del argumento, ¿sería justo decir que su obra ha prestado hasta ahora mucha más atención a la primera que a la segunda? ¿Seguiría usted manteniendo hoy la separación categórica entre «objetividad» y «verdad»¹⁰, entre lo experimental y lo verídico, de la posdata a Conocimiento e interés?

La esencia de la teoría discursiva de la verdad puede ser formulada por medio de tres conceptos básicos: *condiciones de validez* (que se cumplen cuando una expresión es válida), *reivindicaciones de validez* (que plantean los hablantes con sus expresiones por lo que respecta a su validez) y *satisfacción* de una reivindicación de validez (en el marco de un discurso lo suficientemente cercano a las condiciones de una situación de lenguaje ideal como para que el consenso al que aspiran los participantes sea conseguido simplemente gracias a la fuerza del mejor argumento y, en este sentido, esté «racionalmente motivado»). La intuición básica es pues simplemente esto. Las reivindicaciones de validez sólo son tematizadas explícitamente en casos no triviales, pero es precisamente en estos casos donde no hay reglas de verificación a nuestra disposición que nos permitan decidir directamente si se cumplen o no ciertas condiciones de validez. Cuando las reivindicaciones de verdad o justicia se convierten en algo real y obstinadamente problemático, no hay deducciones claras o pruebas decisivas que puedan *imponer* una decisión inmediata a favor o en contra. Se precisa más bien un juego de argumentación en el que las razones motivadoras ocupen el lugar de los contundentes argumentos de que carecemos. Si se acepta esta descripción, resulta evidente que la siguiente dificultad se plantea al intentar explicar qué quiere decir que una expresión es válida. Una expresión es válida cuando se cumplen sus condiciones de validez. De acuerdo con nuestra descripción, el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones de validez, en los casos problemáticos, sólo puede ser asegurado mediante la satisfacción argumentativa de las correspondientes reivindicaciones de validez. La teoría discursiva de la verdad explica, pues, lo que significa satisfacer una reivindicación de validez por medio de un análisis de los presupuestos pragmáticos generales de la consecución de un consenso racionalmente motivado. Esta teoría de la verdad sólo proporciona una explicación del significado, no un criterio. En última instancia, sin embargo, difumina la clara distinción entre significado y criterio.

¿Hasta qué punto es circular la noción de una situación de lenguaje ideal como principio regulador de la verdad? Si definimos la verdad como el consenso que sería conseguido por los hablantes en una situación de lenguaje ideal, ¿cómo podría asegurarse verdaderamente la existencia del mismo tipo de crítica que hizo Hegel a la teoría del conocimiento de Kant y que hizo usted a la de Hegel en Conocimiento e interés humano, la «aporía de conocer antes del conocimiento»¹¹? Tal vez se podría reformular esta crítica de otra manera. ¿Cómo podría ser ideal una situación de lenguaje, a no ser en términos de la simetría y la sinceridad de sus hablantes? Pero aun en el más perfecto de los casos, estas condiciones normalmente sólo podrían producir un acuerdo,

y no una verdad; es decir, haciendo abstracción de la evidencia, las oportunidades nunca pueden ser ideales, ya que dependen siempre, en alguna medida, de unas técnicas históricamente cambiantes. Ni aun la comunidad más impecablemente igualitaria y democrática de la Grecia clásica podría haber descubierto las leyes de la termodinámica sin la óptica moderna. ¿No es éste uno de los límites de cualquier teoría de la verdad basada en el consenso?

La teoría discursiva de la verdad sólo pretende reconstruir un conocimiento intuitivo del significado de las reivindicaciones universales de validez que todo hablante competente tiene a su disposición. El término «situación de lenguaje ideal» es demasiado concreto para designar el conjunto de presupuestos comunicativos generales e inevitables que un sujeto capaz de hablar y de actuar debe considerar cada vez que desea participar seriamente en una argumentación. Al responder a su pregunta anterior, quise recordar el hecho de que este conocimiento intuitivo de los presupuestos universales de la argumentación va unido a la previa comprensión de la verdad proposicional y de la verdad (o rectitud) moral. Por supuesto, sabemos, por la filosofía y por la historia de la ciencia, que estas ideas pueden ser manejadas de formas muy diferentes; lo que cuenta en un momento dado como buena razón, como prueba, como explicación, depende obviamente de las convicciones históricamente cambiantes del entorno, y también, como ustedes sugieren, de las técnicas asociadas para controlar y observar la naturaleza; en resumen, de paradigmas cambiantes. Pero esta dependencia de un paradigma es más fácil de armonizar con una teoría discursiva de la verdad que con una teoría realista. La teoría discursiva sólo es incompatible con un *relativismo* paradigmático como el de Feyerabend, ya que se atiene a la idea de que las ideas de verdad y rectitud que dependen de un paradigma apuntan, sin embargo, hacia un núcleo universal de significado.

¿Cómo concibe usted la relación entre reivindicaciones de verdad filosóficas y reivindicaciones de verdad científicas? ¿Son las reivindicaciones de verdad filosóficas reivindicaciones cognoscitivas? ¿Garantizaría, en última instancia, un consenso racional la verdad de la propia teoría de la verdad basada en el consenso?

Esta es una pregunta interesante, en la que he estado trabajando bastante tiempo, pero todavía no tengo una respuesta concluyente que ofrecer.

¿Cuál es su actitud hacia el psicoanálisis hoy? En Conocimiento e interés humano, lo presenta usted de forma elocuente como el paradigma de una ciencia crítica que sirve a un propósito emancipador. Al mismo tiempo, señala usted que la metapsicología de Freud fue una falsa interpretación errónea de su proyecto, cuya teoría de los instintos nunca ha producido «un solo enunciado que haya sido verificado experimentalmente»¹². Pero, ¿hasta qué punto se aplica esta reserva al cuerpo principal de la propia teoría analítica? Aun dejando a un lado los fallos del psicoanálisis en lo que respecta a las pruebas —ampliamente aireados—, ¿acaso no presenta, de hecho, la teoría especiales dificultades para una teoría de la verdad basada en el consenso, en la medida en que los intercambios entre psicoanalista y psicoanalizado son confidenciales por naturaleza, es decir, no extensibles a otros? Dado el abismo entre la situación «de lenguaje ideal» y la situación «clínica», ¿no hay una tentación, en la exposición que usted hizo originalmente, de recurrir a una justificación esencialmente pragmática de la teoría de Freud, cuya verificación es un cambio en la conducta del paciente, una «continuación del proceso de autoformación» cuya dirección o duración es indeterminable? Esto podría parecer similar al tipo de instrumentalismo deweyano que usted rechaza en la posdata. Pero el porcentaje de éxitos no es muy grande, ni siquiera en estos términos.

En resumen: ¿no es acaso la cientificidad de muchas afirmaciones de Freud, extraídas de una amplia literatura, mucho más cuestionable de lo que usted admitía a finales de los sesenta?

Mi amigo Mitscherlich resumió una vez su experiencia como psicoanalista en los siguientes términos: la terapia no consigue a menudo «nada más que la transformación de la enfermedad en sufrimiento, pero en un sufrimiento que realza la condición del *homo sapiens*, porque no elimina su libertad». Me gustaría utilizar esta afirmación para expresar mi escepticismo acerca de los criterios basados en estadísticas de supuestos éxitos.

Ciertamente, parece ser que la investigación psicoanalítica se encuentra hoy en un marasmo, no sólo en Alemania, sino a escala internacional, y que los jóvenes inteligentes prefieren encaminarse hacia otras disciplinas. Pero, ¿hasta qué punto es esto definitivo? Muchas disciplinas han sobrevivido a períodos de estancamiento similares. Incluso la sociología está pasando en la actualidad por un mal momento. No he hecho ningún trabajo sobre la metapsicología de Freud desde finales de los sesenta. Pero me parece que los intentos de reconciliar a Freud y a Piaget, emprendidos en diversos contextos, son a la vez apasionantes y provechosos. Fuera de esto, mi interpretación de Freud en términos de una teoría de la comunicación me sigue pareciendo plausible. No puedo aceptar del todo su objeción. Nunca he entendido el discurso terapéutico como un discurso o argumentación en el estricto sentido de la palabra, dadas las asimetrías entre doctor y paciente que lleva implícitas. Por supuesto, está animado, por así decirlo, por el fin último de esforzarse en eliminar estas asimetrías. Por estas razones, el paciente adquiere también al final, al menos en el caso ideal, la libertad de decir «sí» y «no» que le inmuniza contra la sugestiva intromisión de las interpretaciones funcionales, que son, en un sentido superficial, una «ayuda para vivir». Lo que se produciría sería, por supuesto, la continuación, hecha posible por una introspección reflexiva, de un proceso de formación del yo interrumpido e inhibido por la neurosis.

Theorie des kommunikativen Handelns contiene una fascinante reconstrucción y crítica de la descripción weberiana de la «racionalización» como un proceso histórico mundial. En él acusa usted a Weber de abandonar su punto de partida —el advenimiento del razonamiento sustantivo con las principales religiones— para centrarse finalmente en la racionalidad formal como la necesaria matriz del capitalismo moderno; y también indica usted las lagunas significativas en esta teoría regional de los orígenes del capitalismo, su omisión del desarrollo de la ciencia moderna y más generalmente de sus portadores durante el Renacimiento. Son demostraciones contundentes. Lo que no está tan claro, sin embargo, es si usted acepta el punto principal de su tesis sobre la importancia de la ética protestante en sí como motor de un mundo racionalizado y por tanto como motor del capitalismo primitivo. Muchos historiadores se han mostrado muy escépticos con respecto a las reivindicaciones weberianas del calvinismo: no hay más que pensar en un repaso crítico a las pruebas como el de Kurt Samuelson en Religión y economía, o en los ensayos de Trever-Roper sobre el erasmismo. ¿Cree usted que estas dudas no cabían en el tratamiento que usted hacía de Weber?

Realmente, dejé a un lado el amplio debate en torno a la cuestión de si el análisis de Weber sobre el capitalismo había demostrado ser correcto, y en qué medida lo había hecho. Las razones de esto fueron, sobre todo, de orden práctico: habría necesitado, si no otro libro, al menos un capítulo adicional. Fue también por estas razones —reducir el peso del libro— por lo que planeé *Theorie des kommunikativen Handelns* como una mezcla de historia de la teoría e investigaciones sistemáticas. En el caso de Weber esto tuvo la ventaja adicional de ilustrar una de mis ideas favoritas. Weber percibe con gran

perspicacia la estrechez de la doctrina calvinista de la gracia y los rasgos represivos de las formas de vida que llevan el sello de esta doctrina, pero se niega a ver en la ética protestante una explotación *unilateral* de un potencial inherente a la ética universalista de la fraternidad. De hecho, es el modelo selectivo de racionalización capitalista en su conjunto el que refleja en la ética protestante.

Por supuesto, no deberíamos permitir que intereses relacionados con la forma de presentación se impusieran; de otro modo, tendríamos que volvernos cínicos en cuestiones de verdad. En la medida en que estoy familiarizado con la literatura, creo que la tesis de Weber debe ser ampliada y revisada con respecto a *otros* estratos sociales que fueron portadores del capitalismo primitivo. Sin embargo, dudo que esta revisión se viera obligada a alterar la correlación general entre una ética de la convicción, un ascetismo mundano y un comportamiento económico.

*De manera más general, ¿cuál es su opinión sobre la posición y la contribución de la historia como disciplina dentro de las ciencias sociales? Usted siempre ha afirmado que «la historia como tal no es capaz de teorizar», porque es siempre una narración retrospectiva, «mientras que los enunciados teóricos permiten derivar predicciones condicionales de acontecimientos que se producirán en el futuro»¹³. Compara usted esta incapacidad para la teoría y la predicción con la competencia de la sociología o de los discursos evolutivos en estas materias. Esta distinción parece muy cercana a la dicotomía neokantiana entre ciencias ideográficas y ciencias nomotéticas. Pero, ¿está justificada? Es difícil comprender por qué historiadores del tipo de Hobsbawm o Taylor han de ser incapaces de hacer pronósticos al menos tan fiables —por no decir más— como los de sociólogos del tipo de Bell o Dahrendorf, a los cuales cita usted como diagnosticadores válidos de su época. ¿Acaso las advertencias acerca de los crecientes peligros de una guerra nuclear, por ejemplo, no tienen un peso especial cuando vienen de un historiador de la autoridad de Edward Thompson? Una vez que se establece una división tan tajante entre «historia» y «teoría», ¿no resultan los efectos sobre el propio materialismo histórico necesariamente paradójicos, en el sentido de que para reconstruirlo como teoría tiene que ser drásticamente reducido como historia, en la versión evolutiva presentada en *Communication and evolution of society*? A primera vista parece más verosímil suponer que los historiadores marxistas (y de otras tendencias) podrían contribuir más a la empresa de reconstruir el materialismo histórico que psicólogos infantiles. ¿No se podría citar aquí *Strukturwandel* en contra de usted mismo, como ejemplo memorable de una obra que es a la vez e indivisiblemente histórica y teórica, y diagnóstica además?*

La capacidad de pronosticar de las ciencias sociales era y es muy limitada, y no podría ser de otra forma, dado el alto nivel de abstracción al que se formulan los enunciados relativos a estados de cosas complejos. Tampoco dudo de que un historiador sagaz y avezado en política, con intuiciones basadas en su experiencia, juzgue a menudo las tendencias evolutivas contemporáneas con una asombrosa nota de seguridad. Si he insistido en la distinción —que no es una distinción de rango— entre historiografía y teoría de las ciencias sociales ha sido por razones metodológicas. Cuando se introduce el punto de vista de la evolución social en la historia sin mediación es fácil ser víctima de formas de pensamiento familiares desde la filosofía de la historia, y, sobre todo, se corre el peligro de pensar en términos de una teleología histórica, a la que los marxistas en particular han sucumbido con bastante frecuencia. Las reflexiones a las que ustedes se refieren pertenecían al contexto de la crítica del objetivismo histórico y de sus desgraciadas consecuencias para la práctica política de los llamados partidos de vanguardia. No me opongo en modo alguno a la necesidad de una investigación histórica guiada por la teoría. Las teorías, y especialmente las de inspiración marxista, sólo demuestran

en última instancia su valor haciendo una contribución a la explicación de procesos históricos concretos. También a mí me parece una lástima que durante las dos últimas décadas (si no se tienen en cuenta algunos escritos políticos breves) mi interés haya sido absorbido exclusivamente por problemas que pueden ser descritos, en un sentido amplio, como problemas de construcción teórica. Debo aceptar la crítica que muy recientemente me ha hecho Tom Bottomore a este respecto.

¿Cuáles son las bases metodológicas de las homologías que usted postula entre desarrollo individual y evolución social? En Theorie des kommunikativen Handelns, usted señala que la mayoría de los adultos en todas las sociedades pueden conseguir los más altos niveles de competencia moral y cognoscitiva, tales como los describen Piaget y Kohlberg ¹⁴. Si esto es cierto, ¿cómo puede la secuencia de maduración que ellos postulan contribuir a explicar las enormes diferencias entre tales sociedades, cuando se las ordena por una escala de racionalización de las visiones del mundo que ofrecen?

Las investigaciones empíricas desmienten rotundamente la idea de que todos los miembros adultos de una sociedad, incluidas las sociedades occidentales modernas, han adquirido la capacidad para realizar operaciones formales (en el sentido de Piaget) o hacer juicios posconvencionales (en el sentido de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg). Lo único que mantengo (por ejemplo, hablando de las sociedades tribales) es que los individuos pueden desarrollar estructuras de conciencia que corresponden a un estadio superior al de las que están ya encarnadas en las instituciones de su sociedad. Son, sobre todo, los sujetos quienes aprenden, mientras que las sociedades sólo pueden dar un paso adelante en el proceso evolutivo de aprendizaje en un sentido metafórico. Las nuevas formas de integración social y las nuevas fuerzas productivas son debidas a la institucionalización y a la explotación de formas de conocimiento que son adquiridas individualmente, pero almacenadas culturalmente y susceptibles de ser transmitidas y, por lo tanto, a la larga, accesibles al colectivo. Sin embargo, el proceso de realización social sólo tiene lugar como consecuencia de unas luchas políticas y unos movimientos sociales, del papel de los grupos marginales innovadores, etc. De este modo, parto del supuesto trivial de que sujetos capaces de hablar y actuar no pueden dejar de aprender, y utilizo esto para respaldar la tesis de que los procesos ontogenéticos de aprendizaje desempeñan funciones que marcan la pauta. Sin embargo, esta tesis es rechazada por Klaus Eder en su *Habilitationsschrift* sobre el desarrollo del Derecho constitucional alemán desde el siglo XVIII. Eder hace remontar los impulsos innovadores a los procesos sociales de aprendizaje en el marco de las nuevas formas de asociación, es decir, a las nuevas experiencias de relaciones sociales igualitarias, inicialmente en las lógicas masónicas, las sociedades secretas y los sindicatos, y posteriormente en las primeras asociaciones socialistas de trabajadores.

¿Puede una teoría de la emancipación evitar la idea de progreso? En Theorie des kommunikativen Handelns, usted subraya que no podemos juzgar el valor de las sociedades por el grado en que sus mundos están racionalizados, aun en el sentido de una racionalidad «amplia», no sólo formal sino esencial, lo que sugiere que todo lo más podemos hablar tal vez de la «salud» o «enfermedad» relativa de un orden social determinado ¹⁵. Anteriormente, sin embargo, en Problema de legitimación, usted criticó el uso de estos términos, tomados de la biología, por ser fundamentalmente inaplicables a la sociedad ¹⁶. ¿Ha cambiado usted definitivamente sus puntos de vista aquí o sigue siendo ésta una cuestión todavía no resuelta del todo para usted? La dificultad parece estar en resistir al triunfalismo histórico —la complacencia ilustrada que devalúa todas las formas sociales anteriores o ajenas— sin caer en un agnosticismo político. Pues si todas las épocas y todas las sociedades están igualmente cercanas a Dios, en el

sentido de Ranke, ¿por qué luchar por una sociedad mejor? Un relativismo cultural coherente ha de ser conservador. ¿En qué dirección cree usted que hay que buscar una solución a estos dilemas?

No he revisado mi concepción a este respecto, pero sigo pensando que las afirmaciones sobre el nivel de desarrollo de una sociedad sólo pueden referirse a dimensiones *individuales* y a estructuras *universales*: a la reflexividad y complejidad de los sistemas sociales, por un lado, y a las fuerzas sociales de producción y a las formas de integración social, por otro. Una sociedad puede ser superior a otra por lo que respecta al nivel de diferenciación de su sistema económico o administrativo o por lo que respecta a sus tecnologías e instituciones legales. Pero de esto no se desprende que tengamos derecho a conceder más valor a esta sociedad *en su conjunto*, como totalidad concreta, como forma de vida. Ustedes saben que, en lo que se refiere al conocimiento objetivador y a la perspectiva moral, represento una postura de universalismo cauteloso. Observamos tendencias hacia una «progresiva» racionalización del mundo, no como ley, por supuesto, sino como hecho histórico. Una y otra vez se han confirmado aquellas tendencias que distinguen a las sociedades modernas de las tradicionales: la creciente reflexividad de la tradición cultural, la universalización de los valores y normas, la liberación de la acción comunicativa con respecto a unos contextos normativos estrictamente limitados, la difusión de unos modelos de socialización que promueven los procesos de individuación y la formación de identidades abstractas, etc. Pero todos estos «avances» afectan a las estructuras universales de los distintos mundos; no dicen nada acerca del valor de una forma concreta de vida. Este valor debe ser medido por otros criterios del tipo de los que buscamos en los juicios clínicos: si las personas en tales o cuales circunstancias llevan una vida «dura», si están enajenadas de sí mismas. Para la intuición de una vida no deteriorada aplicamos varas de medir que, para empezar, sólo son válidas en el contexto de nuestra cultura o plausibles en el contexto de nuestra tradición, y que en cualquier caso no pueden ser generalizadas del mismo modo que los criterios que utilizamos para los procesos de enjuiciamiento implícitos en el aprendizaje: un conocimiento de la naturaleza o unas ideas morales y legales que, pese a depender de un paradigma, no son *totalmente* inconmensurables. Hasta el momento no tengo ni idea de cómo se puede captar teóricamente la esencia universal de estas intuiciones meramente clínicas, si es que la tienen.

¿Puede una moral ilustrada dejar de tomar partido por la felicidad? De no ser así, ¿cuál es la influencia en ella de una ética discursiva? En su ensayo sobre Benjamin, usted evoca la posibilidad de una sociedad liberada de toda dominación y a la vez desprovista de significado: la racionalidad sin felicidad. ¿No debilita tal perspectiva el argumento de que todo enunciado verdadero es «una anticipación de la buena vida»¹⁷? Otra forma de plantear la cuestión sería ésta: usted ha afirmado en una serie de ocasiones que la ética es una «ciencia reconstructiva», mientras que en otras partes define a esta ciencia como aquella que, en contraposición a las teorías críticas, carece de efectos prácticos sobre la conducta de los agentes¹⁸. Pero, ¿no es la idea de una ética post facto una codificación anodina de las prácticas existentes, virtualmente una contradicción?

Permítanme que comience con un par de proposiciones generales. La moral tiene ciertamente que ver con la justicia y también con la prosperidad de los demás, e incluso con la promoción del bienestar general. Pero la felicidad no se puede provocar intencionalmente; sólo puede ser promovida de forma muy indirecta. Prefiero un concepto relativamente estrecho de moral. La moral se refiere a las cuestiones prácticas que pueden ser decididas con razones, a los conflictos de acción que pueden ser resueltos mediante el consenso. Sólo son morales, en el sentido estricto de la palabra, aquellas cuestiones a las que es posible responder de forma significativa desde el punto de vista

kantiano de la universalización, de lo que *todos* pudieran desear. Al mismo tiempo, prefiero un concepto débil de la teoría moral. Ya hemos tocado este aspecto: explicaría y justificaría el punto de vista moral, y nada más. Las teorías deontológicas, cognoscitivas y morales universales que siguen la tradición kantiana son teorías de la justicia, que no responden a la cuestión de la buena vida. Habitualmente se limitan a la cuestión de la *justificación* de las normas y acciones. No tienen respuesta para la pregunta de cómo se pueden *aplicar* unas normas justificadas a unas situaciones específicas y cómo se pueden *realizar* unas ideas morales. En resumen, no habría que pedirle demasiado a la teoría moral: habría que dejar algo para la teoría social y la mayor parte para los propios participantes, ya sea su discurso moral o su sentido común. Este papel de simple abogado fija estrechos límites a la teoría: hay que permitir que todo aquel que asuma un riesgo tome su *propia* decisión. Pero vayamos ahora a sus preguntas.

La teoría moral procede por reconstrucción, es decir, *a posteriori*. Aristóteles tenía razón cuando decía que las intuiciones morales que la teoría clarifica han de ser adquiridas en otra parte, en unos procesos más o menos logrados de socialización. Sin embargo, yo esperaría también de una teoría crítica que realizara la tarea de hacer posibles interpretaciones esclarecedoras de las situaciones que afectan a nuestra autocomprensión y nos orientan en la acción. Sin embargo, hasta la teoría social se excedería en sus competencias si se dedicara a proyectar en el futuro las formas de vida deseables, en lugar de criticar las formas de vida existentes. Con ello se puede remitir a unas represiones históricamente superfluas y a ese potencial sin explotar de racionalidad que puede ser deducido del estado de las fuerzas producidas, del nivel de las ideas legales y morales, del grado de individualización, etc. Por esta razón, la teoría marxista no puede tomar la expresión «socialismo» en el sentido de una forma de vida *concreta*: todo lo más puede indicar las condiciones necesarias en las cuales serían posibles hoy formas de vida emancipadas.

¿Hasta qué punto es el reino de la «naturaleza interior» una fuente de valores potenciales para usted? Ha hablado usted de la necesaria «fluidificación» de esta naturaleza en una sociedad o moral posconvencional, y ha sugerido que el arte tiene un papel especialmente significativo que desempeñar en tales reordenamientos¹⁹. ¿Podría dar algunos ejemplos del tipo de procesos en que ha pensado?

Nuestras necesidades sólo nos son accesibles de una forma interpretada. En otras palabras, el lenguaje forma parte constituyente de unas necesidades a la luz de las cuales se nos descubren situaciones que tienen siempre un matiz afectivo. Hasta ahora la transformación de los lenguajes de evaluación e interpretación de las necesidades ha tenido lugar de un modo natural; el cambio de este vocabulario se ha producido como parte del cambio de las imágenes lingüísticas del mundo. En la medida en que el arte y la literatura se han vuelto diferenciadas en una esfera con una lógica propia, y en este sentido se han vuelto autónomas, se ha establecido una tradición de crítica literaria y artística que se esfuerza por reintegrar las experiencias estéticas innovadoras, en un principio «mudas», al lenguaje ordinario y por consiguiente a la práctica comunicativa de la vida cotidiana. En el contexto de esta crítica, el proceso anteriormente natural y lento de revaluación de nuestro vocabulario evaluativo, de nuestro lenguaje de interpretación de las necesidades y descubrimiento del mundo en general, se hace cada vez más reflexivo: todo el proceso se fluidifica, como si dijéramos, discursivamente. Conceptos centrales, como los de felicidad, dignidad, integridad de la persona, están ahora cambiando ante nuestros propios ojos, podríamos decir. Experiencias difusas, que cristalizan en circunstancias vitales, transformadas, producidas por los cambios en la estructura social, encuentran su expresión esclarecedora, sugestiva, visible, en la productividad cultural. Es esto lo que Castoriadis entiende por «imaginación». Benjamin,

por ejemplo, investigó a través de Baudelaire aquellas experiencias de un mundo metropolitano, movilizado, concentrado, que salieron a la superficie como un nuevo continente en el París del siglo XIX, la «capital del siglo XIX» como él lo llamó. Kafka y Musil pueden ser considerados como ejemplificaciones literarias del espacio experimental de la monarquía imperial y real austríaca, en pleno derrumbamiento, Celan y Beckett de un mundo transformado por Auschwitz. Nuestras reflexiones y nuestros discursos prácticos y morales se ven afectados por esta productividad precisamente en la medida en que sólo a la luz de tales innovaciones podemos decir lo que *realmente* queremos y, sobre todo, lo que *no podemos* querer. Sólo a esta luz encontramos una expresión precisa de nuestros intereses.

En los últimos años ha polemizado usted con las teorías de la posmodernidad, asociándolas a los conceptos de poshistoria y a las implicaciones neoconservadoras del posestructuralismo. No está del todo claro, sin embargo, si pretende usted negar que hay procesos a los que corresponde el concepto de posmodernismo o si simplemente discute la adecuación de tal designación. ¿Negaría usted, por ejemplo, que el paso del esoterismo del alto arte moderno a la fusión de la alta cultura con la cultura de masas es un proceso al que podría aplicarse el término «posmodernismo»? En Theorie des kommunikativen Handelns hace usted alusión a la aparición de un «arte de posvanguardia caracterizado por la simultaneidad entre las tendencias realistas y comprometidas y la auténtica continuación de esa modernidad clásica que derivó el significado distintivo de lo estético»²⁰. ¿Qué ejemplos daría usted de obras de arte que se mueven en esa dirección? Y, dada su renuncia a negar todo potencial de progreso a la cultura de masas, ¿sería la fusión de la alta cultura con la cultura de masas uno de los aspectos de tal «arte de posvanguardia»?

Peter Bürger considera el arte de posvanguardia, el arte tras el fracaso de la revuelta surrealista, la escena contemporánea en general, como un arte caracterizado por la yuxtaposición de estilos, que toma prestados los lenguajes formalistas de la vanguardia o la herencia de estilos y literaturas didáctico-políticos o realistas. Pueden ustedes encontrar ejemplos en el museo de cualquier gran ciudad. Esta yuxtaposición incluye también las formas ahora ritualizadas de la «*Aufhebung*» del arte esotérico. Yo no interpretaría la escena contemporánea, en el sentido del llamado posmodernismo, como un signo del agotamiento o el «fin» del modernismo en el arte y la arquitectura. Nuestra situación da fe más bien de que las experiencias estéticas reveladas por las vanguardias del siglo XX no encuentran el acceso a una práctica cotidiana unilateralmente racionalizada y dan vueltas sin cesar ante sus portales en culturas especialistas en escisiones. Comparto las reservas de Adorno acerca de la cultura de masas, frente a las apresuradas esperanzas de Benjamin en sus «iluminaciones profanas», pero sólo en la medida en que la fusión de la alta cultura con la cultura trivial no ha alcanzado, hasta ahora, su objetivo programático. Un arte de masas desublimizado, en lugar de penetrar de manera transformadora, iluminadora y liberadora en unas formas de vida cosificadas por el capitalismo, deformadas y distorsionadas por el consumismo y la burocracia, contribuye más bien a reforzar estas tendencias. No fueron las esperanzas de los surrealistas las que resultaron falsas, sino su trayectoria —la *Aufhebung* de la ilusión estética— la que resultó contraproducente.

Una de las tendencias significativas en su obra en la última década ha sido la progresiva moderación de las reivindicaciones de una «situación de lenguaje ideal». En Theorie des kommunikativen Handelns admite usted la naturaleza utópica del proyecto de una comunidad de lenguaje ideal, y también ha subrayado que la racionalidad metodológica de una base argumentativa no puede proporcionar la esencia de una forma de vida

como tal. Sin embargo, aun después de haber hecho estas concesiones, podría seguir habiendo una tensión entre el fin último de un consenso universal y el valor humano (y epistemológico) del conflicto y la diversidad. Es a este tipo de tensión al que Mill, cuya concepción de la verdad se asemeja en algunos aspectos a la de usted, se revela más sensible cuando escribe en *Sobre la libertad*: «La pérdida de una ayuda tan importante para la aprehensión inteligente y viva de la verdad como la proporcionada por la necesidad de explicarla o defenderla frente a los adversarios, aunque insuficiente para imponerse, supone una disminución, en modo alguno nimia del beneficio de su reconocimiento universal». En *Strukturwandel* sugiere usted que Mill disimuló su «resignación ante la insolubilidad racional de unos intereses opuestos en la esfera pública» por medio de una «teoría perspectivista del conocimiento»²¹. Sin embargo, como deja claro la cita anterior, esto no es del todo exacto. Mill no duda de que la verdad implica en última instancia un consenso, pero, sin embargo, se da cuenta de que la unanimidad se consigue a costa de otros valores humanos. ¿Admite usted este tipo de consideración?

Creo que sí; después de todo, mis amigos marxistas no están del todo injustificados al acusarme de ser un liberal radical. Sólo puedo repetir lo que ya he subrayado en otra parte: «Nada me pone más nervioso que la imputación de que, dado que la teoría de la acción comunicativa centra su atención en la facticidad social de unas reivindicaciones de validez reconocidas, propone, o al menos sugiere, una sociedad utópica racionalista. No considero la sociedad plenamente transparente —y permítaseme añadir en este contexto: o la sociedad homogeneizada y unificada— como un ideal, ni tampoco quiero sugerir cualquier otro ideal: no era Marx el único al que le asustaban los vestigios del socialismo utópico»²². La situación de lenguaje ideal es, como ya he dicho, una descripción de las condiciones en las cuales las reivindicaciones de la verdad y la rectitud pueden ser satisfechas discursivamente. En la acción comunicativa estas reivindicaciones de validez son en su mayor parte implícitas y no resultan problemáticas, dado que el mundo intersubjetivamente compartido mantiene en reserva un sólido acervo de verdades culturalmente evidentes y de supuestos dados por sentados. El papel coordinador-de-la-acción de los procesos por los que se alcanza la comprensión, los cuales avanzan por medio de la crítica de las reivindicaciones de validez, no entra pues en conflicto con el pluralismo de los intereses y formas de vida. El hecho de que las sociedades modernas estén diferenciadas en cuanto a sus formas de vida y al planteamiento de sus intereses, y de que se estén diferenciando cada vez más, es un hecho que no torna inservible una acción encaminada a alcanzar la comprensión; por supuesto, la necesidad de comprender, que aumenta a medida que avanza el proceso, debe ser satisfecha a niveles de abstracción cada vez más altos. Por esta razón las normas y los principios consensuales se generalizan cada vez más.

Hay otra forma de satisfacer una necesidad de comprensión que va más allá de las posibilidades existentes de llegar a un consenso; esta necesidad desaparece de hecho por completo tan pronto como las esferas socialmente integradas de la acción son orientadas hacia una integración del sistema. Esto fue precisamente lo que sucedió en muchas esferas de la vida como consecuencia de la modernización capitalista. El dinero y el poder —más concretamente, los mercados y las administraciones— asumen las funciones integradoras que previamente desempeñaban los valores y las normas consensuales o incluso los procesos por los que se alcanza la comprensión. Por supuesto mi tesis, que desarrollo en el segundo volumen de *Theorie des kommunikativen Handelns* a través de un análisis de la teoría de los medios de comunicación de Parsons, es la siguiente: aquellas esferas de la acción que están especializadas en la transmisión de la cultura, la integración social o de socialización de los jóvenes, cuentan con el instrumento de la acción comunicativa y no pueden ser integradas a través del dinero o el poder. Una comercialización o una burocratización deben, por consiguiente, generar

—ésta es la tesis— perturbaciones y efectos secundarios patológicos en estas esferas. Pero aquí me estoy desviando de su pregunta sobre los derechos del pluralismo.

En su análisis de las estructuras de dominación típicas del capitalismo, usted subraya la forma en que éstas actúan para obstruir y reprimir los «intereses generalizables», en contraposición a los «intereses particulares» encubiertamente representados por ellas. Usted argumenta que la diferencia entre estos dos tipos de intereses puede ser establecida, en principio, por medio de una especie de experimento mental que usted llama «discurso simulado»²³. ¿Podría dar un ejemplo de cómo funciona? Uno de los problemas que parece suscitar la distinción es el de la situación de los intereses que no son generalizables pero que, sin embargo, son perfectamente válidos —en otras palabras, la cuestión de la heterogeneidad «natural» de los intereses, incluso en una sociedad socialista en la que los diferentes agentes y grupos tendrán una pluralidad de necesidades o exigencias específicas, todas ellas muy legítimas según usted—: intereses regionales, profesionales, generacionales, etc. ¿Cómo arbitraría el modelo de «formación de la voluntad discursiva» propuesto por usted, que parece favorecer el consenso en torno a los intereses generalizables, unas demandas contrapuestas de este tipo?

El modelo de intereses generalizables reprimidos es, por supuesto, sólo una propuesta de crítica de unos intereses que se hacen pasar injustamente por intereses generales. Este objetivo fue también perseguido por Marx en su crítica de las formas legales burguesas, o en su crítica de las doctrinas de Smith y Ricardo. El modelo que propongo está destinado a demostrar la no generalizabilidad de unos intereses supuestamente generales. Por ejemplo, un argumento que suscita esta sospecha aflora hoy con frecuencia en los discursos socialdemócratas: hay que ofrecer este y aquel estímulo a la inversión «a fin de crear puestos de trabajo».

Su objeción va dirigida contra un supuesto que yo no planteo en modo alguno. Yo no parto, en ningún sentido, de la base de que en la totalidad, o incluso en la mayoría, de las decisiones políticas, de las regulaciones legales o administrativas, está en juego un interés general. Las sociedades modernas no son así. A menudo, tal vez en la mayoría de los casos, los asuntos sociales que actualmente son regulados mediante la intervención del Estado sólo afectan a grupos de intereses particulares. En tales casos el discurso moral sólo podría tener como objetivo privar de legitimación al hecho de privilegiar a una de las partes que pretende falsamente representar un interés general. Cuando sólo están en juego intereses particulares los conflictos de acción no pueden ser resueltos, ni siquiera en casos ideales, a través de la argumentación; sólo pueden ser resueltos a través de la negociación y el compromiso. Por supuesto, los *procedimientos* para llegar a un compromiso deben, por su parte, ser juzgados desde un punto de vista normativo. No es de esperar un compromiso justo cuando —por ejemplo— las partes implicadas no disponen de la misma posición de poder o la misma capacidad para amenazar. Pongamos un ejemplo: cuando se plantea la compleja cuestión de los efectos de los derechos constitucionales sobre terceras partes, se tiene derecho a esperar que la sentencia del Tribunal esté respaldada por argumentos; cuando se trata de la cuestión sencilla, pero políticamente delicada, de la ubicación de una central nuclear, lo más que se puede esperar es que se llegue a un compromiso justo. Los compromisos no sólo están muy extendidos como cuestiones prácticas, sino que también, desde el punto de vista normativo, ocupan un lugar en modo alguno desdeñable. Por eso no veo ningún problema en el pluralismo de intereses. Después de todo, es de prever que el pluralismo de las formas de vida y el individualismo de los estilos de vida se incrementen considerablemente en una sociedad que merezca el nombre de socialista.

Una de las novedades del conjunto de su obra, comparada con las formas clásicas del marxismo, es el cambio de la «producción» por la «comunicación» como centro del análisis y como fuente del valor. Al mismo tiempo, usted siempre ha hecho hincapié en que se considera materialista. ¿Podría especificar los términos del materialismo que usted defiende?

Desde mis primeras publicaciones he entendido el «materialismo» en el sentido marxista, como un enfoque teórico que no sólo afirma la dependencia de la superestructura con respecto a la base, del mundo real con respecto a los imperativos del proceso de acumulación, como constante ontológica, por así decirlo, sino que a la vez explica y denuncia esta dependencia como la función latente de una formación social concreta e históricamente transitoria. La transición de un paradigma de la producción a un paradigma de la comunicación, que yo preconizo, no significa, por supuesto, que la teoría crítica de la sociedad no deba seguir recurriendo a los contenidos normativos del modelo expresivista de alienación y reapropiación de unos poderes esenciales. El joven Marx tomó prestado este modelo de la estética de la producción de Kant, Schiller y Hegel. El cambio paradigmático de la actividad intencional por la acción comunicativa no significa, sin embargo, que esté dispuesto u obligado a abandonar la reproducción material del mundo real como punto privilegiado de referencia para el análisis. Continúo explicando el modelo selectivo de modernización capitalista, y las patologías correspondientes a un mundo racionalizado unilateralmente, en términos de un proceso de acumulación capitalista que está en buena medida desconectado de las explicaciones orientadas hacia el valor de uso.

¿Hasta qué punto la aparición de la ecología, como teoría y como movimiento, modifica su tesis anterior de que «sólo hay una actitud teóricamente fructífera hacia la naturaleza»: la basada en el interés por el control técnico?

El conocimiento de los ciclos ecológicos, de los biotopos, de los sistemas del medio ambiente humano, ha planteado ciertamente nuevos temas, nuevas cuestiones, tal vez incluso nuevas disciplinas. Por lo que puedo decir, sin embargo, desde el punto de vista metodológico estas investigaciones de inspiración ecológica se mueven totalmente dentro del marco heredado. Hasta ahora, nada parece sugerir que se puedan desarrollar unas ciencias naturales alternativas con una actitud no objetivadora, por ejemplo, con la actitud de un interlocutor en un proceso de comunicación, que se puedan desarrollar teorías en la tradición de la filosofía de la naturaleza romántica o alquimista.

II

¿Cuál es el balance de sus opiniones sobre la evolución política que usted ha presentado y vivido, desde la década de 1950 hasta la de 1980, en Occidente? La conclusión de Strukturwandel, su primer libro importante, encierra una cierta ambigüedad. El tono general de su descripción del «cambio estructural» en la esfera pública en los países capitalistas avanzados era profundamente pesimista: hacía usted un inolvidable retrato de una vida pública degradada, en la que la esencia de la democracia liberal se vacía en una combinación de manipulación plebiscitaria y apatía privatizada a medida que se desintegran las colectividades de ciudadanos. Sin embargo, también evocaba usted la posibilidad (más brevemente) de una «restauración» de la esfera pública, mediante la democratización de los partidos, las asociaciones voluntarias y los medios de comunicación, pero sin dar muchos motivos de esperanza de que esto ocurriera. Volviendo la mirada a un cuarto de siglo, ¿piensa usted que las cosas desde entonces han empeorado, han mejorado o han seguido siendo más o menos iguales?

Refundir las experiencias vitales intuitivas de un contemporáneo político en forma de cálculos de pérdidas y ganancias es una empresa peligrosa. Por otro lado, debo admitir que una teoría de la sociedad propiamente dicha, y un diagnóstico del presente basado en ella, no tiene otro sentido que el de agudizar nuestras percepciones del potencial ambivalente de las tendencias contemporáneas. Permítanme que trate de ofrecer una descripción provisional y esquemática desde la perspectiva de la República Federal. Por una parte, tengo la impresión de que las tendencias a la desintegración de una esfera pública de tipo liberal —una formación de la opinión en un estilo discursivo mediatizado por la lectura, el razonamiento, la información— se han intensificado desde finales de la década de 1950. Lo atestigua el modo de funcionamiento de los medios de comunicación electrónicos, y, sobre todo, la centralización de las organizaciones que dan prioridad a los flujos verticales y en un solo sentido de una información de segunda y tercera mano, consumida de forma privada. Estamos siendo testigos de una creciente sustitución de las palabras por imágenes y también de esa mezcolanza de categorías como la publicidad, la política, el espectáculo, la información, que ya fue criticada por Adorno. La crítica de Adorno a la cultura de masas debería ser ampliada y escrita de nuevo. El carácter de escaparate del centro de nuestras grandes ciudades ha absorbido ya, de hecho, elementos del surrealismo de una forma irónica, promoviendo el reencantamiento con luces de neón de una realidad desrealizada. Lo banal se confunde con lo irreal, costumbres helenísticamente desdiferenciadas se mezclan con el estilo de la alta tecnología y las ruinas de las culturas populares con una extravagancia sumamente personalizada y pulida por el consumismo. La basura de la civilización está camuflada con plástico. La esencia de lo universal se disuelve en un narcisismo que ha perdido todo lo que tenía de individual para convertirse en un estereotipo. Como ya he sugerido, Derrida y su ufano desconstruccionismo dan la única respuesta apropiada a este surrealismo realmente existente. A esto se une, de forma algo más seria, otra tendencia que está también muy avanzada: una manipulación de la lealtad de las masas perfeccionada, presentada como respetable y administrada por unos partidos políticos que han emigrado del mundo real al sistema político. En una etapa anterior todavía se decía que los partidos y sus exponentes buscaban la *aclamación* del público votante. Esta es una expresión conmovedoramente anticuada para referirse a unas actuaciones teatrales desprovistas de toda espontaneidad, que se desarrollan de acuerdo con un guión y lo ponen todo, literalmente, bajo control. En cualquier caso, *éste* fue el nuevo carácter que asumieron las últimas elecciones presidenciales americanas, con un actor que interpretaba el papel de un presidente cuyo cargo se limita cada vez más a presentar este cargo ante el mundo exterior como una realidad ficticia. La realidad está superando a la descripción que de ella da la teoría de los sistemas de Luhmann: el sistema político *extrae* de la esfera pública la legitimación que necesita. Esta es una de las caras de la moneda.

La otra es que las reacciones a este vaciamiento de la esfera pública-política se están haciendo más fuertes. Después de todo, nuestras observaciones sobre las dificultades con que tropiezan las medidas de legitimación, y los lamentos paralelos de los neoconservadores acerca de la «ingobernabilidad», no están del todo equivocados. Escribí *Strukturwandel* antes del movimiento en protesta de los años sesenta, y lo que es más, sin haberlo previsto de modo alguno. En la República Federal, en el momento actual, hay crecientes indicios de resistencias subculturales, localmente fragmentadas, de movimientos defensivos de «base», así como de espectaculares manifestaciones de masas que estallan bruscamente y luego se apagan. Las manifestaciones pacifistas del otoño de 1983, inmediatamente anteriores a la instalación de los misiles, alcanzaron dimensiones previamente inimaginables en la historia de la República Federal; también tuvieron un tono hasta entonces desconocido de, digamos, agresividad disciplinada. La sensibilidad ante las amenazas a la protección de la información personal, que se ma-

nifestó en la resistencia, finalmente triunfante, al censo proyectado, a la introducción de un carnet de identidad «a prueba de falsificaciones», etc., es otro síntoma, ciertamente menos espectacular. La comprobación de la erosión de los lazos de partido tradicionales y del creciente número de votos flotantes también entran dentro de este contexto. No son los éxitos de los *verdes* el único signo de lo que aquí llamamos «displacencia hacia los partidos». Parece que el terreno, en general, se está volviendo resbaladizo. Están surgiendo potenciales más o menos imprescindibles de reacción, que son movilizados por acontecimientos fortuitos.

Estas dos tendencias contrarias, de las que he ofrecido unos cuantos ejemplos, dan fe de una polarización de la esfera pública en unos sectores oficiales, desecados, dirigidos desde arriba, y en unas subculturas locales difíciles de definir en términos socio-estructurales, relacionadas en parte con la antigua clase media y en parte alienadas con el «posmaterialismo», pero en cualquier caso resistentes, que se han convertido en el núcleo de unas contraesferas públicas autónomas: los viejos y los jóvenes, las feministas y los homosexuales, los minusválidos y los parados activos, los profesionales radicales, las amas de casa suburbanas, etcétera.

En su obra posterior a Strukturwandel surge lo que podríamos llamar un contra-tema: el de una progresiva «crisis de legitimación» del orden reinante, con una decadencia, no de la esfera pública, sino del «programa» destinado a reemplazarlo, del privatismo civil y de la «ideología del éxito». Esta lectura más optimista de la época fue desarrollada en Ciencia y técnica como «ideología» y Problemas de legitimación. ¿Cómo ve hoy este diagnóstico, desde la perspectiva de la larga recesión y la ola neoconservadora que la ha acompañado?

Digamos que en aquella época estaba ya reaccionando a las experiencias del movimiento de protesta estudiantil.

En el ensayo central de Towards a national society, usted mantenía que la ideología dominante en Occidente toma su léxico de la «tecnología y la ciencia», que el orden sociopolítico está legitimado fundamentalmente en nombre de la eficiencia y la necesidad tecnocráticas²⁴. ¿No se podría argumentar que es más bien la «democracia» la que constituye el código legitimador básico del capitalismo occidental? Si analizamos los discursos de Reagan, Thatcher, Köhl, o Mitterrand, ¿no encontraríamos que si bien el discurso sobre «la eficiencia y la prosperidad» es muy importante, está estructuralmente subordinado al de «la libertad y la democracia»? ¿Cómo si no se justifican el estacionamiento de misiles, el retroceso de los programas de bienestar social, la represión de los sindicatos?

Se podría, sin embargo, defender la tesis de que Reagan ganó las últimas elecciones como orquestador de un sentimiento de «eficiencia y prosperidad». Por otro lado, es sin duda cierto que hoy una práctica tecnocrática continuada, bajo la bandera de unas actitudes y consignas neoconservadoras, no se justifica ya con ideologías tecnocráticas. La tecnología y la ciencia, como programa ideológico, han perdido buena parte de su eficacia pública. Mi análisis de 1968 no puede ser aplicado hoy sin más: comencé a complementarlo ya en 1973, en *Problemas de legitimación*. Y en *Theorie des kommunikativen Handelns* exploro la «crisis del Estado del bienestar» que se ha producido mientras tanto. El proyecto del Estado del bienestar se ha vuelto también problemático en la conciencia pública, en la medida en que los medios burocráticos con los que el Estado intervencionista pretendía llevar a cabo la «contención social del capitalismo» han perdido su inocencia. Ya no es sólo la monetarización de la fuerza de trabajo, sino también la burocratización del mundo real lo que es experimentado por amplios

sectores de la población como un peligro. El poder político-administrativo ha perdido la apariencia de neutralidad para los clientes de las burocracias del Estado del bienestar. Estas nuevas actitudes son explotadas por el neoconservadurismo a fin de vender la conocida política de traspasar la carga de los problemas del Estado al mercado, política que, bien lo sabe Dios, no tiene nada que ver con la democratización, que más bien desconecta la actitud estatal de la presión en favor de la legitimación procedente de la esfera pública, y entiende por «libertad» no la autonomía del mundo real, sino una carta blanca para los inversores privados.

¿Cómo compararía usted los «nuevos movimientos sociales» de los años ochenta con el movimiento estudiantil de los sesenta, en lo que respecta a la orientación, duración y probable efecto de sus protestas contra el orden establecido?

Una vez más, sólo puedo intentar responder a esto haciendo referencia a la República Federal. En unas condiciones de prosperidad, con una falsa idea de la situación tomada en buena medida del marxismo ortodoxo y en el reducido campo de las universidades, nuestro movimiento estudiantil reflejaba ya, y en parte llevaba a la práctica, en forma de revolución cultural, un cambio de perspectiva que ha seguido manifestándose en los nuevos movimientos sociales desde mediados de la década de 1970. Estos movimientos, en unas condiciones de recesión persistente y desempleo creciente, tienen una postura más defensiva, están menos articulados de lo que los estudiantes lo estuvieron en su día; tal vez sean más realistas en su interpretación de la situación; sobre todo, proceden de áreas sociales más amplias. Por ejemplo, las diferencias entre los trabajadores jóvenes, los aprendices, los estudiantes y los parados se han difuminado en el marco de una cultura juvenil cuya unidad no es simplemente una cuestión de imagen y apariencias. Es cierto que esta base social más amplia no indica un derecho de veto fuertemente arraigado en las estructuras sociales. De momento, esta alianza «antiproductivista» está demostrando tener una cierta contagiosidad sociopsicológica, pero no ocupa terrenos funcionales vitales para la sociedad industrial. Sin embargo, las políticas neoconservadoras son la mejor forma de asegurar un mayor influjo a esta alianza. Aun si se producen imprevisibles altibajos en la manifestación de esta capacidad de resistencia, considero falso el pronóstico de que la ira popular se desvanecerá muy pronto. Es una ira que está generada por la propia estructura.

¿Continúa usted pensando que para los verdes fue un error formar un partido político en Alemania Occidental y participar en la competición electoral? ¿Cómo valora usted ahora sus perspectivas?

Tal vez mi preocupación en aquella época fuera pusilánime, pero no estaba injustificada. La previsible lucha entre el ala fundamentalista y el ala reformista puede aún destruir el partido de los *verdes*. El experimento tiene probabilidades de éxito sólo en la medida en que esta tensión dialéctica no se descargue de forma unilateral. Sobre todo a nivel interno, en la relación entre ellos, los *verdes* deben mostrarse más capaces de transigir. Porque éste es precisamente el problema que habría que resolver: ¿cómo asegurar la relativa capacidad de acción e incluso la existencia misma de un partido político que debe resolver en su seno la contradicción entre movimiento social y sistema político? Permítanme que haga una breve digresión a fin de clarificar esta contradicción.

Recientemente, la República Federal se ha visto afligida por el escándalo financiero de la compañía Flick. El escándalo no consiste en la corrupción de miembros del Parlamento, dirigentes de partidos y ministros que se embolsan contribuciones ilegales para sus partidos a cambio de favorecer los intereses del gran capital. La influencia

privilegiada de los dueños del capital en el aparato de Estado está asegurada de tal forma, a través de conexiones y estructuras funcionales, que estos métodos arriesgados y anticuados de corromper a individuos aislados no son en absoluto necesarios. El método Flick es atípico y está pasado de moda. Sin embargo, el procedimiento revela algo más, algo que, de hecho, es muy trivial: los partidos políticos no son ya capaces de financiarse con las cuotas de sus miembros y, sin embargo, sólo se les permite cubrir la mitad de sus necesidades con subvenciones, ya que de otra manera se verían obligados a admitir públicamente hasta qué punto están ya divorciados de su base y se han vuelto autónomos como órganos del Estado. Así pues, juzgado por nuestra visión normativa, el escándalo real, si es que todavía es considerado como un escándalo, consiste en lo siguiente: los partidos intervienen en el proceso de legitimación, con la conciencia tranquila, casi exclusivamente desde arriba, es decir, desde la perspectiva de una parte integrante del aparato de Estado. En cualquier caso, actúan en tan escasa medida desde la perspectiva de meros mediadores en el proceso de formación de la opinión pública, en el lugar de reproducirse fuera de ésta.

De acuerdo con sus propias declaraciones, los *verdes* no desean ser ni convertirse en un partido de este tipo. Por otro lado, tampoco deberían seguir la estela de las múltiples contraesferas públicas locales y subculturales. Como partido, deben hacer pasar el particularismo seguro de sí mismo de unos disidentes indiferentes a las normas de la igualdad cívica por el filtro de la generalización, de la igual consideración de todos los intereses. Tal vez este experimento debería haberse iniciado una vez que la capacidad de auto-organización se hubiera desarrollado más fuertemente en las diferentes esferas públicas autónomas. Tal vez el experimento salga bien de todos modos: ya está teniendo efectos saludables, por ejemplo, sobre la vida interna del SPD, sin el cual, si somos realistas, no se puede cambiar nada.

¿Cómo ve usted la cuestión nacional alemana y la relación entre las dos Alemanias? ¿Puede plantearse hoy desde la izquierda el tema de la «reunificación» o, si no, el de la «confederación»?

Willy Brandt acaba de pronunciar un impresionante discurso sobre este tema en Munich. Su contenido era: la cuestión alemana ya está cerrada. Considero que no tiene sentido hablar de un nuevo nacionalismo alemán: se alimenta más de las invenciones del *New York Times* que de los sentimientos aquí en Alemania. La nostalgia de muchos intelectuales por una identidad alemana perdida es tan *kitsch* como mendaz es la retórica de los oradores del CSU sobre la reunificación. Hace mucho tiempo, Kurt Schumacher, a su regreso de los campos de concentración, estaba obsesionado por la idea de que había cometido un error al término de la República de Weimar. Por esta razón deseaba, como oponente de Adenauer, incorporar a título preventivo unos sentimientos de derecha que ya no existían. La izquierda alemana occidental no debería repetir hoy el error de Schumacher.

En Strukturwandel usted señala que Kant no proporciona ninguna teoría sobre cómo hacerse con el poder político capaz de institucionalizar la unidad moral de una sociedad civil libre; en otras palabras, que ignora (como dice usted en otro lugar del libro) «la dura lucha contra el antiguo poder» del absolutismo, que fue el precio de la victoria de una legislatura soberana²⁵. Mutatis mutandis, ¿podría decirse algo similar, en todo caso hasta ahora, de su propia teoría de la «comunicación libre de dominación»? ¿Cómo se ha de transformar a su vez el poder que surgió de las revoluciones burguesas, dejando a un lado a Kant? ¿A través de qué tipo de luchas materiales?

Son los que se meten en *discusiones* los que presuponen una «liberación de la dominación». Sería una falacia concretista imaginar que una sociedad emancipada podría consistir solamente en «comunicación libre de dominación». La gente que me atribuye estas palabras se lo pone demasiado fácil. La puesta en libertad de un potencial de razón implícito en la acción comunicativa es un proceso histórico mundial; en la época actual, lleva a una racionalización del mundo, a la diferenciación de sus estructuras simbólicas, que se expresa, sobre todo, en la creciente reflexividad de las tradiciones culturales, en unos procesos de individualización, en la generalización de los valores, en el creciente predominio de unas normas más abstractas y más universales, etc. Son tendencias que en sí mismas no implican algo bueno, pero que, no obstante, indican que el consenso interesado en que se apoya el mundo se está derrumbando, que está creciendo el número de casos en los que la interacción debe ser coordinada a través de un consenso alcanzado por los propios participantes. De no ser así, tendrían que ser transpuestas a medios tales como el dinero o el poder, o controladas por un pseudoconsenso. Este, a su vez, es cada vez más difícil de conseguir a través de las ideologías; se logra más bien a través de una fragmentación de la conciencia y a través de unas barreras a la comunicación que distorsionan la práctica diaria de formas muy discretas.

Traigo a colación esas consideraciones sociológicas, que son desarrolladas en el segundo volumen de *Theorie des kommunikativen Handelns*, a fin de dejar claro que no soy un filósofo trascendentalista. No hablaría de «racionalización comunicativa» si en los últimos doscientos años de la historia europea y americana, en los últimos cuarenta años de los movimientos de liberación nacional, y a pesar de todas las catástrofes, no fuera también reconocible una muestra de «razón existente», como diría Hegel, en los movimientos burgueses de emancipación no menos que en el movimiento obrero, en el feminismo actual, en las rebeliones culturales, en las formas pacifistas y ecologistas de resistencia, etc. Hay que tener también presentes las transformaciones, bastante más subterráneas, de los modelos de socialización, de las escalas de valores, por ejemplo, de la difusión de las necesidades expresivas y las sensibilidades morales, o de la revolución de los papeles sexuales, del significado subjetivo alterado del trabajo asalariado, etc. Estos desplazamientos a largo plazo en la economía de motivaciones y actitudes de la población no están flotando en el aire. Desde un punto de vista estructural, se basan, sobre todo, en el hecho de que la segunda revolución industrial aumenta la productividad del trabajo a un ritmo endiablado, mientras que reduce drásticamente el tiempo de trabajo socialmente necesario; por esta razón exigirá cada vez más esfuerzos absurdos, como afirman Gorz, Offe y Negt, ampliando una antigua idea de Marcuse, mantener en reserva a la creciente masa de los excluidos y marginados para el papel de trabajador de dedicación plena erigido en norma por el mercado de trabajo capitalista, en lugar de disociar la renta y la seguridad social de la ocupación y acabar con el fetichismo del mercado de trabajo.

La introducción a Theorie und Praxis contrapone la «acción comunicativa» a la «acción estratégica»: el arte de la persuasión al de la maniobra o la coacción. La distinción política es muy similar a la dicotomía de Gramsci entre «dirección» y «dominación». Su pronunciamiento por el ejercicio más pleno posible de la primera, en cuanto principio guía de la práctica política, ha sido siempre inequívoco. ¿Piensa usted que hay razones para suponer que existen límites a la fuerza persuasiva de la acción comunicativa en el capitalismo avanzado, que hay unas posibles o probables fronteras de ilustración, por así decirlo? ¿O se inclina usted por la tesis de que, en principio, una transición al socialismo podría contar con el asentimiento democrático incluso de aquellos a los que privara de su capital?

¡Ustedes deben estar tratando de tomarme el pelo!

Por lo general, usted se ha resistido a un cambio de las teorías procesales por las teorías institucionales de la democracia, criticando, por ejemplo, a los defensores de la «democracia asamblearia» por confundir ambas cosas. Pero, ¿no es esencial —e incluso urgente— este cambio si se quiere que el socialismo sea un proyecto creíble en Occidente? Después de todo, si usted pudiera describir la transformación de la esfera pública burguesa dentro del capitalismo, de una mayor sustancia y vitalidad a una menor, como un «cambio estructural», ¿no sería evidente que las transformaciones que conlleva ir más allá del capitalismo deben implicar cambios «estructurales» mucho mayores en la democracia, que sólo pueden ser especificados institucionalmente?

Creo que hay que distinguir entre la idea de una justificación democrática del poder político y la institucionalización de este nivel de justificación, que cambia con las circunstancias. Una cosa es la idea de un proceso de formación de la voluntad en el que todos los interesados participen libre e igualmente, y otra muy distinta la organización de los discursos y las deliberaciones sobre la formación de la opinión y la voluntad, que estaría más cerca de esta idea en determinadas circunstancias. Por ejemplo, sólo se puede criticar adecuadamente el parlamentarismo burgués, en sus diferentes fases y contextos nacionales, si se separan estas dos cosas. Pero de esto no se deduce, como ustedes parecen sugerir, que la transición al socialismo, como quiera que pueda ser hoy imaginada en sociedades como las nuestras, cambiaría algo en las instituciones políticas existentes o debería cambiar algo. Estoy convencido de que la competencia entre los partidos, que se han hecho cada vez más independientes de sus bases y se dedican a buscar la legitimación de una forma esencialmente manipuladora, debe cambiar. Sospecho que habría que introducir *otro* tipo de separación de poderes. Por supuesto, creo también que tales transformaciones de las instituciones políticas sólo deberían ser llevadas a cabo a la luz de los principios constitucionales hoy reconocidos, inspirándose en el contenido universalista de estos principios. Todo lo que hay de lamentable en el llamado socialismo real puede ser básicamente atribuido a un temerario desprecio por los principios del Estado constitucional, como si estos principios no pertenecieran también y primordialmente a aquellas fuerzas productivas, a aquellos resultados de los movimientos de emancipación burgueses, que hicieron posible el socialismo en primer lugar.

En el segundo volumen de Theorie des kommunikativen Handelns, sugiere usted que «en el socialismo burocrático, las tendencias a la crisis son el resultado de unos mecanismos de autobloqueo de la planificación administrativa, así como, por otra parte, de unas interrupciones endógenas del proceso de acumulación»²⁶. Dadas estas limitaciones formales tanto del mercado como de la planificación, ¿cómo concibe usted el funcionamiento de la economía en una sociedad socialista democrática?

¿Cómo puedo contestar a eso en unas pocas frases? Después de cincuenta o sesenta años de desarrollo soviético ruso, nadie puede dejar de ver hoy que Max Weber tenía razón; en otras palabras, que la abolición de la propiedad privada de los medios de producción en modo alguno acaba con las estructuras de clase como tales. Personalmente, ya no creo que un sistema económico diferenciado pueda ser transformado desde dentro de acuerdo con las simples recetas de la autogestión de los trabajadores. El problema parece ser más bien el de cómo desarrollar lo suficiente la capacidad de auto-organización en unas esferas públicas autónomas como para que los procesos de formación de la voluntad, con un objetivo determinado, de un mundo orientado hacia el valor de uso, mantenga a raya a los imperativos del sistema económico y del aparato de Estado y haga que *ambos* subsistemas, controlados por los medios de comunicación, pasen a depender de los imperativos del mundo real. No puedo imaginar que esto sea posible sin la gradual abolición del mercado de trabajo capitalista y sin la implantación

democrática radical de unos partidos políticos en sus esferas públicas. Surge entonces la cuestión secundaria, aunque en modo alguno trivial, de cómo coordinar, en estas condiciones iniciales alteradas, la planificación y el mercado, cómo modificar el peso relativo de cada uno en la interacción entre Estado y economía. Me sería difícil pronosticarlo, aun si tuviera un mayor conocimiento de la economía. Pues toda intervención en unas estructuras sociales complejas tiene unas consecuencias tan imprevisibles que los procesos de reforma sólo pueden ser defendidos como escrupulosos procesos de tanteo, bajo el cuidadoso control de quienes tienen que sufrir sus consecuencias.

La tradición de la Escuela de Francfort ha centrado, por lo general, sus análisis en las sociedades capitalistas más avanzadas, a expensas, desde un punto de vista comparativo, de cualquier consideración del capitalismo como sistema global. En su opinión, ¿tienen las concepciones del socialismo desarrolladas en el curso de las luchas antiimperialistas y anticapitalistas del Tercer Mundo alguna relación con las tareas de un socialismo democrático en el mundo capitalista avanzado? Y, a la inversa, ¿se puede sacar alguna lección para las fuerzas socialistas en el Tercer Mundo del análisis que usted hace del capitalismo avanzado?

Siento la tentación de decir «no» en ambos casos. Soy consciente de que ésta es una visión eurocéntricamente limitada. Preferiría dejar este tema.

Tiene algún significado la adaptación de su programa inicial de una «teoría con fines prácticos» a su actual descripción de su trabajo como una contribución al «autoconocimiento de la modernidad», o simplemente refleja las variaciones en el tipo de trabajo que ha producido usted a lo largo de los años? ¿Quiénes piensa usted que son los destinatarios de sus sucesivos libros, que presumiblemente han cambiado también? ¿Se siente usted más cerca o más lejos de sus lectores hoy que en los años sesenta?

Todo el mundo cambia durante el ciclo de su historia; sin embargo, yo soy, en todo caso, uno de esos tipos testarudos a quienes se atribuye una rígida identidad burguesa. Por esta razón, no creo que haya cambiado en mis orientaciones fundamentales más de lo necesario para permanecer fiel a ellas en unas circunstancias históricas alteradas. Trabajo como filósofo y sociólogo, y, por consiguiente, la gente a la que va destinado mi trabajo ocupa, sobre todo, posiciones en el sistema científico y educativo; de vez en cuando me intereso por el periodismo político y escribo en diarios y semanarios, o en las llamadas publicaciones culturales. En ambos casos, tienden a ser los intelectuales de izquierda quienes se interesan por lo que escribo, y por supuesto los especialistas. No creo ser vanguardista ni sueño con un sujeto revolucionario. En este momento estoy más alejado de las actitudes de los jóvenes políticamente activos, incluidos muchos estudiantes, de lo que lo estuve en un período anterior. En mi opinión, se han vuelto menos políticos, más conservadores en sus formas de pensar, menos teóricos y al mismo tiempo más abiertos a la herencia —tan dudosa en nuestro país— del romanticismo político, del conservadurismo juvenil, etc. Pero les ruego que consideren más bien estos prejuicios como los que habitualmente caracterizan al proceso general de envejecimiento de la nueva izquierda: no disminuyen mi placer ilimitado por discutir con mis estudiantes y por las discusiones en general.

¿Podría la izquierda esperar de usted un tratamiento más directo del socialismo, noción que sigue siendo a la vez relativamente marginal en sus escritos (en el sentido de que no es estudiada nunca por sí misma) y, sin embargo, probablemente central para su objetivo general? ¿No está usted en cierto modo, lógicamente, comprometido con una exposición programática del orden social que su obra intenta hacer posible, más

allá de su diagnóstico del orden actual que usted rechaza? ¿No se podría contar con que un día produjera usted el equivalente para nosotros de La Constitución de Alemania de Hegel, o La paz perpetua de Kant, un cruce entre las dos que nos diera hoy un esquema de un socialismo democrático en una Europa desarmada? ¿Acaso no ha incluido tradicionalmente la más alta vocación filosófica este tipo de pensamiento concreto?

Los ejemplos son demasiado imponentes, pero debo tomar muy en serio sus admoniciones. Yo no debería hablar de socialismo sólo en las entrevistas, aun cuando por lo demás apenas hay nadie que lo siga haciendo. En un discurso que pronunciaré ante diputados del Parlamento español la próxima semana ²⁷, verá usted que, además de las cosas por las que me pagan, reflexiono también sobre cuestiones normativas, sobre cuestiones de principios políticos y prácticos.

¿Podría usted pensar en reasumir un papel político más activo, como el que tenía en los tiempos del «Sozialistischer Bund», a finales de los cincuenta, en otras circunstancias?

Si lo descartara no sería la persona que deseo ser.

P. A. y P. D.
© *New Left Review*
Traducción: Pilar López

«Jürgen Habermas: a philosophico-political profile», entrevista de P. A. y P. D. publicada en *New Left Review*, 151, págs. 75-105. Traducción de Pilar López.

¹ En *Habermas and modernity*, Oxford, en Prensa.

² «Does philosophy still have a purpose?», en *Philosophical-political profiles*, Londres, 1983, pág. 8.

³ *Theorie des kommunikativen Handelns*, II, Francfort, 1981, pág. 491.

⁴ *Aesthetic theory*, Londres, 1984, págs. 69-70 (*Teoría estética*, Madrid, Taurus, 1980).

⁵ «Truth, illusion and reconciliation», en L. V. Friedeburg y J. Habermas, comps., *Adorno-Konferenz 1983*, Francfort, 1983, págs. 138 y ss.

⁶ *Ibid.*, pág. 150.

⁷ «Modernity versus post-modernity», *New German Critique*, 22, invierno de 1981.

⁸ *Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln*, Francfort, 1983, págs. 53-125.

⁹ *Philosophical-political profiles*, *ob. cit.*, págs. 1-2.

¹⁰ *Knowledge and human interests*, Londres, 1978, págs. 360-66 (*Conocimiento e interés*, Madrid, Taurus, 1982).

¹¹ *Ibid.*, pág. 21.

¹² *Ibid.*, pág. 253.

¹³ *Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus*, Francfort, 1976, págs. 204-207 (*La reconstrucción del materialismo histórico*, Madrid, Taurus, 1983).

¹⁴ *Theory of communicative action*, I, Londres, 1984, pág. 44.

¹⁵ *Ibid.*, pág. 73.

¹⁶ *Legitimation crisis*, Londres, 1976, págs. 175-77 (*Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Buenos Aires, Amorrortu, 1975).

¹⁷ *Philosophical-political profiles*, *ob. cit.*, págs. 156-58; *Knowledge and human interests*, *ob. cit.*, página 314.

¹⁸ *Knowledge and human interests*, *ob. cit.*, pág. 378; *Theory and practice*, Londres, 1974, pág. 23.

¹⁹ *Communication and the evolution of society*, Londres, 1979, pág. 93.

²⁰ *Theorie des kommunikativen Handelns*, II, *ob. cit.*, pág. 586.

²¹ *On liberty*, Harmondsworth, 1982, pág. 106 (*Sobre la libertad*, Madrid, Alianza, 4.ª ed., 1984); *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, Neuwied, 1962, pág. 150.

²² «A reply to my critics», en J. Thompson y D. Held, comps., *Habermas - critical debates*, Londres, 1982, pág. 235.

²³ *Legitimation crisis*, *ob. cit.*, pág. 117.

²⁴ «Technology and science as “ideology”», en *Towards a rational society*, Londres, 1971, págs. 81-122 (*Ciencia y técnica como «ideología»*, Madrid, Tecnos, 1984).

²⁵ *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, *ob. cit.*, págs. 124-25, 96-97.

²⁶ *Theorie des kommunikativen Handelns*, II, *ob. cit.*, pág. 565.

²⁷ Véase «Die neue Unübersichtlichkeit», *Merkur*, enero de 1985.

EL PAPEL INTERNACIONAL DE LA IZQUIERDA EUROPEA

Manuel Azcárate

análisis y debate



Mi tesis principal es que la construcción de una Europa política, con capacidad para tener una actitud propia en las grandes cuestiones mundiales, se ha convertido en una necesidad objetiva para la izquierda europea.

Es cierto que, en la época de posguerra, la democracia cristiana y fuerzas de derecha han desempeñado un papel importante en los primeros pasos dados entonces para superar rivalidades seculares y colocar las primeras piedras de lo que iba a ser, con el correr del tiempo, la Comunidad Económica Europea. Pero en la actualidad el problema que hace falta afrontar no es el de *completar* una obra que ya está realizada en lo fundamental; no se trata de añadir a una Europa económica que marcha bien el sombrero de una Europa política; ni dar mayor solidez a un buen sistema de seguridad, basado en la OTAN, vigorizando su pilar europeo. Estamos ante necesidades radicalmente diferentes.

Hace falta hacer frente a una crisis muy profunda de las estructuras, orgánicas e incluso mentales, que han funcionado en las últimas décadas. El modelo de desarrollo económico de posguerra, basado en el *keynesianismo*, se ha agotado. En realidad, el proceso incierto de recuperación de la economía capitalista mundial tiende a marginar a Europa. La amenaza de que quedemos descolgados del salto gigantesco, e imprevisible, que está dando el desarrollo tecnológico es real. Ante las proporciones aterradoras que alcanza el desempleo y el sacrificio de conquistas sociales que parecían ya intangibles, surge la duda sobre la posibilidad de mantener vivo el ideal de un progreso humano, idea que ha sido uno de los fundamentos de la cultura europea y la razón de ser de la izquierda, por encima de sus diversas concepciones o estrategias.

En el terreno de la seguridad, el sistema bipolar, con los dos bloques militares, presenta signos de agotamiento: la búsqueda por EE.UU. de nuevas estrategias, las innovaciones en la política exterior de la URSS, pueden tener diversos desarrollos, y sería ocioso, en el momento actual, ponerse a especular sobre ellos. Pero sí parece claro que la filosofía que ha servido de base al Pacto Atlántico está actualmente en crisis. El europeo de a pie no cree en la *sombrilla nuclear* norteamericana sin la cual Europa se hallaría sumergida por las columnas de tanques soviéticos. Con la instalación de armas nucleares en el territorio europeo —tanto en el Este como en el Oeste—, si las cosas siguiesen tal como están, el destino de Europa sería convertirse en rehén de la disuasión del terror entre las dos superpotencias, en objeto de unas estrategias mundiales cuyas palancas principales escapan totalmente a nuestra influencia.

He tenido ocasión en los meses pasados de asistir a varios seminarios y coloquios sobre cuestiones internacionales organizados por centros universitarios y por fundaciones ligadas a partidos de izquierda en diversos países europeos: en Amsterdam; en las cercanías de Colonia, en la RFA; en Berlín Occidental; en París. Creo no exagerar si digo que en todos ellos, y en contextos distintos, ha surgido como cuestión central la necesidad de que Europa obtenga la capacidad de elaborar una política propia, independiente, tanto sobre las cuestiones de defensa y seguridad como sobre las relaciones con la URSS y con otros países del Este, y asimismo ante las grandes opciones de la política mundial.

Cuando las relaciones entre Ronald Reagan y Mijail Gorbachov ocupan un lugar tan destacado en los medios de comunicación del mundo entero, es imprescindible destacar que Europa occidental, EE.UU. y la URSS no pueden sumar *dos*, como está ocurriendo en la actualidad, porque el sistema de la OTAN difumina, borra de hecho, la personalidad propia de Europa. Tampoco pueden sumar *catorce*. Tienen que sumar *tres*. Cuando ello se plasme en una realidad actuante, se abrirán sin duda posibilidades que no aparecen hoy, que son inconcebibles en un marco exclusivamente bipolar.

En resumen, la situación actual de Europa, tanto en el terreno económico y social como en el de la seguridad y las relaciones internacionales, es extraordinariamente grave y preocupante. Si no se logra salir del marco de la supeditación que ha encorsetado la política europea en las últimas décadas, la perspectiva que se vislumbra en el horizonte es oscura: una decadencia del continente, una satelización reforzada; una Europa de *guardianes de museo*, con todas las glorias que se quiera acumuladas en el pasado. Pero con un presente gris. Y un porvenir nulo. Simplificando las cosas de un modo quizá exagerado, me atrevo a decir que la derecha, en último término, puede acomodarse con tal perspectiva. Para la izquierda, en cambio, existe una necesidad absoluta, que pone en cuestión su ser o no ser, de encontrar una vía para que los ideales de libertad, de paz, de progreso, de justicia social, se conviertan en cambios positivos que afecten a la vida de las mujeres y de los hombres. Ello exige romper el círculo vicioso en el que parecen estar encerrados los pueblos de Europa. En cierto modo, en la actual coyuntura, los destinos de Europa y

de la izquierda parecen coincidir. No es posible cambiar en serio las estructuras sociales, los canales de la participación ciudadana, sin aceptar con todas sus consecuencias la dimensión europea. A la vez, Europa tendrá dificultades insuperables para evitar su decadencia si su construcción se limita a los pequeños pasos institucionales que están actualmente sobre el tapete en Estrasburgo; si no surge una corriente de opinión popular, un nuevo estilo, nuevos contenidos de la construcción europea, que solamente pueden dimanar de una creciente comprensión y movilización de las fuerzas de izquierda en torno a tal objetivo.

Se trata, sin duda, de una empresa posible, al menos la considero así; pero a la vez con obstáculos y dificultades gigantescas. No se puede descartar la eventualidad del fracaso.

La desaparición en el sur de Europa, en los años setenta, de las dictaduras de Portugal, Grecia y España; y, sobre todo, la llegada al poder, en el inicio de los ochenta, de partidos socialistas con amplias mayorías y que se presentaban con programas de profundas reformas —el Partido Socialista francés hablaba incluso de poner fin al capitalismo— despertó esperanzas considerables en amplias masas europeas que desbordaban las zonas tradicionales de la influencia socialista. A finales de 1985, hace falta reconocer que —dentro de diferencias notables entre unos países y otros— el balance no es nada favorable en términos generales. Muchas esperanzas se han convertido en frustraciones. En el terreno económico, el monetarismo ha impuesto su ley. En el plano de la seguridad, los Gobiernos socialistas no han sido capaces de presentar una alternativa a la política de la derecha de aceptación de la hegemonía de EE.UU. en la OTAN. Sin duda ha habido iniciativas nuevas en ciertos aspectos de las relaciones internacionales, pero de escaso alcance. De esta experiencia se desprende, entre otras, una experiencia particularmente significativa: en el marco de los Estados nacionales europeos no existen posibilidades efectivas de realizar las transformaciones progresistas, económicas, sociales, políticas, en política exterior, que pueden ser decisivas para mejorar el destino de los hombres; para abrir nuevos caminos al desarme, a la seguridad, a la paz; para lograr que la voluntad de los ciudadanos, expresada democráticamente, determine las grandes opciones contemporáneas. El Estado, que en principio es *soberano*, de hecho no lo es; está sometido a poderes de hecho, a realidades objetivas (sistema financiero mundial, alianzas militares, existencia de armas nucleares norteamericanas en diversos países, etc.) que disminuyen y medianizan su soberanía. Esta tiene que refugiarse en cuestiones secundarias. El marco demasiado pequeño de los Estados nacionales, en relación con lo que son hoy las dimensiones reales de los problemas económicos, de recursos, de mercados, de tecnología, y asimismo las exigencias de una política de defensa, vacían en gran parte la soberanía y operatividad del Estado nacional. Estos Estados sirven sin duda para políticas de continuidad, de conservación, para que las cosas sigan como están; por tanto, para la derecha. Para cambiar, para avanzar hacia progresos verdaderos económicos y sociales, y asimismo en aspectos políticos esenciales, el marco estatal nacional crea ilusiones, pero encubre una impotencia real. La izquierda, por ello, necesita devenir europea; si no, deja de ser izquierda, se limita a la propaganda, a proyectos desmentidos cuando se llega al poder.

Quizá convenga plantear, incluso, la necesidad de algo así como una *revolución cultural* en el seno de la izquierda, sin lo cual el paso necesario a una dimensión europea, o no se hará, o se hará con frenos paralizantes. Por razones en parte diferentes, pero también por tradiciones que les son comunes, tanto los socialistas como los comunistas han sido nacionalistas y estatalistas, sobre todo en las últimas décadas. Se trata de cuestionar el vínculo que identifica el apego a raíces creadoras y enriquecedoras del hombre, como el idioma, la cultura e historia de su pueblo, la emoción única que despierta la tierra y los paisajes en los que uno ha nacido, con el marco de actuación de un órgano de poder, el

Estado, que debe tomar decisiones concretas sobre cuestiones de economía, de defensa, de desarrollo tecnológico, de relaciones internacionales. Esa identificación es fuerte, pero se mantiene en parte por lazos ideológicos, por ritos y mitos obsoletos.

Todo indica que, a pesar de enormes dificultades, el proceso de unidad política europea va a seguir su curso en la CEE, a partir del *proyecto Spinelli* aprobado en el Parlamento de Estrasburgo. Pero el futuro será muy diferente si ese proceso se limita a cortos avances en medio de una burocracia experta en asfixiar lo nuevo, o si las fuerzas de izquierda se deciden a poner en primer plano, dentro de sus políticas nacionales, ese objetivo europeo. Es decir, por un lado, a potenciar los brotes, que ya son reales, de una vida política común de la izquierda europea, con sus expresiones en el terreno sindical, en lo teórico, etc.; comprendiendo sobre todo que lo que se logre hacer en un nivel europeo va a ser lo realmente importante. Por otro lado, si las fuerzas de izquierda logran, superando complejos, colocar como un objetivo imprescindible la creación de una entidad política capaz de elaborar, de pensar y de *decidir* en nombre de Europa.

Esta tendencia objetiva hacia la Europa política coincide con cierta crisis del parlamentarismo, de los partidos, del Estado *de bienestar*. Los Estados europeos de hoy son *demasiado pequeños* ante los grandes desafíos de la economía, de la tecnología, de la seguridad; y *demasiado grandes*, demasiado tentaculares por sus injerencias excesivas en una serie de aspectos de la vida diaria del ciudadano. Una serie de síntomas anuncian la superación de estos Estados en un doble sentido: *por arriba*, hacia instituciones europeas supranacionales; *por abajo*, hacia una descentralización profunda de competencias, en el plano de las naciones (en el caso español), de las regiones y municipios. Y también hacia formas de autogestión, de democracia directa, cuya necesidad se hace sentir, pero cuyas formas son imprecisas; que será preciso inventar.

Conviene aclarar que con lo dicho no se preconiza la desaparición de los Estados; más bien un reparto diferente de poderes y competencias con lo que sí irá desapareciendo esa titularidad exclusiva y mítica de la *soberanía* que caracteriza la etapa actual. Que los Estados europeos, expresando, más o menos, las realidades nacionales, han desempeñado durante un largo período un papel histórico positivo parece indiscutible. Pero la pregunta que cabe hacer ahora es la siguiente: ¿no está acercándose el fin de ese período? En todo caso, la izquierda no puede rehuir el afrontar el problema esencial de lo que puede ser, estructuralmente, la Europa política; precisamente en el terreno de la democracia. No hay razón para suponer, *a priori*, que la entidad política europea será idéntica a un *Estado más grande*. El problema es descubrir los mejores caminos para que el *pueblo europeo* tome conciencia de su capacidad de intervenir en los grandes asuntos mundiales; y pueda hacer sentir sus opiniones por canales democráticos verdaderamente operativos. Sin duda, algo que está ya a la vista es la conveniencia de ensanchar los poderes del Parlamento Europeo. Pero estoy convencido de que no será fácil que las grandes masas de la juventud se incorporen a una vida política europea, al menos que se descubran y se pongan en marcha nuevas formas de participación ciudadana. El concepto mismo de *izquierda* necesita sin duda ser revisado. Entender por izquierda solamente los partidos políticos y los sindicatos supone olvidar el protagonismo adquirido ya por los nuevos movimientos sociales, en particular el feminismo, el ecologismo, el pacifismo. Su papel, sobre todo en cuestiones internacionales, es fundamental, supera en muchos casos el de los partidos. Además, esos movimientos tienen una dimensión europea, extranacional, sin dificultad; les es propia de un modo natural. Tienen en muchos países un apoyo, un prestigio, una credibilidad considerable entre las masas de la juventud, que supera la de los partidos de izquierda. Cuesta imaginar un avance real hacia una democracia europea sin otorgar en ese avance un papel esencial a los nuevos movimientos sociales.

No se puede soslayar la pregunta de las fronteras que debería tener esa Europa política hacia la cual marchamos. En este orden, se producen en muchos casos confusiones porque se mezclan problemas que, en sí, son diferentes. El problema de la cultura europea es específico y no se puede confundir con el de crear una entidad política europea. Cuando se define el patrimonio cultural de Europa suprimiendo a Tolstoi y a Dostoievski, e insistiendo en cambio en que deben ser incluidos los músicos y los escritores húngaros y polacos, mi impresión es que no se está hablando de cultura, sino de un proyecto político. En términos de cultura no concibo esas supresiones, como tampoco la de un Hemingway o un García Márquez. Se trata de cosas diferentes y es mejor abordarlas por separado.

Cuando ahora se habla de Europa política se está hablando de Europa occidental, y, más concretamente, de la Comunidad Económica Europea, en cuyo seno está ya iniciado un proyecto concreto. Sin duda otros países europeos podrán incorporarse a esa construcción; y es muy significativo que países escandinavos parezcan inclinados a incorporarse al Plan Eureka de desarrollo de las tecnologías más avanzadas. Por otro lado, es evidente que en su actividad política europea la izquierda puede, y en realidad lo hace, desbordar los marcos geográficos de las instituciones.

El problema más serio es el de los países del Este. Considero que conviene, en este orden, separar claramente el caso de la Unión Soviética, que es una de las superpotencias; y aquí tratamos de definir una Europa que pueda ayudar a superar la actual bipolaridad de las dos superpotencias. En cuanto a los Estados del Este integrados en el bloque dirigido por la Unión Soviética, en su seno existe con toda probabilidad una tendencia hacia una integración europea más o menos consciente, y desde luego se manifiesta con formas muy diferentes a las de Occidente, incluso en los objetivos y los conceptos. A largo plazo, sería absurdo imaginar que una Europa política no podrá tener en su seno a esos países, por diferentes que hayan sido sus historias recientes. Naturalmente que ello supone una serie de etapas de desmilitarización, de superación de los bloques militares hoy existentes. ¿Existe un nexo, al menos teórico, entre esa posibilidad hipotética de futuro, que hoy parece una ilusión, y realidades más próximas a nosotros? En un sentido, creo que sí. Porque la creación de una Europa política occidental se inscribe necesariamente en un proceso histórico que tiende a dinamizar la distensión, a desmilitarizar la vida internacional, a flexibilizar y luego superar los bloques militares; no significará dar vida a un nuevo bloque, sino que fomentará más bien un mundo pluripolar. Desde ahora, la izquierda de Europa occidental se está esforzando por establecer relaciones eficaces con los países de Europa oriental. Los resultados obtenidos por la socialdemocracia alemana son particularmente interesantes; y no sólo con respecto a la RDA. Los movimientos pacifistas europeos han hecho en este terreno trabajos de sumo interés, y que tienen ante sí serias perspectivas de desarrollo.

Para la izquierda, el proyecto de construcción de una Europa política tiene un contenido radicalmente contrario al *eurocentrismo*, visión reaccionaria y caduca, que no permite conocer las realidades del mundo de hoy. Esa Europa política será importante para cambiar las actuales relaciones entre el mundo industrializado y el mundo en vías de desarrollo. En realidad, el avance hacia un mundo más seguro supone superar los bloques, y sobre todo, colocar la contradicción Norte-Sur en el centro de la vida internacional. Europa tiene un interés vital en que el papel de China en la escena mundial se sitúe en un primer plano; asimismo, el de Japón. En América Latina, en Africa, en el Pacífico, están en marcha procesos de agrupamiento de amplios conjuntos regionales, lo que elevará el papel de esas partes del mundo en el proceso histórico.

Es probable que, en las próximas décadas, la diferencia esencial entre derecha e izquierda se reflejará en la actitud ante el llamado Tercer Mundo. Para la derecha, las nuevas potencias engendradas por la actual revolución científica e informática deberían reforzar el poder de una élite, uniformizar el pensamiento de los hombres y generar en ellos un talante contemplativo, pasivo y resignado, para que las cosas sigan igual. Si no se logra crear un marco político europeo parece dudoso que la izquierda europea pueda cumplir su misión histórica, haciendo que las conquistas de la ciencia sirvan para elevar el sentido crítico de los hombres, su capacidad de actuar sobre la historia, y de impulsarla en un sentido de libertad, paz y justicia.

Cuadernos de 3 Alzate

1986/1

Revista Vasca de la cultura y las ideas

El 1 de enero de 1986 hemos entrado definitivamente en Europa. Parece apropiado que, en este número, la primera sección se dirija a reflexionar desde diversos puntos de vista sobre el significado que esto tiene para el País Vasco. J. M. MARDONES aborda el aspecto cultural en "Modernidad y Postmodernidad en Europa y el País Vasco"; L. I. SANCHEZ analiza el aspecto institucional en "Comunidades Autónomas y Relaciones Internacionales"; JOSE M.^a BENEGAS, desde una perspectiva más amplia, plantea el tema de "Europa como Proyecto Socialista: Los Aspectos Económicos"; la sección se cierra con un artículo de MANUEL ESCUDERO acerca de "El Nacionalismo, cruz de la Izquierda Europea".

La segunda sección de este

número recoge diversas aportaciones literarias: "Mirando al Sol, frente a un lago de muchas ranas", de ANGEL M.^a ORTIZ ALFAU; "Iraklii Abashidze: sus versos a Euskadi", con una introducción de RAUL GUERRA GARRIDO, y, finalmente, una narración de RAFAEL BRAVO ARRIZABALAGA titulada "El Reloj de San Lorenzo".

La última sección recoge dos breves ensayos de ANDRES DE BLAS GUERRERO, "Nación y Nacionalismo en Manuel Azaña" y PATXO UNZUETA que escribe sobre "Moderados e inmoderados en la política nacionalista vasca". El número se cierra con tres notas de JAVIER CORCUERA, JUAN LUIS IBARRA y JOSE ANTONIO ZARZALEJOS en torno al tema común de los Derechos y los Territorios Históricos.

Pedidos:

Monte Esquinza, 30 - 28010-Madrid

LA CULTURA POLITICA DURANTE LA TRANSICION

Ludolfo Paramio

análisis y debate



2

La tesis fundamental que se pretende exponer aquí es la de que la cultura política dominante entre el conjunto de los intelectuales progresistas de este país, incluyendo en ellos a los sectores más ilustrados de los políticos profesionales, sólo ha coincidido a lo largo de la transición en breves y esporádicos momentos con la cultura política más presente dentro de la sociedad civil. Esta no coincidencia entre las creencias políticas de la vanguardia intelectual y de la mayoría social tiene raíces estructurales de difícil solución y ha tenido consecuencias políticas distintas. Durante los últimos años del franquismo aisló a las propuestas rupturistas y facilitó que el proceso de transición a la democracia fuera hegemonizado por los herederos del régimen dictatorial. En la fase de consolidación de la democracia creó un vacío de legitimidad que llevó a la minoría golpista a creer en la viabilidad de su proyecto. Y durante el primer gobierno socialista ha conducido a una creciente divergencia entre las opiniones de los sectores intelectuales y las orientaciones políticas de la mayoría social.

Como conclusión política fundamental se pretende mostrar que esta divergencia favorece las tendencias al autoritarismo entre la élite política, el cinismo político heredado del franquismo dentro de la sociedad civil, y el esteticismo autocomplaciente entre los intelectuales.

Cinismo y radicalismo

El discurso ideológico del franquismo trató, sistemáticamente, de fomentar en la opinión mayoritaria la desconfianza hacia la política como actividad, lo que Maravall resume en la expresión *cinismo político*. Se pretendió establecer una cadena de equivalencias entre la actividad de los partidos políticos y el caciquismo y la manipulación, la defensa de intereses particulares bajo la capa de los intereses generales, el sometimiento a directrices extranjeras e inconfesables —comunismo y masonería, según las conocidas obsesiones del general Franco—, la conspiración y la palabrería frente al trabajo y la actividad honesta de la mayoría social. Estas equivalencias están presentes desde el primer momento en la ideología del régimen, pero seguramente lograron su expresión más articulada en la defensa del *Estado de obras* por el ideólogo conservador (y ministro, precisamente, de Obras Públicas) Gonzalo Fernández de la Mora.

El principal argumento en este discurso era la idea de que la guerra civil había sido fruto de los estériles enfrentamientos de los políticos que, lejos de responder a los intereses sociales, sólo respondían a sus propios intereses personales y partidarios, a sus absurdos deseos de protagonismo a expensas del bienestar general. El desastre colectivo habría sido así fruto de la misma existencia de la actividad política partidaria, no de un empate catastrófico entre intereses sociales opuestos expresados en culturas políticas irreconciliables.

Probablemente fueron muy pocos los españoles que llegaron a creer en la versión más fuerte de esta ideología, en la versión según la cual las conspiraciones del comunismo y la masonería habrían desembocado en el sacrificio de los intereses colectivos y la catástrofe civil. Pero con el desarrollo de los años 60 parece innegable la difusión del cinismo político, en una forma menos doctrinaria, entre la mayoría social. En primer lugar, el propio ejemplo de los políticos del franquismo, sospechosos de arribismo y corrupción a causa de la inexistencia de un clima de opinión pública transparente, favorecía la identificación entre política y deshonestidad. (Los admiradores del general Franco suelen recordar como una de sus mejores anécdotas su consejo a un ministro novato: «Haga usted como yo, no se meta en política».)

En segundo lugar, coincidiendo con el desarrollo de los años 60 la oposición democrática ofrece políticamente una imagen de división que no favorece su credibilidad. Las disputas entre monárquicos, republicanos, socialistas y comunistas crean una imagen de confusión potenciada por la creciente inverosimilitud de sus discursos frente a la realidad interior. La nueva oposición, por ejemplo el nuevo movimiento obrero, posee una fuerza social que no logran capitalizar *políticamente* los propios partidos que la potencian. La distancia entre la credibilidad de Comisiones Obreras y la del PCE es un ejemplo muy claro.

En tercer lugar, el mismo desarrollo económico favorece un cierto individualismo, una apuesta por el provecho propio a expensas de los compromisos colectivos. La cultura del *narcisismo* que marca el paso de los años 70 a los 80 en Estados Unidos y buena parte de la Europa desarrollada había tenido un precedente obvio en el desarrollismo de los años 60 españoles, en los que toda una generación creyó encontrar

en la apuesta por la mejora económica una alternativa a un clima político y cultural asfixiante.

Se puede aceptar entonces que estos tres factores favorecían el distanciamiento despreciativo y una visión cínica de la política entre amplias capas de la población. Pero este desprecio de la política va unido a un curioso radicalismo que, por ser fruto del desarrollo económico, permite establecer un paralelismo entre la situación española y la de los países desarrollados.

En efecto, el crecimiento económico crea un clima de expectativas crecientes en amplios sectores sociales. Y lo que es más peculiar: las condiciones creadas por la situación de dictadura favorecen precisamente un radicalismo apolítico, un radicalismo *social* que pocas veces se articula políticamente. La razón es que la inexistencia de libertades hace explosivos conflictos sociales que en una sociedad democrática se traducirían en pacíficas movilizaciones y negociaciones: los últimos años de la dictadura están salpicados de conflictos laborales que provocan muertes cuando la política reprime manifestaciones reivindicativas originalmente pacíficas.

Lo paradójico es que esa proclividad a la explosión de los conflictos sociales favorece el radicalismo. En tiempos de crecimiento económico las reivindicaciones salariales más altas pueden no verse satisfechas, pero, en general, tienen posibilidad de obtener respuestas superiores a las que lograrían reivindicaciones inferiores. La razón es el temor de la patronal a que un conflicto laboral degenera en problema político: eso hace que busque, cuando es posible, salidas que permitan eludir el enfrentamiento cuando éste sobrepasa ciertos límites. Y, por otra parte, el crecimiento permite hacer altas concesiones salariales luego transferibles a los precios; ésta es en todo caso una política más sencilla que la de entrar, en un clima de alta demanda y pocas reservas de *stock*, en conflictos prolongados que pueden provocar grandes pérdidas monetarias y de mercado.

El resultado es que la generación que llega al mercado de trabajo en los años 60 desarrolla una experiencia de la conflictividad que favorece el apoyo a las propuestas más radicales. Pero eso no significa, necesariamente, compromiso organizativo en el sindicalismo clandestino o en otros movimientos sociales, mucho menos compromiso en la militancia política, que sigue siendo rigurosamente minoritaria hasta las elecciones de 1977. Lo que implica es una cultura política que, si se me permite la paradoja, recomienda a la vez el apoliticismo y el radicalismo: no adquirir compromisos duraderos pero favorecer las propuestas más duras en caso de conflicto.

Se podría pensar que esa cultura habría experimentado una brusca ruptura en la transición a la democracia, pero no es así. De hecho, la mayor manifestación de esta forma de entender el conflicto tiene lugar en un momento clave para decidir el futuro de la transición democrática. En los tres primeros meses de 1976 las organizaciones clandestinas de la oposición lanzaron una impresionante oleada de movilizaciones en las que se combinaban las reivindicaciones sociales —especialmente laborales— y políticas —amnistía y libertades—. Como norma los conflictos fueron desactivados mediante grandes concesiones salariales mientras las reivindicaciones políticas quedaban aplazadas *sine die*. Esa fue la experiencia que selló el fracaso del proyecto de ruptura democrática y abrió el paso —tras el importante inmovilismo del gobierno Arias— al reformismo pactado de Adolfo Suárez.

No hace falta decir que la élite intelectual y política de la oposición al franquismo no compartía el cinismo político de la sociedad civil. Poseída de una fe implacable

en el compromiso político, creía que el radicalismo reivindicativo perceptible en los conflictos sociales traducía un potencial de conflicto político equivalente. El desencanto —ciertamente no reconocido— pudo venirle ante el fracaso de la consigna de abstención en el referéndum sobre el proyecto de reforma política del presidente Suárez. El radicalismo político no era, en absoluto, una consecuencia inevitable del radicalismo reivindicativo en lo social: antes que correr riesgos, los españoles optaron en 1976 por una reforma gradual —controlada por los herederos del régimen anterior en su primera fase— y por subidas salariales muy palpables. Cinismo político y realismo económico son los signos que marcan en la mayoría civil el comienzo del proceso de transición a la democracia en España.

El desencanto

Podemos decir entonces que la vanguardia intelectual de los últimos años de la dictadura se encuentra desconectada de la mayoría social, en el momento de la muerte del general Franco, a causa del cinismo político de dicha mayoría, de una capacidad para el radicalismo reivindicativo sin inmediata correspondencia en el compromiso político. A su vez, la clave de esta dualidad de radicalismo social y cinismo político debe buscarse en las especiales condiciones creadas en la España de los años 60 y primeros 70 por la coexistencia del crecimiento económico y la dictadura política.

La desaparición en 1976-77, casi simultáneamente, tanto del crecimiento como del régimen dictatorial, crea una situación nueva en la que la cultura política anterior entra en crisis. La clave del radicalismo social es el clima de expectativas crecientes creadas por el desarrollo económico: la crisis que afecta a todo el mundo industrializado destruye el contexto de crecimiento. Lo que es más grave, las subidas salariales de los primeros meses de 1976, que como se mencionó antes son la principal consecuencia práctica de las movilizaciones democráticas tras la muerte del dictador, suman a la recesión general de los países capitalistas una situación particularmente aguda de *profit squeeze*, es decir, de caída de la parte de las ganancias del capital dentro de la renta nacional, lo que crea una coyuntura especialmente difícil para la economía española.

Así, en el verano de 1977 el gobierno de Adolfo Suárez decide intentar un modelo de concertación social que, sobre la base de una austeridad pactada, permita a la economía española enfrentarse a las nuevas condiciones de competición internacional creadas por la crisis mundial. Este es el origen de los pactos de La Moncloa, en los que el PCE, siguiendo entonces la línea del PCI de Berlinguer, busca un atajo hacia la hegemonía política que le permita compensar sus decepcionantes resultados electorales de junio de 1977.

Se puede analizar largamente el resultado económico y político de los pactos de La Moncloa, pero lo que aquí desearía subrayar es que con ellos se rompe la dinámica que había permitido la coexistencia en la cultura política de la mayoría social española del cinismo político y el radicalismo social. La llegada de la democracia, por decirlo así, conlleva a los ojos de esa mayoría que sus expectativas crecientes se vean defraudadas casi por primera vez en quince años, con lo que se rompe la identificación entre lucha democrática y mejora social.

Ahora bien: esa identificación era la clave de la cultura política mayoritaria en los años 60. El secreto de esa identificación era el cinismo político: la lucha democrática trae mejoras económicas *siempre que* uno no se comprometa política, organizativamente

en ella, pues en ese caso uno se convierte en un ser aparte, moralmente dudoso, y además expuesto a la represión. De pronto la llegada de la democracia crea una situación nueva. Las personas antes comprometidas políticamente deciden propulsar una línea de austeridad, rompiendo la tendencia de más de una década a la mejora social continuada: democracia *no* es igual, en términos inmediatos, a progreso económico.

En términos puramente racionales, la ruptura de esa identificación automática debería llevar a replantearse el cinismo político, es decir, a pensar en la necesidad de la información y el compromiso políticos para poder decidir sobre el curso de los acontecimientos globales o al menos para poder comprender su sentido. Naturalmente, en la España de los años 80 no podía ser así. Por una parte, la clase obrera protagonista de las movilizaciones sociales era demasiado joven en términos históricos, tras la ruptura de la guerra civil, para haber desarrollado una conciencia política propia. Por otra parte, los partidos de izquierda no poseían la implantación social ni la capacidad didáctica necesarias para educar en un plazo demasiado breve a una mayoría social. Las nuevas clases medias surgidas con el desarrollo, por otra parte, no poseían recursos ideológicos propios para tratar de ejercer una hegemonía social, como consecuencia de su evidente retraso organizativo frente a las clases subalternas en el momento de la muerte del dictador.

El resultado es que las clases populares no poseedoras *a priori* de una conciencia política, es decir, esa amplia mayoría trabajadora que votó a favor de la reforma de Suárez, viven los pactos de La Moncloa como un *desencanto*, como la pérdida de una ilusión. La identificación entre democracia y progreso social se rompe, y el eslabón intermedio, la conciencia política y el compromiso organizativo, no se reconsidera. A la inversa: los trabajadores que habían optado por la sindicación, y la fracción de clases medias que había decidido organizarse políticamente junto con esos trabajadores, se verían diezmados en 1978 y años sucesivos a consecuencia de ese mismo desencanto. En 1979, el gran momento del desencanto, la caída de los afiliados a sindicatos y partidos políticos es vertiginosa. Sindicatos y partidos pasan de la nada impuesta por la dictadura a la más absoluta miseria en tiempos de la democracia.

Se puede pensar, por tanto, que la mayoría social, y los movimientos populares dentro de ella, siguen en el período 1977-80 una trayectoria desde las expectativas crecientes al desencanto, trayectoria cuya clave es un cinismo político nunca replanteado. Las masas populares españolas nunca se ajustaron a la idea marxiana de conciencia de clase ascendente, pero tampoco desarrollaron en estos años cruciales una cultura cívica capaz de permitirles comprender ni utilizar a fondo los nuevos canales de participación/decisión abiertos por la llegada del régimen democrático.

En ese mismo período, curiosamente, la vanguardia intelectual de este país realiza otra larga travesía hacia el desencanto. Como ya se señaló antes, esa travesía comienza en el más radical compromiso político: a comienzos de los años 70 ningún intelectual de izquierda —lo que entonces equivalía a intelectual de vanguardia— podía dudar de que el compromiso político —por supuesto progresista— era la unidad de medida de la honestidad intelectual y cultural. Pero el compromiso quería decir radicalidad política, y sólo se discutía la formación política más adecuada —más radical— para la concreción de dicho compromiso.

Entre 1977 y 1980 la ideología fundadora del compromiso político radical se ve desmantelada en España. El PCE renuncia al leninismo, entrando en un espacio ideológico contradictorio cuya conclusión lógica sería el actual fraccionamiento entre tendencias. El PSOE entra en una larga crisis, supuestamente resuelta con el Congreso

Extraordinario que reafirma a Felipe González como secretario general y ratifica el abandono de la definición marxista del partido. En la práctica, el último acto de esa larga crisis sería la capacidad del partido para asumir su identidad occidental y la superioridad de la vía democrática al socialismo tras el debate sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica.

Este desmantelamiento ideológico tiene efectos contradictorios entre los intelectuales comprometidos políticamente durante los últimos años de la dictadura. Una minoría, en la que sólo entran algunas personalidades de relieve, denuncia el proceso como un abandono de los principios. Una mayoría reconoce el realismo del abandono de ideologías inequívocamente prehistóricas para la situación española en medio de la crisis mundial —económica, política e ideológica— a finales de los años 70. En esta mayoría existe, al comienzo de la transición, un clima dominante de optimismo, que coincide con el auge de las expectativas sobre las posibles nuevas vías al socialismo que estarían abriendo el eurocomunismo y el llamado socialismo del sur de Europa.

El optimismo se iría viniendo abajo, progresivamente, con los evidentes estrangulamientos del eurocomunismo en su vía hacia una estrategia autónoma. El fracaso de la Unión de la Izquierda en Francia en 1978, la incapacidad del PCI para romper la hegemonía de la OC, el nuevo resultado decepcionante del PCE en 1979, serían el camino hacia un obsesivo pesimismo en las filas de la *intelligentsia* de la izquierda latina, pesimismo que alcanza su culminación hacia el año 1980.

En ese proceso sólo se produjo una breve convergencia histórica entre los intelectuales progresistas españoles y la mayoría social de este país. La Constitución de 1978, la aparente consolidación de la democracia, el comienzo de la resolución del problema de las nacionalidades —con la aprobación de los estatutos de Sau y de Gernika que abrían el paso a la normalidad constitucional de las nacionalidades catalana y vasca— fueron momentos de coincidencia de la opinión mayoritaria y esa privilegiada y radicalizada minoría que son los intelectuales, momentos de un moderado optimismo compartido.

Pero el desencanto de los intelectuales comenzó en las mismas fechas que entre las mayorías populares, aunque fuera por distintas razones. Hacia 1979, con el fracaso de la alternativa socialista en las elecciones legislativas, el retroceso del PCE y la desaparición de casi cualquier otra opción progresista alternativa, se expande el sentimiento de que la apuesta por el realismo y la desideologización ha sido un callejón sin salida: *contra* Franco vivíamos mejor, dice ya un sector de la izquierda, caricaturizando, por una parte, a una de las más conocidas consignas de la derecha (con Franco vivíamos mejor), pero reflejando también la nostalgia de una época en la que la actividad política no sólo era un compromiso moral con la más elemental de las decencias, sino la promesa de un futuro mejor y a la vez más heroico.

Si en el caso de la mayoría social el desencanto es fruto de la quiebra de la línea de expectativas crecientes, quiebra que viene a asociarse con la llegada de la democracia, para los intelectuales el desencanto es la consecuencia de la pérdida de las perspectivas de cambio radical, pérdida que en un primer momento es consecuencia del fracaso de la ruptura democrática, y que tras un breve paréntesis durante el período constituyente, se agrava aún más con el fracaso de la izquierda en las elecciones de 1979.

El deterioro económico traído por la crisis, en un caso, y el excesivo conservadurismo social manifiesto en los resultados electorales, en el otro, llevan al desencanto a la mayoría social y a los intelectuales. Lo paradójico es que en ambos casos se coincide

en buscar el origen de la propia decepción *en los partidos políticos*. El general Franco triunfa después de muerto, y sus enterradores reproducen uno de sus prejuicios favoritos, criticando las limitaciones de *la* democracia y *los* partidos políticos, sin reflexionar sobre las drásticas condiciones impuestas por la crisis en el terreno económico o sobre la desertización política provocada en la mayoría social por los cuarenta años de dictadura.

Del golpe al felipismo

Recordando el clima de la Prensa en los días que anteceden al golpe frustrado del 23 de febrero de 1981 es inevitable la sospecha de que las críticas de los intelectuales progresistas y las quejas populares sobre las insuficiencias y decepciones de la democracia, incluyendo los feroces ataques al presidente Suárez por parte de quienes, a partir de 1982, dedicarían sus mejores energías a mitificarlo, fueron uno de los argumentos que llevaron a los golpistas a creer en la absoluta carencia de legitimidad del régimen democrático, y que por tanto les hicieron pensar en la posibilidad de derribarlo.

El fracaso de la intentona, y la reacción popular en favor de la democracia —especialmente la manifestación de Madrid el 27 de febrero: un millón de personas en una población de cuatro millones de habitantes— invierten la tendencia anterior. Se abre un período de incertidumbre que va a durar hasta que las sentencias del proceso del 23-F, incluso si en buena medida se consideran insuficientes, dan idea de la estabilidad de la democracia. Pero aun en medio de la incertidumbre la tensión social se recupera, existe algo que podríamos llamar un rearme latente de la sociedad, rearme que se hace explícito cuando el gobierno Calvo-Sotelo, contraviniendo abiertamente a la opinión mayoritaria, sin ningún tipo de consulta popular o explicación política, decide la entrada de España en la OTAN.

La crisis interna de la UCD y la creciente impopularidad de su gobierno abren una dinámica imparable de deseos de cambio político. En esta dinámica se va a producir nuevamente una efímera coincidencia entre la mayoría social y los intelectuales. La abrumadora lista de *intelectuales por el cambio* firmada durante la campaña electoral es un buen equivalente de los diez millones de votos que van a permitir la formación de un gobierno del PSOE con mayoría absoluta. (La misma crisis del PCE lleva a muchos intelectuales del área comunista a apoyar el programa socialista, como llevaría a muchos electores del PCE a desplazar su voto hacia las listas socialistas, tratando de lograr el voto útil.)

Poco dura la luna de miel. A comienzos de 1984, coincidiendo con una serie de movilizaciones sociales contra la política económica del gobierno, y en particular contra la reconversión de los sectores en crisis, se puede decir que el consenso dominante entre los intelectuales se ha vuelto abiertamente hostil al gobierno del PSOE. Su política se considera abiertamente decepcionante en todos los terrenos; sus formas de ejercer el poder, prepotentes y cerradas a la crítica; sus orientaciones, endogámicas y de espaldas a la sociedad civil. Significativamente las páginas culturales de *ABC comienzan a* ganar popularidad entre intelectuales que jamás habrían admitido anteriormente el hojear siquiera dicho diario.

En los sectores más radicales comienza a hablarse de *felipismo*: una combinación de política clientelar a la mexicana, política económica liberal-conservadora y política internacional pronorteamericana, todo ello en el marco de un régimen personalista y crecientemente autoritario. Desde el diario *El País*, al que la derecha acusa de ser el

órgano oficioso del gobierno socialista, algunos de los más significados intelectuales progresistas, incluyendo a notorios militantes socialistas, reproducen a menudo estas críticas, que la propia línea editorial de *El País* refleja con frecuencia.

Curiosamente, sin embargo, la opinión pública no sigue la misma trayectoria, al menos hasta el presente. A lo largo de 1985 las encuestas mantienen una alta intención de voto al PSOE, que de cumplirse en las elecciones legislativas darían nuevamente la mayoría al partido socialista. Resulta fácil comprender lo sucedido: en esta ocasión el conservadurismo de la mayoría la aparta de los intelectuales en su valoración de la actuación del gobierno.

Lo que para los intelectuales es autoritarismo y rechazo de toda crítica es para la mayoría ejercicio de la autoridad y estabilidad del gobierno, rasgos cuya ausencia durante la descomposición de UCD llevaron a un buen núcleo de sus votantes hacia el PSOE. La política económica de ajuste, pese a haber permitido una gravísima destrucción de empleo, es aceptada con pragmatismo como la única posible, mientras la propuesta thatcherista-corporativa de la oposición conservadora, y el programa arbitrista-keynesiano de los comunistas, son vistos con abierto escepticismo por la mayoría. Cuestión aparte es la opción del gobierno González por la permanencia en la OTAN: la victoria gubernamental en el referéndum del 12 de marzo de 1986 demuestra que una vez más la mayoría social sigue una línea de apuesta por la estabilidad.

Se llega así a un resultado paradójico de distanciamiento entre la opinión mayoritaria y el consenso dominante entre los intelectuales. Pero de hecho no es algo nuevo, sino la norma heredada de la cultura política de la dictadura. La simultaneidad del *desencanto*, entre los intelectuales y en la mayoría, en el período 1978-80, pudo crear la ilusión de un paralelismo en los movimientos de opinión en ambos, pero las causas y las tendencias de un fenómeno aparentemente único eran muy distintas en cada grupo.

En realidad el movimiento de la opinión mayoritaria se orientaba al abandono de las expectativas crecientes, manteniendo constante lo que podríamos llamar el conservadurismo o realismo esencial de la cultura política mayoritaria: que el cinismo político se tradujera en desencanto no permitía pensar que la mayoría creyera en alternativas *políticas* radicales. De hecho, lo que revela el mantenimiento de una alta intención de voto al PSOE es precisamente que entre sus electores de 1982 un alto porcentaje no creía estar votando una alternativa radical, sino algo parecido a lo que ha supuesto el gobierno socialista, pese a la decepción del fracaso en la creación de empleo o el giro en la cuestión de la OTAN.

Podríamos decir así que el desencanto supuso para la mayoría social un aumento del realismo, con el abandono de unas expectativas crecientes. En el caso de los intelectuales, al contrario, cada nueva fase de desencanto, ante la democracia primero, ante el gobierno socialista después, presenta la misma estructura: expectativas de cambios radicales defraudadas subsiguientemente por la realidad. Los intelectuales, por decirlo así, son inasequibles al desaliento.

Conclusiones

El actual enfrentamiento entre la mayor parte de los intelectuales radicales y el gobierno socialista tiene evidentes riesgos de favorecer la principal corriente de la cultura política española desde la dictadura a la democracia. En efecto, la crítica de los

intelectuales contra el gobierno no va acompañada de la existencia de ninguna oferta política alternativa *creíble*: el resultado, aunque parezca brutal plantearlo así, es que al negar legitimidad al gobierno socialista se está creando una deslegitimación global del sistema de partidos y de la democracia que descansa en él.

Peor aún; como bien subrayan algunos columnistas de la Prensa de derecha, si los intelectuales consideran al gobierno aborrecible sin paliativos, y, sin embargo, la opinión mayoritaria sigue apostando por él, se está creando la base lógica para una creciente desconfianza de los ilustrados hacia los ignorantes. Da igual que el origen de esa desconfianza sea la acusación de conservadurismo contra la mayoría (que apoyaría al PSOE por nostalgia del caudillismo) o el desprecio hacia la masa ignorante y manipulable. La primera sería la acusación *progresista*, la segunda el *leitmotiv* conservador. Pero en ambos casos se desemboca forzosamente en una desconfianza elitista ante la mayoría y, lógicamente, en una relativización del principio de mayoría fundamental para el régimen democrático.

La clave es la ausencia de alternativas políticas creíbles al presente gobierno: y aquí es donde la crítica de los intelectuales enlaza más directamente con la tradición del cinismo político. Pues la inexistencia de alternativas se pretende explicar por las limitaciones de los políticos y, por ello, del sistema de partidos. Hay en el consenso actual de los intelectuales una patética negativa a reconocer que, si sus críticas no llegan a modificar el consenso de la mayoría social, la razón es que los valores dominantes entre los intelectuales no han logrado credibilidad mayoritaria o, en algunos casos, la están perdiendo.

Dicho de otra forma: los intelectuales no pueden aceptar que la permanencia de la actual mayoría, con sus defectos, no es fruto de las limitaciones del sistema de partidos o de la irrefrenable necesidad de las masas, sino de la crisis abierta, prolongada y aparentemente irresoluble de las ideas que dominaron en la *intelligentsia* de izquierda de casi toda Europa desde los años 50. El descrédito del marxismo, el auge de las ideologías del darwinismo social, la crisis de los modelos políticos y sociales de la izquierda, son vistos como consecuencia de la ofensiva de la derecha en la ideología (¿por qué hemos perdido? Porque nos han derrotado), o pura y simplemente negados.

Si, por el contrario, aceptamos que estos fenómenos se explican por los cambios traídos por la crisis económico-política de los años 70, si recordamos que las transformaciones de las ideas tienen su origen en los cambios, en la realidad material, resulta obvio que sólo ofrecerá una alternativa aquel pensamiento progresista que esté dispuesto a criticar no sólo las realidades presentes —incluyendo el gobierno socialista español— sino las propias ideas recibidas desde las que, hoy por hoy, se intenta realizar esta crítica. El intelectual sólo tiene derecho a la crítica cuando de antemano renuncia al confortable refugio de la buena conciencia.

Sin embargo, la realidad de la España de 1986 es que los intelectuales afirman, en la mejor tradición francfortiana, que si sus principios se ven refutados por la realidad tanto peor para la realidad, que si la mayoría no acepta sus críticas tanto peor para la mayoría. Esa asombrosa buena conciencia está creando una peligrosísima escisión entre intelectuales absorbidos por la Administración pública, a los que poco espacio les queda, o incluso tiempo, para ejercer la crítica de las actuaciones del gobierno, e intelectuales autosatisfechos, entregados a la contemplación melancólica de un proceso histórico que rechazan *in toto*.

A su vez, el creciente distanciamiento de los intelectuales sólo puede favorecer el conservadurismo y el aislamiento del gobierno, en una dinámica infernal de *self-fulfilling*

prophecy: el decisionismo sustituye a la reflexión política y moral, la afirmación de la autoridad gana terreno a la búsqueda de legitimidad y presencia sociales. Los intelectuales se encierran en su torre de marfil —o, más frecuentemente, en su columna de periódico— y los políticos en La Moncloa o las Cortes, y de la ignorancia mutua se deriva la deslegitimación de la primera democracia estable que ha tenido este país en su historia. Se puede ver fácilmente que ésta no es una dinámica deseable: ¿se debería aceptar, en cambio, que es inevitable?

El presente texto corresponde (con ligeras variantes) a la ponencia presentada en el Seminario Iberoamericano sobre Políticas Culturales y Democracia, celebrado en Madrid, en los días 13 al 16 de enero de 1986, y organizado por el Ministerio de Cultura español y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Por una cultura

viva y plural

Los Cuadernos del Norte

Literatura · Arte · Cine · Poesía
Pensamiento
Diálogo · Asturias · Inéditos · Música
Teatro · Actualidad...

Director: Juan Cueto Alas

Revista Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias



Redacción, Suscripciones y Administración:
Plaza de La Escandalaria, 2 · Oviedo-3 · España
Apartado, 54 · Teléfono 985/22 14 94.

SINDICATOS, PARTIDOS Y FRENTE POPULAR

Santos Juliá

análisis y debate



3

A diferencia de otros países europeos, los primeros años treinta no se caracterizaron en España por el ascenso del fascismo sino por la irrupción del sindicalismo en la escena política. Con la República llegó la Unión General de Trabajadores (UGT) al gobierno del Estado, y con la República emprendió la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) su asalto contra el Estado. A los dos años de nuevo régimen la UGT, frustrada en sus expectativas, iniciaría también —en ocasiones junto a la CNT y formando con ella frentes sindicales de ámbito local— su ofensiva insurreccional contra aquella República tildada de burguesa y traidora a sus orígenes. A las insurrecciones obreras de 1932 y 1933, conducidas por los anarquistas, sucedió la insurrección obrera de 1934, conducida por el sindicato socialista. Así, en octubre de 1934, cuando Thorez proponía en Francia un *vaste rassemblement populaire* para defender a la democracia del fascismo, las organizaciones obreras españolas habían terminado, con la derrota, un ciclo insurreccional que pretendía ir más allá de la República y la democracia y alcanzar lo que la CNT llamaba revolución social y la UGT adueñamiento de todo el poder.

Fue así como, con los sindicatos clausurados y los dirigentes obreros encarcelados, surgieron desde finales de 1934 y principios de 1935 dos iniciativas estrictamente políticas de alcance y contenido muy diverso, pero destinadas ambas a reducir la fragmentación de una izquierda cuya división había facilitado el acceso de la derecha católica al gobierno de la República. La primera venía del Partido Comunista, organización entonces minoritaria y sin influjo apreciable en la clase obrera; la segunda procedía de los partidos republicanos de izquierda, que resurgían de las cenizas a que quedaron reducidos tras su desastre electoral de 1933.

La vía comunista al frente popular

Sin renunciar en su discurso a la insurrección de «amplias masas populares» para la conquista del poder y la instauración de un «gobierno obrero y campesino», los comunistas españoles se marcaron después de octubre de 1934 el objetivo prioritario de establecer una «ligazón orgánica» con los obreros socialistas y anarquistas. Trataban de aprovechar así la desorientación sindical para impulsar órganos de frente único por abajo —comités de fábrica o barrio— que obligaran a los dirigentes socialistas y anarquistas al frente único o unidad de acción por arriba. Suponían los comunistas que con esa política se fortalecería la corriente de simpatía hacia sus posiciones de una clase obrera que le había sido tradicionalmente hostil, y que los «obreros revolucionarios de otras tendencias» darían finalmente «el paso definitivo hacia nuestro Partido». Comités de enlace, alianzas obreras, comités de fábrica y de barrio serían los organismos idóneos para desarrollar el trabajo del Partido hacia «un reclutamiento sistemático».

El énfasis en este trabajo político relegó a un segundo plano durante toda la primera mitad de 1935 —e incluso hasta después de celebrado el Congreso de la Internacional Comunista (IC)— la segunda línea de actuación que a los comunistas españoles marcó el delegado de la IC: la constitución, con los partidos republicanos, de los llamados bloques populares antifascistas. La escasa relevancia del republicanismo español a finales de 1934, la manifiesta desconfianza que los sindicatos mostraban hacia ellos y el mismo hecho de que en teoría los trabajadores españoles habían ido, en sus combates de octubre, más allá de la defensa de la democracia, hacía poco comprensible esta línea de actuación. Tras algunos debates, y no pocas confusiones, los dirigentes del PCE decidieron no precipitarse en esta dirección y dejar a la iniciativa de las alianzas obreras la constitución de los bloques populares.

Llegar, pues, al bloque popular dependía de la respuesta que los socialistas —porque de los anarquistas nada podía esperarse en este sentido— dieran a sus iniciativas de alianzas obreras y frente único. Y en este terreno, y tras ciertas expectativas surgidas por la creación de un comité de enlace por arriba, los comunistas tuvieron que rendirse a la evidencia de que los dirigentes socialistas no se dejaban llevar en esa dirección. A las continuas propuestas de unidad de acción, firma conjunta de manifiestos, constitución de comités, intervención de oradores en mítines conjuntos, fusión de sindicatos, los socialistas —la Unión y el Partido— opusieron primero reticencias, luego negativas y finalmente silencios. A principios de noviembre de 1935 no se había avanzado nada en ese camino e incluso se había retrocedido, pues las pocas alianzas que aún existían en la primera mitad del año llegaron al otoño languidecientes cuando no simplemente disueltas o con una existencia puramente nominal.

La vía republicana al frente electoral

El otro sector de las izquierdas interesado en una política unitaria estaba formado por los partidos republicanos, muy disminuidos tras los acontecimientos de octubre,

pero que comenzaban a resurgir con más fuerza que nunca de la mano de Manuel Azaña. Aprisionado por su presunta ayuda a la rebelión catalana, sometido a dos procesos, Azaña concentró en su persona, inmediatamente después de su liberación, la única esperanza de restaurar la República sobre sus fundamentos originales.

Azaña se percató enseguida de ese poderoso renacimiento de la opinión republicana y decidió, tras algunas vacilaciones, situarse a su cabeza y dirigirlo hacia lo que él llamaba «rescate de la República». Rota cualquier posibilidad de compromiso con el Partido Radical y con el Presidente de la República, a quienes culpaba de la entrega de la República a sus enemigos, Azaña exigió la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Para dar fuerza a su petición impulsó un movimiento popular por medio de grandes concentraciones que culminaron en octubre de 1935 con el mitin de Comillas, a las afueras de Madrid, donde se dio cita la multitud más crecida que cualquier político europeo haya podido reunir sin utilizar métodos paramilitares.

A la vez que ponía en marcha este movimiento popular, Azaña ofreció a otros partidos republicanos de izquierda la propuesta de un pacto o «inteligencia republicana». Con objeto de no repetir errores pasados y no volver al poder con una «responsabilidad crucificada», Azaña definió con claridad cuál era su posición y la de su partido e invitó a los demás a aceptarla, y con ella su liderazgo, por medio de un acuerdo sobre un plan común de gobierno, cuya sustancia consistía en reanudar, con más energía y decisión, la política de reformas abandonada desde la llegada del Partido Radical y de la CEDA al poder.

Mientras las posiciones de los partidos republicanos se acercaban, Azaña reanudó los contactos con los socialistas para proponerles lo que primero llamó una coalición electoral de los partidos de izquierda y luego un frente electoral. Azaña comprendía bien las dificultades que el sector *sindical* del socialismo tendría para aceptar su propuesta y se dirigió por ello en un primer momento a los dirigentes del sector *político*. En esencia, su plan consistía en presentarles el programa republicano para integrar en él las propuestas socialistas y en pedirles que aceptasen la coalición sobre la base de que el gobierno resultante de un triunfo electoral sería exclusivamente republicano. En consecuencia, al iniciarse las conversaciones, los socialistas no debían insistir en aquellos puntos de su programa que no pudieran ser aceptados por un gobierno republicano y debían aceptar, al discutir las candidaturas, una mayor representación republicana.

Divergencias socialistas y coalición meramente electoral

El ala moderada del socialismo —que tenía mayoría en el Comité Nacional y en la comisión ejecutiva del PSOE— aceptó sin vacilación ese plan y pretendió convertirlo en política oficial del Partido. Los puentes con el republicanismo se habían roto el año anterior y era precisa toda la cautela del mundo para no levantar suspicacias ni despertar la hostilidad del ala radicalizada, a cuyo frente era indiscutible la presencia de Largo Caballero, que gozaba de mayoría casi unánime en la dirección de la UGT y de las Juventudes, y de una sólida minoría en la ejecutiva del PSOE.

Lo menos que puede decirse es que no existió tal cautela. Prieto desde muy pronto, e inmediatamente los dirigentes de su tendencia, forzaron la marcha hacia el pacto con los republicanos a la vez que entraban en agria polémica con las Juventudes y con los dirigentes más respetados de la UGT. Largo Caballero —cuyas intervenciones en la ejecutiva de la Unión y del Partido eran decisivas para las decisiones adoptadas en cada caso— temió el predominio de la política centrista en el socialismo y la entrega de éste a los re-

publicanos. Sin oponer una negativa de principio y reconociendo incluso la necesidad de la coalición, demoró sus preparativos e impidió, con el argumento de que aún no era llegado el momento, que se avanzase de forma oficial en esa dirección.

El hundimiento del Partido Radical, con la consiguiente amenaza del acceso de la CEDA a la presidencia del gobierno de la República, sorprendió, pues, a los socialistas en el otoño de 1934 sin ninguna política de alianzas: subsistía la negativa al frente obrero y estaba paralizada la de coalición electoral. Lo más grave, sin embargo, fue que les sorprendió profundamente divididos y sin posibilidad alguna de realizar ellos una propuesta propia ni de inclinarse con toda su fuerza hacia algunas de las que se le proponían.

Fue en esta circunstancia de degradación creciente de la situación política y de grave lucha interna socialista cuando se hizo inminente la convocatoria de elecciones. Azaña, pues, no esperó más y se dirigió formalmente el 14 de noviembre a la ejecutiva del PSOE proponiéndole, en nombre de los partidos republicanos, una coalición electoral. La respuesta de los socialistas, por iniciativa de Caballero, fue inmediata: aceptaban la coalición pero exigían, con la presencia del PSOE, la del Partido Comunista y la de la Unión General de Trabajadores. Largo Caballero tomó además, en esa misma circunstancia, dos decisiones preñadas de consecuencias: proponer a los comunistas un plan para que su sindicato se integrara en la UGT y someter el programa del PSOE y de la UGT a la previa aprobación del partido y sindicato comunista, lo que implicaba revitalizar el comité de enlace y transferirle las atribuciones para tratar con los republicanos.

La estrategia caballerista trastocaba en algunos puntos fundamentales el plan de Azaña y Prieto pues, por una parte, reducía el papel de los socialistas al disolver su presencia separada en un comité conjunto y, por otra, concedía al PCE un protagonismo que nadie, excepto Caballero, estaba dispuesto a aceptar. El pacto era, en su origen, un acuerdo republicano-socialista al que quizá podían adherirse otros grupos y partidos menores, pero en ningún caso se consideró la posibilidad de admitir a esos grupos en los comités que negociasen el acuerdo.

Ante la sustancial transformación del pacto que implicaban las demandas de Caballero, los republicanos reaccionaron negándose a admitir a los comunistas en el comité electoral y los socialistas de centro forzaron, por iniciativa de Prieto, la dimisión de Largo Caballero de la dirección del PSOE. Pero la respuesta de éste, que se hizo fuerte en la UGT, fue rápida y decisiva para la naturaleza final del pacto: la coalición se establecería de forma meramente circunstancial, limitada a las elecciones y sin ningún compromiso poselectoral; su programa sería estrictamente republicano limitándose la parte obrera a dejar constancia de sus reivindicaciones y afirmándose explícitamente que tales objetivos no eran aceptados por la otra parte; en fin, todos los partidos y organizaciones obreras, excluidos de las negociaciones, debían hacerse presentes con sus firmas en el manifiesto o programa final.

Fue así como todos llegaron a estar presentes en el pacto aunque sólo dos —el PSOE y los partidos republicanos— formasen el comité que discutió el programa y las candidaturas. La disparidad de organizaciones firmantes —partidos, sindicatos, juventudes— ocultaba mal el limitado nivel del compromiso adquirido por cada una de ellas, la diversidad de sus objetivos finales y, en último término, la fragilidad de la propia coalición. Todos estaban de acuerdo en que sólo las elecciones la habían hecho posible y que sólo mientras durase esa circunstancia se mantendría en pie, por más que los comunistas pretendieran convencer a todos de la necesidad de su consolidación como instrumento político. Después de las elecciones cada cual quedaría libre para seguir su propio camino sin sentirse constreñido por un compromiso de gobierno.

Fuerte en las elecciones, débil en el gobierno

Así constituida, la coalición se reveló paradójicamente como un excelente instrumento para asegurar el triunfo electoral pero a la vez como el más débil de los posibles instrumentos de gobierno. A los sectores liberales de la burguesía y de las clases medias, inquietos ante el avance de la reacción, les tranquilizaba la seguridad de que en el futuro gobierno se sentaran únicamente los republicanos; a los socialistas moderados les satisfacía la reanudación de su tradicional coalición con los republicanos que abría las puertas a una futura participación gubernamental; los obreros de la UGT, que temían una nueva frustración si los socialistas volvían al gobierno con los republicanos, confiaban en que Largo Caballero vigilase para impedir tal eventualidad; los votantes comunistas exultaban al comprobar que su partido salía por fin de un aislamiento que le había condenado a la impotencia y que lo hacía de la mano de Caballero, el dirigente más respetado de la UGT; los jóvenes, situados ya en la órbita comunista, pondrían toda su capacidad de movilización —que era mucha en las ciudades— al servicio de la izquierda seguros de que con su triunfo daban un paso decisivo hacia la futura revolución. Hasta los anarquistas recomendaron esta vez votar, incapaces de oponerse a una coalición formada con el explícito objetivo de promulgar una amnistía general de los presos y represaliados por los hechos de octubre.

Las izquierdas españolas, tan fragmentadas por las líneas que dividían a sus sindicatos entre sí y a éstos de sus partidos, se encontraron, pues, unidas por la circunstancia electoral. Frágil unión, como se mostró ya, durante la misma campaña, en la imposibilidad de organizar ningún mitin conjunto. Cada partido y cada sindicato pretendía conservar ante todo su propia personalidad y afirmar bien alta su futura libertad de acción. Nada de extraño, pues, que el comité republicano-socialista (único al que cabría llamar en España comité de frente popular) dejara de actuar y de existir inmediatamente que finalizó la misión para la que había sido creado. Ganadas las elecciones, las izquierdas españolas quedaron sin dirección política unitaria. Allí lo que hubo fue un nuevo presidente del gobierno que, sin necesidad de consultar a sus aliados de la víspera, formó el gabinete que consideró más oportuno.

De esta manera el gobierno de la República, que debía su existencia a una coalición de izquierdas, no pudo representar en su composición la verdadera naturaleza de esa izquierda. El frente popular dejó de existir como fuerza política y ni siquiera pudo reconstruirse para unas proyectadas elecciones municipales que finalmente se dejaron sin convocar. Es más, durante la primavera de 1936, los partidos políticos —por no hablar ya del gobierno— que habían firmado el pacto de frente popular fueron incapaces de asegurar una dirección política a la creciente movilización sindical obrera. La gran oleada de huelgas que se desencadenó en todo el país cuando los sindicatos recuperaron el uso de sus locales y recompusieron sus organizaciones careció de toda dirección política. Ni el PCE ni el PSOE estaban en condiciones de encauzar o dirigir hacia objetivos políticos la más poderosa movilización sindical —obra a menudo conjunta de la UGT y la CNT— que había presenciado hasta entonces la República. Los comunistas salían sencillamente abucheados cuando pretendían introducir propuestas moderadas en las grandes asambleas obreras, mientras que el PSOE, escindido ya orgánicamente de la UGT, no tenía con los dirigentes de ésta más que una relación de hostilidad abierta.

Fue precisamente la división orgánica de los socialistas lo que impidió que el gobierno republicano pudiera ampliar su base aprovechando la salida de Azaña hacia la presidencia de la República y la consiguiente necesidad de formar nuevo gobierno. Azaña pensó que podía haber sonado ya la hora de reintegrar a los socialistas en el gobierno, pero sus exploraciones para conseguirlo tropezaron con la irreductible oposición de Lar-

go Caballero y de la UGT que manifestó su decisión de romper todos los compromisos si un socialista era llamado a presidir el gobierno. No hubo, pues, gobierno de coalición y el que hubo, sin Azaña al frente, perdió su última apariencia de solidez. Mientras Madrid se situaba al borde de una huelga general, la oposición monárquico-fascista se enva-lentonaba en el Parlamento hasta la provocación. Con aquel gobierno era sólo cuestión de semanas que la conspiración militar saltara por fin de los cuarteles a la calle.

Hundimiento del gobierno y revolución social

Con el golpe militar se liberaron todas las energías y los últimos objetivos de la movi-lización sindical, contenidos durante aquella primavera por unos dirigentes que no se atrevieron a realizarlos contra un gobierno de izquierda. A la vez que tomaban las armas para ahogar la rebelión, los sindicatos procedieron a llevar a la práctica sus objetivos fi-nales: la revolución social. Fieles a su tradición, no se interesaron en un primer momento por el poder político —e incluso le dejaron subsistir o le apoyaron— pero no se demora-ron en implantar, donde tenían fuerza para hacerlo, la ansiada revolución social. UGT y CNT, cada una por su lado allí donde sólo una de ellas existía o en alianza si sus fuerzas se equilibraban, emprendieron el definitivo ciclo de la revolución española. Por todas partes surgieron, a la vez que se hundía el poder central, comités y consejos obreros, alianzas sindicales revolucionarias, milicias. Nadie de quienes tenían verdadero poder habló entonces de dirigir políticamente esa revolución sindical por medio de un frente popular.

A este segundo eclipse del gobierno republicano y del frente popular en los primeros meses de guerra contribuyó decisivamente la falta de un ejército regular para hacer fren-te al ejército rebelde y la respuesta que las democracias occidentales —Francia y Gran Bretaña— dieron a las gestiones emprendidas por el gobierno para adquirir armas en el extranjero. Es sabido que Blum, favorable en un primer momento a la libertad de comer-cio que pedían los españoles, giró en redondo tras su viaje a Londres y, movido quizá por la oposición interna que encontró a su regreso, decretó el embargo de ventas a la Re-pública. El gobierno quedó así sin los elementos imprescindibles para reconstruir un po-der central mientras que los rebeldes, ayudados desde el primer momento por las poten-cias fascistas, conseguían transformar su frustrado golpe de Estado en guerra civil. Co-mo única respuesta, Blum ideó, al parecer entre sollozos y lamentos, la política de no in-tervención que permitió a alemanes e italianos enviar a los rebeldes todo el material de guerra que desearon mientras Francia y Gran Bretaña abandonaban definitivamente a su suerte a la República española.

Este abandono debilitó hasta el límite al gobierno republicano, que subsistía precisa-mente por la necesidad de hacer legítimas las solicitudes de libre comercio de armas. Pe-ro debilitó además la confianza de los socialistas españoles en la Internacional Obrera y en la Federación Sindical Internacional. Los cualificados dirigentes del PSOE encarga-dos de realizar estas gestiones —los moderadísimos Fernando de los Ríos o Luis Jiménez de Asúa— mostraron claramente en sus informes la profunda frustración que les causa-ba la inanidad de los acuerdos adoptados en las reuniones que la IOS y la FSI dedicaron a estudiar la ayuda a España. Asúa llegó a escribir que los dirigentes de esos organismos iban a recibir instrucciones directamente del Foreign Office. Los socialistas moderados comprendían perfectamente que su posición interna se debilitaba al ser abandonados por sus Internacionales en la misma medida en que el gobierno republicano al serlo por las potencias democráticas.

La ausencia de un poder político central obligó muy pronto a que el poder de los sindicatos en la revolución social encontrase su expresión política con la llegada de sus dirigentes al gobierno de la República. La UGT primero, y —ante el asombro general— la CNT enseguida, constituyeron el núcleo dominante de un gobierno en el que resultaba subalterna la presencia de los representantes de partidos políticos. Ese gobierno, que renunció ya a algunos de los dogmas más queridos del sindicalismo español, estaba condenado quizá a presenciar la derrota militar de la República si no hubiera mediado una insospechada intervención exterior.

Ayuda soviética y retorno del frente popular

El auge del poder sindical y el descenso del poder republicano-socialista se acompañó de un nuevo fenómeno político que adquirirá con el desarrollo de la guerra todo su significado: el ascenso del Partido Comunista. Con el gobierno abandonado y los socialistas divididos, sólo los comunistas entre los partidos políticos ofrecieron la imagen de una formación sólida, de masas, bien asentada en las juventudes, disciplinada, poseedora de un aparato militar y en disposición de recursos organizativos adecuados para hacer frente a una guerra larga. Este proceso de auge de los comunistas, que comenzó antes de que empezaran a desembarcar tanques rusos, recibió un impulso decisivo con el envío de material de guerra desde la URSS y la formación de las Brigadas Internacionales para la Internacional. A eso se añadió la presencia entre los jóvenes dirigentes del comunismo español de políticos con experiencia internacional, a uno de los cuales —Togliatti— se deben algunos de los mejores análisis que se hayan realizado sobre la izquierda española y la guerra civil.

Es imposible señalar aquí las consecuencias que estos hechos tuvieron para los desplazamientos de poder en el seno de las fuerzas de izquierda, aunque no será ocioso recordar que Pietro Nenni observó inmediatamente sus implicaciones políticas y pidió en vano a la IOS la formación de algunas brigadas socialistas que equilibraran el creciente poder comunista. Indicaré, sin embargo, la que me parece más relevante. El nuevo rostro de los comunistas y la solidez de sus relaciones exteriores despertó entre socialistas y republicanos —cansados de lo que definían como «desorganización de la economía y desprecio del orden público»— una fuerte corriente de simpatía que se plasmó en la iniciativa tomada por la comisión ejecutiva del PSOE de establecer con el PCE acuerdos formales y comités de enlace con pasos previos a una propuesta formal de unificación.

Es manifiesto en este nuevo acercamiento del PSOE al PCE el intento de «salir al paso» de quienes pretendían atribuir a los sindicatos, «como un nuevo Saturno revolucionario, la misión de disminuir, sustituir y devorar a los partidos políticos». Los socialistas llegaron así a creer que el establecimiento de una política común con los comunistas devolvería a los partidos políticos la dirección del Estado y obligaría a los sindicatos a «constreñirse a su misión específica». Y en efecto, si la desaparición del poder central y del ejército republicano se saldó con el predominio sindical, su reconstrucción no podía hacerse sino a costa de los sindicatos.

La reconstrucción de la unidad política republicana se edificó así sobre el entendimiento entre socialistas y comunistas para oponerse al proyecto de un gobierno exclusivamente sindical, acariciado por Largo, y restablecer el predominio político en el gobierno del Estado. Este acuerdo de fondo, en el que participaban también —no hay que decirlo— los partidos republicanos, es lo que explica la crisis de mayo de 1937 que pone fin a la hegemonía sindical y eleva al gobierno a una coalición estrictamente política. La iniciativa de desencadenar la crisis partió, como bien se sabe, de los comunistas, pero el

inmediato apoyo que encontró entre socialistas y republicanos indica que existía un acuerdo previo, no necesariamente explícito, para poner fin al gobierno de Largo Caballero o arrebatárselo al menos en un primer momento la conducción de la guerra.

El nuevo gobierno de frente popular —con un socialista al frente y la participación de republicanos y comunistas— se edificó así sobre las ruinas del poder sindical. Si se tiene en cuenta que uno de esos sindicatos era socialista se comprenderá la profunda brecha que la solución de la crisis agravó en el seno del socialismo español, y si se recuerda que el otro sindicato era anarquista se entenderá la hostilidad con que recibió al nuevo gobierno y a su política. Ciertamente, la unidad política que había faltado en la primavera de 1936 estaba ahora, en mayo de 1937, garantizada en sus mínimos esenciales. Pero tal unidad se había edificado sobre la división de la clase obrera y la hostilidad de sus organizaciones tradicionales. En tales circunstancias, la posibilidad de que el gobierno de frente popular volviera a conquistar la confianza de las clases trabajadoras radicaba únicamente en su capacidad para dar la vuelta al curso de la guerra. Los acontecimientos posteriores demostraron que quizá era ya demasiado tarde para ese empeño: la presencia de un socialista moderado al frente del gobierno no cambió la actitud de Francia ni de Gran Bretaña, que confirmaron su política de no intervención, ni la de las Internacionales Obrera y Sindical, que comenzaron a ver en Negrín un instrumento de los comunistas. Abandonado a sí mismo, con la única ayuda de la Internacional Comunista y de la Unión Soviética, era sólo cuestión de tiempo que comenzaran a surgir acusaciones mutuas por el desastroso curso de la guerra. El frente popular español, que había surgido a la existencia como un poderoso movimiento de opinión asentado en una base débil por lo fragmentada, acabó sus días en la guerra interna. De ahí seguramente que no haya gozado de buena prensa en la historiografía posterior, que sólo ha visto en él un ardid de los comunistas para salir de su insignificancia y alcanzar una posición de supremacía entre las fuerzas republicanas.

PARADOJAS ETICAS DE LA SALUD

Fernando Savater

análisis y debate



4

«Cantaré ciñéndome la melena con coronas y que la envidia de los inmortales no perturbe el placer de cada día, que en paz persigo en mi camino hacia la vejez y hasta el tiempo que el destino me depare. Porque todos morimos por igual, sólo la divinidad es diferente.»

(Píndaro, *Istmica VII*)

Los así llamados progresos de la investigación médica han creado numerosas perplejidades valorativas entre doctores, legisladores y profanos. La pregunta básica de estas inquisiciones podría enunciarse así: «¿Hasta dónde es lícito ir demasiado lejos?». El convencimiento de que ya se pueden, o pronto se podrán lograr cosas hace aún muy poco imposibles —hasta impensables—, remite consecuentemente a la cuestión de si

deben hacerse. Bienintencionada pregunta, subyugada por el convencimiento entre resignado y arrogante de que todo lo que pueda llegar a hacerse será antes o después hecho; y en cuanto sea hecho, obtendrá al menos parcial justificación. La recién aparecida *bioética* es así una rama cada vez más frondosa de la ética aplicada, dedicada a plantear y eventualmente solventar las dudas morales suscitadas por las alarmantes posibilidades del desarrollo médico, genético, etc. Está comúnmente admitido que la decisión última en torno a estas cuestiones no corresponde únicamente a los especialistas científicos implicados, sino que se requiere el consenso también de moralistas, jueces, personalidades religiosas y un largo etcétera. Que las conclusiones a que suelen llegar semejantes comités allá donde consiguen funcionar rara vez son plenamente satisfactorias, y que sus dictámenes permanecen irremediabilmente abiertos a posteriores revisiones, es cosa que a nadie puede parecerle demasiado chocante.

Pero, ¿cuáles son los temas problemáticos de los que se ocupa preferentemente la bioética? Un somero examen ya revela que se agrupan en torno a los dos polos de la existencia humana, comienzo y fin. Respecto al *nacimiento* se alzan las cuestiones del aborto, la manipulación genética, la fecundación extrauterina, la reproducción clónica y similares; acerca de la *muerte* surgen las preguntas sobre la eutanasia, el suicidio, la prolongación vegetativa de la existencia y la licitud de tratamientos aún en fase experimental de alto riesgo (trasplantes de corazón, etc.).

Tanto en un grupo de cuestiones como en otro lo que se contrapone en último término es la decisión individual frente a la conciencia social y legalmente establecida. ¿Se puede dejar a los particulares que zanden, cada cual para sí, dilemas delicados cuya trascendencia pública puede ser grande? ¿Deben las instituciones colectivas mediar regulativamente, incluso para restringir la libertad experimental de los individuos? En este último caso, ¿quiénes han de formar el areópago que debe ser consultado para establecer la normativa pertinente respecto a tales problemas? Se apela en este debate a nociones de libertad individual y de supervivencia específica, testimonian lo más público y lo más íntimo, entra en juego lo más humano de la cultura, con todas sus audacias y con toda su necesidad de respeto.

Ahora bien, ¿por qué hablar ante todo de las perplejidades tocantes al nacimiento y a la muerte? Porque, se nos responderá, son los hechos más significativos de la vida. Creo que esta respuesta aparentemente obvia es en realidad engañosa y debe ser matizada. El nacimiento y la muerte son los sucesos biológicos más significativos de la vida cuando a ésta se la considera desde la perspectiva de la especie o desde el punto de vista de una totalidad social más preocupada por la necesidad objetiva del suministro de individuos que por su peculiaridad subjetiva. Por cierto que dicha totalidad social no sólo adopta con sospechosa naturalidad el dictamen de la especie, sino que hasta podríamos decir que es quien lo inventa. No cabe dudar de la importancia que *los simbolismos de vida y muerte* (con sus correlatos de renacimiento, metamorfosis, regeneración, derelicción, etc.) tienen en la trayectoria humana, pero subrayar los hechos biológicos mismos como sin disputa prioritarios es algo más discutible. Para el colectivo, nacimiento y muerte son lo más importante, porque señalan la alta y la baja en el grupo, pero en la biografía de cada cual las cosas quizá no vayan del mismo modo. A la empresa gestora del salón cinematográfico lo que más le interesa son las entradas vendidas y el número de espectadores que van abandonando la sesión continua para dejar sitio a otros: pero a los espectadores mismos lo que les importa es la calidad del espectáculo al que asisten.

Lo que tienen en común los dos cabos de la duración vital es que suponen el estado de máxima *invalidéz* del sujeto. Son los casos en que las decisiones pertinentes deben

siempre ser tomadas por otros: un poco después de nacer y un poco antes de morir solemos estar sin remedio en manos de los demás. Se dirá, no sin razón, que por ello mismo la exigencia imprescriptible de respeto a lo humano es tanto más urgente, porque entonces nos vemos convertidos en objetos de manipulación; pero así pudiera olvidarse o minimizarse que el verdadero respeto ético concierne sobre todo a las decisiones libres tomadas cuando el sujeto opera como tal. En la fascinación preocupada por aquellas situaciones en las que el otro se encuentra más cosificado por las circunstancias puede haber tanta piedad como tendencia a legitimar la manipulación. Son ocasiones en las que la reclamación subjetiva apenas cuenta, mientras que la presión objetiva de la sociedad se hace más imperiosa que nunca. El precedente moral que establece esta preeminencia es peligroso: en lugar de partir de la subjetividad libre y desde ella juzgar las ocasiones en que accidentalmente se suspende, se tenderá a extender la inercia objetiva de los casos límite a las situaciones en las que debe predominar la opción libre. Si nacimiento y muerte son los hitos más relevantes de la vida, incluso desde una consideración ética, ello indica que el punto de vista del individuo ya queda *ab initio* subyugado. En el pugilato entre éste y la conciencia colectiva, sólo podrá defenderse renunciando a lo que le es más propio, por culpa de ese punto de partida que no se discute. No sé si de tal forma se privilegia la estrategia fatal del objeto seductor frente al sujeto banal, en la línea promulgada por Baudrillard, pero aun si fuera éste el caso: ¡arredro vayas!

La noción misma de *vida* debe ser considerada más de cerca para no incurrir en un biologismo cosificador. No vendrá mal hacer notar aquí que en el interés prioritario por aquellos estados vitales en los que la inercia orgánica domina o anula la intimidad que sabe dar cuenta de sí misma coinciden los científicos más positivistas y los curas. Sotanas y batas blancas evolucionan con profesional presteza allí donde predomina la inconsciencia, cuando no el terror animal; y en tales casos todo suele resumirse con este parte de guerra: «es ley de vida». La ley de vida, sea de origen divino o puramente material, ayuda a quienes, ante todo, pretenden *hacerse cargo* de los otros, por los más elevados fines, desde luego, pero contando lo menos posible con sus preferencias manifiestas o incluso con el hecho mismo de que sean capaces de manifestar preferencias. ¿Cómo se considera la vida desde esta óptica? Para los curas parece ser un milagro, para los positivistas una obligación, para el Estado que los emplea a todos una tarea productiva: en cualquier caso, la vida es algo que tenemos en préstamo, algo muy valioso —pero sobre cuyo valor no se nos va a consultar individualmente— y que debemos conservar en buen uso y libre de deterioros voluntarios so pena de graves sanciones. Se presenta a la vida en sí, nuda y descualificada, mero fenómeno sacro-biológico, como cumbre irreductible de lo éticamente respetable, invirtiendo de este modo la axiología tanto cristiana como profana de la ética occidental. En efecto, para ésta la vida sin más nunca fue cima de valores sino en todo caso base, mínimo imprescindible pero por su propio carácter forzoso del menor alcance moral: ocasión efímera de una empresa de trascendencia eterna para los cristianos, soporte existencial del proyecto de una vida *buena* —plena, feliz, racionalmente virtuosa, etc.— para quienes deslindaron ética y religión. El énfasis actual sobre «la» vida —en el que coinciden viejos oscurantismos mitológicos, sociobiologismos que fundan la moral en la protección genética y el instinto estatista de colectivización total como óptimo administrativo— dificulta y culpabiliza la preocupación por «mi» vida, la cual funda empero la verdadera exigencia ética.

La ley de vida y su administración, es decir, la gestión adecuada —¿para la colectividad, para el individuo, para la especie?— de nacimiento y muerte son, como queda dicho, los temas primordiales de la teoría bioética. Sin que ninguna de las reservas hasta aquí expuestas descalifique en términos absolutos la pertinencia de estas indagaciones, examinaremos en el resto de esta nota algunas cuestiones que quedan entre ambos

extremos de la trayectoria biológica. Si nacimiento y muerte están relacionados con la obligación sagrada de la vida (obligación que el Estado defiende siempre por mor del incremento productivo, salvo cuando interfiere con la producción del Estado mismo en cuanto tal, es decir, con la guerra), los demás asuntos biomédicos están vinculados a una obligación no menos imperiosa y tampoco carente de aura sacralizadora, que es la de la *salud*. La religión imponía —impone aún hoy, para sus aún no tan reducidas huestes— una serie de comportamientos en nombre de la *salvación*; muchos de ellos siguen siendo prescritos a quienes ya han renunciado a dogmas teológicos, pero ahora por razones de salud. Esta parece ser la versión laica de aquella y conserva por tanto la mayor —no diremos «la mejor»— parte de sus funciones. Tal como fue la salvación, la salud es el fin de la vida del hombre sobre la tierra; ambas son bienes que se da por supuesto que el hombre *debe* anhelar, incluso sin saberlo, salvo perversión diabólica de la voluntad o de la mente (locura); en ambos casos existe un cuerpo de especialistas dedicado a concretar cuáles son las vías para alcanzarlas y a condenar cualquier iniciativa herética individual; una y otra son en último término impuestas —por el bien de todos— mediante instituciones oficiales destinadas a impedir las tentaciones y sancionar los extravíos. La religión tradicional, utilizando como instrumento ideológico la teología de la salvación, aspiró al establecimiento en este mundo de una teocracia; el utilitarismo estatista laico, empleando el dogmatismo médico, ha conseguido imponer modernamente lo que Thomas Szasz llama un «Estado terapéutico». Sería injustificadamente optimista decir que hemos salido gananciosos.

Desde un punto de vista ético —aunque sólo sea terminológicamente el dogma fundamental del Estado terapéutico es que es malo cuanto va contra la salud y bueno cuanto la favorece. Pese a que ya no se aceptan promotores diabólicos para las enfermedades, no se renuncia a subrayar las implicaciones morales de las principales dolencias: ni la sífilis fue el primer ejemplo de esta tendencia ni el SIDA será el último. Pese a tratarse por definición de un bien al que todos tenemos irremediablemente que aspirar, el Estado terapéutico no confía en la iniciativa individual —los ciudadanos no siempre saben lo que les conviene— e impone la salud —él sí sabe siempre lo que conviene a los ciudadanos— por medio de prohibiciones y castigos. Parecería lógico que si la salud fuese un bien inequívoco e inequívocamente superior a los demás bastase la simple persuasión ilustrada por parte de los organismos oficiales, en cuyas manos está la posibilidad de la más eficaz propaganda, para asegurarla. Pero existe desdichadamente la tentación y el pecado también en este campo, por lo que se hace imprescindible la coacción punitiva. Tal como en el fallido experimento bíblico del Edén, la apetencia de placer privado se opone a la exigencia de salud, en sí misma general o pública. Como esta noción de salud pública forma el meollo de todas las argumentaciones oficiales del Estado terapéutico, será preciso dedicarle un examen algo más detenido.

Aceptemos que salud es «el buen estado del ánimo y del cuerpo», como dice un viejo diccionario. Esta definición elemental ya nos plantea un primer problema, que por el momento dejaremos aplazado: ¿es siempre *compatible* el buen estado de ánimo con el del cuerpo? ¿Podrían ser ambos aspectos de la salud ocasionalmente contradictorios? Más adelante espero que volvamos sobre ello. Ahora, sin embargo, nos ocuparemos de esa expresión «buen estado», que tan directas resonancias éticas (y aun diríamos que aristotélicas, por más señas) tiene. No es evidentemente lo mismo determinar el «buen estado» del ánimo y del cuerpo cada uno para sí, individual o personalmente, que establecer esta noción con validez pública o general. Cada cual medimos nuestro «buen estado» psicosomático, es decir, nuestra salud, aplicando diversos baremos, entre los que destaca el *placer*. La mejor recomendación de la honestidad de esta palabra es que aún despierta al ser dicha en voz alta un movimiento reprobatorio y hasta un estremecimiento —quizá no del todo hipócrita— de asco. Buscar el placer y regodearse en él como la más genuina muestra de salud —cosa por cierto que todo el mundo hace

instintivamente— es visto desde el ángulo colectivo (que cada cual mejor o peor interioriza) como un abuso insolidario. Incluso los menos puritanos, al aceptar la licitud moral del placer, la acompañan de recomendaciones sobre la debida moderación o proponen una sumisión de los placeres groseros o inferiores a los más elevados. Por cierto que en lo más elevado de la escala los placeres son tan sublimes que ya no parecen placeres... Los médicos colaboran con estos planteamientos restrictivos aportando datos científicos sobre los daños que a la larga puede acarrear el afán desordenado de placeres. Es curioso que cuando se habla de renunciamiento o de sacrificio no suelen hacerse tantas advertencias sobre sus peligros: se diría que, por la vía dolorosa, hasta el exceso resulta recomendable. Si desde el punto de vista personal, inmediato, el placer es la señal más inequívoca del buen estado de ánimo y cuerpo, es decir, de salud, desde la óptica clínica, ese índice es engañoso o desdeñable. El buen estado equivale desde esta perspectiva al *buen funcionamiento*, a la condición menos conflictiva socialmente y más productiva laboralmente. Que se acompañe de placer o no es cosa irrelevante, que sólo se toma en cuenta como refuerzo motivador en ocasiones. Desde el punto de vista de la salud pública los ciudadanos están sanos cuando van a trabajar y no arman demasiado jaleo unos contra otros. Si sus placeres concuerdan con este tipo de salud o incluso la estimulan, santo y bueno; pero si interfieren de algún modo con la concordia externa o con el trabajo —es decir, con las formas de obediencia y rendimiento social— entonces se convierten en enfermedades o vicios y como tales deben ser sometidos a tratamiento.

De la salud como placer a la salud como buen funcionamiento, es decir, del punto de vista personal al público respecto a la salud hay, como es obvio, un gran trecho. La Administración pública se ocupará ante todo de la *duración* de la vida como el mejor indicio de buena salud; el individuo —en tanto logre resistir a la tentación de pensar desde el sector público que ha interiorizado— pretenderá más bien la *intensidad* placentera. De este distanciamiento deriva cierto sentimiento de culpabilidad individual por no responder a las expectativas colectivas. Por otro lado, el placer —la intensidad— es mucho menos *defendible* que la fácilmente objetivable duración vital. La mayoría aceptará sin disputa —y, a mi juicio, sin razón suficiente— que cualquier anciano de ochenta y siete años aún productivo da muestras de más genuina salud que aquel rey Atalarico del que nos habla Gide en *L'Immoraliste*, que murió a los dieciocho años «*tout gâté, soulé de débauches*», tras una vida «*violente, voluptueuse et débridée*». Desde el punto de vista colectivo hay obligación de conservar el mayor tiempo posible una vida útil, mientras que la búsqueda de intensidades placenteras que puedan acortarla resulta reprobable. Las raíces de este dogma son las mismas que las de cualquier sociedad, como bien señala Tony Duvert: «El hombre sólo es explotable si produce algo; la regla de oro de una sociedad será, pues: todo gasto debe producir» (*El buen sexo ilustrado*). El placer derrocha —la fuerza vital, el tiempo...— sin producir nada a cambio: cuando la salud es improductiva se convierte en una forma sutil de enfermedad, en algo repugnante, excremental. Entiéndase esto en su literalidad: *excremento* es lo que está fuera de su sitio, en el lugar que no le corresponde, allí donde ni rinde ni se rinde, estéril pero tercamente presente. El santo y social asco ante quien se engolfa en los placeres es del género del que se siente ante los excrementos y suscita como reacción las mismas urgencias de limpieza, desinfección, disciplina. Así vemos concretarse la ambigüedad del término salud según responda a una reclamación privada o a una exigencia pública: el *cuerpo-excremento* frente al *cuerpo-máquina*. Y desde la perspectiva que exalta al cuerpo-máquina —duradero, laborioso, fiable, explotable...— sólo se admitirá el cuerpo-excremento —derrochador improductivo— en cuanto pueda servir de refuerzo motivacional para el primero, pero en ningún otro caso. Si el placer no fuese de vez en cuando un premio que sirve de incentivo a la producción (así en el sexo, por ejemplo) estaría proscrito sin remisión de todas las sociedades, por los correspondientes comités de salud pública de cada una de ellas.

Las intervenciones de la Administración para proteger la salud pública son de dos clases, fundamentalmente diferentes, y que merecen consideración ética muy distinta: unas responden a peticiones de ayuda por parte de los interesados, las otras se les imponen coactivamente. Hay que distinguir, como señala Thomas Szasz, entre hacer algo *por* alguien y hacer algo *a* alguien; pero es habitual que se presenten como intervenciones en favor de alguien —por su bien— lo que en realidad son manejos sobre alguien. La única forma de resistencia ante este equívoco es reclamar: no hagáis nada por mi bien sin mi previo requerimiento. Fue en el siglo XVIII, según ha estudiado Michel Foucault, cuando comenzó a institucionalizarse la noción de salud pública como responsabilidad estatal y también obligación de cada ciudadano: «El imperativo de salud es a la vez un deber para cada uno y un objetivo general». Como ya hemos anunciado antes, debe entenderse este imperativo en el sentido categórico del término, no en el hipotético: la obligación de la salud no puede ser condicionada a lo que se espera obtener de ella. De las medidas de higiene pública y los procedimientos educativos de autoconservación se ha ido pasando a fórmulas cada vez más coactivas de saneamiento, a lo largo del siglo XIX y sobre todo del nuestro. Muchas de éstas —vacunamiento obligatorio, control sanitario de alimentos, etc.— son, sin duda, imprescindibles para impedir epidemias o evitar que el descuido morboso de algunos se convierta en daño a terceros. Pero en otros casos lo que se impone es una muy determinada y discutible idea de salud, a la que el individuo debe plegarse por razones «científicas» y no meramente de orden público o de control, como en tantas ocasiones sucede realmente. Los ejemplos más notables de áreas en las que la asistencia médica no solicitada se ejerce con legitimaciones muy dudosas son, sin duda, la de la enfermedad mental y la de la droga.

Como ya se ha dicho en ocasiones, la denominación de «enfermedad mental» es una metáfora que ha sido tomada demasiado al pie de la letra. Es como si alguien entendiese literalmente la expresión «fatiga mental» y propusiera administrar dosis masivas de vitaminas a los listones de acero. No hay «enfermedades mentales» en el sentido en que las hay del hígado o del corazón: o se trata de algún tipo de lesión orgánica con repercusiones en la conducta o no son «enfermedades» más que por una peligrosa facilidad de lenguaje. Lo que suele llamarse «loco» es en realidad un egocéntrico desdichado, alguien que ha tenido poco acierto o mala suerte en esa tarea de hacerse querer por los otros en la que todos estamos empeñados: no siempre, por cierto, la culpa es exclusivamente suya. Decir que el «loco» no está enfermo más que de un modo metafórico —si su enfermedad adquiere un rango artístico o concita remuneración erótica dejará inmediatamente de estarlo— no equivale a negar que sea un personaje absurdo, inaguantable o peligroso; aún menos, por supuesto, significa que sea un genio incomprendido o una víctima persecutoria de la sociedad. Por lo general, el estado llamado «locura» es doloroso y la pedagogía del dolor rara vez mejora a nadie. En numerosas ocasiones el llamado «loco» quiere angustiosamente ser ayudado e incluso su metafórica enfermedad no es sino una coartada de dependencia, como el fervor patriótico o la admiración por el maestro practicada por otros. Pero lo que resulta en general evidente es que pocos «dementes» ganan nada por ser considerados como pacientes en lugar de como agentes caprichosos o desviados. Si alguno de ellos llega a ser encerrado, debe quedar bien claro que lo será por la seguridad amenazada de los que le rodean —tal como cualquier otro delincuente— y no por su propio bien, como hipócritamente se le intenta hacer creer. Una de las tristes argucias del Estado terapéutico es conseguir —so capa de humanismo— que se prefiera la enfermedad a la culpabilidad, que resulte más «digno» ser cleptómano que ladrón o «loco» que «arrogante y agresivo». Por lo demás, puede haber muy buenas razones para rechazar un tratamiento psiquiátrico que uno no ha solicitado (lo cual no implica que se rechace todo tipo de ayuda): como dijo en su momento Raoul Vaneigem, «ya hay demasiados extraños dentro de mí como para que consienta además que penetre otro que pretende expulsarlos en mi lugar»

(*Le livre des plaisirs*). En este punto no carecería de interés ético historiar las raíces económicas del internamiento psiquiátrico y cómo actualmente su duración suele estar regulada por la cuantía de los recursos económicos de que puede disponerse... En cualquier caso, recordemos que no es ningún síntoma inequívoco ni perturbación orgánica la que origina, por lo común, la llamada «enfermedad mental», sino el rechazo de los demás —frecuentemente interiorizado por la propia víctima— tal como queda sancionado por el diagnóstico del médico. El «enfermo mental» está en manos de su médico tanto más cuanto más vaporosa e inconcreta es su supuesta dolencia. En ocasiones se llega hasta extremos tan pintorescos como la «prescripción de síntomas», método muy en boga en la actual cura de almas americana, según el cual el doctor señala las convulsiones, olvidos o arrebatos que el paciente deberá cumplir la semana o el mes próximo, como si se tratara de deberes escolares...

«La locura es un peligro temible precisamente porque no es previsible por ninguna de las personas de buen sentido que pretenden poder conocer la locura. Sólo un médico puede percibirla: y así tenemos la locura convertida en objeto exclusivo del médico, cuyo derecho de intervención se ve al mismo tiempo fundado». Así se expresaba hace años Michel Foucault en una entrevista publicada por la revista *Ornicar*. En el caso de la droga se dan similares circunstancias, pero con añadidos policiales y cenefas edificantes de santo horror ante el «vicio». Por supuesto, tal como en el caso de quien sufre conflictos mentales y solicita ayuda especializada o profana para librarse de ellos, nada hay que objetar éticamente a la asistencia que se presta a las personas que quieren verse libres de la influencia de algún tipo de fármaco.

Pero la intervención médica no reclamada por el paciente, incluso explícitamente rechazada es en el caso de las denominadas drogadicciones algo particularmente escandaloso. Desde el ángulo meramente penal, la prohibición del uso de determinadas sustancias químicas que numerosas personas desean tomar es tan incompatible con una sociedad libre y plural como la prohibición de determinadas películas o determinados libros. En casos como éste, el Estado terapéutico se hace totalitario y el concepto de salud pública funciona de un modo desembozadamente represivo. La función de una sanidad realmente liberal sería velar por la calidad y precio de los productos puestos a la venta, así como informar lealmente sobre los posibles daños derivados de su abuso. Estos, asumidos libremente por quienes los conocieran, nunca serían mayores que los estragos producidos hoy por la adulteración de los fármacos prohibidos, la delincuencia generada por su tráfico y altísimo coste, etc. Por lo demás, como bien señala Thomas Szasz, no es cuestión gubernamental inmiscuirse en lo que las personas llevan en su estómago o su sangre, lo mismo que no le corresponde intervenir contra las ideas que llevan en sus cabezas. Pero desde el punto de vista que nos ha ocupado a lo largo de este trabajo, lo más significativo es el papel que juega el médico en la invención de la droga —como reverso diabólico de la medicina— y en la de su correspondiente usuario, el drogadicto. A este respecto valga una anécdota de la España reciente. En los debates en torno al empleo terapéutico de la metadona, fármaco destinado a «curar» a los heroinómanos por medio de una adicción nueva pero clínicamente más respetable, quedó establecido que la dosis debe ser administrada al enfermo ante la mirada providente del doctor. Es decir: mientras el paciente ingurgite las cucharadas prescritas de metadona —una por papá, otra por mamá...— ante los ojos del médico, está tomando una medicina; pero si, cuando éste vuelve la espalda, se echa al colete un buen trago del ambiguo producto, cae de inmediato en el delito de drogadicción. Es un caso palmario en el que sólo la *mirada clínica* zanja la diferencia entre cura y delito, virtud tonificante y vicio debilitador.

La gran cuestión actual respecto a la medicalización forzosa de la vida es el *derecho a la automedicación*, que debería ser añadido a los restantes derechos humanos y con

Las intervenciones de la Administración para proteger la salud pública son de dos clases, fundamentalmente diferentes, y que merecen consideración ética muy distinta: unas responden a peticiones de ayuda por parte de los interesados, las otras se les imponen coactivamente. Hay que distinguir, como señala Thomas Szasz, entre hacer algo *por* alguien y hacer algo *a* alguien; pero es habitual que se presenten como intervenciones en favor de alguien —por su bien— lo que en realidad son manejos sobre alguien. La única forma de resistencia ante este equívoco es reclamar: no hagáis nada por mi bien sin mi previo requerimiento. Fue en el siglo XVIII, según ha estudiado Michel Foucault, cuando comenzó a institucionalizarse la noción de salud pública como responsabilidad estatal y también obligación de cada ciudadano: «El imperativo de salud es a la vez un deber para cada uno y un objetivo general». Como ya hemos anunciado antes, debe entenderse este imperativo en el sentido categórico del término, no en el hipotético: la obligación de la salud no puede ser condicionada a lo que se espera obtener de ella. De las medidas de higiene pública y los procedimientos educativos de autoconservación se ha ido pasando a fórmulas cada vez más coactivas de saneamiento, a lo largo del siglo XIX y sobre todo del nuestro. Muchas de éstas —vacunamiento obligatorio, control sanitario de alimentos, etc.— son, sin duda, imprescindibles para impedir epidemias o evitar que el descuido morboso de algunos se convierta en daño a terceros. Pero en otros casos lo que se impone es una muy determinada y discutible idea de salud, a la que el individuo debe plegarse por razones «científicas» y no meramente de orden público o de control, como en tantas ocasiones sucede realmente. Los ejemplos más notables de áreas en las que la asistencia médica no solicitada se ejerce con legitimaciones muy dudosas son, sin duda, la de la enfermedad mental y la de la droga.

Como ya se ha dicho en ocasiones, la denominación de «enfermedad mental» es una metáfora que ha sido tomada demasiado al pie de la letra. Es como si alguien entendiese literalmente la expresión «fatiga mental» y propusiera administrar dosis masivas de vitaminas a los listones de acero. No hay «enfermedades mentales» en el sentido en que las hay del hígado o del corazón: o se trata de algún tipo de lesión orgánica con repercusiones en la conducta o no son «enfermedades» más que por una peligrosa facilidad de lenguaje. Lo que suele llamarse «loco» es en realidad un egocéntrico desdichado, alguien que ha tenido poco acierto o mala suerte en esa tarea de hacerse querer por los otros en la que todos estamos empeñados: no siempre, por cierto, la culpa es exclusivamente suya. Decir que el «loco» no está enfermo más que de un modo metafórico —si su enfermedad adquiere un rango artístico o concita remuneración erótica dejará inmediatamente de estarlo— no equivale a negar que sea un personaje absurdo, inaguantable o peligroso; aún menos, por supuesto, significa que sea un genio incomprendido o una víctima persecutoria de la sociedad. Por lo general, el estado llamado «locura» es doloroso y la pedagogía del dolor rara vez mejora a nadie. En numerosas ocasiones el llamado «loco» quiere angustiosamente ser ayudado e incluso su metafórica enfermedad no es sino una coartada de dependencia, como el fervor patriótico o la admiración por el maestro practicada por otros. Pero lo que resulta en general evidente es que pocos «dementes» ganan nada por ser considerados como pacientes en lugar de como agentes caprichosos o desviados. Si alguno de ellos llega a ser encerrado, debe quedar bien claro que lo será por la seguridad amenazada de los que le rodean —tal como cualquier otro delincuente— y no por su propio bien, como hipócritamente se le intenta hacer creer. Una de las tristes argucias del Estado terapéutico es conseguir —so capa de humanismo— que se prefiera la enfermedad a la culpabilidad, que resulte más «digno» ser cleptómano que ladrón o «loco» que «arrogante y agresivo». Por lo demás, puede haber muy buenas razones para rechazar un tratamiento psiquiátrico que uno no ha solicitado (lo cual no implica que se rechace todo tipo de ayuda): como dijo en su momento Raoul Vaneigem, «ya hay demasiados extraños dentro de mí como para que consienta además que penetre otro que pretende expulsarlos en mi lugar»

(*Le livre des plaisirs*). En este punto no carecería de interés ético historiar las raíces económicas del internamiento psiquiátrico y cómo actualmente su duración suele estar regulada por la cuantía de los recursos económicos de que puede disponerse... En cualquier caso, recordemos que no es ningún síntoma inequívoco ni perturbación orgánica la que origina, por lo común, la llamada «enfermedad mental», sino el rechazo de los demás —frecuentemente interiorizado por la propia víctima— tal como queda sancionado por el diagnóstico del médico. El «enfermo mental» está en manos de su médico tanto más cuanto más vaporosa e inconcreta es su supuesta dolencia. En ocasiones se llega hasta extremos tan pintorescos como la «prescripción de síntomas», método muy en boga en la actual cura de almas americana, según el cual el doctor señala las convulsiones, olvidos o arrebatos que el paciente deberá cumplir la semana o el mes próximo, como si se tratara de deberes escolares...

«La locura es un peligro temible precisamente porque no es previsible por ninguna de las personas de buen sentido que pretenden poder conocer la locura. Sólo un médico puede percibirla: y así tenemos la locura convertida en objeto exclusivo del médico, cuyo derecho de intervención se ve al mismo tiempo fundado». Así se expresaba hace años Michel Foucault en una entrevista publicada por la revista *Ornicar*. En el caso de la droga se dan similares circunstancias, pero con añadidos policiales y cenefas edificantes de santo horror ante el «vicio». Por supuesto, tal como en el caso de quien sufre conflictos mentales y solicita ayuda especializada o profana para librarse de ellos, nada hay que objetar éticamente a la asistencia que se presta a las personas que quieren verse libres de la influencia de algún tipo de fármaco.

Pero la intervención médica no reclamada por el paciente, incluso explícitamente rechazada es en el caso de las denominadas drogadicciones algo particularmente escandaloso. Desde el ángulo meramente penal, la prohibición del uso de determinadas sustancias químicas que numerosas personas desean tomar es tan incompatible con una sociedad libre y plural como la prohibición de determinadas películas o determinados libros. En casos como éste, el Estado terapéutico se hace totalitario y el concepto de salud pública funciona de un modo desembozadamente represivo. La función de una sanidad realmente liberal sería velar por la calidad y precio de los productos puestos a la venta, así como informar lealmente sobre los posibles daños derivados de su abuso. Estos, asumidos libremente por quienes los conocieran, nunca serían mayores que los estragos producidos hoy por la adulteración de los fármacos prohibidos, la delincuencia generada por su tráfico y altísimo coste, etc. Por lo demás, como bien señala Thomas Szasz, no es cuestión gubernamental inmiscuirse en lo que las personas llevan en su estómago o su sangre, lo mismo que no le corresponde intervenir contra las ideas que llevan en sus cabezas. Pero desde el punto de vista que nos ha ocupado a lo largo de este trabajo, lo más significativo es el papel que juega el médico en la invención de la droga —como reverso diabólico de la medicina— y en la de su correspondiente usuario, el drogadicto. A este respecto valga una anécdota de la España reciente. En los debates en torno al empleo terapéutico de la metadona, fármaco destinado a «curar» a los heroinómanos por medio de una adicción nueva pero clínicamente más respetable, quedó establecido que la dosis debe ser administrada al enfermo ante la mirada providente del doctor. Es decir: mientras el paciente ingurgite las cucharadas prescritas de metadona —una por papá, otra por mamá...— ante los ojos del médico, está tomando una medicina; pero si, cuando éste vuelve la espalda, se echa al colete un buen trago del ambiguo producto, cae de inmediato en el delito de drogadicción. Es un caso palmario en el que sólo la *mirada clínica* zanja la diferencia entre cura y delito, virtud tonificante y vicio debilitador.

La gran cuestión actual respecto a la medicalización forzosa de la vida es el *derecho a la automedicación*, que debería ser añadido a los restantes derechos humanos y con

carácter de urgencia. El derecho a la automedicación incluye el libre acceso a todos los productos químicos y la libre invención por parte de cada cual de una salud —es decir, un buen estado de ánimo y cuerpo— a su medida, no a gusto de las meras exigencias productivistas del cuerpo-máquina. También forma parte de este derecho el que otras formas de terapia diferentes a la oficial en el Estado terapéutico puedan ser ejercidas con pleno derecho y cargo a la Seguridad Social, etc., sin discriminación alguna. Y, por supuesto, es imprescindible que la información sobre estas materias sea lo más abierta y contrastada posible, a fin de que la dictadura de los especialistas y la dependencia que crean en los ciudadanos, cada vez más negramente obsesionados por la conservación de una salud en cuya definición no se les deja intervenir, pueda ser al menos en parte contrarrestada. Estas son las cuestiones que uno quisiera ver también incorporadas a los debates bioéticos, demasiado centrados hoy en los orígenes y postrimerías de la vida, así como peligrosamente hechizados por los avances técnicos en cuestiones en las que aún quedan tantos principios esenciales por discutir.



NUEVA SOCIEDAD

ENERO/FEBRERO 1986

Nº 81

Director: Alberto Koschuetzke

Jefe de Redacción: Daniel González V.

ANÁLISIS DE COYUNTURA: Ted Córdova-Claire: Bolivia: La Maldición del Estaño; Irene Geis: Chile: ¿Acordando o Acortando Plazos?; Carl D. Parris: Trinidad y Tobago: Perspectivas para el Cambio Político.

TEMA CENTRAL: LAS FUERZAS ARMADAS Y LA DEMOCRACIA. Víctor L. Bacchetta: El Desmoronamiento Político de un Ejército. La Guardia Nacional Somocista; J. Raúl Barrios Morón: El Nacionalismo Militar Boliviano. Elementos para la Reformulación Estratégica; José A. Gil Yepes: El Encaje Político en el Sector Militar. El Caso de Venezuela; Víctor González Selanfo: El Largo Viaje de un Ejército Hacia la Noche. La Experiencia Chilena; Herbert Koeneke: Pretorianismo, Legitimidad y Opinión Pública; Raúl Leis: El Comando Sur, Poder Hostil; Mario Lungo: Las Nuevas FFAA Salvadoreñas. Un Obstáculo para la Democratización; José Luis Piñeyro: Seguridad Nacional en América Latina. Propuestas Metodológicas; Juan Rial: Las FFAA Como Partido Político Sustituto. El Caso Uruguayo. 1973-1984; Víctor Sanz López: Para que la Noche Quede Atrás. La Sinrazón de las FFAA.

POSICIONES: PRD de Panamá: Itinerario de la Crisis Política; Héctor Oquell: El Salvador: Diálogo y Negociación.

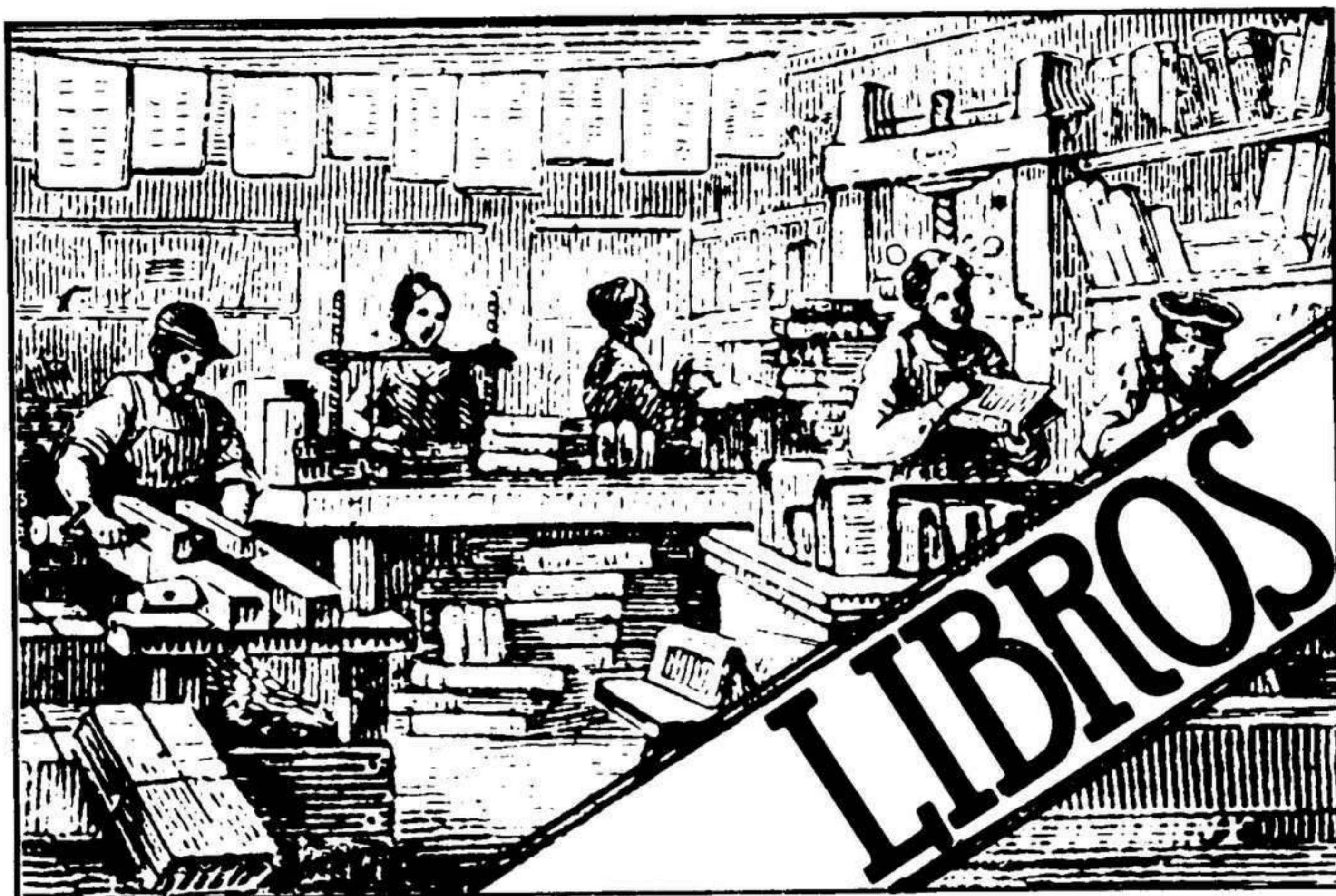
POLÍTICA—ECONOMÍA—CULTURA: Theotonio Dos Santos: Lo Concreto de un "Modelo Puro"; Adolfo Figueroa: La Vía Campesina al Desarrollo Rural; Claudio Trobo: ¿Quién le Pone el Cascabel a los Militares?; Luis Verdesoto: Ecuador Científico.

SUSCRIPCIONES (Incluido flete aéreo)

	ANUAL (6 núms.)	BIENAL (12 núms.)
América Latina	US\$ 20	US\$ 35
Resto del Mundo	US\$ 30	US\$ 50
Venezuela	Bs. 150	Bs. 250

PAGOS: Cheques en dólares a nombre de NUEVA SOCIEDAD. Dirección: Apartado 61.712 - Chacao, Caracas 1060-A, Venezuela.

Rogamos no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones.



EL ORDEN MILITAR MUNDIAL

Miguel Porta Perales

Mary Kaldor,
El arsenal barroco.
Editorial Pablo Iglesias-Siglo XXI.
Madrid, 1986.

De entre las muchas cosas que molestan al movimiento pacifista en general, y a determinados y muy susceptibles pacifistas en particular, hay una que, al parecer, les irrita en sumo grado: que se diga que andan escasos de elaboración teórica, que lo suyo es más bien un asunto instintivo, y que la poca teoría de la que

hacen gala (?) se suele asemejar más a un catecismo que a otra cosa. Quien diga esto ya puede abrir el paraguas y disponerse a aguantar el chaparrón: se le tachará o de inculto o de mala fe. Y aquí paz y después gloria. O, por mejor decir, aquí gloria y después paz.

Sin embargo, hay un asunto en el que el pacifismo ha dicho alguna cosa interesante. Este asunto es el de la carrera de armamentos. En efecto, el tema de la carrera de armamentos (causas, características, implicaciones diversas, etc.) ha propiciado una abundante bibliografía y una elaboración teórica francamente aceptable. Y aunque muchos de los trabajos y reflexiones sobre el tema provienen de instituciones y personas que muy difícilmente pueden ser catalogadas como «pacifistas» (en el restringido sentido que el movimiento por la paz da a este término),

ésta es una de las escasas cuestiones en que el pacifismo (o autores considerados «pacifistas», con comillas) han dicho algo interesante y consistente. *El arsenal barroco*, de Mary Kaldor, es una de estas excepciones a las que nos acabamos de referir.

En *El arsenal barroco* —resultado de varios años de investigación en los que la autora ha entrevistado a todo tipo de personas relacionadas con el tema del armamentismo, y ha consultado una amplia gama de documentos— Mary Kaldor analiza en forma detallada lo que ella denomina «el orden militar mundial». El propósito de la autora, utilizando sus propias palabras, no es otro que mostrar lo siguiente: que «la moderna tecnología militar no es avanzada, es decadente. En consecuencia, los armamentos modernos se han ido distanciando cada vez más de la realidad económica y militar. Son tre-

mendamente sofisticados y complejos; son logros de un inmenso ingenio, talento y organización y pueden causar un grado de destrucción inimaginable. Pero son también incapaces de alcanzar objetivos militares limitados y han conseguido erosionar la economía de los Estados Unidos y de los países que le han seguido. Un mayor gasto sólo puede empeorar las cosas». Vayamos por partes y detengámonos, siquiera brevemente, en las principales tesis del análisis kaldoriano: que la carrera de armamentos se distancia de la realidad económica; que se distancia también de la realidad militar; y que, en fin, proseguir la carrera de armamentos equivale a empeorar todavía más el panorama.

El armamento «barroco» (esto es, las armas cada vez más innecesariamente complicadas y sofisticadas) se ha distanciado de la realidad económica porque hoy, lejos de estimular una nueva tecnología civil, no está sino promoviendo la decadencia económica. Y esto es así, argumenta Kaldor, porque la «tecnología militar barroca» expande artificialmente industrias de dudosa rentabilidad, absorbe recursos (económicos y humanos) que se podrían invertir en mejores y más dinámicas industrias, congela determinados sectores industriales que se ven abocados a un «autismo» cuyo límite viene impuesto por los presupuestos de defensa, distorsiona lo que realmente es el progreso tecnológico en beneficio del perfeccionamiento de complejos y problemáticos productos, etcétera. La carrera de armamentos y la supervivencia (y/o mantenimiento) de determinadas empresas armamentistas (Lockheed, Grumman, etcétera), supone una «espe-

cie de tumor que va carcomiendo las células de la economía americana». En definitiva, el creciente arsenal barroco contribuye «a la disminución de la inversión de capital y del crecimiento de la productividad, así como a la progresiva degeneración de la economía americana».

Pero no sólo es la economía americana la que está en peligro por mor de la carrera de armamentos, sino que la aparición de un «orden militar mundial» y de una «cultura armamentista global» da lugar a que prácticamente todo el planeta (especialmente la URSS y muchos países del Tercer Mundo) esté condenado a sufrir (a medio o largo plazo) la misma suerte económica que ya se vislumbra en Norteamérica. Y es que, para Mary Kaldor, el «esfuerzo por igualar militar y económicamente a Occidente» es la vía más segura hacia la dependencia, el estancamiento o la regresión.

Ahora bien, el armamentismo barroco no sólo está reñido con el desarrollo económico y social, sino que tampoco es capaz (paradójicamente) de satisfacer las necesidades militares del sistema. En efecto, Mary Kaldor —en una de las mejores partes de su trabajo— evidencia como los sucesivos «perfeccionamientos» del armamento aumentan espectacularmente su coste económico, pero en modo alguno su efectividad militar. Pero no sólo eso, sino que a partir de Vietnam (incorporación a la tecnología militar de la microelectrónica, el infrarrojo, el láser, el material sintético, etc.) se puede hablar ya de una «eficacia militar decreciente» del armamento. Armamento que, si bien es capaz de lograr muy altas cotas de destrucción masiva, presenta

toda una serie de inconvenientes (difícil manejo, incremento de averías, escasa durabilidad, etc.) que lo convierten en poco operativo militarmente hablando.

¿Cómo superar el *impasse* al que está llegando ya la carrera de armamentos? Mary Kaldor nos advierte de lo perjudicial e inútil que sería intentar solucionar el problema mediante un incremento del gasto destinado a defensa. En efecto, para la Kaldor, el incremento del gasto militar, por muy grande que éste sea, no puede solucionar el problema ya que, según nuestra autora, existe una estrecha correlación entre coste industrial creciente y efectividad militar decreciente. En otros términos, la concepción actual de la carrera de armamentos, afirma Mary Kaldor, se «está ya comenzando a resquebrajar» debido a una serie de causas como la carestía del material, su deficiente funcionamiento, la amenazada supervivencia de las industrias militares, la cada vez mayor erosión del poder militar, las crecientes protestas ciudadanas, etc.

¿Cuál puede ser, pues, la alternativa al arsenal barroco que hipoteca el futuro? La alternativa de Mary Kaldor se mueve entre dos polos: el desarme y la sustitución de la tecnología militar barroca. El desarme porque la Kaldor está convencida de que ésta es la única vía que puede conducirnos a la paz y «al desarrollo humano en el sentido más pleno». Y la sustitución de la tecnología militar barroca por otra más barata, sencilla y eficaz (pequeños misiles, artillería teledirigida, vehículos, barcos y aviones baratos, pequeños, seguros y para una sola función, etc.) porque es una de las pocas formas de

«romper los complejos y profundos nexos que rodean al sistema de armas barroco».

El arsenal barroco es un excelente trabajo que nos da una perfecta idea de cómo nos armamos y de cuál es el funcionamiento e implicaciones de lo que Kaldor llama «el orden militar mundial». Quizá sean un tanto (o un mucho) discutibles el mecanismo de fondo que vertebra el análisis de la correlación entre el coste económico creciente y la efectividad militar decreciente de las nuevas armas, o la muy optimista idea de que el desarme puede abrir las puertas «al desarrollo humano en el sentido más pleno», o la ausencia de una valoración del por qué nos armamos, etc. Pero, en cualquier caso, *El arsenal barroco* tiene un mérito incuestionable: poner al descubierto el funcionamiento y los entresijos de lo que se suele denominar «complejo militar industrial».

¿Estamos frente a un libro pacifista? Pienso que no, porque *El arsenal barroco* (más allá de los píos deseos pro desarme de su autora) es ante todo un brillante estudio de las relaciones que mantienen entre sí la economía y la carrera de armamentos. Y éste es otro indudable mérito del libro en cuestión: el no incurrir en la «perversión del lenguaje» (Heller y Feher), típica de muchos antinuclearistas y pacifistas que, generalmente sin conocimiento real de causa, se dedican al cómodo y fácil ejercicio de especular sobre las características, dimensiones, posibilidades, etc., de los últimos ingenios engendrados por la carrera de armamentos. *El arsenal barroco* es, en definitiva, uno de aquellos trabajos que deberían servir de modelo.

EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Carlos de la Serna

Celestino del Arenal,
Introducción a las relaciones internacionales.
Ed. Tecnos.
Madrid, 1984.

Las relaciones internacionales como fenómeno político, social y cultural son una realidad relativamente reciente en la historia de la humanidad. Esta corta historia se hace aún más breve cuando nos fijamos en el estudio académico de las relaciones internacionales.

Para algunos, el estudio de las relaciones entre grupos humanos a través de las fronteras se reduce a una actividad secundaria en el orden de prioridades académicas. Basta con echar una ojeada a los *curriculum* de las facultades universitarias españolas para ver que las relaciones internacionales son la cenicienta de los estudios superiores.

Con esto de las RR.II. pasa como con muchas otras cosas de la vida humana: nos damos de bruces con la mediocridad, el aquí y ahora o la miopía más absoluta. Resulta más que sorprendente observar la ignorancia y el desprecio que tienen los problemas y la realidad mundial en los programas de las facultades dedicadas al estudio del hombre en sociedad. En las ramas de Historia, Derecho, Sociología, Económicas o Políticas

—por citar algunas— vemos con sorpresa que el estudio de las RR.II. tienen el carácter próximo al de asignatura «María».

La sorpresa se torna en estupor cuando uno mira más allá del entorno inmediato y observa una humanidad global, en conflicto y cambio, caminando a pasos agigantados por la senda de la internacionalización y la interdependencia, cuando no a la guerra y la intervención económica o por la fuerza.

¿A qué se dedican nuestros académicos, intelectuales e investigadores? Si uno mira los programas de estudio de Facultades como la de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid (por cierto, el único centro público en España dedicado a esas materias) ve, ya no con sorpresa ni con estupor, sino escandalizadamente, que el estudio de las relaciones internacionales gira en torno a materias tan relevantes para la comprensión de los problemas del mundo actual como el Derecho Público Eclesiástico y Relaciones Iglesia-Estado, o el Derecho Diplomático y Consular. Si con el estudio de estas dos materias —y las otras cuatro que componen el total del *curriculum* específico en RR.II. se logra entender algo de lo que ocurre en Oriente Medio, Centro América o las relaciones Este-Oeste, será producto de la casualidad. O como dicen en el cine: «todo parecido con la realidad es pura coincidencia».

Clamar en el desierto parece ser el destino de muchos españoles. Desde Blanco White a nuestros días pueden haber cambiado algunas cosas, como escribir en España y no tener que hacerlo fuera para decir ciertas cosas, recuperar las formas democráticas, etc. Pe-

ro en la Universidad española hay motivos suficientes como para identificarse con aquel insigne intelectual que, como dice Goytisolo, fue sin duda el mejor escritor de la Ilustración. Y lo dicho más arriba sobre las RR.II. sirve para ratificar esta idea del inmovilismo universitario.

Parece increíble, pero es así. Siendo los problemas internacionales tan graves e importantes para el futuro de la humanidad, para la paz y el desarrollo, incluso para la supervivencia de nuestra especie, resulta que la Universidad española se dedica a estudiar los efectos del Tratado de Letrán, o el «reenvío» en el Derecho Internacional Privado Español. A mí, o a cualquier otro, que se lo expliquen.

Lo que resulta admirable en todo esto es que a pesar del pétreo muro de inmovilismo que caracteriza a la Universidad española se den casos como el de Celestino del Arenal, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Vasca, que contra viento y marea se nos presenta con esa magnífica obra de *Introducción a las Relaciones Internacionales*. El caso de Celestino del Arenal es aún más admirable cuando uno piensa que renunció hace varios años a una posible y cómoda vida de político profesional para dedicarse, montado en su Babieca, al estudio serio, riguroso y científico de las relaciones internacionales. Cierto que su caso no es el único, y en cierta forma viene a recoger el testigo cedido por sus antecesores académicos —Truyol, Mesa y Medina— que fueron en su día lo suficientemente Quijotes o chiflados como para atreverse a abrir una nueva brecha en el campo de las ciencias sociales.

El libro de Celestino del Arenal tiene, por lo tanto, en parte una deuda con la obra de estos profesores, aparte de haber sido alumno y compañero de ellos.

Pero si Tuyol y el tándem Mesa y Medina tienen el mérito de ser los fundadores, Celestino del Arenal tenía la obligación de superar a los maestros. Y lo ha conseguido.

La obra de Antonio Tuyol, *La sociedad internacional*, tiene el valor de ser la primera que enfoca la materia como disciplina académica *per se*, y tiene aún un gran valor y vigencia a la hora de entender en un sentido profundo la evolución creciente del mundo en que vivimos.

En su *Teoría de las relaciones internacionales*, Manuel Medina introduce un debate importante para la comprensión de la realidad mundial, pues presenta un excelente repaso del debate teórico sobre los supuestos en que se base el estudio de la materia.

En cuanto a Roberto Mesa, nos ofrece en su obra *La sociedad internacional contemporánea* un voluminoso *corpus* de documentos básicos que se ha transformado en una fuente útil, casi imprescindible y de consulta a veces obligada para tener una visión precisa de los términos formales en que se basa la acción de las más importantes instituciones internacionales y regionales del mundo actual.

Toda comparación resulta odiosa, se dice vulgarmente. Y no se trata por lo tanto de comparar estos tres libros con el de Celestino del Arenal. Pero sí se puede decir que esta última obra culmina y supera las anteriores. En su *Introducción a las Relaciones In-*

ternacionales, Del Arenal avanza no sólo en el debate teórico sino que ofrece un compendio global —acompañado de una valoración crítica— de las diferentes corrientes de pensamiento que hoy en día intentan profundizar en el estudio de esta materia.

La obra consta de una parte introductoria donde, entre otras cosas, se hace una inteligente discusión en torno al problema que surge por la utilización de términos similares pero en el fondo dispares, a la hora de denominar el objeto de estudio. Ante términos como «política internacional», Celestino del Arenal opta por el término «relaciones internacionales», ya que «abarca el conjunto de las relaciones sociales que configuran la sociedad internacional, tanto las de carácter político como las no políticas, sean económicas, culturales, humanitarias, religiosas, etc., tanto las que se producen entre los Estados como las que tienen lugar entre otros actores de la sociedad internacional y entre éstos y los Estados».

Siguiendo con los términos, Del Arenal es de los que suscribe la idea de que «las relaciones internacionales es la ciencia que se ocupa de la sociedad internacional». En este punto, el que escribe estas líneas prefiere hablar de «estudio» de la sociedad más que de «ciencia». Pero quizá no sea éste el lugar para introducir el debate en torno al carácter de ciencia que tiene el estudio de las sociedades humanas en sus diversas facetas. No cabe duda que el método de estudio en relaciones internacionales es equiparable al conocido como método científico. La duda estriba en saber si sólo por ello adquiere la naturaleza de «ciencia».

La segunda parte del libro, la más extensa, es sin duda una de las aportaciones más serias, documentadas e interesantes que se han escrito sobre las RR.II. como teoría y como disciplina científica. En España, desde luego, es la única contribución de tal calibre. Pero incluso buscando en la bibliografía no española sobre RR.II. resulta difícil encontrarse con algo parecido.

La riqueza de citas y lo exhaustivo de la investigación no impide una lectura llena de aportaciones interesantes y críticas acertadas. Me atrevería a decir que en el mundo no anglosajón, y exceptuando el libro de Marcel Merle *Sociología de las Relaciones Internacionales*, es difícil encontrar una recopilación crítica y analítica tan completa sobre los orígenes y evolución de la teoría de las relaciones internacionales y su naturaleza como disciplina académica.

Esta parte del libro resulta imprescindible para los estudiantes de lengua española que deseen adentrarse en las apasionantes aguas de la discusión teórica sobre el fenómeno de las relaciones internacionales; y seguramente animará a más de uno a emprender la tarea de la profundización en el estudio de las múltiples vías de investigación que abre Celestino del Arenal. Y es en eso quizá donde resida el gran valor de su trabajo, pues no es una obra cerrada en sí misma, no es circular, sino que se abre en una diversidad de campos, habiendo sentido previamente unas bases firmes para ulteriores trabajos. Trabajos que pueden versar sobre aspectos tan interesantes como la teoría y metodología en sentido estricto; o la evaluación de nuevos métodos de análisis cuantitativos y cualitativos resultantes de las

nuevas herramientas que ofrece la tecnología informática; como también puede serlo el iniciar estudios sobre problemas internacionales aplicando avances logrados en otras ciencias sociales.

La obra termina con una parte que tiene un carácter más nominativo que analítico, en la que el autor esboza unas «Bases para la teoría de las relaciones internacionales». Es, sin duda, la parte más novedosa por sus contenidos, y en ella Del Arenal propone una concepción del mundo y las relaciones humanas organizadas socialmente en dicho mundo. Como escribe él mismo, «la teoría de las relaciones internacionales es así, en última instancia, una teoría de la humanidad, no del hombre como ser individual, sino de esa comunidad universal que constituye la humanidad y que en el estado actual puede denominarse sociedad internacional o sociedad mundial».

Si hubiese que situar en orden jerárquico las materias que componen el campo de los estudios internacionales nos encontraríamos con la columna vertebral en la teoría de las relaciones internacionales, la política internacional, el Derecho Internacional Público y la organización internacional.

El estudio de las relaciones internacionales es además un trabajo que se nutre de otras disciplinas, como la economía, la antropología, la ciencia política, la sociología, la psicología individual y social, etc. Pero no se nutre de éstas para *sumar* conocimientos o instrumentos; resulta que trasciende el propio campo del que recibe estas contribuciones para dar un valor añadido a esas mismas disci-

plinas. Se consigue en cierta forma dotar de un sentido nuevo o de una culminación más amplia a esas materias por la coherencia interna que ofrece el estudiarlas desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Muchos de los problemas antropológicos o económicos adquieren una naturaleza distinta cuando son estudiados desde las relaciones internacionales; por eso uno puede pensar que en el futuro se puede llegar a contar con una ciencia social aglutinadora de las demás, sin impedir que toda rama en particular siga su propia dinámica.

Pero toda ciencia o todo objeto de estudio debe contar con unos fines. Para Celestino del Arenal éstos vienen prefijados por los dos problemas que hoy padece la sociedad internacional: el binomio guerra y paz, y el subdesarrollo. De éstos nacen automáticamente los fines de las relaciones internacionales: conocer los hechos objetivamente; proporcionar una visión global opuesta a la individual de esos hechos y problemas; contribuir a orientar desde esa visión la política exterior de los Estados; formular juicios de valor sobre política internacional; promover la comprensión y el espíritu crítico internacionales; y, por último, formular «una teoría general de las relaciones internacionales capaz de aprehender, interpretar y prever adecuadamente la realidad internacional, en orden a la solución de sus problemas».

En resumen, dentro de ese desierto estéril para el estudio serio y profundo de las relaciones internacionales que nos ofrece la Universidad y la intelectualidad española, resulta motivo de alegría y esperanza, mucha esperanza, el

encontrarnos con un oasis tan exuberante como el que nos ofrece Celestino del Arenal.

Esperemos que sean muchos, y no sólo los estudiantes, los que se interesen por las relaciones internacionales con ánimo de llegar a conocer mejor nuestro mundo, pues de su conocimiento no puede resultar más que la luz. Y como muy bien dice el lema del escudo de armas de la libre pensadora República del Cantón de Ginebra, «*post tenebras, lux*».

¿TIENE FUTURO LA DEMOCRACIA?

Otto Granados Roldán

Norberto Bobbio,
El futuro de la democracia.
Plaza & Janés.
Barcelona, 1985.

El tema de la democracia—su sentido y significado, sus alcances y modalidades, su connotación ideológica e, incluso, su gobernabilidad—ha sido uno de los más recurrentemente tratados en la discusión política de las últimas dos décadas. Desde su caracterización como liberal-burguesa hasta su reducción al solo hecho de celebrarse elecciones libres, la democracia parece ser todavía el ideal más acabado y persistente en los sistemas políticos contemporáneos, al grado de que aun las tesis más lúcidas de la izquierda socialista han vuelto los ojos hacia la inevitabilidad

de caminar por la construcción democrática antes de pasar a formas superiores de organización social. En otro contexto, en particular el de las explicaciones funcionalistas y modernizadoras, se advierte que hoy la sociedad abierta ha producido tal cantidad de demandas sobre el sistema democrático que éste se vuelve ingobernable ante la incapacidad para satisfacer adecuadamente aquella expresión social. En el tránsito, sin embargo, de unas tesis a otras, lo que ha ocurrido no es tanto que la democracia esté en crisis sino que ha sufrido de manera inexorable una serie de modificaciones que deben entenderse y aceptarse porque constituyen, para un régimen democrático, «su estado natural». Esta es quizá la principal idea que recorre el conjunto de siete ensayos escritos entre 1978 y 1984 que el filósofo italiano Norberto Bobbio ha publicado bajo un optimista título: *El futuro de la democracia*.

Bobbio ha sido, sin lugar a dudas, uno de los nombres más importantes en la reflexión ideológica y filosófica del siglo XX. A los setenta y seis años su obra suma alrededor de mil trescientos títulos suyos y más de setecientos de otros autores en polémica o comentario de sus escritos en el campo de la filosofía, del derecho y de la política. Ha protagonizado, además, dos de las principales polémicas en el pensamiento socialista europeo que tuvieron amplias repercusiones. En los años cincuenta, Bobbio discutió sobre el concepto de libertad con dos figuras históricas del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti y Galvano della Volpe, y defendió con singular lucidez el valor de la democracia, la tolerancia y el pluralismo en su sentido occi-

dental; tiempo después, a mediados de los setenta, se convirtió de nuevo en el interlocutor socialista liberal de una izquierda reticente a valorar adecuadamente las instituciones de la democracia representativa como vía del progreso socialista. Bobbio, en suma, ha significado para muchos la posibilidad de un pensamiento altamente elaborado y coherente para la evolución democrática y cuya reflexión gira en torno de dos exigencias intelectuales básicas: *comprender y discutir*.

Bajo tales premisas, la democracia, según Bobbio, no goza ciertamente de cabal salud y es evidente que jamás gozó de ella, pero hoy, desde luego, no está al borde del colapso. Se encuentra en estado de transformación dinámica porque le es consustancial, y más que de crisis debería hablarse de las promesas que no ha podido cumplir y de las ilusiones y los obstáculos no previstos que, para muchos, han producido esperanzas frustradas. Más que definirla por su contenido, la democracia debe calificarse en función de un método que, según Bobbio, incluye o excluye diversas nociones y formas salvo una—la transparencia del poder—que es indudable en la comprensión democrática. Siguiendo la tradición política liberal, el componente de elecciones libres, competitivas y plurales continúa siendo la expresión más concreta de democracia formal sin que ello signifique la mayor o menor valoración de ésta. Es probable, dice Bobbio, que uno de los signos de profundo descontento o desilusión haya sido la creencia de que investido el ciudadano del poder suficiente para elegir a sus gobernantes, no lo haya hecho en la persona de los más «sabios, honestos e iluminados» de sus

conciudadanos; pero esto era, aclara, producto de una ilusión algo ingenua que hizo a un lado la realidad de que todo hombre, como animal político, persigue su propio interés. Pese a ello, que en rigor no constituye un problema de la democracia sino de los ciudadanos, hay una especie de acuerdo fundamental que se basa en el «respeto de las instituciones», independientemente del contenido democrático que quiera imprimirse, pues son el método, los intermediarios autorizados (en este caso, los partidos) y la antigua tradición del «gobierno de las leyes», las condiciones esenciales para el funcionamiento de la democracia. No son, cabe reconocer, en lo absoluto desdeñables estos ingredientes —aunque a menudo todavía se estimen demasiado modestos ante los defensores de los «inmortales principios»—, porque articulan dos requisitos esenciales, viabilidad política y fuerza jurídica, de la eficacia democrática. «Vuelvo a tomar —anota Bobbio— mi vieja idea de que derecho y poder son dos caras de la misma moneda; sólo el poder puede crear derecho, y sólo el derecho puede limitar al poder». Aquí radica, al lado del propósito de hacer que la democracia descienda del «cielo de los principios» a la tierra de los «intereses», su preocupación central.

¿Cuáles son hoy las transformaciones y los obstáculos de la democracia? Tal vez una primera precisión consista, en el libro de Bobbio, en la pertinencia de complementar las nociones de fondo y de contenido —cualesquiera que sean— con una visión de orden a la vez metodológico y pragmático; hay una *definición mínima* de la democracia que se explica por el conjunto de *reglas de procedimiento*

para la integración de *decisiones colectivas* en las cuales está planteada la participación más amplia posible de los interesados, es decir, de los ciudadanos y la sociedad. Pero, sin embargo, a pesar de esta singular percepción del acuerdo colectivo, la democracia ha sufrido históricamente cambios fundamentales que han determinado la valoración que de ella se formula en la actualidad. El primero ha sido la transición en la antigua idea de democracia directa en cuanto han surgido múltiples y variados fenómenos que se interponen —bajo el modelo de instituciones o formaciones políticas, sociales o gremiales— entre la sociedad y el poder, produciendo una intermediación en la cual el ciudadano deposita parte de su voluntad decisoria, que en lo sucesivo no ejercerá de manera directa.

Esto se asocia, en la perspectiva opuesta, con el hecho evidente de la multiplicación de poderes, distinto a la idea clásica de una sociedad centripeta que veía un solo centro de poder. La realidad, a los ojos de Bobbio, ha sido la de una sociedad policéntrica o policrática que en buena medida ha propiciado y facilitado el pluralismo de todo tipo. De esta transformación deriva otra referida al problema de la representación. Durante décadas, la tradición jurídico-política clarificó la no sujeción del representante, en el esquema de la democracia representativa, a un mandato vinculante con sus representados, sino más bien con la nación y el conjunto social; así se discutió mucho sobre la naturaleza de tal mandato y sus posibilidades de revocación. Sin embargo, la acusada diferenciación política y de intereses ha sentado bases algo distintas en esa relación política

«entre los grandes grupos de intereses contrapuestos y el Parlamento», creando muy probablemente «un nuevo tipo de sistema social que ha sido llamado, con razón o sin ella, neocorporativo» (página 30).

La no derrota del poder oligárquico ha sido otra de las transformaciones (o promesas incumplidas) de la democracia. Si ésta tenía como principio vertebral la libertad como autonomía, la democracia representativa ha constituido, paradójicamente, una renuncia de hecho a aquel principio y, por consiguiente, un indicador de la continua presencia de élites en competencia por el poder y en el poder mismo. El tema de los espacios de decisión y poder insuficientemente ocupados por el desarrollo democrático es otro de los grandes cambios. Según Bobbio, hay que advertir si al lado del ejercicio democrático del individuo se han extendido los espacios y los lugares donde aquél puede encontrar plena expresión, pues hay bloques de poder —como la empresa y el aparato administrativo— donde las repercusiones de sus actos lo son para toda la sociedad y, sin embargo, ésta no alcanza a disponer sino sólo a asumir tales consecuencias. Algo parecido ocurre, dada la imposibilidad política real de que el ciudadano intervenga y vigile directamente, con lo que Bobbio llama el «poder invisible»; es decir, aquel proceso por el que la formación y el control de las decisiones políticas básicas se sustrae al escrutinio público y a la opinión ciudadana, y donde la transparencia del poder no existe. O, en otras palabras, usadas en la autocracia, se aplica lo de que «si los secretos del reino los sabe la plebe, es que no han sido bien cometidos».

En la última promesa no cumplida —la educación del ciudadano—, la democracia concebía que de su práctica generalizada y creciente habría de deducirse una politización ciudadana vinculada a la responsabilidad por la cosa pública. En las democracias más consolidadas, sin embargo, ha surgido, dice Bobbio, no sólo una indiferencia y apatía políticas ascendentes sino además una reorientación en el sentido y el significado de la cultura política; los electores que antes se consideraban vinculados o comprometidos con la formación de las decisiones políticas son ahora mucho menores que aquellos que eligen sus preferencias políticas en función de su interés personal, mediante el mecanismo típicamente clientelista.

Fueron, ciertamente, promesas no satisfechas, pero en la opinión de Bobbio muchas de ellas eran virtualmente imposibles porque desde un principio eran ideales no viables o bien se presentaron obstáculos no previstos o que sobrevinieron después de las transformaciones de la sociedad civil. A título de prueba menciona, en primer término, que las sociedades se fueron haciendo crecientemente complejas y tecnificadas de suerte que la hipótesis democrática de que todos pudieran decidir sobre todo se vino abajo ante aquello que Saint-Simon había advertido hace más de un siglo augurando la sustitución del gobierno de los juristas por el de los científicos, es decir, por una porción muy concreta, específica y bien diferenciada de la sociedad global. «Tecnocracia y democracia son auténticas: si el protagonista de la sociedad industrial es el experto, no puede ser un ciudadano cualquiera.»

La segunda dificultad fue el creciente aumento del aparato burocrático, de tal manera que la configuración democrática de la sociedad se vio seriamente afectada al ser invertidos los términos de densidad del poder, que empezaron a correr de la cúspide a la base, y cuyo ejemplo más palpable parece ser el desmantelamiento —y la evidente limitación al poder democrático— del Estado de servicios, del Estado social. Esto explica, para Bobbio, que todos los Estados que se hayan hecho más democráticos se conviertan, a la vez, en más burocráticos pues el proceso de burocratización ha sido en una gran parte un efecto del proceso de democratización. El tercer problema descrito por Bobbio tiene que ver con uno de los temas más llamativos de la última década: la ingobernabilidad de la democracia, que aparece cercanamente asociada a las discusiones recientes sobre la crisis de la legitimidad y el consenso. Es cierto que ante el persistente crecimiento de las presiones y demandas no satisfechas de la sociedad, y ante el virtual agotamiento del Estado de bienestar de otras épocas, el sistema político ha visto erosionada su base de consenso y legitimidad haciendo crisis, en consecuencia, sobre la gobernabilidad de la democracia. Esto no quiere decir que se vean alteradas las capacidades de conservación del contenido formal de la democracia en términos de derechos y libertades, sino que significa la limitación y el dilema a que el sistema se enfrenta al momento de distribuir los recursos necesariamente escasos. Según Bobbio, no existe sistema político alguno, por muy eficiente que sea, que esté en condiciones de resistir la llamada «sobre carga»; y esto, desde luego, afecta al desarro-

llo democrático, provoca exclusiones y genera descontentos; dicho con sus palabras, «la democracia tiene la pregunta fácil y la respuesta difícil», a la inversa de lo que puede ocurrir en los regímenes autocráticos. Esta última observación de Bobbio, naturalmente esquemática y aparentemente superficial, deja de lado una posibilidad factible incluso en un período como el actual de acentuado estancamiento, y que consiste no en la sustitución, tan radical como se desprende, de la democracia por la autocracia, sino en una reelaboración y un diseño diferente del funcionamiento y la orientación del consenso democrático. No hay duda de que la crisis económica ha cancelado, al menos para el corto y el mediano plazo, la reactivación económica y el mantenimiento de expectativas crecientes evaporando lógicamente el consenso. Pero, como advierte Paramio, «¿es éste un proceso irreversible? No necesariamente. El estancamiento podría ser aceptado si se sentaran las bases para *otro consenso*, si se lograra sustituir la cultura política del corporativismo (que resultó eficaz en la gestión de las contradicciones sociales) por una cultura de la solidaridad. O, en otras palabras, si se lograra *reencantar* a la sociedad civil mediante un nuevo discurso de austeridad y solidaridad, articulador de un proyecto nacional popular» (Ludolfo Paramio, «Crisis de legitimación: España 1975-1984», *Pensamiento Iberoamericano*, 5b, enero-junio 1984, págs. 441-442).

Pese a todo, resume Bobbio, no parecen existir condiciones suficientes y de tal gravedad y magnitud como para suponer con seriedad que esté cerca el fin del régimen democrático en aquellas sociedades

—por supuesto— donde ha prosperado. En cambio, hay que insistir en los grandes ideales democráticos: la tolerancia, la no violencia, la renovación gradual de la sociedad y la fraternidad, como elementos clave para la preservación de aquel modelo. Hay otros de semejante relevancia pero de un carácter instrumental más concreto y que tienen que ver con la práctica política cotidiana. En este libro destacan, por ejemplo, los relativos al pluralismo ideológico, político y económico; a la libertad de disenso; a las elecciones libres; al tránsito de la democracia política a la democracia social y, en fin, al proceso de democratización del Estado y la sociedad. En todo caso, unos y otros no son excluyentes; al contrario, de la profundización de ambos depende saber si la democracia, efectivamente, tiene futuro.

LOGROS Y MISERIAS DEL NEOCON- TRACTUALISMO

Carlos Gómez Sánchez

Fernando Vallespín Oña,
Nuevas teorías del Contrato Social: John Rawls, Robert Nozick y James Buchanan.
Alianza.
Madrid, 1985.

El panorama político adolece, entre otras muchas co-

sas, de una teoría que venga a recoger las deficiencias prácticas y sepa encontrar propuestas adecuadas y canales de viabilidad para ellas. La «crisis de legitimación del capitalismo tardío» (Habermas) se ve acompañada por la tal vez más honda de las que en su historia ha atravesado el marxismo. Y junto a ambas —además— de la prolongada última crisis económica—, la conciencia social crítica registra una amenaza creciente del deterioro del medio ambiente y de la posibilidad de la destrucción nuclear. Ello hace que las esperanzas que en su día despertó la Razón ilustrada, como vía hacia el progreso y la emancipación, se vean puestas cada vez más en entredicho. De alguna forma todos tratan de sacar de ahí provecho. El *revival* de los movimientos espiritualistas, los diversos posmodernismos, el neoliberalismo, irracionalismos de diferente signo... Naturalmente, esa crisis de confianza —sustentada por la del propio sistema— tiene en algunos casos efectos liberadores, positivos.

Desde los orígenes de la industrialización moderna voces contrapuestas a la coral —masivamente orgullosa de sus logros; pretenciosa, enfáticamente confiada en su poder— trataban de hacer notar los posibles riesgos de la unilateral razón tecnológica, que no se solía cuestionar, porque funcionaba (aunque, también es verdad, a un precio con frecuencia alto, pero para el que, a menudo, se encontraban mantos ideológicos que lo recubrieran). La reasunción de algunos de los motivos de esos «esquinados» del XIX, y el hacernos conscientes de que tal vez sus signos de interrogación estaban justificados, no eran gestos vanos, la estimo provechosa. Pero junto a ella,

el desguace del teatro —o las fisuras que en él aparecen— da pie a representaciones improvisadas y para todos los gustos, mucho más cuanto que, en la confusión, parecen no existir criterios de clarificación de lo real.

Es precisamente dentro de ese panorama donde cobran sentido algunos de los mejores esfuerzos que se realizan en nuestros días para reivindicar la importancia de la razón práctica. Pues la puesta en cuestión de los viejos paradigmas de racionalidad no tiene por qué llevar necesariamente al nihilismo, y menos aún a la arbitrariedad. La necesidad de articular una nueva teoría política, no limitada a aséptica *Political Science*, que deja intactos los supuestos sobre los que trabaja, sino que trate de ser, conforme a la intención aristotélica, «ciencia maestra», es decir, un saber que abarca y «explica» los diferentes sectores de la realidad, pero que también les otorga «sentido», es el punto de partida del análisis que Fernando Vallespín efectúa en su libro sobre el neocontractualismo.

Como el propio Vallespín hace notar, en realidad la vuelta a los clásicos no puede consistir —ni consiste en sus mejores formulaciones— en una simple reinterpretación sistemático-analítica, sino que, antes bien, debe buscar «en esos modelos las vías para dar el salto hacia una teoría normativa de la sociedad y la política ajustada a nuestro tiempo» (pág. 15). En esa línea se inserta la revitalización que las teorías del contrato social experimentan, bien en su versión europea, centrada en la racionalidad dialógica de Habermas, bien en su expresión americana, que en-

cuentra en John Rawls a su mejor exponente. (Los interesados en el tema puede consultar también a este respecto el artículo del propio F. Vallespín y R. del Aguila, «La racionalidad dialógica: sobre Rawls y Habermas», *Zona Abierta*, 31.)

Publicada en 1971, pero progresivamente preparada desde mucho antes, *Una teoría de la Justicia*, de John Rawls (de la que hay traducción en el F.C.E.), se ha convertido en obra fundamental para el estudioso de la teoría política. Y muy en particular, para los insertos en la tradición anglosajona y analítica que, cuando deciden deslizarse desde las consideraciones metaéticas hacia teorías normativas, han solido desembarcar en el utilitarismo. Pero éste, en expresión de Javier Muguerza («Entre el liberalismo y el libertarismo [Reflexiones desde la ética]», *Zona Abierta*, 30), ya no se podrá limitar, a partir de ahora, «a defenderse de sus críticos, por su parte incapaces de ofrecer una teoría alternativa, sino que, por primera vez en ciento y pico de años ha de enfrentarse a un desafío teórico de envergadura, más bien que a un puñado inarticulado de intuiciones (págs. 17-18).

El trabajo de Fernando Vallespín da a conocer en nuestro ámbito el neocontractualismo americano. El libro reelabora y reconstruye la tesis doctoral del autor, que con posterioridad a su lectura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, siguió personalmente el seminario del profesor Rawls en la Universidad de Harvard durante el curso 1980-81, lo que le permite incorporar en la obra que ahora

presentamos las reflexiones con que Rawls sigue perfilando las tesis mantenidas en *Una teoría de la Justicia*. Trabajo tanto más estimable cuanto que en nuestro panorama bibliográfico no había hasta el momento una exposición de conjunto de la misma. Desde luego Javier Muguerza —«verdadero pionero de estas teorías en nuestro país», como señala el propio Vallespín— se había ocupado de ella en su *La razón sin esperanza* (Taurus, Madrid, 1977; en especial págs. 251-261), e incluso durante el curso 1981-82 había celebrado un seminario en el Centro de Estudios Constitucionales sobre la «Revitalización de la Teoría del Contrato Social». También, entre otros, habían abordado el tema Victoria Camps (*La imaginación ética*, Seix Barral, Barcelona, 1983; especialmente págs. 57-79), en su crítica al pensamiento trascendental, o, más recientemente, Carlos Thiebaut al destacar (en «Las racionalidades del contrato social: Kant en Rawls», *Zona Abierta*, 32) la importancia de las nuevas precisiones que Rawls va efectuando y que nos permiten comprender «el trasfondo estrictamente filosófico (en concreto, kantiano) de sus ideas» (pág. 123). Gracias a la publicación de Vallespín contamos ahora con una exposición sistemática de las diversas corrientes del neocontractualismo americano que se venía haciendo ineludible.

Tras un capítulo introductorio a propósito de la «reivindicación de la razón práctica», el primero reconsidera la teoría clásica del contrato social (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant) para, desde ahí, examinar los tres autores que incluye en el «neocontractualismo»: el propio Rawls —al

que dedica los capítulos centrales de la obra—, Robert Nozick (*Anarchy, State and Utopia*, 1974) y James Buchanan (*The Limits of Liberty: between Anarchy and Leviathan*, 1975), para acabar confrontándolos y afirmar que, «a pesar de las posibles similitudes entre uno y otro modelo, las diferencias son lo suficientemente relevantes como para llevarnos a concluir que no puede hablarse de una única corriente neocontractualista» (pág. 208).

En efecto, las diferencias entre ellos se ponen de manifiesto en dos órdenes de cuestiones: en primer lugar la relevancia filosófica de sus respectivas obras. Si la de Rawls parece fuera de duda, no se puede decir lo mismo de la de James Buchanan, economista cuyo pensamiento se inscribe en torno al Virginia Polytechnic Institute y el movimiento del Public Choice (aunque en todo caso es preciso tener en cuenta que su teoría «constituye el primer avance serio de uno de los miembros de este movimiento en el campo de la teoría o filosofía política» (pág. 173). Y en cuanto a Nozick, que trata de presentarse como desafiante para toda sensibilidad social, «resulta que, después de todo, parece que si nos estamos moviendo en terrenos de la Utopía, pero en la más irremisiblemente sometida a su sentido etimológico más estricto» (pág. 172). Para Muguerza, en el artículo ya citado, la inconmensurabilidad entre las obras de Rawls y Nozick se debe a que si la del primero constituye una gran obra de filosofía moral y política, sin perjuicio de lo discutible que pueda resultar, la de Nozick «no pasa en el mejor de los casos de una pieza secundaria de literatura filosófica tan banal unas veces como pedante otras, y en oca-

siones simultáneamente, además de ramplonamente provinciana casi siempre. La misma inconmensurabilidad, para acabarlo de decir todo, que separa a sus respectivos clásicos: Kant para Rawls y, para Nozick ni tan siquiera Locke, sino Ayn Rand» (pág. 35).

Pero las diferencias se manifiestan también cuando examinamos el tipo de Estado que están contribuyendo a legitimar. Aunque la teoría de Rawls pueda ser comprendida como una «teoría liberal de la justicia», su oposición a la competitividad meritocrática y su principio de igualdad, la comprometen con «un Estado social progresista, abierto al fomento de nuevas cotas de dignidad y desarrollo humano» (pág. 208). En cambio, Buchanan y Nozick defienden el Estado neoliberal. Buchanan, inquieto ante lo que considera la expansión incontrolada del sector público, tratará asimismo de oponerse al anarcocapitalismo o *libertarianism* en el que subsume a Nozick, y de legitimar un Estado más extenso que un simple Estado protector y al que él denomina «Estado Productor». Nozick, en fin, que deliberada o confusamente, juega con las ambigüedades a que se presta el término individualismo —a cuya defensa concurrirían en principio tanto el liberalismo como el libertarismo—, sus propuestas «utópicas» no rebasan el cuadro neoliberal (a no ser por el «ala fuerte» que parece gozar de fortuna en la administración norteamericana). Y es que, como indica Vallespín, la «ficción» del contrato puede instrumentalizarse a favor de los más diversos regímenes políticos. Después de todo, ningún procedimiento es neutro» (pág. 208).

REFLEXIONES DESDE CATALUÑA SOBRE ESPAÑA

Miguel Porta

Jaume Lorés,
Catalunya, política i socialisme.
Edicions 62.
Barcelona, 1984.

Pep Subirós,
Mites i raons de la modernitat.
Edicions 62.
Barcelona, 1984.

Eugenio Trías,
La Catalunya Ciutat.
L'Avenç.
Barcelona, 1984.

Jaume Lorés,
El 1984 de Catalunya.
Edicions 62.
Barcelona, 1985.

Cataluña quizá sea el lugar del Estado español de donde provienen la mayoría de las reflexiones sobre una serie de cuestiones capitales que nos atañen y que deberían ocupar el lugar que se merecen. Entre tales cuestiones destaca una que podríamos denominar como estructural y que aparece, en forma de problema, a lo largo de toda la historia de este país: me refiero a la cuestión de la definición, especificidad y sustantividad de Cataluña y España. De entre estas reflexiones quisiera destacar tres trabajos que, a mi juicio, alcanzan cotas de seriedad, rigor y talante crítico: *Catalunya, política i socialisme*, de Jaume Lorés; *Mites i raons de la modernitat*, de Pep Subirós, y *La Catalunya Ciutat*, de Eugenio Trías. Dada su

importancia, y como quiera que estos libros están publicados en lengua catalana siendo de difícil acceso a un lector no residente en el Principado, me propongo, en las líneas que siguen, destacar las ideas principales (y más sugerentes) de los mencionados trabajos.

¿Qué es Cataluña?
¿Qué es España?

Para Trías lo que definiría, identificaría y diferenciaría a Cataluña sería la «civilidad», la idea-fuerza de Ciudad pensada en forma moderna. Cataluña sería, ya desde principios de siglo o quizá antes, una Ciudad moderna entendida como síntesis de una sociedad civil emergente escindida en clases en conflicto. Lo peculiar de esta Ciudad residiría en el hecho de que la Cataluña moderna se habría producido a sí misma, de forma poco menos que espontánea, sin el concurso de un marco estatal (Estado español o catalán) que la propiciara o fecundara. Hay que insistir en el hecho, tal y como hace Trías, de que la sustantividad de Cataluña, el «fet diferencial» (hecho diferencial), no reside sólo ni principalmente en peculiaridades lingüísticas, antropológicas o culturales. A este respecto Subirós (ex director de *Transición* y *El viejo Topo*, profesor de filosofía, miembro de la Cátedra Barcelona-Nueva York y, en la actualidad alto funcionario del Ayuntamiento socialista de Barcelona), desmonta de forma documentada y contundente la extendida creencia —y los intereses políticos subyacentes en la misma— según la cual la cultura catalana es el eje vertebrador y diferencial de la realidad catalana. Así, pues, Cataluña sería, en resumen, un caso peculiar de sociedad civil compleja sin Esta-

do (una nación sin Estado) que, además, está en pleito continuo con un Estado (el español) que no se adecua con esta civilidad moderna cristalizada en Barcelona.

Frente a este ser de Cataluña, ¿qué es España? Para Trias España es un pleito nunca resuelto entre un «Estado premoderno no implantado en el sí de una sociedad civil, Estado incardinado en una capital enredada en los harapos de su espléndido aislamiento tibetano, y una sociedad civil en camino de modernización, siempre en conflicto con el mencionado Estado». Dicho en otros términos, y sintetizando la argumentación de Trias, España no sería sino una realidad magmática invertebrada que genera un Estado sin sociedad civil (Madrid) y una sociedad civil construida al margen del Estado (Cataluña). Y esto, además de no vertebrar la realidad hispánica, ha dado lugar a un fracaso doble durante la primera mitad del presente siglo: ni la sociedad civil puede madurar plenamente al no contar con Estado, ni el Estado ha podido salir de sus marasmos «castizo, tradicional y arcaizante, hecho de retales de un Imperio en quiebra, de una monarquía decrepita y neofeudal, y de un chapucero proyecto liberal de Estado, cuna y escuela de todo militarismo español moderno, de carácter marcadamente unitarista y visceralmente fóbico a todo proceso de regeneración autonomista». Es más, el «separatismo» no sería, en la perspectiva de Trias, sino un término inventado para descalificar cualquier intento sólido de constitución de la sociedad civil. A este respecto sería más correcto hablar de un doble nacionalismo con vocación separatista: el nacionalismo separatista de Estado

materializado en Madrid, y el nacionalismo separatista de sociedad civil materializado en Barcelona.

El pacto de la transición democrática ofrece, sin embargo, la posibilidad de articular este Estado-función con una emergente sociedad civil que empieza a tomar cuerpo como consecuencia directa de las transformaciones económicas, sociales y políticas de los años sesenta y setenta. En cualquier caso la palabra «España» adquirirá sentido, aclara Trias, siempre y cuando exista un pacto político y lingüístico y no se entienda como enunciación de una fantasmagórica realidad o sustancia suprahistórica. En el mismo sentido pactista se pronuncia Lorés —«una España que fuera el fruto de un pacto entre los diversos pueblos produciría entusiasmos con facilidad», dice Lorés—, pero se trata de un pactismo que ha de excluir las visiones esencialistas y religiosas de la política respecto al tema de España.

El noventayochismo del PSOE

A diez años de la desaparición física del general Franco, y cuando ya han transcurrido tres años de la ascensión del PSOE al poder, ¿cuál es el balance que podemos establecer por lo que hace a la «creación» de España? Para Lorés, colaborador de la *Conselleria* de Cultura de la Generalitat, militante socialista muy crítico con su partido y una de las voces más escuchadas en la (Cataluña de hoy) el balance del «cambio», a este respecto, viene definido por lo que él denomina «los ideales hispánicos del PSOE».

El *felipegonzalismo*, por utilizar la terminología de Lo-

rés, no sería sino un nuevo y atractivo resurgimiento de la concepción unitarista de España; concepción unitarista que, por supuesto, es distinta de aquella concepción ofrecida por la idea imperial propia del Antiguo Régimen. Se trata ahora de una concepción que «se traga dosis casi indigestas de viejo regeneracionismo, hispánico y españolista, de todos los calibres y matices; haciendo y sorbiendo cócteles de tradiciones diversas que en un momento histórico fueron opuestas». ¿Cuáles son estas tradiciones que configuran los ideales hispánicos del PSOE? Fundamentalmente, la idea de España que tienen los líderes socialistas en el poder sería una mezcla de *noventayochismo*, *orteguismo* y *azañismo*. Pero estas tres tradiciones no lograrán materializar, como deseaba Trias, una idea de España como pacto porque, puntualiza Lorés, este «*noventayochismoorteguismoazañismo*» no expresa otra cosa que el deseo de unificar España a través de un poderoso Estado vertebrador apoyándose en la tradición laica y en la elevación uniforme del nivel intelectual del país. Y la autonomía de Cataluña (o de otras nacionalidades) no sería sino una concesión, nunca una cosa inscrita en la propia definición de España. Y es que concebir federalmente una España entendida *noventayochescamente* es lo más parecido a la cuadratura del círculo. Federalista sin federales, autonomista sin autonomistas, descentralizador sin periferia, el PSOE sólo podrá ofrecer, a lo sumo, una descentralización administrativa.

¿Y los socialistas catalanes? —quizá pregunte alguien—. Lorés es muy duro con ellos: han dimitido del catalanismo político, son los ejecutores catalanes, con toda la buena fe

que se quiera, del *noventayochismo* y, salvando las distancias y con todos los respetos, son los Pedro Gual Villalbí de los ochenta. En resumen, han renunciado al catalanismo político (a una idea de España como pacto) en favor de los unitaristas ideales del PSOE.

Catalanizar España

Vistas las insuficiencias del proyecto socialista sobre el tema de la vertebración de España, y a partir de la constatación de que tal proyecto padece de un unitarismo y un centralismo «vivo, histórico, pertinaz y endémico» (Lorés), ¿cuál puede ser la alternativa? La alternativa estaría en «catalanizar España». Y no se crea que esta idea de catalanizar España proviene de catalanes empedernidos y soberbios, sino que la arqueología de esta propuesta nos conduce a D. Miguel de Unamuno. En efecto, Eugenio Trias analiza y saca a colación textos de la breve etapa en la que Unamuno esbozó su pensamiento político sobre España; de estos textos —«Barcelona es ciudad, mientras que Madrid no es sino corte. Y Barcelona es hoy el ejemplo de lo que todos los ciudadanos españoles deben hacer», o «Desde hace tiempo se oye hablar en Barcelona con insistencia de lo civil», etc.— se desprende, advierte Trias, que la invertibración del país es el producto de la falta de «civilidad» y espíritu moderno, y que la regeneración vertebradora de España exige la hegemonía política estatal del espíritu civil moderno que se ha dado por primera vez en este país en Cataluña. Naturalmente, desde Unamuno a nuestros días ha llovido bastante y hoy ya no puede sostenerse que la sociedad civil sólo exista en Cataluña.

En cualquier caso, y aun teniendo en cuenta el hecho de que en el resto de España está apareciendo (o ha aparecido) una sociedad civil, se sigue sosteniendo que, por mor del unitarismo estatista impuesto por los socialistas, hay que catalanizar España. Pero, ¿en qué consiste catalanizar España? Catalanizar España consiste —y a explicitarlo dedica buena parte de su trabajo Lorés— en predicar el modelo de una sociedad civil que haga innecesaria la hipertrofia del Estado; consiste en aceptar un modelo de sociedad civil dinámico (lo que hizo «fuerte» a Cataluña, se nos dice) que imposibilite todo estatismo y que proporcione las bases para construir un Estado moderno funcional, en lugar del Estado funcionario impulsado por el PSOE que se reduce tan sólo a una «casuística administrativa» y a un «moralismo funcional». Catalanizar España consiste, en fin, y redundando en el tema, en desinflar el monstruo estatal y en ponerlo, funcionalmente, al servicio de la sociedad civil, en lugar de hacer que el monstruo sustituya a la sociedad civil. A fin de cuentas, que el país «funcione» —como no se cansó ni se cansa de repetir la propaganda socialista— no puede significar sino que la sociedad civil funcione; y para ello es necesario, dice Lorés, que el Estado no incite a la disminución de la sociedad civil y que sea el mínimo necesario para poner las instituciones al servicio de esta sociedad civil. Para lograr esto hay que des-reforzar el Estado y hacerlo menos redentorista y salvacionista; cosa que, a la luz del *noventayochismo* del PSOE, se ve desde Cataluña como una empresa harto difícil. En el fondo, y como dice Lorés, en Cataluña se tiene la impresión de que las críticas a la realidad nacional y

al estatismo suenan, en Madrid, «a música celestial», al tiempo que Cataluña es vista como un «exótico añadido» con el que no hay más remedio que entenderse. En cualquier caso, las reflexiones desde Cataluña sobre y para la realidad nacional española ahí quedan. Tampoco sería tan mala idea que alguien cogiera el testigo e iniciara el combate.

UNA BIOGRAFIA DE FRANCO

Jesús Menéndez

Juan Pablo Fusi,
Franco.
Ediciones El País.
Madrid, 1985.

Ahora que empiezan a enmudecer las voces que ha levantado en meses pasados la conmemoración de los diez años de la muerte de Francisco Franco, pienso que es un buen momento para pasar revista al libro de Juan Pablo Fusi que ha publicado Ediciones El País.

No se trata, en rigor, de una biografía del Caudillo, cosa que ya advierte su autor, sino más bien un ensayo biográfico, en el que importa más interpretar el franquismo —Franco y franquismo van irremediabilmente unidos— y analizar ese gobierno, sus logros y sus fracasos, que la propia persona que lo hizo posible. No gustará este libro a los acérrimos partidarios del

fallecido general, acostumbrados al estilo hagiográfico de las biografías al uso, en las que el ídolo aparece sin mácula, y para quienes cualquier objeción a su persona se convierte en insulto sacrílego. Tampoco va a satisfacer a los que, con avidez sensacionalista, esperan revelaciones escandalosas y chismorreos picantes. El libro se distancia de ambas actitudes y logra una aplaudible y fría objetividad.

No creo imprescindible, sin embargo, que para lograr esa objetividad haya sido preciso el transcurso de estos diez años, como afirma Malefakis en el prólogo al libro. La perspectiva histórica se tiene o no se tiene, lo mismo para los hechos recientes que para los antiguos, y muchos casos podrían demostrarlo. Así, por ejemplo, en el año de 1939 Zugazagoitia publicaba ya una historia de la guerra de España que todos los historiadores alaban por su objetividad. Y, por otra parte, determinados sucesos pasados, como podría ser el de las Comunidades de Castilla, siguen siendo actualmente tema de debate y en su interpretación caben posturas contrarias. No creo que sea el paso del tiempo lo que nos hace desapasionados ante la Historia. Cuenta Marc Bloch que, en sus años de Liceo, un viejo profesor le decía que la historia acababa en 1830. Esto, dicho aún en el siglo XIX, no es demasiado grave; mucho más lo es que algún profesor español haya repetido lo mismo pero... a partir de los Reyes Católicos.

Otra cosa es que en estos diez años transcurridos desde la muerte de Franco hayan aparecido varias memorias —como las de Franco Salgado-Araújo, primo del general, o las de Sáinz Rodríguez—, y

algunas que otras fuentes que permiten hoy un estudio más completo. Son especialmente apreciables los juicios emitidos en el extranjero y desde el campo antifranquista. Y no es que aquí esté ausente la bibliografía apasionada y hasta insultante hacia la persona del general, que también la hay; pero como desde el exilio se vive dolorosamente la caída de la democracia y se trabaja por restaurarla, la objetividad en el análisis de los errores cometidos está mucho más asegurada.

En el libro de Fusi la pequeña historia no ha tenido cabida, tal vez en aras de esa buscada objetividad. Ni siquiera las corruptelas propias de un gobierno dictatorial y que tan presentes estaban, a su pesar, en las *Conversaciones con Franco*, de Salgado-Araújo; tan sólo toca este tema en el caso Matesa, y esto por las consecuencias que tuvo en el reajuste ministerial, el más amplio de los producidos bajo el mandato de Franco.

El texto está dosificado de tal modo en el libro que a espacios vitales semejantes, y por tanto a etapas de gobierno, corresponden el mismo número de capítulos. Así, la etapa de la guerra de Marruecos se iguala con la de los años de la República en las escasas y apretadas páginas que les dedica, menos aún que el espacio dedicado a la agonía y muerte del general. Parece como si el autor se hubiera hecho el firme propósito de «no perderse» en la maraña del anecdótico y del suceso.

Me parece muy acertada la idea de Fusi de no tratar el período franquista como un todo continuo, porque a pesar de la insistencia de Franco en sus discursos de que su labor política era siempre la misma,

y de que no había cambios, éstos se produjeron indudablemente por el empuje inevitable de los acontecimientos. En este sentido, la fecha de 1957 resulta decisiva en el paso de una economía autárquica a un liberalismo económico, que supuso en su momento la salvación de la economía del país y el llamado «milagro económico español» de los años sesenta; y esto mientras en los discursos políticos y en manifestaciones escritas se seguía hablando del liberalismo como «carcoma de la sociedad». Y, si bien a partir de esa fecha los discursos políticos del general se llenaron de cifras y de una retórica económica, nunca reconoció públicamente que hubiera cambiado nada sustancial. En un mensaje de fin del año 1963 dijo que «el Plan de Desarrollo no es cosa nueva en nuestra nación». Plan que no se hubiera llevado a cabo sin la tenacidad que los entonces ministros, Ullastres y López Rodó, pusieron en convencerlo.

En este tema de la economía Franco adoptó el papel de un Presidente de Consejo de Administración, dejando a sus ministros en total libertad para llevar adelante sus planes; actitud ésta que repitió en otras materias y a lo largo de su mandato.

Al igual que en la economía, otro tanto hizo Franco con la base jurídica en que se asentaba su régimen: la Ley de Principios del Movimiento, «ley permanente e inalterable» que fue cambiando según convenía a sus intereses de continuar en el poder.

A pesar de sus frecuentes apariciones en el NO-DO, y de sus fotos en primera página, Franco puso especial cuidado en que no llegaran al pú-

blico detalles sobre su vida y de la de sus allegados, hecho que contribuyó a distanciarlo enormemente del resto de los españoles, y también a la difusión de una serie de mitos acerca de su persona que se aceptaban como ciertos y que hoy con el manejo de fuentes, escasas, que han ido apareciendo, empiezan a deshacerse. ¿Es cierto que Franco era en el trato personal callado, frío, tímido, o por el contrario charlatán y dicharachero como lo retrata Sáinz Rodríguez? ¿Mutó su personalidad al creerse salvador de España? ¿Era tan valeroso en el combate como escribe Barea, que coincide con él en Africa, y se comentaba entre los legionarios, hasta el convencimiento por parte de los marroquíes, de que las balas lo respetaban milagrosamente? ¿O, como dice también Sáinz Rodríguez, era el único militar del Tercio que sabía guardarse con prudencia, sin realizar gestas audaces inútiles como debía ser también común entre oficiales jóvenes de la Legión?

Todo esto no deja de ser leyenda que, si en un tiempo fueron frecuentes temas de conversación entre españoles, hoy no interesan a casi nadie. De todos los mitos creados alrededor de Franco, el único que interesa a Fusi es el de su genio como estratega militar, hecho que, al parecer, fue comúnmente reconocido entre

ciertos militares españoles. Pues bien, este aserto es puesto hoy en duda y el autor lo estudia detenidamente en su libro: de las tres veces que el ejército republicano, con el general Rojo a la cabeza, puso en un brete al de los rebeldes (Brunete, Teruel y el paso del Ebro), sólo en la primera de ellas supo reaccionar oportunamente. En la de Teruel respondió tarde y mal como le criticaron en su momento Von Stohrer, el embajador alemán, y el conde Ciano, y, aunque veladamente, su mismo ayudante de campo, Carlos Martínez de Campos. En el Ebro irritó a todos sus colaboradores —Mussolini llegó a pensar que podía perder la guerra— al empecinarse en una táctica defensiva frontal sin querer aceptar la posibilidad de una acción envolvente, la única acertada dada la característica del terreno.

Acertadas son también las páginas que dedica Fusi a la obsesión masónica que dominó siempre a Franco y que lo llevó a una concepción paranoica de la historia tal como la define Richard Hofstadter: él entendía toda la política internacional, pasada, presente y futura, como una continua conspiración de las logias. Todo se decidía en ellas y los políticos seguían sus directrices —Truman, Roosevelt, Trigve Lye, etc.—, todos eran masones cuya misión era destruir la civilización occidental para lo cual se unían a judíos

o a comunistas. La hidra de tres cabezas estaba activa; para aniquilarla existió un tribunal especial, el de represión de masonería y comunismo, y a su frente un hombre de triste memoria: el coronel Eymar. La obsesión masónica llevó al general a publicar una serie de artículos con este tema y que posteriormente reunió en un volumen, publicados todos bajo pseudónimo.

Para un régimen de tan larga duración, es escasa, en verdad, la documentación que se posee. Al contrario que el general Narváez, que procuró ir dejando el mayor número de documentos para que las generaciones posteriores pudieran juzgar su obra, el régimen franquista ha sido muy parco en documentos —hasta la Jefatura de Gobierno de Carro Blanco, los consejos de ministros no se recogían en acta—; si a esto se une el que muchos de sus beneficiados se han encargado de destruir archivos municipales enteros y otros tipos de documentación, el panorama para el historiador puede ser muy reducido. No deja de ser irónico esto en un hombre que se declaró responsable ante Dios y ante la Historia.

A la Historia le va a costar bastante no el juicio, que no es esa su labor, sino el estudio claro y documentado de los hechos, hoy por hoy adverso; de lo otro ya se habrá encargado la divinidad.

Enrique Tierno Galván
BANDOS DEL ALCALDE
128 págs. 450 Ptas.

José Jiménez
IMAGENES DEL HOMBRE
Fundamentos de estética
416 págs. 2.800 Ptas.

Marsilio Ficino
DE AMORE
Comentario a "El Banquete"
de Platón
290 págs. 900 Ptas.

Antonio Lucas Marín
FUNDAMENTOS DE TEORIA
SOCIOLOGICA
208 págs. 1.000 Ptas.

Sigmund Freud
COMPENDIO
DEL PSICOANALISIS
180 págs. 550 Ptas.

Karl R. Popper
POST SCRIPTUM
A "LA LOGICA DE LA
INVESTIGACION CIENTIFICA"
Vol. I: Realismo y el objetivo de
la ciencia
464 págs. 1.900 Ptas.
Vol. II: El universo abierto.
Un argumento en favor del
indeterminismo
208 págs. 800 Ptas.

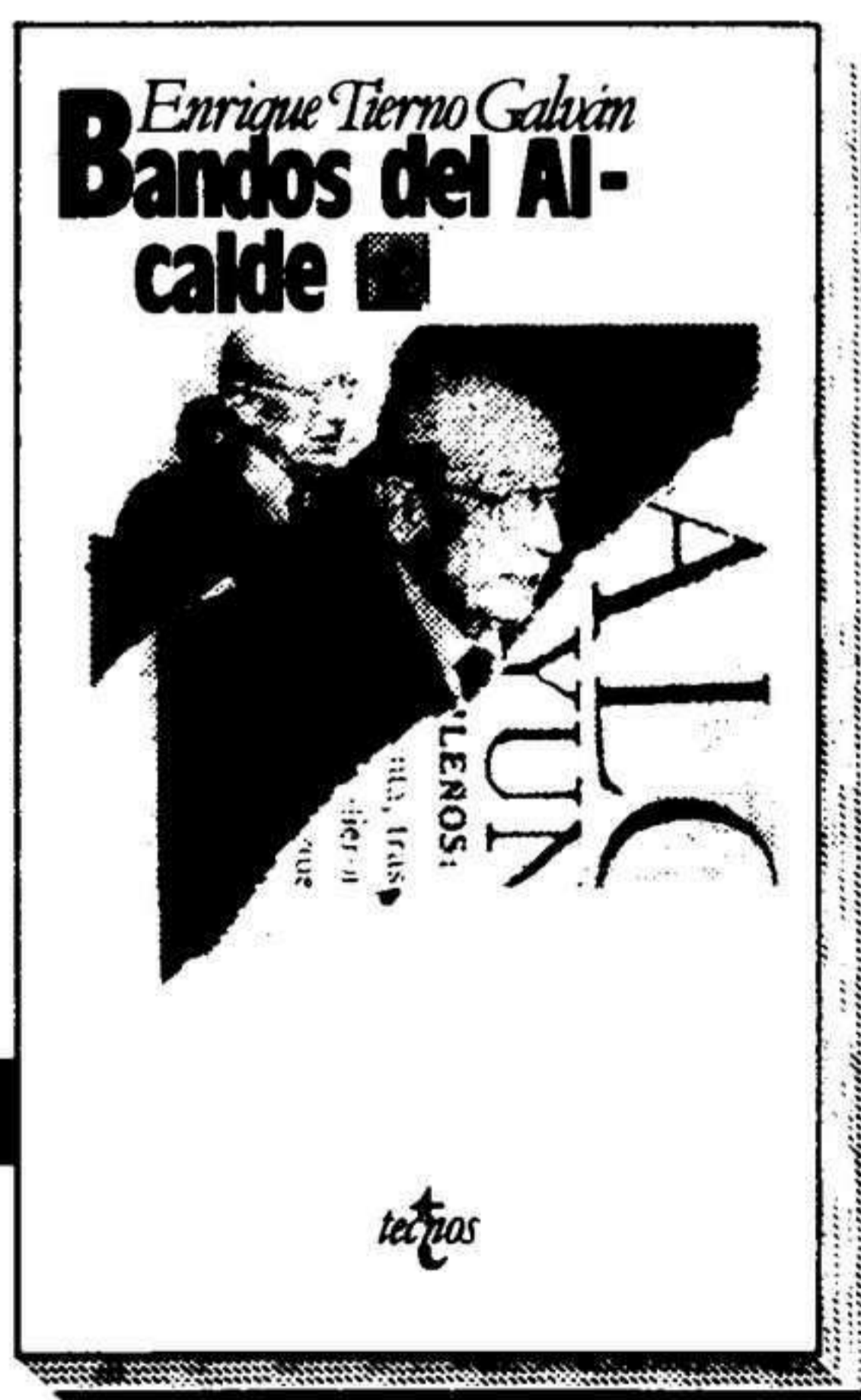
Vol. III: Teoría cuántica y el cisma
en física
240 págs. 1.000 Ptas.

Baruch Spinoza
TRATADO POLITICO
TRATADO
TEOLOGICO-POLITICO
290 págs. 500 Ptas.

Montesquieu
CARTAS PERSAS
272 págs.

Jean Bodin
LOS SEIS
LIBROS DE LA REPUBLICA
388 págs.

Edmund Husserl
MEDITACIONES
CARTESIANAS
264 págs.



tecnos

EDITORIAL TECNOS
O'Donnell, 27 - 1.º
28009 MADRID
Tels. 431 64 00/53

Comercializa:
GRUPO DISTRIBUIDOR
EDITORIAL, S.A.
D. Ramón de la Cruz, 67
28001 MADRID
Telf. 401 12 00

tecnos

ANAYA

SI AL CIELO
CLAMA,
RECLAMA.



Si te dan gato por liebre, que no se libren.

Si te la juegan, tú no juegues.

Si te engañan, no te engañes.

Llámanos.

La Comunidad de Madrid ha puesto a tu servicio un servicio de reclamaciones.

Para no ir vendido al salir de compra.

Para que al consumir, no te consuman.

Para que llames, clames y reclames.

VIVIMOS EN COMUNIDAD

COMUNIDAD DE
MADRID

Servicio de Consumo. Tel. 402 90 63

Ministerio de Cultura 2011

LETRA

ENERO/MARZO 86

Suscripción anual:
1.400 ptas.

Forma de pago:
Talón bancario
ó
giro postal

Redacción y
administración:
C/ Monte Esquinza, 30
28010 MADRID

André Brink, Italo Calvino
El oficio de escribir

Vaclav Havel, André Gorz
Hacer las paces

Juan Goytisolo
El derecho íntimo a la sonrisa

Milan Kundera, Juan Benet, Mario Muchnik
Del arte de la novela

Antonio Saura
Fin de Siglo



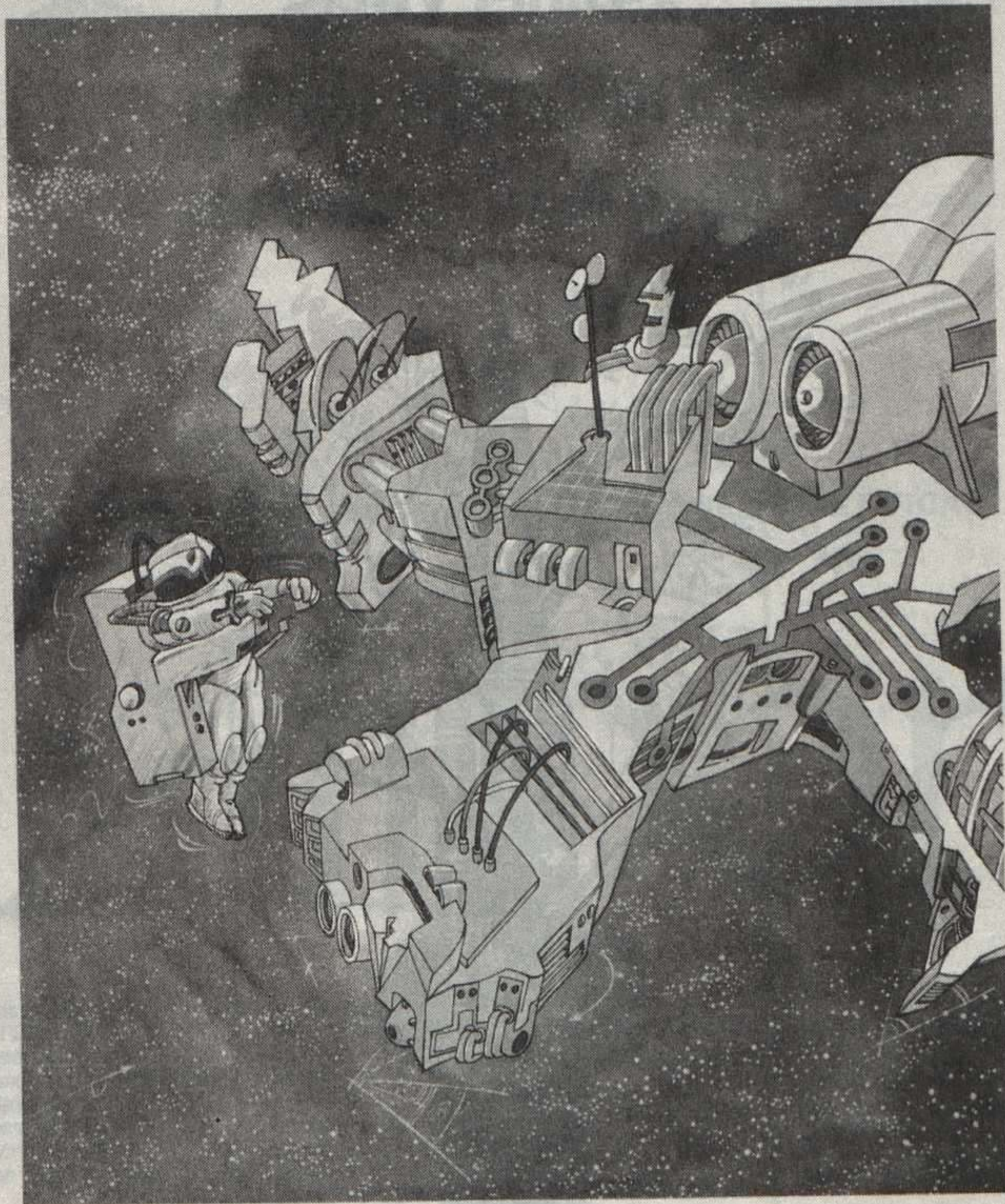
450 PTAS.

INTERNACIONAL

1

movimiento europeo

N.º 13 - Primavera 1986 - 300 p'as.



EL ACTA UNICA EUROPEA (texto íntegro)

EUREKA: EL PROYECTO Y EL FUTURO

LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS

Jozef Goldblat
Angel Viñas
La no proliferación
de armas nucleares



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:
SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES, S. A.
Calle Plaza, 5 - 28043 Madrid
Teléf. 759 48 09





CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Arbor

Las páginas de ARBOR están abiertas para tender un puente entre "las dos culturas", para propiciar la comunicación entre las ciencias y las

humanidades, y en especial para promover el estudio, la reflexión, el debate y la crítica en torno a la ciencia y la técnica, a sus dimensiones sociales, culturales, educativas, políticas, históricas y filosóficas.

Director:

Miguel Angel Quintanilla

Comité de Redacción:

José Manuel Orza
Luis Alberto de Cuenca
Carlos Solís
Rafael Pardo
Eduardo Rodríguez
Farré

Redacción:

Serrano, 127 - 28006 Madrid
Telf. (91) 261 66 51

Suscripciones:

Servicio de Publicaciones
del CSIC.
Vitruvio, 8 - 28006 Madrid
Telf. (91) 261 28 33

Arbor

ciencia

pensamiento y cultura



Leviatán

Revista de hechos e ideas

NUMERO 14 (Invierno 1983)

Angel Viñas: Economía y política de la defensa en España. Perfecto Andrés Ibáñez: Política de las garantías y «defensa de la democracia». Chantal Mouffe: El futuro del laborismo inglés. Adam Michnik: Carta desde la cárcel de un patriota polaco. Juan C. Maglaya: Una perspectiva política de Filipinas. Fred Halliday: La política internacional soviética en la década de los 80. Karl S. Karol: ¿Es posible la democratización del sistema soviético? Andrei D. Siniavski: La cultura regimentada. Jürgen Habermas: La desobediencia civil. Entrevista con Doris Lessing. Mario Merlino: Lenguaje y erotismo en Cernuda y Lorca. Miguel Rubio: Víctor Erice: La reflexión a partir de la emoción.

NUMERO 15 (Primavera 1984)

P. Brabo-C. Ortiz: Las segundas elecciones al Parlamento vasco. J. Antonio Gimbernat: La Iglesia y el Gobierno socialista. Luis Larroque: Un programa económico frente a la crisis. T. Zaslavskaja y F. Claudín: Informe sobre la crisis económico-social en la URSS. Ludolfo Paramio: La utopía hecha pedazos. A. Heller y F. Feher: El movimiento antinuclear en las sociedades soviéticas. Santos Juliá: La vigencia de Prieto. Luciano Pellicani: Liberar a Marx de Marx. Ramón Vargas-Machuca: Marx en Kreuznach. Mario Merlino: Brecht: la guerra civil española desde el exilio. Guillermo Heras: La resistible visión sacralizadora de Brecht.

NUMERO 16 (Verano 1984)

Fernando Morán: La política exterior española. Joaquín Leguina: Las autonomías: dos puntos de vista. Pilar Brabo, Carmen Ortiz: Las elecciones autonómicas en Cataluña. Ignacio Sotelo: Poder institucional y hegemonía social. Miguel Angel Martínez: Occidente y América Central. Angel Viñas: Este-Oeste, Norte-Sur y Europa Occidental. Giancarlo Pasquini: Italia: la democracia bloqueada. Perry Anderson: Modernidad y revolución. Marshall Berman: Las señales en la calle. Ludolfo Paramio: La izquierda y la crisis económica. Angel Merino: «Leviatán»: la búsqueda de una teoría. Entrevista con Mario Camus. Felipe Hernández Cava: El tebeo, el «cómic» y Dios dirá.

NUMERO 17 (Otoño 1984)

Angel Viñas: Coordenadas de la política de seguridad española. José Miguel Bueno: Política de seguridad española. Enrique Panés: OTAN: de entrada no, no. Antonio Santesteban: PSOE y OTAN. Carlos Bru: España entre dos tratados. S. Juliá. L. Paramio y M. Satrustegui: Dos años de gobierno del PSOE. Didac Fábregas: Un partido para construir y dirigir el cambio. Entrevista con Gabriel Jackson. Santos Juliá: Continuidad y ruptura en el socialismo. Fernando Savater: Perplejidad y responsabilidad del intelectual. Carlos Moya: 1984, señas de Leviatán. Roger Bartra: El 1984 de la izquierda latinoamericana. Enrique Gomáriz: La reconversión de la izquierda.

NUMERO 18 (Invierno 1984)

Jordi Borja: La izquierda: nuevas formas, nuevas ideas. Manuel Escudero: El Estado de las autonomías. Carlos de la Serna: ¿Alternativas a los bloques? Helga Montag: Televisión pública y televisión comercial. Anna Balletbó: La mujer y los medios de comunicación social. Entrevista con Gonzalo Torrente Ballester. Fernando Claudín: Conversación con Agnes Heller. Luciano Pellicani: El futuro del socialismo. M. A. Quintanilla y R. Vargas-Machuca: Ideas para el socialismo del futuro. Juan Miguel Lamet: Sobre algunos tópicos del cine español. J. L. Guereña: Situación apasionada de Vicente Aleixandre.

NUMERO 19 (Primavera 1985)

Alfonso Guerra: Europa en el mundo. Rafael Dezcállar: Las conversaciones de Ginebra. Agnes Heller y Ferenc Feher: La sombra de un nuevo Rapallo. Joaquín Leguina: Viejas y nuevas ideas de la izquierda. Josep M. Triguñer: Modelo cultural o proyecto político. A. Chazarra y J. García: Una reflexión sobre el socialismo español hoy. Entrevista con Andrei Siniavski. Carlos Moya: Signos del tiempo: moderno y posmoderno. Antonio Monclús: El problema del poder: ámbito y disolución. Gumersindo Ruiz: Orwell visto por un economista. J. M. García Rey: El lenguaje alejado de la verdad.

NUMERO 20 (Verano 1985)

Horst Ehmke: Berlinguer y la izquierda europea. Giorgio Napolitano: Hacia nuevas perspectivas. Lluís M. de Puig: La izquierda y Europa. Lluís Planas: España y la unión europea. Rafael Dezcállar: Las armas espaciales. Angel Viñas: La política industrial española de defensa. Entrevista con Marvin Harris. Victoria Camps: La ética en una cultura posfilosófica. Eduardo Subirats: Transformaciones de la cultura moderna. Carlos Thiebaut: Paradojas y narraciones. Valeriano Bozal: De rótulos y pinturas. Manuel Pérez Ledesma: Iglesias, Morato y otros socialistas. Fernando de Valenzuela: Nota del traductor. Entrevista con Augusto Roa Bastos.

NUMERO 21 (Otoño 1985)

José M.ª Benegas: Europa como proyecto socialista. Angel Viñas: Soberanía nacional y pactos militares. Augusto Roa Bastos: La larga noche trágica del Paraguay. Domingo del Pino: España y el Sahara: 1976-1986. Mario Onaindía: La transición democrática en Euskadi. M.ª Dolores Renau: Sobre la seguridad ciudadana. Adolfo Sánchez Vázquez: Reexamen de la idea de socialismo. Ludolfo Paramio: Del socialismo científico al socialismo factible. Norbert Lechner: De la revolución a la democracia. Fernando Claudín: Europa en la encrucijada. Luciano Pellicani: Ortega, sociólogo de la modernidad. M.ª Dolores Castriello: Sobre estética y posmodernidad. Entrevista con Gore Vidal.

Suscripción anual: 1.400 ptas.

Forma de pago: Talón bancario o giro postal.

Redacción y Administración:

C/. Monte Esquinza, 30. 28010-Madrid.

SISTEMA

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

NUMERO EXTRA

SISTEMA

ENRIQUE TIERNO GALVAN 71
EL HOMBRE, EL INTELLECTUAL Y EL POLITICO 72

R. MORODO. E. DIAZ. C. OLLERO. P. LUCAS VERDU. A. TRU-
YOL. F. J. BOBILLO. M. MEDINA. J. E. RODRIGUEZ-IBÁÑEZ.
A. DE BLAS. A. ROVIRA. M. PILLADO. J. MARICHAL.
G. PUENTE OJEA. J. L. ABELLAN. L. JIMENEZ MORENO.
E. MIRET MAGDALENA. J. SATRUSTEGUI. F. BUSTELO.
L. GARCIA SAN MIGUEL. S. VILAR. J. SOLE TURA. J. LE-
GUINA. M. ORTUÑO. M. MELLA. M. LOBATO. M. TUÑON DE
LARA. J. CERDA. A. GONZALEZ MESA. S. GNER. J. MU-
GUERZA. A. DE ALBORNOZ. V. GIRBAU.

FS

JUNIO DE 1986
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES



EDITORIAL SISTEMA

Editorial Sistema, c/ Fuencarral, 127-1.º
TEL. 448 73 19 - 28010 MADRID

Ministerio de Cultura
Instituto de Patrimonio Cultural



PRECIO DE ESTE EJEMPLAR: 400 PTAS.